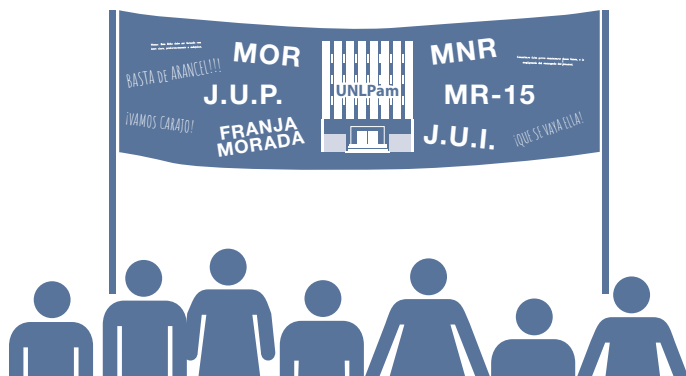


Entre los libros de
la buena **MEMORIA**

Elvio Monasterolo

La democracia en tensión

Una mirada desde la militancia estudiantil
pampeana en la década de 1980



FaHCE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

EDICIONES **UNGS**


Universidad
Nacional de
General
Sarmiento



Elvio Monasterolo

La democracia en tensión
Una mirada desde la militancia estudiantil
pampeana en la década de 1980

FaHCE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada por las instituciones editoras.

Corrección: María Valle (UNGS)

Diseño gráfico: Andrés Espinosa (UNGS)

Maquetación: Federico Banzato (UNLP)

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723

Impreso en Argentina

©2024 Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento

Colección Entre los libros de la buena memoria

Monasterolo, Elvio

La democracia en tensión : una mirada desde la militancia estudiantil pampeana en la década de 1980 / Elvio Monasterolo. - 1a ed
- Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento ; La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ; Misiones : Universidad Nacional de Misiones , 2024.

Libro digital, PDF - (Entre los libros de la buena memoria)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-630-767-3

1. Historia Argentina. 2. Memoria. 3. Militancia Estudiantil Universitaria. I. Título.

CDD 322.4



Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
(Atribución-No comercial-Compartir igual)

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de General Sarmiento promueven la Colección de e-books “Entre los libros de la buena memoria”, con el objeto de difundir trabajos de investigación originales e inéditos, producidos en el seno de Universidades nacionales y otros ámbitos académicos, centrados en temas de historia y memoria del pasado reciente.

La Colección se propone dar a conocer, bajo la modalidad “Acceso Abierto”, los valiosos avances historiográficos registrados en dos de los campos de estudio con mayor desarrollo en los últimos años en nuestro país, como lo son los de la historia reciente y los estudios sobre memoria.

Colección Entre los libros de la buena memoria

Directores de la Colección

Gabriela Águila (CONICET-UNR)

Jorge Cernadas (UNGS)

Emmanuel Kahan (CONICET-UNLP)

Comité Académico

Daniel Lvovich (UNGS-CONICET)

Patricia Funes (UBA-CONICET)

Patricia Flier (UNLP)

Yolanda Urquiza (UNaM)

Marina Franco (UNSAM-CONICET)

Silvina Jensen (UNS-CONICET)

Luciano Alonso (UNL)

Emilio Crenzel (UBA-CONICET-IDES)

Comité Editorial

Andrés Espinosa (UNGS)

Verónica Delgado (UNLP)

Nélida González (UNaM)

Índice

Agradecimientos.....	11
Listado de siglas y abreviaturas	13
Prólogo	17
Introducción	21
Estado de la cuestión.....	27
Objetivos, hipótesis de investigación y referencias conceptuales e historiográficas.....	30
Estructura del libro	36
Capítulo I. Transformaciones en la cultura juvenil argentina: la militancia estudiantil universitaria, entre la liberación nacional y el golpe de Estado de 1976	39
La marca profunda del terrorismo de Estado	48
La Pampa no es una isla	56
La ofensiva conservadora en la institución universitaria	60
Capítulo II. Nuevas configuraciones de la militancia estudiantil ..	73
1982, un año bisagra.....	80
De la movilización a la institucionalización de los centros de estudiantes.....	94
Luchas contra el arancel	97

Capítulo III. La universidad en democracia, entre el optimismo y el desencanto	103
La agenda estudiantil.....	107
Representaciones estudiantiles: listas, agrupaciones y espacios institucionales	117
La normalización universitaria y el triunfo de “El rector de los estudiantes”	124
1987, la otra bisagra	134
Obediencias y caras pintadas	140
Capítulo IV. Las agrupaciones estudiantiles: trayectorias y reordenamientos políticos	149
La Franja Morada.....	153
La crisis interna de la Franja Morada y la formación de la Corriente Nacional de Liberación	158
La Juventud Universitaria Intransigente	167
La Juventud Universitaria Peronista	175
El Movimiento Reformista 15 de junio	181
El Movimiento de Orientación Reformista	184
El Movimiento Nacional Reformista.....	187
Algunas notas finales	189
Capítulo V. Liberación nacional, democracia y derechos humanos	191
El ideario tercermundista y de la liberación nacional	192
Democracia y liberación nacional.....	201
La formación del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y su vínculo con la militancia estudiantil	206
Capítulo VI. Prácticas político-culturales, discursos e imaginarios del activismo estudiantil.....	221
Las revistas estudiantiles	231
La <i>Revista Universitaria</i>	232
Revistas de los centros de estudiantes: <i>Humos, Huerquen</i> y <i>Mangrullo Universitario</i>	239

Género, sexualidad y militancias	244
Un queer en las pampas	248
Capítulo VII. Pensar los años ochenta en la Argentina.	
Variaciones de la democracia	257
Pensar las militancias estudiantiles en la década de 1980	277
Conclusiones	287
Fuentes documentales	295
Colección de revistas estudiantiles	295
Fuentes testimoniales	296
Bibliografía.....	297

Agradecimientos

El puñado de páginas que componen este libro expresan el trabajo de una investigación asumida en los últimos años, que concluyó con la defensa exitosa de mi tesis de maestría en estudios sociales y culturales, en noviembre de 2020.

Tanto la investigación como su transformación en libro constituyen un laborioso trabajo que es, ante todo, un aprendizaje, un modo específico de aprehender aspectos del oficio de historiar, de narrar, de dar cuenta de un pasado expuesto a las interrogaciones de nuestro tiempo.

Además, el libro condensa saberes y reflexiones de más larga data, contruidos a lo largo de mi estancia universitaria, no siempre surgidos específicamente de los procesos de investigación, pero que hacen a la experiencia reunida en el paso por la universidad como estudiante, como docente, como investigador. Este libro es, sin dudas, un logro de la persistencia sostenida en el largo aliento de amigos, colegas y familiares. Es, por lo tanto, un poco de todos ellos.

Mi reconocimiento a los compañeros de estudio de los grupos de lectura y/o investigación, los pasados y los actuales. El vínculo conjunto nutre, siempre, y allí se maceran las ideas.

A mis compañeros de militancia estudiantil con quienes construimos, en los años posteriores a la crisis del año 2001, un tejido de vínculos que dotó de nuevos sentidos mi ingreso y transcurso en la vida universitaria. Sin ese soporte afectivo y emocional, probablemente mi estancia universitaria hubiese sido mas breve y limitada, convertida en un dato más de la estadística sobre el desgranamiento de la matrícula estudiantil.

A mi familia, en especial a mi madre, con quien hace veinte años no hubiésemos imaginado encontrarnos en este lugar.

A Jorge Cernadas, María Silvia Di Liscia y Ana Carol Solís, que fueron jurados en mi defensa de tesis. A Ana Carol Solís por el prólogo y por su amabilidad. A Emmanuel Kahan, Jorge Cernadas y Gabriela Águila, por la predisposición, las gestiones y la paciencia para que este libro formase parte de la colección “Entre los libros de la buena memoria”. Por supuesto, también a quienes evaluaron anónimamente el libro y me brindaron sugerentes correcciones, indicaciones y herramientas para pensar y mejorar el texto.

A los entrevistados, que brindaron sus testimonios desinteresadamente, con cordialidad y humildad. También a las personas que me facilitaron revistas estudiantiles, documentos de las agrupaciones, folletos, declaraciones y fotografías. Mi agradecimiento a Paty Redondo, Mirta Zink, Joselo Insausti y Gustavo Romero. Gracias a Mónica Morales por la entrevista realizada a Pinky Pumilla, y gracias a Pinky por el primer informe del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.

A las personas que, a pesar de las difusas políticas archivísticas en la Argentina, colaboran para ubicar, reunir o hacer accesibles diversas fuentes documentales.

Mis estudios de posgrado se facilitaron gracias al apoyo que significó el acceso a distintas becas de estímulo a la investigación otorgadas por la Universidad Nacional de la Pampa.

Mi agradecimiento al personal de la Facultad de Ciencias Humanas, al personal de la Secretaría de Investigación y Posgrado y a mis colegas del Instituto de Estudios Sociohistóricos. El reconocimiento para quienes apostamos a crecer con y por una educación pública, gratuita y de calidad.

A Roberto Pittaluga, colega, guía y amigo (es una gratitud haber cruzado nuestros caminos y forjar el vínculo que sostenemos cotidianamente). Gracias por la paciencia, la crítica y las enseñanzas.

A los mellizos Santiago y Nicolino, por la luz.

A Vicky, *por todo*.

Listado de siglas y abreviaturas

AHP: Archivo Histórico Provincial
APDH: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
APULP: Asociación del Personal de la UNLPam
ATE: Asociación de Trabajadores del Estado
BM: Banco Mundial
CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
CEFA: Centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía
CEFCHu: Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas
CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales
CENUP: Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
CGT: Confederación General del Trabajo
CNL: Corriente Nacional de Liberación
CONADU: Confederación Nacional de Docentes Universitarios
DD. HH.: derechos humanos
DSN: Doctrina de Seguridad Nacional
FASP: Frente Amplio Santiago Pampillón
FAUDI: Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda
FDDRP: Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
FF. AA.: Fuerzas Armadas argentinas
FM: Franja Morada
FMI: Fondo Monetario Internacional
FREJUDEPA: Frente Renovador Justicia, Democracia y Participación
FREJULI: Frente Justicialista de Liberación Nacional
FUA: Federación Universitaria Argentina

FUBA: Federación Universitaria de Buenos Aires
FUC: Federación Universitaria de Córdoba
FUNAP: Frente Universitario Nacional y Popular
FUP: Federación Universitaria Pampeana
FUR: Federación Universitaria de Rosario
JCN: Junta Coordinadora Nacional
JP: Juventud Peronista
JPU: Juventud Peronista Universitaria
JUI: Juventud Universitaria Intransigente
JUP: Juventud Universitaria Peronista
LADH: Liga Argentina por los Derechos Humanos
MEDH: Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos
MID: Movimiento de Integración y Desarrollo
MNR: Movimiento Nacional Reformista
MoFePa: Movimiento Federalista Pampeano
MOR: Movimiento de Orientación Reformista
MPPDH: Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos
MR-15: Movimiento Reformista 15 de junio
NI: Nueva Izquierda
NOPULP: Nucleamiento de Organizaciones Políticas Universitarias de La Pampa
PC: Partido Comunista
PBA: *El Periodista* de Buenos Aires
PDC: Partido Demócrata Cristiano
PEN: Poder Ejecutivo Nacional
PJ: Partido Justicialista
PS: Partido Socialista
PSA: Partido Socialista Auténtico
RP: Renovación Peronista
RU: *Revista Universitaria*
SERPAJ: Servicio de Paz y Justicia
TUPAC: Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista y Combativa
UBA: Universidad de Buenos Aires
UCR: Unión Cívica Radical
UNC: Universidad Nacional de Córdoba
UNLPam: Universidad Nacional de La Pampa

UNR: Universidad Nacional de Rosario

UPAU: Unión para la Apertura Universitaria

UU. NN.: Universidades Nacionales

Prólogo

La salida de la dictadura implicó múltiples desafíos que, en el caso de este libro, ponen en primer plano la importancia de una mirada no reificada de la democracia, atendiendo a los conflictos, tensiones y también los consensos que la atravesaron en cada momento y lugar. Así, para las juventudes estudiantiles de los años ochenta de la Argentina, la politización de sus prácticas y proyectos se entramó con la construcción de lo democrático en diferentes escalas y escenas. Precisamente en los andariveles de ese proceso de democratización, el abordaje de la militancia política estudiantil en la Universidad Nacional de La Pampa ofrece claves para desmontar las complejidades de actuar en la definición de los sentidos de la democracia en disputa. Desde lo local, en diálogo con lo regional y nacional, Elvio Monasterolo se interroga por la constitución de un sujeto político desde sus prácticas y estrategias, en un horizonte de actuación posdictatorial pregnado de rupturas y continuidades en ningún modo lineales, en cuya tramitación se desplegaron haceres, discursos y tradiciones que permitieron significar la democracia en otros términos, más allá de sus aspectos procedimentales, al poner en juego y en tensión más que el Estado de derecho, *una política de derechos*.

En particular, la investigación expone con claridad cómo se fueron construyendo en simultáneo agendas de normalización y de democratización en las que el actor estudiantil participó activamente, así como las tensiones que atravesaron las militancias por los desafíos y posibilidades que se fueron presentando en ambas arenas

interrelacionadas de acción. Mientras se afirma la centralidad de los estudiantes organizados en garantizar y viabilizar el proceso de normalización universitaria, se advierten los límites de la agenda democratizadora, cuando entraron a primar consideraciones procedimentales más que sustantivas en coincidencia con la construcción de una democracia amenazada.

A su vez, y a diferencia de otras investigaciones sobre actores provinciales, muestra con suficiencia cómo se fueron creando y recreando vínculos con otras militancias hacia adentro del campo estudiantil –incluso con los avatares del consenso, la unidad y la disputa intra-movimiento estudiantil en escalas diferenciadas– y fuera de él, principalmente con los actores partidarios en los que se referenció la mayor parte del activismo estudiantil, bajo la forma de juventudes partidarias universitarias, con énfasis en la construcción contingente e histórica de su autonomía / heteronomía respecto de las conducciones juveniles y partidarias. Incluso, su actuación muestra la centralidad de este actor colectivo en la conformación de otras luchas, como fue la cuestión de los derechos humanos en esa provincia, aspecto relegado por la historiografía.

Otro aporte muy significativo es su preocupación por la transmisión entre generaciones y el impacto de la dictadura en ese proceso, que fue interrumpiendo los diálogos, trastocando los legados e impactando fuertemente en la invención de tradiciones precisas para legitimar la acción política. Pese a ello, el autor hace un muy logrado trabajo de recuperación de cuáles fueron esas tradiciones que, aunque mutadas en reconfiguraciones, incluso recortadas de sus anteriores marcos de interpretación predictatoriales, poblaron la caja de herramientas políticas de éstas juventudes universitarias de la transición, como el ideario de la liberación nacional, las prácticas asamblearias, la importancia de las bases, la voluntad frentista e incluso cierta pretensión movimientista, entre otras. A la vez, estas militancias mixturaban sentidos nuevos o resignifican viejas apelaciones a lo democrático desde una reconsideración de la democracia como posibilitadora de una política de derechos. Pero no solo este *devenir de militancias en contexto(s)* caracteriza la obra, hay una expresa intención de hacer jugar preguntas que tradicionalmen-

te han estado menos inscriptas en el paisaje de los abordajes sobre militancia estudiantil, como su interés por la imbricación entre militancias estudiantiles, sociabilidades y consumos culturales, su cuidado proceso de recuperación y reflexividad de ciertos artefactos de mediación política o su pregunta por las subjetivaciones que hace dialogar militancia con cultura, género y arte. Es, además, una obra que enlaza sutilmente voces en diferentes tiempos, al reunir la potencia de los testimonios con la recuperación de los papeles políticos contemporáneos a través de una valiosa colección de prensa militante, modo de intervención política de larga tradición en la historia.

En suma, el libro de Elvio Monasterolo complejiza la mirada respecto de las militancias estudiantiles universitarias de los años ochenta de la Argentina, componiendo una imagen caleidoscópica de los avatares de su conversión en sujetos políticos que modularon su acción, desde un contexto de posdictadura hasta la progresiva afirmación de los contenidos procedimentales de la democracia y de repliegue de la disputa por sus contenidos.

Carol Solís
CIFYH-UNC

Introducción

Luego de ocho años de dictadura militar, y con el antecedente de casi tres décadas de inestabilidad institucional, el 10 de diciembre de 1983 se realizó el traspaso del mando político a un presidente electo en comicios libres y no fraudulentos. La victoria electoral de Raúl Alfonsín, con el 51,7% de los votos, consagró la llegada al poder institucional de la Unión Cívica Radical (UCR), al mismo tiempo que agudizó la crisis partidaria de su principal opositor, el Partido Justicialista (PJ), desgarrado por luchas internas tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974. La clausura caótica del proyecto militar mostró el derrumbe acelerado del consenso social que en 1976 había acompañado la ascendencia del régimen dictatorial. No obstante, el rejuvenecido entusiasmo democrático coexistía con una perdurable economía maltrecha y la presencia hiriente del conflicto bélico que, apenas un puñado de meses atrás, se había desplegado en las australes islas del Mar Atlántico Sur. Sin embargo, fue la presencia cada vez más visible y traumática de los secuestros, asesinatos y desapariciones de personas en el marco de la denominada “lucha contra la subversión” la que construyó una idea límite respecto del pasado inmediato.

Pocos meses antes de las elecciones, alrededor de cinco millones de personas se afiliaron a los partidos políticos. La fuerza simbólica del acto eleccionario se convirtió en el motor de una renovada atmósfera política y cultural en la que la democracia fue percibida como una conquista histórica, un antes y un después, que dejaría atrás los años negros de la violencia generalizada y de los enfrenta-

mientos sociales.¹ En este contexto, ¿qué se iniciaba y que terminaba en ese simbólico y memorable 10 de diciembre de 1983? ¿Acaso el creciente clima antidictatorial y el traspaso institucional del poder político bastaba para investir a los nuevos tiempos con un signo que, cimentado en la ética de la justicia y el pluralismo pregonado por Alfonsín, se diferenciase de la violencia política de los años previos? En una mirada más amplia, cabría preguntarse por la espesura del período abierto a mediados de 1982 con la derrota en Malvinas, y que ubica un principio de cierre con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los levantamientos carapintadas de la Semana Santa de 1987. En esa coyuntura histórica, el vocablo *democracia* fue paulatinamente equiparado con el *Estado de derecho*. Como binomio medular del nuevo tiempo, se constituyeron en un punto de partida desde el que se articuló presente y futuro, condición y posibilidad. Al igual que otra pléyade de palabras y expresiones –“memoria”, “verdad”, “derechos humanos”, “dictadura” o “guerra sucia”–, diversos significados fueron atribuidos según los enunciadores. En ese marco, los actores pusieron en juego un conjunto de prácticas, discursos, sentidos y representaciones que intervinieron y redefinieron las fronteras de lo enunciable, en una escena política e interlocutiva atravesada por la carga traumática que el pasado inmediato imponía. El binomio *democracia/Estado de derecho* funcionó por antagonismo con otro binomio: *dictadural autoritarismo*. De ese modo, el presente y el futuro se imbricaron de una forma particular a partir de la pregunta por la (ir)resolución del pasado inmediato. El interrogante no era menor, y contenía un elemento fundamental para el momento político. En efecto, a partir

1 En la provincia de La Pampa, el candidato radical a la gobernación no alcanzó la victoria, que quedó en manos del justicialista Rubén Hugo Marín. Detrás del PJ y la UCR, el tercer lugar fue para el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) y el cuarto para el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Luego se ubicaron distintas fuerzas del espectro de la izquierda, con bajos niveles de adhesión electoral (Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista Auténtico, Partido Intransigente y Partido Comunista, en ese orden). Para una aproximación a la trayectoria de las fuerzas políticas antes de las elecciones de 1983, ver Moroni (2019) y Zink (2019). Para un listado de los resultados generales y por localidad del desempeño de las fuerzas electorales ver De la Mano Cuadrelli y Lucero (2019).

de las formas en que se tramitara ese pretérito resultaba factible la habilitación de diversos “futuros” posibles.

Como ha mostrado Cecilia Lesgart (2003), el exilio político de intelectuales argentinos de diversas tradiciones teóricas operó como superficie para la revisión profunda tanto del pasado inmediato –en términos generales, los años transcurridos entre la dictadura de Juan Carlos Onganía (iniciada en 1966) y el golpe de Estado de 1976– como de las posibilidades de la democracia en la Argentina y en el Cono Sur. De esa forma, el ejercicio intelectual modeló, en retrospectiva, una suerte de programa de (auto)reflexión sobre las modalidades de hacer y de concebir la política en los años setenta –las ideas y las posibilidades de la revolución como horizonte político, la estrategia del cambio violento, la opción por la vía armada, entre otros tópicos– tanto como las posibilidades a futuro. En ese derrotero, las ideas de democracia y de transiciones políticas permitieron valorizar sus dimensiones procedimentales e institucionales, a la vez que el cambio político se visualizó como paulatino y gradual. En este marco, deberíamos considerar que el desplazamiento paulatino de las tradicionales posiciones de izquierda ligadas al imaginario de la revolución excedió el marco latinoamericano, al tener uno de sus principales focos en Europa, donde se verificaba un abandono de las posiciones revolucionarias hacia orientaciones de corte representativo liberal.

Por otra parte, la experiencia de los intelectuales en el exilio se combinó con las dinámicas internas de la Argentina. En 1981, el general Viola procuró inaugurar una suerte de ensayo de diálogo político que, tiempo más tarde, dio como resultado la coincidencia programática de una coalición de partidos respecto de la necesidad de forzar la recuperación democrática. Así, lo que dio en llamarse la “Multipartidaria Nacional”, replicada en los niveles provinciales, accionó como una herramienta de presión que amplió el reclamo de salida democrática frente a la crisis del régimen militar, agudizada tiempo después tras el fracaso bélico en Malvinas. Desde mediados de 1982, además de los canales clásicos de participación política –partidos políticos, sindicatos–, sobresalió la presencia de dos actores claves del período transicional: el heterogéneo movimiento de de-

rechos humanos y la emergencia de una juventud presente a través de diversas manifestaciones². De esa forma, el clima de ideas sobre la democracia se nutrió tanto de los aportes realizados por diversos espacios intelectuales y políticos —desde el exilio o desde el territorio nacional— como de las tradiciones plebeyas y populares presentes en la sociedad argentina desde sus orígenes. En esa construcción de imaginarios democráticos se hibridaron elementos de la tradición institucionalista y liberal con un conjunto de prácticas que los desbordaron y tensionaron, en la medida en que el ejercicio de las garantías individuales empujó los horizontes de expectativas hacia formas más democráticas de participación política y vida en común, reclamando al Estado de derecho una *política de derechos* que avanzara en una significación de la democracia en términos sociales, es decir, una política que garantizase el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia.

Tras la efervescencia y el optimismo democrático de los primeros años, las expectativas iniciales en la democracia se fueron devaluando al promediar la década. ¿Qué ocurrió en esos años para que, tras los levantamientos carapintadas de 1987, los sectores que habían dinamizado el carácter más movimientista de la democracia fuesen perdiendo su potencia inicial, para sumergirse en una suerte de desencanto a futuro? En nuestro caso nos interesa abordar el problema de la democracia —sus formas y significaciones— a través de uno de los actores cuya participación resultó gravitante en las expectativas de futuro.

En términos generales, la juventud se convirtió en un importante actor movilizador, y específicamente el activismo estudiantil pudo articular un espacio que expuso diversas tensiones y modulaciones en torno a los alcances y significaciones del proceso democrático abierto a partir de 1983. La politización creciente de los estudiantes universitarios encontró en las agrupaciones que se referenciaban en los partidos políticos un modelo y un cobijo que les permitió encuadrar prácticas y deseos militantes. En general, las

2 Además de la militancia estudiantil, muchos jóvenes participaron en movimientos de ocupación de tierras, en grupos eclesiales de base, en emprendimientos de organización barrial, colectivos artísticos, entre otros.

agrupaciones se convirtieron en el paraguas contenedor para la creciente politización de una considerable porción del estudiantado universitario, al mismo tiempo que fueron desbordadas y, en no pocas situaciones, puestas en crisis. En ese juego de condicionamientos mutuos, los vínculos entre partidos, juventudes políticas, agrupaciones y las formas de militancias/activismos se desarrollaron más o menos en sintonía, aunque en determinados casos y situaciones emergieron disputas y diferencias que condicionaron los derroteros posteriores y cuyos efectos resultaron en desprendimientos, quiebres o reconversiones de los espacios políticos estudiantiles.

Entre las agrupaciones más significativas del período encontramos a la Franja Morada (FM), vinculada a la Unión Cívica Radical; la Juventud Universitaria Intransigente (JUI), Partido Intransigente; la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Partido Justicialista; el Movimiento de Orientación Reformista (MOR), Partido Comunista; el Movimiento Reformista 15 de junio (MR-15), Partido Socialista Auténtico, y el Movimiento Nacional Reformista (MNR), Partido Socialista Popular. Por un lado, los activistas pudieron construir, no exenta de fricciones, una agenda de discusión política al interior de las universidades, al tiempo que se erigieron en actores de otros espacios de intervención social –el movimiento de derechos humanos, sindicatos, asociaciones barriales– que atravesaron la década de 1980. Las formas en que se tramitaron esas disputas –más allá de los resultados y balances– en muchos casos implicaron un despliegue de prácticas, discursos y tradiciones que permitieron significar la democracia en otros términos, desbordando sus aspectos procedimentales, al poner en juego y en tensión más que el Estado de derecho, una política de derechos.

Entre 1982 y 1988, las agrupaciones que se desarrollaron en la UNLPam coincidieron con la tendencia general del país, y sus militantes fueron parte del activismo estudiantil que a lo largo y ancho del país se movilizó y bregó por la recuperación de ámbitos de participación política y por sus derechos a intervenir en la vida universitaria. Un conjunto de preocupaciones y reclamos los entrelazó con otros pares del país, desdibujando particularismos: las luchas por la eliminación de las restricciones al ingreso y al arancelamiento,

el rechazo al continuismo de las políticas y funcionarios del período dictatorial, la revisión completa de la planta docente, la “normalización” de las instancias de participación política –centros de estudiantes, consejos directivos, superior, asamblea universitaria–, entre otros. Al mismo tiempo, y con distintos énfasis, los estudiantes de la UNLPam compartieron preocupaciones respecto de las formas y los alcances en que la casa de estudios participaba de la trama social. ¿Cuál era el rol e implicancia de la institución universitaria en la escala regional, nacional e incluso latinoamericana? Esas inquietudes, en mayor o menor medida, se encontraron atravesadas por los temas prominentes de la agenda pública: los reclamos en torno a las violaciones de derechos humanos y el terrorismo de Estado, el rechazo de la impunidad, la situación de la deuda externa, la orientación de la política económica, las presiones internacionales y la situación posbélica de Malvinas. Cada uno de esos temas y preocupaciones adquirió ribetes diferenciales en cada región, de modo que resulta pertinente un estudio de las experiencias estudiantiles que permita calibrar las coincidencias y continuidades en un plano “nacional” con las diferencias y particularidades de lo local/regional, como es el caso de la UNLPam. De ese modo, el movimiento estudiantil pampeano, con sus propias especificidades, no fue ajeno a la dinámica política nacional. Se alimentó de ella y moduló sus variaciones de acuerdo con sus propios ritmos y circunstancias. Al aproximarse los años finales de la década, las expectativas iniciales se vieron devaluadas, mientras entraba en crisis la confianza construida con la recuperación democrática y el alfonsinismo.

El período de estudio propuesto no es azaroso: comenzamos por la coyuntura abierta con la derrota bélica en el conflicto por las islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Atlántico Sur –a mediados de 1982–, a partir de la creciente politización de amplios sectores de la sociedad, de la juventud y particularmente del espacio universitario. En ese sentido, las propias experiencias militantes resaltaron el carácter significativo de la coyuntura, a partir de aspectos que desarrollaremos con mayor amplitud en las páginas siguientes. Por otra parte, en el cierre cronológico resulta determinante la secuencia de sucesos iniciada con la sanción de las leyes de Punto Final

(diciembre de 1986) y Obediencia Debida (junio de 1987) y el levantamiento carapintada de 1987, cuyos efectos se conjugaron con los reordenamientos internos de la militancia estudiantil luego del congreso de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en marzo de 1987, que resultó una suerte de golpe letal para las esperanzas de un activismo universitario que había cimentado expectativas en la posibilidad de desbancar la primacía hegemónica de la Franja Morada-Junta Coordinadora Nacional (FM-JCN). De ese modo, la coyuntura de 1987 muestra la desarticulación progresiva de muchos de los proyectos, alianzas y activismos de los militantes estudiantiles de la UNLPam forjados desde 1982. Por otra parte, la aceleración de los tiempos políticos/sociales/económicos que derivaron en la crisis de 1989 exigiría adentrarnos en un conjunto de aspectos y problemáticas que desbordan los objetivos del libro, de modo que consideramos oportuno realizar el corte cronológico en la antesala de una coyuntura que resultó un parteaguas en la historia política del país.

Estado de la cuestión

En términos de producción bibliográfica, la última década expone la presencia de una vasta literatura centrada en la reflexión, reconstrucción e interpretación de nuestro pasado reciente mediante publicaciones que, sin desconocer matices e interrogantes epistemológicos, conforman lo que podemos denominar el campo de estudios sobre la historia reciente en Argentina (Franco y Levín, 2007; Franco y Lvovich 2017; Alonso 2007; Pittaluga 2007, 2010a, 2010b, 2017; Águila *et al.* 2018). En ese marco, los procesos de movilización y radicalización social de los años sesenta y setenta, junto con los dispositivos represivos destinados a la desaparición de personas, se constituyeron en receptores de un mayor abordaje historiográfico (Gillespie 1987; Brennan 1996; Gordillo 2001; Pozzi 2001; Calveiro, 2008; James 2010). Esa particularidad se distingue de una bibliografía más reducida sobre el período que se abre a partir de la recuperación democrática en 1983, situación que solo en

los últimos tiempos ha ido variando bajo el impulso de análisis más exhaustivos. Entre los estudios pioneros se cuenta la compilación de Elizabeth Jelin (1987) sobre los emergentes movimientos sociales y el trabajo de José Nun y Juan Carlos Portantiero (1987), un compendio de escritos centrado en aportar algunas interpretaciones iniciales al proceso de la transición democrática. Sin embargo, fue a partir del cambio de siglo cuando emergió una preocupación mayor por el periodo posdictatorial.

En ese sentido, la crisis desatada en el país a fines de 2001 tuvo su correlato en las agendas de investigación del campo de las ciencias humanas, con la aparición de nuevas preguntas, regió unproblemas y equipos de investigación. La fecunda intersección de ámbitos disciplinares como la sociología, las ciencias políticas y la historia permitió ampliar la mirada sobre la década de 1980. Una de las obras iniciales fue la tesis doctoral de Gerardo Aboy Carles (2001) sobre la reformulación de las identidades políticas a partir de 1983, a la que siguió el trabajo de Cecilia Lesgart (2003) sobre los usos e ideas de la democracia en la transición política. En los años siguientes se publicaron una serie de obras que mostraron el trabajo colaborativo de los equipos de investigación (Novaro y Palermo, 2004; Pucciarelli, 2006), abordando aristas específicas del período, como la cuestión militar, los problemas de la economía, las transformaciones discursivas, la emergencia de las corrientes renovadoras en el peronismo, entre otros. Años más tarde, algunos estudios focalizaron en coyunturas, problemas y actores más específicos, brindando una profundidad interpretativa al período final de la dictadura y los inicios democráticos (Suriano y Álvarez, 2013; Feld y Franco, 2015; Franco, 2017 y 2018). En sintonía, los estudios en clave subnacional/regional aportaron una mirada que permitió calibrar continuidades y transformaciones en los espacios provinciales (Favaro y Iuorno, 2010; Camino Vela y Rafart, 2012; Ferrari y Gordillo, 2015; Camino Vela *et al.*, 2019; Moroni, 2019).

Respecto del actor específico de nuestra investigación, el activismo/movimiento estudiantil muestra una creciente bibliografía que da cuenta de su participación en momentos claves de nuestro pasado nacional, como también de su inserción en espacios, redes y

tramas vinculares de más amplio alcance político y social. Sin una pretensión exhaustiva de revisión, mencionemos que han sido los estudios preocupados por la Reforma de 1918 los primeros en darle centralidad a los estudiantes como figura del análisis histórico (Germani y Sautu, 1965; Portantiero, 1978). De allí se derivaron estudios vinculados a la ideología, las prácticas culturales o el impacto de la Reforma en las tradiciones estudiantiles, tanto a nivel regional, nacional e incluso latinoamericano (Levenberg y Merolla, 1988; Biagini, 1999).

Sin embargo, las décadas posteriores al derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 se constituyeron en la Argentina como el momento y el marco de acción para la emergencia de una cultura juvenil contestataria que resultó ser un trasfondo de la radicalización política de la militancia estudiantil (Cattaruzza, 1997; Cosse *et al.*, 2010; Manzano, 2017). En ese marco, el rol de los estudiantes y específicamente del movimiento estudiantil aparece como parte de una dinámica más amplia que incluye a la universidad y sus actores (Barletta, 2001 y 2002; Barletta y Tortti, 2002; Millán, 2006; Califa, 2014 y 2017; Dip, 2016 y 2017; Friedemann, 2017; Pis Diez 2022; Reta, 2010). Otros trabajos han buscado aportar una mirada de largo alcance, como el caso de Mario Toer (1988a y 1988b) –dos volúmenes que trabajan un largo período cronológico, desde el Gobierno de Juan D. Perón hasta los inicios de la etapa alfonsinista–, o la obra compilatoria de Bonavena *et al.* (2007). También debemos destacar aquellas producciones referidas a las instituciones universitarias como espacios en los que se traman redes de sociabilidad y los actores configuran y despliegan prácticas políticas y culturales (Asquini, 2005 y 2008; Buchbinder, 2005; Crochetti, 2008; Pérez Lindo, 1985; Suasnabar, 2004).

Por otra parte, los trabajos que se centran en el período comprendido entre el despliegue de la dictadura militar y los procesos de recuperación de la democracia han buscado reponer una mirada que explora transformaciones y continuidades de las militancias estudiantiles, además de las capacidades de agencia y las tramas organizativas que atravesaron el período, como los trabajos de Asquini y Dal Bianco (2008), Cristal (2017), Luciani (2017), Seia (2016

y 2020b), Seia y Cristal (2022) y Servetto y Chabrandó (2012). En sintonía, las dinámicas estudiantiles de la década de 1980, ya en democracia, han sido abordadas a partir de los procesos más amplios de politización juvenil (Vázquez *et al.*, 2017;), a partir de la configuración de agrupaciones estudiantiles específicas (Polak y Gorbier, 1994; Beltrán, 2013; Monasterolo, 2018) o mediante la exploración de prácticas políticas y culturales (Redondo, 2008; Monasterolo, 2013; Vicente, 2018). En este marco, consideramos que nuestra investigación sobre el activismo estudiantil en la UNLPam se inscribe, desde una mirada que recupera la dimensión regional, como un aporte al conocimiento sobre las dinámicas estudiantiles de la década de 1980, en el marco de los procesos de recuperación de la democracia y de las discusiones y debates en torno a las orientaciones que la nueva escena democrática abrió en el país a partir de 1983.

Objetivos, hipótesis de investigación y referencias conceptuales e historiográficas

Como hipótesis general, consideramos que la reorganización del movimiento estudiantil a partir de la recuperación democrática en 1983 debe pensarse con relación al carácter determinante que significó la implantación del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, en la medida en que la democracia naciente se vio condicionada por las formas, alcances y objetivos del poder dictatorial. El amedrentamiento represivo de los años previos produjo una instancia de silencio y una ruptura en la transmisión generacional que el resurgimiento de la política juvenil desde fines de la dictadura no siempre logró sortear. En ese sentido, los agrupamientos políticos en democracia se vieron afectados por la interrupción de las cadenas de traspaso de información, conocimientos y saberes sobre las que se inscribe el pasaje generacional, situación que los jóvenes universitarios debieron enfrentar con distintas modalidades y estrategias de intervención.

En el marco de la reconstrucción iniciada a partir de 1983, la democracia como instancia de intervención política se constituyó

en un campo de disputa por sus significaciones, pivotando desde un plano más institucional, normativo y representacional –fiel a la tradición liberal– a una concepción de la democracia entendida como proceso igualitarista en términos políticos y sociales, como poder del *demos* y como autorrealización plena del gobierno del pueblo. En esa tensión, distintos actores desplegaron prácticas, discursos y comportamientos que intervinieron sobre las diversas significaciones, sin que necesariamente se excluyeran. Como actores sociales, las agrupaciones estudiantiles –formalmente constituidas y con ciertos vínculos institucionalizados respecto de los partidos políticos, pero con una lógica de funcionamiento más autónoma respecto de esas estructuras– se erigieron como espacios relevantes que brindaron marcos para la acción del activismo estudiantil. Sin embargo, un parte de ese activismo desbordó los canales formales de participación pública, acentuando una práctica política de corte más movimientista y de base.

Nuestra investigación se centró en la militancia estudiantil de la UNLPam, en la ciudad de Santa Rosa, durante el período comprendido entre 1982 e inicios de 1988. Allí se desempeñaba el grueso de la actividad universitaria, con cuatro facultades, numerosas carreras y una mayor población estudiantil respecto de la ciudad de General Pico.³ Nuestro recorte espacial obedece tanto a una estrategia metodológica como a la disponibilidad y acceso de fuentes documentales. Salvo aclaraciones pertinentes, cuando hacemos mención a “la militancia de la UNLPam” (o afines), nos referimos en los términos del recorte espacial señalado. Para llevar adelante nuestra investigación, apelamos al análisis de bibliografía especializada, fuentes documentales de diversos tipos (publicaciones de agrupaciones políticas, revistas estudiantiles, declaraciones, folletos, fotografías, entre otros documentos) y fuentes testimoniales, con el objetivo de reconstruir las prácticas, discursos y estrategias de intervención política de las agrupaciones estudiantiles de la UNLPam, atentos al juego de escala entre los espacios nacionales y locales. De ese modo, pudimos identificar y reconstruir debates

3 Desde su nacionalización en 1973, la UNLPam funcionó en la ciudad de Santa Rosa y en la ciudad de General Pico.

y encrucijadas que atravesaron a la militancia estudiantil pampeana en la década de 1980, además de examinar las concepciones puestas en juego respecto de la democracia como instancia de intervención política.

En la medida en que una de las premisas que guiaron la investigación fue comprender de qué manera el activismo estudiantil intervino en la disputa por los sentidos de la democracia, resulta pertinente entenderla a esta como un significante político, es decir, polisémico, histórico y relacional, de modo que nos apoyaremos en elaboraciones teóricas provenientes del campo de la nueva historia intelectual que indagaron sobre la conformación de los lenguajes políticos. Como sostiene Elías Palti: “Los lenguajes son *indeterminados semánticamente*: uno puede afirmar lo mismo desde matrices conceptuales muy diversas, e, inversamente, decir cosas muy distintas, y aun opuestas entre sí, desde una misma matriz conceptual (las cursivas son del original)” (2005: 70), de modo que resulta necesario traspasar la instancia meramente textual y adentrarnos en los contextos en que esos enunciados tienen lugar, para poder visualizar allí las (in)consistencias, fallas o pliegues argumentativos. Para Reinhart Koselleck, todo concepto articula redes semánticas plurales, de ahí su carácter plurívoco, “un concepto unifica en sí la totalidad del significado” (1993: 117), en la medida en que se articulan allí significados sedimentados de otras épocas y circunstancias de enunciación diversas, y que son puestas en juego cada vez que se utilizan los conceptos, de ahí que no tengan un sentido unívoco y puedan trascender los intentos de imprimirle, oportunamente, determinados sentidos específicos. En ese sentido, todo lenguaje necesita ser abordado en su uso y su acción, evocando a Ludwig Wittgenstein, en la medida en que el lenguaje es, en definitiva, el recurso del cual se valen los seres humanos para dotar de significados al mundo social y comprenderlo. De ese modo, combinamos enfoques de la nueva historia intelectual y conceptual con las herramientas provistas por el campo del análisis discursivo. En particular, se tomaron en cuenta los actos de enunciación, las marcas de los enunciadorees y de los destinatarios, y las estrategias discursivas que los actores ponen en juego, para lo cual consideramos que el análisis

del discurso es a la vez una búsqueda en los textos en sí mismos, pero también una indagación acerca de las condiciones sociales de producción y circulación de estos textos (Verón, 1996).

Por otra parte, para llevar a cabo nuestra investigación realizamos 14 entrevistas semiestructuradas a participantes del período. El análisis de los testimonios producidos permite comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes (Carnovale *et al.*, 2006; Oberti, 2009). Mediante diversos mecanismos de confrontación, comparación y crítica sometimos a los materiales a elementales reglas de credibilidad.

En la medida en que consideramos que la reconfiguración de la vida política en los años ochenta se cimentó en una concepción de la democracia ligada a la figura del consenso, el funcionamiento del Estado, sus alcances, sus integrantes y gestores adquirieron un cariz relevante a la luz de la diferenciación democracia/dictadura. De ese modo, resulta importante la comprensión de la esfera estatal como efecto de múltiples presiones en el que operan tensiones, disputas, lealtades e intereses de diversa índole. En ese sentido, se propone considerar al Estado como “*un espacio polifónico en el que se relacionan y se expresan grupos* (las cursivas son del original)” (Bohoslavsky y Soprano, 2010: 24), cuyo ejercicio impone, en primer término, no pensarlo como una instancia que se encuentra por arriba de los sujetos, sino *a través* de los sujetos, en determinado tiempo y lugar, como espacio de interacción, lucha y disputa por reformarlo, confrontarlo o consolidarlo. En ese sentido, consideramos necesario atender a una mirada del Estado que se desajuste de sus centros neurálgicos, es decir, de los ámbitos de poder concentrados en las grandes ciudades (Buenos Aires en nuestro caso) como de las instancias de operatividad del poder (por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional). Pensar al Estado desde los márgenes, desde el espacio regional de la Universidad Nacional de La Pampa, de la provincia de La Pampa o de la ciudad de Santa Rosa supone un esfuerzo y un desafío por poner en juego una variabilidad de escalas que dé cuenta de las tensiones, continuidades y diferenciaciones al interior de las tramas estatales.

Respecto de nuestro actor específico de indagación, consideramos al activismo estudiantil como una instancia de emergencia y subjetivación que implica, necesariamente, el desplazamiento de su lugar asignado en los dispositivos interlocutivos de la institución universitaria, dando lugar a una nueva escena dialógica y a nuevos lugares de enunciación. Se trata de un actor caracterizado por dos dimensiones: la acción y la toma de la palabra; en dicha praxis —una *performance* y una *discursividad* específica— los estudiantes despliegan una lógica de agregación distinta de aquella presupuesta en su rol social de receptores de conocimiento y en la distribución del poder universitario, para desarrollar agrupamientos organizativos entre pares y a distintos niveles (carrera, facultad, universidad), extendiéndose incluso a ámbitos nacionales e internacionales. Por lo tanto, el activismo estudiantil implica el (auto) reconocimiento de fuerzas sociales diversas e instancias de confrontación al interior de la universidad y la sociedad. Ello remite invariablemente a espacios y momentos de lucha y disputas, como también a aquellos discursos orientados a fundamentar la legitimidad del lugar de enunciación y a los modos de organizar las prácticas que dan curso a los conflictos. En una mirada más amplia, resulta pertinente filiar el activismo estudiantil como parte de una teorización mayor que engloba la noción de movimientos sociales, en la medida en que sus partícipes despliegan prácticas que coadyuvan a la construcción de identidades colectivas en la búsqueda de objetivos comunes. Como sugiere Sidney Tarrow (1997), los movimientos despliegan acciones colectivas con alta participación de sus bases y utilizan canales no institucionalizados de intervención social y política, por los que elaboran sus demandas, expresan formas de acción y se van reafirmando como grupos y sujetos colectivos.

Esta consideración nos permitió identificar la producción del espacio social como el ámbito en el que se intersectan e interactúan los movimientos, se construyen subjetividades y se ponen en juego recursos, concepciones, valoraciones y prácticas políticas que imponen al Estado su ampliación —cuando no su cuestionamiento y alternativas de transformación— en términos de derechos y calidad de vida. Por otra parte, si el activismo estudiantil implica un escenario

por el cual los sujetos trascienden su individualidad a través del acto de reunión y de delimitación de nuevas fronteras, resulta importante advertir las formas procesuales que dan sentido a ese cambio. En ese sentido, el concepto de “experiencia” nos ayudó a comprender esa instancia instituyente. Según R. Koselleck:

En la experiencia se fusionan tanto la elaboración racional como los modos inconscientes del comportamiento que no deben, o no debieran ya, estar presentes en el saber. Además, en la propia experiencia de cada uno, transmitida por generaciones o instituciones, siempre está contenida y conservada una experiencia ajena (1993: 338).

Ese bagaje que constituye al sujeto da forma a una totalidad que amalgama muchos estratos de tiempos anteriores, sin referencias de antes o después, de ahí que sea plausible hablar de una espacialidad o de un *espacio de experiencia*. De ese modo, la experiencia es un pasado reunido y hecho presente que puede ser recordado y reflexionado. Si la experiencia es pasado presente, la expectativa es el futuro hecho presente a partir de la cual se configura la línea ilusoria que moviliza las acciones de los sujetos, el *horizonte* de lo no-experimentado, lo que puede descubrirse y hacerse posible (ídem). Ese *horizonte de expectativas* se descompone en una infinidad de trayectos temporales posibles y su materialización es una nueva solución que se incorpora al espacio de experiencia.⁴

Finalmente, el activismo político estudiantil –en nuestro caso de la UNLPam– conlleva la particularidad de que su experiencia resulta de la articulación de las dinámicas sociopolíticas nacionales y regionales, constituyendo un punto de acceso privilegiado para examinar los empalmes y conflictos de las escenas nacional y regional en el período abordado. En ese sentido, el abordaje teórico-metodológico centrado en una perspectiva local y regional colabora en com-

4 Sin detenernos demasiado, es preciso notar que para R. Koselleck (1993), la experiencia es un pasado reunido, metafóricamente de carácter espacial; es anacrónica (simultaneidad de lo no contemporáneo), imbricada con la expectativa, pues toda experiencia la requiere para ser reunida de modo retrospectivo, erigiéndose –tanto la experiencia como la expectativa– como elementos decisivos en la forma de acción de los sujetos.

plejizar y enriquecer analíticamente los procesos que encarnan los actores en los espacios que habitan, con sus continuidades, rupturas y tensiones. Como se interroga Susana Bandieri; “¿cómo inscribir nuestros objetos de estudio en contextos lo suficientemente amplios como para permitirles conservar su especificidad y dinámica interna, volviéndolos a la vez operativamente comparables con los contextos nacional e internacional vigentes?” (2018: 6). En ese sentido, la posibilidad de articular una variabilidad en el juego de escalas, además de un uso intensivo de las fuentes en términos cualitativos, nos permitió desplegar una mirada analítica con atención a lo particular sin que ello suponga un desentendimiento del contexto, entendiendo por este “las coordenadas espacio-temporales que delimitan un hecho y que lo convierten en eslabón de una cadena de significados” (Fernández, 2018: 16).

Estructura del libro

El primer capítulo está centrado en recuperar una mirada general sobre las transformaciones socioculturales que, desde los años sesenta, constituyeron a la juventud y específicamente a la militancia estudiantil universitaria en un actor significativo de los procesos de movilización y radicalización política hasta mediados de la década de 1970, cuando se efectivizó la ofensiva de los sectores conservadores/liberales del país para restaurar una hegemonía amenazada por las dinámicas de cambio y transformación social. En ese sentido, buscamos poner de relieve los alcances que, a partir del golpe de Estado de 1976, pusieron de manifiesto el profundo intento de transformar capilarmente la sociedad argentina, tanto en la particularidad del espacio de la UNLPam como en el plano más general de la dinámica universitaria nacional. El segundo capítulo aborda las dinámicas de politización abierta a partir de la descomposición del régimen dictatorial, buscando mostrar de qué manera los actores políticos modularon, condicionaron y se alimentaron de una dinámica procesual que colocó el horizonte de expectativas en la recuperación y posterior consolidación de la democracia y el Es-

tado de derecho. En sintonía, el tercer capítulo aborda el período de la normalización universitaria, a través de los modos en que las agrupaciones recuperaron y dieron cuerpo a los espacios gremiales e institucionales de la UNLPam. En ese derrotero, se reconstruyen los alineamientos y representaciones políticas que organizaron disputas y contiendas, y que resultaron determinantes para algunas coyunturas del período.

A continuación, el cuarto capítulo del libro explora el estudio específico de la emergencia y trayectoria de las principales agrupaciones políticas estudiantiles, como el caso de la FM, la JUI, la JUP, el MR-15 y, en menor medida, el MOR y el MNR. Allí buscamos mostrar las formas en que las agrupaciones estudiantiles se convirtieron en la malla contenedora de los jóvenes universitarios que se politizaron y bregaron por un conjunto de demandas que los entrelazó a sus pares del resto del país, al tiempo que se desarrollaban sinuosas relaciones en los vínculos entre partidos, juventudes y agrupamientos universitarios. El quinto y sexto capítulo admite una lectura en tándem, y refiere a los modos en que los estudiantes modularon un conjunto de prácticas, discursos y sociabilidades que dotaron de significación y especificidad propia las transformaciones en los modos de *hacer/decir* de la militancia estudiantil en la década de 1980, y cuya praxis, en su propio devenir, construyó una significación de la democracia que desbordaba y tensionaba las tradiciones republicanas y liberales inscriptas en el proceso abierto desde 1983, al sostener la demanda por una política de derechos que volviese efectiva una democracia más *amplia, profunda y sustantiva*. En ese sentido, el último capítulo busca recapitular, en términos más amplios, sobre los modos en que fue transformándose el clima de ideas sobre la democracia durante nuestro período de estudio, a partir de la interacción de múltiples factores y actores que pusieron en tensión diversas significaciones y orientaciones de la democracia en curso. Finalmente, el libro se cierra con un conjunto de conclusiones, siempre provisionarias, que nos permiten calibrar algunos aspectos de los debates y discusiones que presenta el estudio de las militancias estudiantiles en la década de 1980.

Capítulo I. Transformaciones en la cultura juvenil argentina: la militancia estudiantil universitaria, entre la liberación nacional y el golpe de Estado de 1976

El derrocamiento del Gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 inició un período de marcada inestabilidad política y social que dio lugar a profundas transformaciones en la vida de los argentinos. En una sociedad en efervescencia, cuyas expectativas y prácticas políticas parecían deslizarse hacia un estado de contestación generalizada, los años sesenta muestran el inicio de un intenso proceso de modernización cultural que, entre sus aristas, habilitó la emergencia y articulación de una serie de discursos con centro en palabras como “liberación nacional”, “socialismo” o “revolución”, términos que se volvieron asiduos en el vocabulario político de la época. Mientras el escenario internacional se hallaba marcado a fuego por conflictos en torno a la Guerra Fría, la guerra de Vietnam o los procesos de descolonización en África, otros eventos y/o sucesos con anclaje latinoamericanos –la Revolución cubana o las derivas tercermundistas del Concilio Vaticano II– impactaron en los núcleos más activos de la izquierda y el peronismo, atravesando los imaginarios de obreros, estudiantes, intelectuales y una ciudadanía que, en general, se mostró más permeable a los interrogantes y/o desafíos que la época planteaba.

En el caso de Argentina, el Cordobazo de 1969, y los sucesivos “azos” desatados en el resto del país en los años siguientes, configuraron un momento decisivo para el creciente proceso de radicaliza-

ción social, en la medida en que sus esquivas impactaron en varios proyectos y expresiones del campo popular.⁵ Ese universo de experiencias tuvo como protagonista mayoritario a un conjunto de fuerzas sociales y políticas que podríamos adscribir al significativo de “Nueva Izquierda” (NI en adelante), y que según María Cristina Tortti “contribuyó decisivamente a producir el intenso proceso de protesta social y radicalización política que incluyó desde el estallido espontáneo y la revuelta cultural hasta el accionar guerrillero”. Su composición heterogénea, el uso de un lenguaje compartido y un común estilo político fue produciendo una cierta unidad “de hecho” en disímiles “grupos que provenían del peronismo, de la izquierda, del nacionalismo y de los sectores católicos ligados a la teología de la liberación” (2007: 13).

Como han señalado diversos investigadores sobre el período, rasgos distintivos del proceso fueron tanto la confluencia de diferentes grupos sociales y generacionales provenientes de distintas tradiciones político-ideológicas (la izquierda tradicional, el peronismo, el nacionalismo y sectores cristianos), como la diversidad de fenómenos que incluyó desde rebeliones urbanas masivas como el “Cordobazo” o “puebladas” en el interior del país, hasta el desarrollo de tendencias combativas y “clasistas” en el movimiento obrero, pasando por el despliegue de movimientos de renovación y “subversión” artística y cultural que cuestionaban, en grado variable, la autoridad y el orden en distintos ámbitos sociales (institucionales, profesionales, confesionales).⁶

La diversidad de vínculos que los protagonistas desplegaron contribuyó a que fueran percibidos –y se percibieran a sí mismos– como partes de una misma trama: la del campo del “pueblo” y de la “revolución”. En ese sentido, numerosos puentes conectaron la esfera más “política” con variadas formas de protesta y de innovación cultural, de modo que pudieron relacionarse entre sí fenómenos diversos como la experimentación en el campo de las vanguardias artísticas, el debate sobre las formas de concebir el cine, la irrupción

5 Para una revisión a 50 años del Cordobazo y otros “azos”, ver Gordillo (2019).

6 Para una revisión conceptual y análisis de experiencias con relación a la Nueva Izquierda en la Argentina, ver Tortti *et al.* (2021).

de teatro político, la masificación del psicoanálisis o la práctica de formas alternativas/liberadoras de educación. Ese amplio espectro de experiencias propagaba, en su propio movimiento, una cultura que ensanchaba sus contornos, haciéndose asequible para capas mayores de individuos, al mismo tiempo que recolocaba la idea de *proyectos colectivos* como una instancia inescindible en el camino hacia la transformación de la sociedad.

Sin embargo, el derrotero de la NI estuvo signado por un actor preponderante de la época: la emergencia de una cultura juvenil contestataria que, en sus derivas, expuso el ascenso de una dinámica de radicalización política que dio un nuevo volumen y sentido a las disputas políticas del período. En efecto, entre las décadas de 1950 y 1970, “la juventud devino una categoría cultural y política crucial de Argentina”, portadora de las dinámicas de modernización sociocultural y también de sus descontentos, “expresados bajo la forma de rebelión cultural y radicalización política” (Manzano, 2017: 17). Miles de jóvenes de todos los estratos sociales se constituyeron en hacedores y destinatarios de un tras-trocamiento inédito en los sistemas de creencias, valores, lenguajes y representaciones sociales vigentes, dando lugar a la formación de una cultura juvenil que marcaría a fuego el derrotero posterior de la sociedad argentina.⁷

En poco tiempo, la juventud se erigió en el emblema de una nueva era política impulsada por el ideal de revolución. En un fenómeno colectivo inédito en el país, los jóvenes se incorporaron a las filas de las organizaciones estudiantiles, políticas y guerrilleras, siendo los espacios de cuño peronista los mayores beneficiados de ese movimiento. La historiadora Valeria Manzano subraya el papel protagónico que para los jóvenes tuvo la formación de un ideario tercermundista como “zona de conjunción entre grupos políticos e ideológicos divergentes” (2017: 248). En ese sentido, la asimi-

7 La juventud contribuyó a cambiar, como nunca antes, prácticas políticas, estereotipos sociales, patrones de consumo, relaciones de género y comportamientos sexuales. En su dinámica, los jóvenes resignificaron aspectos tan variables como los sentidos sobre la política, la familia, el erotismo, el sexo, las drogas o la música, lo que generó situaciones de conflictividad en los ámbitos de la familia, la cultura y la sociedad.

lación política y cultural de la Argentina al Tercer Mundo generó una igualación de la situación argentina con sus pares de Asia y África, inmersos en las luchas de descolonización, al resaltar el carácter dependiente de los países de América Latina respecto de los centros imperialistas. Al mismo tiempo, el éxito de la Revolución cubana se erigió en referencia y sostén de proyectos emancipatorios y anhelos locales, mientras se buscaba hermanar una visión identitaria de la patria grande latinoamericana. En una perspectiva más amplia del período 1966-1973, el régimen autoritario iniciado por Juan Carlos Onganía propició las condiciones para que la percepción de injusticia generalizada provocara el pasaje de una cultura política de resistencia a otra de confrontación, que tuvo su eclosión en el Cordobazo y, radicalización mediante, estimuló el desarrollo y funcionamiento regular de numerosas organizaciones guerrilleras, barriales, religiosas y de base (Gordillo, 2001).⁸

En este contexto, el peronismo devino un espacio central de la dinámica de radicalización juvenil. Desde la década previa, Perón había ungido a la juventud con un doble carácter: como uno de los actores relevantes en la lucha ideológica y antidictatorial contra el régimen de la Revolución argentina, y como destinatarios del trasvase generacional del movimiento. En una carta enviada desde Madrid, afirmaba que “la Juventud Peronista está en el deber de asumir sus responsabilidades, y para ello, es indispensable que nuestros jóvenes luchadores estén bien claros, sobre los aspectos fundamentales de esta lucha que ya lleva diez años”. La misiva continuaba diciendo que “no intentamos ninguna manera de sustituir un hombre por el otro; sino un sistema por otro sistema. No buscamos el triunfo de un hombre o de otro sino el triunfo de una clase mayoritaria, y que conforma el pueblo argentino: la clase trabajadora”. Para ese objetivo, la juventud debía forjar una clara actitud antiimperialista, anticapitalista y antioligárquica, lo que requería “una justa línea política a través de una organización unitaria de conducción cen-

8 Huelga aclarar que el fenómeno no fue común a toda la juventud. Muchos jóvenes del período se mantuvieron dentro de los parámetros de juventud “correcta”, reproduciendo las pautas y mandatos sociales esperables por los valores vigentes de su tiempo. Sin embargo, una porción considerable de los jóvenes se vio atravesada por las transformaciones mencionadas.

tralizada” que desarrolle “un programa político” que contemple las necesidades de las masas.⁹

No debe sorprender la forma masiva en que jóvenes de clases medias, estudiantes y profesionales –imbuidos del imaginario tercermundista– se “peronizaron” o, de mínima, simpatizaron con las posiciones peronistas (Barletta, 2001 y 2002; Barletta y Tortti, 2002; Reta, 2010; Dip, 2016 y 2017; Califa, 2017; Friedemann, 2017).¹⁰ Resulta oportuno apuntar que el espacio universitario, y específicamente el ámbito de la militancia estudiantil, se hallaba en transformación desde los años del onganato, cuando comenzó a producirse una reconfiguración de las corrientes, tendencias y agrupaciones a partir, en buena medida, de la trama de relaciones forjadas con otros actores del campo social y popular, como el sindicalismo combativo, los sectores católicos radicalizados y trabajadores en general. Esos vínculos tradujeron al espacio estudiantil las mutaciones, rupturas y reagrupamientos producidos al interior de los partidos y corrientes políticas, lo que devino en una creciente “partidización” de la vida universitaria.¹¹

La peronización y partidización de los estudiantes expresó una revalorización de la cuestión universitaria. Si antaño había sido menospreciada como “institución del régimen” o “república de los estudiantes”, ajena a los intereses reales del pueblo y la clase trabajadora, la nueva coyuntura revalorizó el espacio universitario como ámbito legítimo para impulsar las luchas necesarias para la transformación social. Como refiere Ana Barletta:

Una sociedad “nueva” requería de un nuevo modelo de universidad, pero a la vez la universidad aparecía como uno de los

9 *Carta de Perón a la Juventud Peronista*, 20/10/1965. En línea en: <http://archivoperonista.com/documentos/correspondencia/1965/carta-peron-juventud-peronista/>. Consultado el 15/5/2022.

10 El grueso de la bibliografía al respecto está enfocada en experiencias de universidades como la UBA, extensibles al eje La Plata-Buenos Aires-Rosario. No contamos con otros estudios que refieran ese proceso en otras universidades del país.

11 Entendemos por partidización el proceso por el cual los grupos estudiantiles y docentes dejaron de definirse a partir de la pertenencia a la universidad, la adhesión a la Reforma o a través de una identidad que remitía a principios generales como el humanismo, para hacerlo en función de su vínculo con una determinada identidad u organización política (Sigal, 1991: 71).

espacios “posibles” desde los cuales delinear y comenzar a gestar la “nueva sociedad”. Esta experiencia inédita en el ámbito universitario puso en tela de juicio las formas tradicionales de organización y Gobierno de la institución como, asimismo, las formas tradicionales de relación entre la vida política universitaria y la política extrauniversitaria (2001: 2).

En abril de 1973 nació formalmente la JUP. Su presencia funcionó como malla contenedora a las variadas expresiones del peronismo universitario que se habían radicalizado hacia la izquierda desde los años previos, además de brindar soporte a la avalancha de jóvenes estudiantes que adherían y/o simpatizaban con la Tendencia.¹² Sin embargo, las transformaciones en la militancia estudiantil no se redujeron a su versión peronista. Desde fines de la década de 1960 se registró el crecimiento de agrupaciones universitarias ligadas a la izquierda maoísta. Los dos grupos estudiantiles más numerosos fueron la Tendencia Universitaria Popular Antimperialista y Combativa (TUPAC), ligada al partido Vanguardia Comunista (VC), y el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI), expresión estudiantil del Partido Comunista Revolucionario (PCR), nutrido en buena medida de las juventudes comunistas nucleadas en *La Fede* que en 1968 rompieron con la dirección del Partido Comunista (PC). Tanto el FAUDI como la TUPAC rápidamente se expandieron por el país y fueron parte de la conducción de la Fe-

12 La “Tendencia Revolucionaria” fue la denominación aplicada a la corriente conformada por las distintas agrupaciones que se identificaron con el peronismo revolucionario y cuyo proyecto político propiciaba la construcción del socialismo nacional. En 1972, el Consejo Provisorio de la Juventud la reconoció como línea interna del partido. Hacia 1973, cuando conjugó su mayor organicidad interna en el marco del triunfo nacional del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi), estaba compuesta por la organización armada Montoneros y sus agrupaciones de superficie: la Juventud Peronista Regionales (JPR), el Movimiento Villero Peronista (MVP), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y el Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP); junto con otras agrupaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base (PB). La otra línea interna reconocida a inicios de 1972 rechazaba la lucha armada y estaba compuesta por el Comando de Organización (CdeO) y Guardia de Hierro (GH). Estas agrupaciones desempeñaron un rol importante, años después, en el marco de la escalada represiva tendiente a “depurar” el peronismo de la “infiltración marxista”. Al respecto, ver Lenci (1999).

deración Universitaria Argentina (FUA) entre 1968 y 1971, además de varias federaciones regionales y centros estudiantiles.¹³

En el campo del reformismo, el Movimiento de Orientación Reformista (MOR) –agrupación ligada al PC– continuó teniendo presencia en el espacio universitario, a pesar del sangrado de militantes y simpatizantes que emigraron hacia otras corrientes. En el caso de la Franja Morada, sus inicios datan de fines de los años 60, cuando un puñado de diversos agrupamientos reformistas, mayoritariamente con base en la provincia de Santa Fe, convergieron en un espacio común. Por entonces, la FM no era una agrupación exclusivamente radical, sino que estaba integrada por expresiones políticas de orientación radical, socialista y anarquista. Entre 1971 y 1973, la agrupación morada fue uniformizándose hasta volverse solo radical y, en estrecho vínculo con la también naciente corriente de la Juventud Radical denominada Junta Coordinadora Nacional (JCN), formaron una alianza con Raúl Alfonsín, por entonces mentor del movimiento *Renovación y Cambio* y de línea opositora al balbinismo. A partir de allí, la FM se constituyó en expresión universitaria y orgánica del radicalismo y “nacionalizó” su presencia estudiantil.¹⁴

El mapa de la militancia estudiantil se completaba con un extenso conjunto de agrupaciones de base que se movían mayoritariamente en el amplio abanico de la izquierda política. De ese modo, la militancia universitaria congregó una porción significativa de jóvenes que participaron del ideario tercermundista y liberacionista que retroalimentó los procesos de radicalización social de la Argen-

13 Otros grupos menores ligados al maoísmo fueron el Grupo de Estudiantes Antiimperialistas (GEA), alineado con el Partido Comunista Maoísta (PCM), y los Grupos de Resistencia Estudiantil (GRE), vinculados al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Para una aproximación a las diversas expresiones universitarias del maoísmo en la Argentina, ver Ce-lentano (2014).

14 Sin embargo, entre 1973 y 1976, existió la Franja Morada-Juventud Radical Revolucionaria (FM-JRR), mayoritariamente en el espacio de la Capital Federal y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). A diferencia de la FM-JCN, no eran alfonsinistas –más bien cercanos al balbinismo–, y establecieron estrechos vínculos con la JUP. La presencia de la JRR representó un duro escollo para los coordinadores franjistas, con quienes tuvieron duras disputas por el control de espacios y centros de estudiantes, al punto de que la Regional Capital de la Franja Morada fue intervenida por la mesa nacional en 1974. Ver Beltrán (2013: 121-131). Para una mirada general a los inicios de la FM, ver Muiño (2011) y Beltrán (2013).

tina. Progresivamente, el vasto universo que designaba la “Nueva Izquierda” intervino y modificó sustancialmente la configuración de la escena política argentina, lo que generó una intensa sensación de “amenaza” al orden social que, a nuestro juicio, estuvo en la base misma de las diversas iniciativas y fórmulas políticas ensayadas entre 1969 y 1976 desde el Estado, los sectores dominantes, las Fuerzas Armadas, y los líderes y fuerzas políticas tradicionales (desde el Gran Acuerdo Nacional a la salida dictatorial del terrorismo de Estado).

La militancia universitaria empalmaba con la presencia gravitante de otros actores sociales que, progresivamente, desafiaron al Estado y a los sectores dominantes del país. Uno de ellos era, sin duda, el amplio espectro del campo sindical, que aun en sus expresiones moderadas, resultaba un factor de peso en la arena política local. Por otra parte, las organizaciones armadas crecieron y se expandieron en todo el territorio nacional, contando con la adhesión y simpatía de importantes sectores de la sociedad. En ese marco de disputa y confrontación social, se fueron agudizando las tensiones internas del peronismo y se masificó la presencia y el despliegue de acciones armadas por parte de las organizaciones guerrilleras, principalmente Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

Desde 1969, los sectores dominantes comenzaron a percibir con claridad las limitaciones que mostraba el sistema político y los distintos resortes del Estado empleados para contener la radicalización social de amplias franjas de la sociedad. El acercamiento estratégico entre sectores conservadores y de la derecha del peronismo, el campo político, las Fuerzas Armadas (FF. AA.), las cúpulas eclesásticas y la prensa, maduraron cierto consenso sobre la necesidad de contener el avance apelando a diversas estrategias de respuesta. De ese modo, entre 1973 y 1976 se fue conformando un complejo entramado de prácticas políticas que yuxtapusieron elementos de legalidad e ilegalidad, bajo el amparo argumentativo de la “excepcionalidad”, conjugándose una visión del “enemigo interno” que alimentó la ofensiva contra la denominada subversión.

En efecto, la década de 1970 mostró la constitución de un entramado de prácticas y discursos que conformaron una lógica políti-

ca centrada en la eliminación del enemigo interno y que de manera creciente naturalizaron formas excepcionales de ejercer la violencia. En tal sentido,

... la instalación pública de ciertos marcos ideológicos y de la necesidad de la excepcionalidad jurídica para enfrentar el “problema de la violencia” contribuyó a generar un cierto consenso para ese proceso de destrucción institucional. Esto ayudó a justificar, entre otras cosas y masivamente, el golpe de Estado militar de 1976 (Franco, 2012: 314).

De ese modo, en los meses previos a la toma efectiva del poder estatal por parte de las FF. AA., estas progresivamente “asumieron el disciplinamiento de la sociedad, para modelarla a su imagen y semejanza” (Calveiro, 2008: 11). Desde 1975, las tareas represivas en manos del ejército, que subsumían una amplia gama de personas, manifestaciones y actividades en el estereotipo del/la “subversivo/a”, expresaban una estrategia que las fuerzas militares y buena parte del poder político y mediático venían madurando desde los acontecimientos del Cordobazo. Como sostiene Roberto Pittaluga, la denominación de *subversivo* se transformó en el significante que calificaba “esa potencia de transformación del orden, capaz de nombrar, más allá de las identidades políticas partidarias, cada acto que produjera esa ‘fractura de los valores mínimos de jerarquía y disciplina’, actos que expresaban que algo había ‘calado hondo’, reformulando subjetividades y tramas sociales”. En efecto, “subversivo” no designaba

... solo a aquellos que pretendían explícitamente cambiar el orden, invertirlo (o darlo vuelta, tal cual su etimología), sino a todo aquel que podía portar de modo latente (porque estaba debajo) *otra versión*, otra narración, y por lo tanto, potencialmente, otras jerarquías, o más radicalmente, ninguna jerarquía. La interpelación de la violencia estatal de la dictadura se dirigió, entonces, a cualquiera, y, por ende, a todos, para que esa dimensión subversiva en potencia de los sujetos fuera reprimida, suprimida, desaparecida (2014: 22).

De ese modo, la polisemia significativa de la denominación *subversivo* instituyó el parámetro que convalidaba los objetivos del poder militar —desplegados en toda su dimensión meses más tarde— para con las vidas de las personas. En ese sentido, el poder terrorista fue fundado y parido desde las propias entrañas de nuestra sociedad, lo que favoreció la desaparición de lo disfuncional, de lo incómodo y de lo conflictivo (Calveiro, 2008: 13).

La marca profunda del terrorismo de Estado

El golpe de Estado de 1976 fue planificado por las tres armas de las FF. AA. a partir de un diagnóstico que identificaba dos elementos claves vinculados entre sí como factores de desestabilización. En primera instancia, la consideración a que, desde mediados de siglo, un conjunto cada vez mayor de actores —obreros, estudiantes, sectores medios, religiosos— se arrogaron la legitimidad suficiente para desafiar el funcionamiento del capitalismo argentino, a través de una militancia sistemática y diversa que se vio fortalecida por el avance de la influencia comunista en el marco de la Guerra Fría. En segundo lugar, el peronismo —superficie identitaria de buena parte de esa militancia— había dejado de ser “una barrera de contención contra la ‘subversión’, transformándose, por el contrario, en su puerta de entrada” (Canelo, 2008: 39). En efecto, el anticomunismo y el antiperonismo de una parte sustancial de las FF. AA. se retroalimentaba a partir de los marcos conceptuales e ideológicos brindados por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN).¹⁵

15 Desde mediados de la década de 1950, Estados Unidos comenzó a redefinir sus marcos doctrinarios al fragor de la Guerra Fría y la disputa por sus zonas de influencia. En ese contexto, se desarrolló la hipótesis de la existencia de una guerra no convencional de alcance mundial caracterizada por la infiltración marxista o comunista. La identificación de “enemigos internos” imponía la necesidad de flexibilizar las estrategias y metodologías de combates. En el caso de la Argentina, la relación entre las FF. AA. y el Gobierno norteamericano se complementó con la colaboración de militares franceses, fogueados a partir de las experiencias en la lucha contrarrevolucionaria en las guerras de Argelia e Indochina. En efecto, desde los tempranos años sesenta, las FF. AA. comenzaron a desarrollar su propia versión de la DSN. Así, el sujeto referido como “enemigo” era la amenaza “roja” o “comunista” camuflada dentro del peronismo. Sin embargo, luego del Cordobazo y en especial a partir del Gobierno de Héctor Cámpora, se asistió a la nominalización del enemigo interno como “el subversivo”, un sujeto

A las particulares condiciones sociales y políticas gestadas en la antesala del golpe, debemos añadir otros dos elementos: la coincidencia programática de las jerarquías militares y los sectores liberales de la economía acerca de la necesidad de neutralizar y transformar el modelo socioeconómico del Estado, construido y sostenido en el tiempo desde la década de 1940 —y para ello resultaba fundamental el aniquilamiento de la “subversión”—, y la convicción de que las FF. AA. se encontraban “ante una oportunidad histórica única para impulsar su proyecto refundacional”, fortalecido en buena medida “por la percepción de una amenaza común y por un compartido y visceral antipopulismo” (Canelo, 2008: 38).

Así, los dos primeros años del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) fueron el escenario del despliegue de dos líneas centrales del programa de la primera Junta Militar: una feroz puesta en acto de la lucha antisubversiva mediante una “guerra total”, y la implementación de una política económica liberal, bajo el mando del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. En el primer caso, la efectividad represiva se sustentaba en lo que Paula Canelo refiere como el “consenso antisubversivo”, un diagnóstico compartido por toda las FF. AA. respecto de la naturaleza del enemigo, la validez de los métodos “excepcionales” que debían ser empleados en su erradicación, y sobre la convicción de que el aniquilamiento de la subversión era necesario, legítimo, y un verdadero “acto de servicio” (2008: 43). Mientras que, en el segundo caso, el programa liberal buscaba no solo la “normalización” económica que desterrase del horizonte las experiencias “populistas”, “desarrollistas” o “keynesianas” sino que, además, diese por tierra las “intolerables” expectativas de los sectores populares y medios centrados en el reclamo de un intervencionismo estatal garante de derechos y condiciones mínimas de asistencia para los habitantes del país. En el diagnóstico de Martínez de Hoz, los problemas de la economía argentina requerían

capaz de infiltrarse y amenazar todos los ámbitos de la actividad humana —social, político, religioso, moral— hasta destruir el estilo de vida cristiano y occidental (Franco, 2012). En ese proceso de objetivación, el subversivo se vuelve “un ente, una cosa deshumanizada”, constituyéndose como un externo del cuerpo social. El subversivo es, entonces, “un sujeto deleznable” plausible de ser eliminado (Redondo, 2018: 165-178).

reformas profundas para abrir una economía que se juzgaba cerrada. Era, al mismo tiempo, una apuesta política: la necesidad de liberar al país de la carga populista de un Estado interventor que promovía la conflictividad social. De ese modo, resultaba indispensable la liberalización de las fuerzas productivas (libre juego de los mercados, oferta y demanda a fin de restaurar incentivos) y la restauración de la subsidiariedad del Estado (restringir la intervención estatal).

No obstante, desde los propios inicios del régimen emergieron disputas respecto del futuro de la intervención militar. Por un lado, estaban los partidarios de la línea más “dura” —un conjunto de generales del Ejército con vasta experiencia operativa— que sostenían la necesidad de llevar la lucha antisubversiva hasta las últimas consecuencias, de modo que los tiempos políticos debían subordinarse a los tiempos operativos. Por otro lado, los denominados “politicistas”, eran proclives a entablar un diálogo con la esfera civil, a fin de mantener y ampliar el consenso social del régimen militar. Por último, un conjunto de autoridades militares podía constituirse en mediadores, según la coyuntura, cuando las diferencias minaban los acuerdos políticos del Gobierno.¹⁶

En diciembre de 1981, luego de fracasar el experimento aperturista del general Roberto Viola, se conformó una nueva Junta encabezada por el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo. Así, una nueva camada de oficiales “duros” se colocó al frente del Gobierno militar. Entre los objetivos iniciales, buscaron “recuperar” el programa originario de 1976, especialmente a partir de la renovación del equipo económico —con la llegada de Roberto Aleman, de reconocida trayectoria en el campo del liberalismo argentino— con el fin de reencauzar la

16 Entre los “duros” se hallaban muchos comandantes de los Cuerpos de Ejército que tuvieron a su cargo el despliegue territorial de la política represiva, como Carlos Guillermo Suárez Mason (Cuerpo I), Ramón Genaro Díaz Bessone (Cuerpo II), Luciano Benjamín Menéndez (Cuerpo III), Santiago Omar Riveros (Institutos Militares) y Osvaldo Azpitarte (Cuerpo V), lo que les otorgaba enormes cuotas de poder, autonomía e influencia política. Entre los “politicistas” podemos nombrar a Roberto Viola, Horacio Liendo, José Antonio Vaquero, José Villareal, Antonio Domingo Bussi y Reynaldo Bignone. Debido a sus funciones políticas y de gobierno, la gestión les exigía un pragmatismo por el que, necesariamente, debían compatibilizar los tiempos, los medios y las oportunidades para ejecutar o cumplir objetivos. Al respecto, ver Canelo (2008).

economía bajo una lógica de ortodoxia liberal. Al mismo tiempo, se promovió un realineamiento estratégico con Estados Unidos y una reivindicación operativa de la lucha antisubversiva como necesidad histórica.¹⁷ El discurso belicista de los “duros” engarzó con la necesidad de contrarrestar el crecimiento político de la recién constituida Multipartidaria nacional, con la puesta en circulación de un discurso que remarcaba el riesgo de “rebotes subversivos” y afianzaba el consenso sobre la lucha desplegada, en el intento de recrear la adhesión de una opinión pública que acusaba el desgaste de la gestión.

La Multipartidaria nacional se conformó en julio de 1981 y se integró con los partidos UCR, PJ, Partido Intransigente (PI), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) —el Partido Comunista se integró en calidad de invitado—, buscando constituirse como un punto de articulación y de presión al régimen dictatorial con el objetivo de levantar la veda de los partidos políticos, contar con un estatuto y acordar un cronograma de elecciones libres a partir de 1984 (Franco, 2018: 113). Sus reclamos y posicionamientos adquirieron progresivamente un sesgo opositor y antidictatorial en la medida en que el Gobierno militar no accedió a atender un mínimo de demandas que sostuvieran la validez de la coalición como interlocutora política. De ese modo, sus reclamos de corte institucional derivaron en una crítica sobre las graves condiciones sociales y económicas del país y, hacia 1982, sobre la cuestión de los desaparecidos.¹⁸

17 A partir de diversos viajes diplomáticos, Galtieri desplegó una suerte de “cruzada antisubversiva” que incluía la revitalización de la DSN y la “exportación” de la metodología represiva, tanto hacia países limítrofes de la Argentina como hacia la zona caliente de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador) (Canelo, 2008: 181).

18 Tempranamente, Juan Carlos Portantiero (1987) señaló que la moderación de la Multipartidaria y de los partidos mayoritarios representó, en alguna medida, una forma de acompañamiento y mantenimiento del orden durante el período. Marina Franco (2018) muestra el desplazamiento de las posiciones políticas de la Multipartidaria desde su creación en 1981 hasta 1983, cuando se disolvió de cara a los procesos eleccionarios y la apertura democrática. Resulta de interés la forma en que los partidos de la coalición sostuvieron una posición “acuerdista” sobre la necesidad, legalidad y legitimidad de la “lucha contra la subversión” llevada a cabo por las FF. AA. En todo caso, el tono general de la crítica esgrimida reconocía los excesos de la represión y la necesidad de avanzar sobre sanciones puntuales. Tras la guerra de Malvinas y con la crisis de las FF. AA., la presencia pública de otras voces discordantes y opositoras fue determinante para el endurecimiento de los discursos políticos que, desde

La falta de éxito visible en la economía doméstica y el retraimiento del diálogo con los partidos políticos agudizaron las tensiones en la arena pública del país. Progresivamente desde 1980, el Gobierno sufrió el desgaste acelerado del desarrollo negativo de la economía y desde 1982 se acentuó la oposición pública a la dictadura. La Multipartidaria impulsó un programa de movilización nacional, replicado en las escalas provinciales. Sin embargo, fue la convocatoria de la Confederación General Trabajo (CGT) y las 62 organizaciones peronistas al acto del 30 de marzo en la que se desbordaron los pronósticos iniciales de adhesión y participación ciudadana, y cuyos efectos se amplificaron por la decisión gubernamental de reprimir a los manifestantes e impedir su llegada a la Plaza de Mayo, lugar elegido para el cierre del acto.

En ese contexto, la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur del control británico se erigió en una estrategia que permitió redefinir un enemigo —esta vez “externo”— lo suficientemente poderoso como para relegitimar el accionar de las FF. AA. y obtener margen para reordenar el frente interno. En el fondo, se trataba de retomar la iniciativa política extraviada en los últimos tiempos. Como refiere Paula Canelo, “agotado el discurso de la amenaza ‘subversiva’, bloqueados los canales políticos y avanzando con un plan económico que profundizaba la crisis social, el tiempo se había terminado, solo quedaba optar por la sangre” (2008: 186). De manera febril, se dispuso el desembarco en las islas, haciendo jugar a su favor el factor sorpresa y apostando a una resolución rápida del conflicto por la vía diplomática.¹⁹ En el plano interno, las repercusiones del desembarco militar en las islas fueron efectivas y favorables, como lo dejaron entrever las masivas manifestaciones de apoyo a la “gesta patriótica” y el impulso nacionalista y

noviembre de 1982, combinaron el reclamo de apertura democrática y elecciones libres con una fuerte crítica a la situación social y económica del país, que incluía la necesidad de resolver “la cuestión de los desaparecidos”. Para una mirada al rol político llevado a cabo por la Multipartidaria, ver Velázquez (2019). Para una mirada general sobre el período 1980-1983, ver Quiroga (2004).

19 Algo que finalmente no ocurrió, extendiéndose el conflicto armado por algo más de dos meses —entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982—, cuando se dispuso el cese de hostilidades ante la rendición argentina.

antibritánico. Según Corradi (1996), el momento “Malvinas” actuó como una suerte de paréntesis anímico, similar a 1978 en ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol. Sin embargo, la derrota bélica y diplomática mostró las incapacidades operativas y de gestión de los mandos militares y puso de relieve el fracaso de los liderazgos castrenses como responsables de las fuerzas armadas de la Nación. A las tensiones internas entre duros, moderados y politicistas se le añadieron aquellos problemas derivados de la economía en crisis y de la emergencia pública de un clima de oposición que desbordaba a las organizaciones partidarias, sociales y sindicales.

En efecto, la derrota en Malvinas impuso la salida inmediata de la Junta Militar y de Galtieri de la presidencia, asumiendo el 1º de julio la conducción del Gobierno el general Reynaldo Bignone. Con escaso margen de maniobra, el nuevo titular de la Junta buscó negociar una salida política consensuada para el retiro de las FF. AA. Sin embargo, dos factores críticos condicionaron la gestión: el estado de digresión de las fuerzas castrenses y las exiguas posibilidades de “pactar” con las dirigencias civiles. Respecto del primer factor, en septiembre de 1982 se normalizó lo que sería la última Junta Militar del período a través de un nuevo reparto de poder.²⁰ Como una deriva de ese reacomodamiento y de acuerdo con las exigencias de una ciudadanía que le reclamaba autocrítica, los militares aceptaron realizar una “autodepuración” –léase descabezamiento jerárquico– respecto de las responsabilidades y errores en el conflicto bélico. Sin embargo, dejaron sometido al juicio de la “historia” las responsabilidades asumidas durante la intervención de facto. En agosto de 1982, Bignone dio a conocer el Estatuto de los Partidos Políticos, al mismo tiempo que avanzó en una nueva renovación del equipo económico.²¹ A inicios de noviembre, la Junta publicó las Pautas para la Concertación Económica, Política y Social, un conjunto de puntos “no negociables” que las FF. AA. buscaron poner

20 Conformada por Cristino Nicolaides (Ejército), Rubén Oscar Franco (Armada) y Augusto Hughes (Fuerza Aérea) y, por supuesto, con Bignone a la cabeza del Poder Ejecutivo.

21 Como una estrategia para reducir la conflictividad se otorgó una recomposición salarial a los trabajadores, se reactivó el diálogo con sectores sindicales y otras medidas de concertación poco agradables para la ortodoxia liberal, minándose los últimos apoyos fuertes del proyecto militar.

a su resguardo. Sin embargo, en el intento de controlar los marcos de negociación expuso, más que su firmeza, la propia debilidad del poder militar.²² En un rápido reflejo político, la Multipartidaria lo rechazó de plano y convocó a una movilización nacional para el 16 de diciembre de 1982, bautizada como la “Marcha por la Democracia”, en la que participaron entre 70.000 y 100.000 personas en distintos puntos del país.²³

El documento elaborado para la ocasión solicitaba la rectificación de la política socio-económica, la realización de elecciones nacionales en julio de 1983 y como novedad introducía formalmente el reclamo por “los desaparecidos” y las responsabilidades respecto del accionar represivo.²⁴

La represión ejercida por el Gobierno militar tensó aún más la situación y fortaleció el clima antidictatorial que encarnó notablemente en la ciudadanía. En efecto, la marcha del 16 de diciembre “marcó con claridad que el proceso de transición era irreversible” (*Álvarez y Suriano*, 2013: 170). Esa situación parece haber sido efi-

22 Los puntos eran: “Vigencia del estado de sitio; Mecánica y secuencia para el acto electoral y para la entrega del poder (ley y cronograma electoral); Lucha contra el terrorismo; Desaparecidos; Plan económico; Deuda externa; Yacyretá; Presupuesto 1984; Ley N° 22105 (asociaciones gremiales de trabajadores); Ley N° 22269 (obras sociales); Conflicto Malvinas; Diferendo austral (Beagle); Investigación de ilícitos; Estabilidad de la Justicia; Presencia constitucional de las Fuerzas Armadas en el próximo Gobierno nacional”. Pautas para la Concertación Económica, Política y Social, citado en Canelo (2008: 203-204).

23 También referida como “Marcha del Pueblo”, confluyeron la Multipartidaria, las centrales sindicales, los organismos de DD. HH., los estudiantes universitarios y el conjunto creciente de sectores de la ciudadanía que comenzaban a politizarse y movilizarse. En distintos lugares del país, se corearon masivamente consignas como “Paredón, paredón, para todos los milicos que vendieron la nación”; “Que se vayan, que se vayan”; “El que no salta es un militar” (*Suriano y Álvarez*, 2013: 168). Según la comunicación personal de un partícipe, un grupo de jóvenes universitarios vinculados a un sector de la Franja Morada quemaron una bota gigante al lado de la pirámide de Mayo, en ciudad de Buenos Aires, pocos minutos antes de que comenzara la represión. La magnitud de las concentraciones, los cánticos, la diversidad de actores, muestran los cambios en la relación de fuerzas de la ciudadanía, a la vez que evidencian la pérdida de consensos y apoyos de la dictadura militar.

24 El punto dos del petitorio afirmaba la existencia de “una actitud esquiva ante la necesidad de una franca solución a la cuestión de los desaparecidos. Es inadmisibles que todavía no se haya dado una explicación tendiente a satisfacer las exigencias de la conciencia y la dignidad nacional”. Aun de manera ambigua, el documento marcaba un aspecto sensible —y con posiciones ligeramente disimiles— para los dos partidos principales de la coalición, la UCR y el PJ. *Clarín*, 17 de diciembre de 1982.

cazmente aprovechada por Raúl Alfonsín, ya al frente de la UCR tras la muerte de Balbín, quien desde 1983 acentuó un discurso en clave regeneracionista que enfatizó la necesidad de un corte con el pasado violento a partir del respeto a la constitución nacional, como punto de partida ineludible en la construcción de una democracia estable y duradera (Aboy Carles, 2001). En esa delimitación, la cuestión de la represión y de los desaparecidos pasó a ocupar un lugar de creciente preponderancia en el discurso alfonsinista, aspecto que lo destacó del peronismo.

Finalmente, Bignone fijó la fecha de elecciones para el 30 de octubre de 1983. Antes de la entrega del poder, las FF. AA. elaboraron dos documentos con la finalidad de resguardarse de eventuales represalias civiles en el futuro. El Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo (Documento Final, en adelante) en abril de 1983, y la Ley de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas N° 22924 en septiembre de 1983 (Ley de Autoamnistía, en adelante). El primer documento buscaba clausurar la cuestión de la “lucha contra la subversión”, ofreciendo un *racconto* histórico de las últimas dos décadas, en el que “el terrorismo subversivo” habría puesto en peligro la existencia misma de la Republica. En ese marco, “las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el Gobierno constitucional para enfrentar a la subversión” a través del Decreto N° 261/75 (febrero de 1975) y de los Decretos N° 2770, 2771 y 2772 de octubre de 1975, por el que se ordena “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Así, la intervención de las FF. AA. se había dado “a pedido de un Gobierno constitucional con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de la población, y muchas veces con una colaboración inestimable de su parte” (Documento Final).

Aunque el Documento Final aseguraba que la acción terrorista “obligó a adoptar procedimientos inéditos de la lucha” —una forma sutil de referirse a la denominación “excesos” que, al mismo tiempo, refería eufemísticamente a los procedimientos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones—, nada decía, precisamente, de la

existencia de centros clandestinos de detención y de un plan sistemático de eliminación de personas. En ese sentido, se desprendía del documento que quienes no figuraban en las listas del PEN estaban muertos, exiliados o habían cambiado su identidad. En la misma línea, días antes de las elecciones presidenciales, la Junta oficializó la Ley de Autoamnistía, buscando construir un paraguas legal ante el posible avance del fuero civil en la próxima etapa institucional.

En efecto, en el intento de “ordenar” una transición que le asegurase preeminencia como actor político, las FF. AA. terminaron por instalar en el centro de la escena política la cuestión del accionar militar durante el período de facto. Incluso el Partido Justicialista, cuyo candidato Ítalo Luder se había cuidado de no enfrentar las posiciones castrenses, habilitó la posibilidad de que el nuevo congreso derogase la Ley. De ese modo, la falta de cohesión y unicidad en las FF. AA. mostró el carácter irresuelto de sus posiciones internas, que se convirtieron en asuntos de primer orden —como factores de desestabilización— en el desenvolvimiento de la democracia a partir de 1983.

La Pampa no es una isla

En octubre de 1975, el gobernador de la provincia de La Pampa José Aquiles Regazzoli rubricó un convenio de lucha contra la subversión entre la provincia de La Pampa y los ministerios de Defensa y del Interior de la Nación, posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados provincial, por unanimidad, mediante la Ley N° 688. Con la Directiva N° 404/75 dictada por el PEN, la provincia de La Pampa quedó enmarcada en la órbita Jurisdiccional del Comando Zona 1, bajo el mando operativo del 1° Cuerpo del Ejército. La Zona 1 se subdividía en 7 subzonas, correspondiendo a la provincia la N° 4. En efecto, la Subzona 1.4 quedó bajo el mando operacional del Coronel Ramón Camps, hasta entonces responsable del Destacamento de Caballería Blindada 101, con asiento en la localidad de Toay.²⁵

25 Utilizaremos aquí la denominación “Subzona 14” como uso social más arraigado.

Entre noviembre y diciembre de ese año, fuerzas conjuntas del Ejército y la policía ejecutaron un aceitado plan de persecución, amedrentamientos y *razzias* policiales que dio como resultado la detención de docentes, estudiantes, empleados y profesionales relacionados a la militancia política, social, barrial o sindical. Además, iniciativas institucionales que se habían alumbrado tiempo antes, como el Instituto de Estudios Regionales (IER) –dependiente de la UNLPam– o el Servicio Provincial de Salud (SPS), fueron intervenidas y lentamente desmanteladas (Asquini, 2005; Huarte y Pittaluga, 2018). Las organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles más activas en términos de militancia fueron amedrentadas, perseguidas o desarticuladas (Asquini, 2005; Asquini y Pumilla, 2008). Las detenciones alcanzaron un conjunto amplio de personas que se habían destacado en el clima de radicalización y transformación sociocultural iniciado algunos años antes.²⁶ Tanto la experiencia del IER y del SPS como el variado abanico de activismos políticos/sociales/culturales –y los estrechos vínculos y la praxis política que subyacían a quienes participaban de esos ámbitos– resultaron inadmisibles para el nuevo poder hegemónico que comenzaba a madurarse desde el propio interior del Partido Justicialista. La *razzia* planificada y ejecutada con precisión sobre los activistas/militantes/intelectuales mostró los alcances de la fuerza desestabilizadora de un puñado de experiencias que, más que como un proyecto político particular, funcionaba como una red de saberes y prácticas que difícilmente pueda ser reducida al ámbito específico de la educación o la salud, toda vez que se constituyó, en su propio andar, como una apreciación de lo público, de lo colectivo y del *derecho* a los derechos.

26 Entre los afectados se encontraban los docentes Jorge Bragulat, Adriana Culzoni, María Susana Berdasco, Juan José Guida, María Cristina Ercoli, Hugo Chumbita, Alejandro Solovskiy, Jorge Pasccali Cabrera, Hugo del Campo, Alejandro Ghigliani y Silvia Dockser. También los periodistas Raúl C. D'Atri y Ricardo Di Nápoli; los médicos Antonio Maffrand y su hermano Roque Maffrand, Alfredo Otálora, Jorge Irazusta, Miguel D'Astolfo, Emma Rodríguez de Yep, Antonio Yep y Tomás Koltai, entre otros. Hubo algunas personas que lograron evitar las detenciones, como Hugo Chumbita. Independientemente de sus ámbitos laborales –Administración pública, universidad, etc.–, a los detenidos se les aplicó la Ley N° 20654, por lo que fueron cesanteados o prescindidos de sus cargos y tareas laborales. Para un listado de las personas detenidas, ver Asquini (2005: 361-378).

Los cargos imputados que pesaban sobre el grueso de los detenidos fueron englobados bajo el genérico de “subversión”, amparados por la Ley N° 20840. En un comunicado de prensa oficial emitido por Ramón Camps, el general de brigada resaltaba “el apoyo espiritual proporcionado por la ciudadanía pampeana en múltiples manifestaciones, poniendo en evidencia su inquebrantable vocación y sentido de la Nación opuesto al que la delincuencia subversiva, ideológica y armada, pretende últimamente”.²⁷ Según refieren Asquini y Pumilla, con la creación de la Subzona 14, en octubre de 1975 se puso en marcha una “Comunidad Informativa” integrada por delegados de la Inteligencia del Ejército y de la Policía provincial, la Policía Federal, el ejecutivo provincial –a través del Servicio de Información y Seguridad– y el Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo era reunir y coordinar la masa de información obtenida por el despliegue operativo de agentes y oficiales, y aquella que se obtenía de los detenidos y secuestrados, de las pinchaduras de teléfonos y de los colaboradores civiles, con independencia de la “inteligencia” que cada fuerza de seguridad u organismo específico pudiese realizar para fines propios (2008: 169-174). Esa “Comunidad Informativa” mantenía vínculos aceitados con dirigentes partidarios, integrantes de la iglesia y organizaciones patronales. La red se nutría, además, de delatores regulares y espontáneos, confidentes anónimos e integrantes “notables” de la comunidad pampeana que, mediante el uso de relaciones de cercanía, parentesco o status social, hacían llegar a los servicios de información e inteligencia distintos registros, comentarios y rumores sobre personas, grupos y actividades “peligrosas” asociadas a la subversión o directamente “mal vistas” (ibídem: 159-174). En la UNLPam, la información de la red de inteligencia se conectaba, además, con los registros de otras casas de estudios del país y con los archivos del Ministerio de Educación de la Nación.²⁸ En octubre de 1975 se designó al rector Armando Seco Villalba, quien ofició de nexo en la “comunidad informativa” para

27 AHP, *La Arena*, 22 de noviembre de 1975.

28 Durante el período que abarcamos en nuestra investigación, fue recurrente el cambio de denominación de los ministerios del PEN. En nuestro caso utilizaremos la denominación de “Ministerio de Educación” para referirnos a la cartera educativa.

la elaboración precisa de las listas de docentes, no docentes y estudiantes que debían “purgarse”. Los investigadores Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla elaboraron un listado de 41 nombres que fueron “depurados” entre 1975 y 1983, mediante la Ley N° 21274 de “Prescindibilidad” o la Ley Universitaria N° 20654 (mediante la atribución que permitía “limitar funciones”), pero advierten que ese número podría llegar al centenar si se toman en cuenta los casos de alumnos y profesores que debieron emigrar, por distintos motivos.²⁹

Desde 1976, el carácter pretendidamente refundacional del proyecto de las FF. AA. no se limitó a la neutralización y/o aniquilación de los elementos “subversivos” sino que sus propósitos y objetivos se relacionaron con la producción de una nueva trama social. El plan represivo fue complementado con el desenvolvimiento de una aceptada red de relaciones, vínculos e intereses que incluyó no solo a la “comunidad informativa” sino a toda una extensa trama política/burocrática que organizaba y atravesaba los modos de organización y vinculación social.

Consumado el golpe de Estado, la dinámica represiva, como tecnología de poder, mantuvo un carácter bifronte: el poder, para funcionar efectivamente, muestra y esconde. Esa especificidad no puede separarse de la estrategia de disciplinamiento y terror social, “a la vez clandestino y público, ilegal y al mismo tiempo inscripto en un marco legal provisto por el Estado militar y sus instituciones, deliberadamente secreto pero no por ello completamente invisible”, que no solo se fijó como objetivo “desmantelar las organizaciones armadas o desarticular la movilización social y política que había precedido al golpe de Estado, sino también actuar como un mecanismo ejemplificador sobre el conjunto de la sociedad” (Águila, 2008: 41). En efecto, se trataba de producir una marca lo suficientemente potente para que la sensación de amenaza y control permanente se diseminara por la sociedad. Según Guillermo O'Donnell (1984), una sociedad con la capacidad de “patrullarse a sí misma”.

En la provincia de La Pampa, los dos centros urbanos de mayor población –la capital provincial y la ciudad de General Pico– fue-

29 El listado de nombres se encuentra en Asquini y Pumilla (2008: 206-207).

ron objetivos inmediatos de las fuerzas militares y policiales, donde apresaron, detuvieron y/o secuestraron a trabajadores, delegados gremiales, docentes y estudiantes. No obstante, el despliegue operacional abarcó toda la provincia. Por ejemplo, la sureña localidad de Jacinto Arauz se vio conmocionada la madrugada del 14 de julio de 1976 cuando fuerzas militares y policiales tomaron por asalto, cuasi literalmente, el Instituto Secundario José Ingenieros, para secuestrar a tres profesores, un médico y un empleado administrativo, además de detener a numerosos vecinos del pueblo. Unos 200 efectivos participaron del operativo para detener a “sospechosos” de infringir la Ley N° 20840, acusados de fomentar una enseñanza marxista y de penetración ideológica de la subversión. Otro caso similar se dio en Algarrobo del Águila, una pequeñísima población del oeste pampeano, cuando la maestra María Zulema Arizó fue detenida, golpeada y trasladada a Santa Rosa, en mayo de 1978, para que “cantara” sobre un posible plan de células “terroristas” (Asquini y Pumilla, 2008: 223-224). En ese sentido, la espectacularidad de los operativos y de las intervenciones castrenses puede entenderse como parte de la estrategia planificada de diseminación del miedo y de reafirmación del poder autoritario de las fuerzas militares y policiales.

En La Pampa funcionaron al menos seis Centros Clandestinos de Detención (CCD). Las investigaciones de Asquini y Pumilla han mostrado la existencia de más de 270 detenidos ilegales por causas relacionadas con la “subversión”, entre 1975 y 1983, sobre una población que en 1971 rondaba los 172 mil habitantes (2008: 23). Al igual que en el resto del país, la política represiva fue desplegada rigurosamente sobre sus objetivos, pero además toleró y se alimentó de otros “excesos” e iniciativas individuales de los agentes de seguridad. Esa dimensión represiva se complementó con otras prácticas –discursivas, económicas, educativas– que dieron forma a una profunda reestructuración integral de la sociedad.

La ofensiva conservadora en la institución universitaria

De acuerdo con Valeria Manzano, desde 1974 resulta factible la identificación de una alianza social y gubernamental destinada

a “restaurar la autoridad” perdida por padres, maestros y políticos a manos del accionar de la guerrilla, los jóvenes, los estudiantes y los “militantes aficionados” (2017: 347). Esa alianza incluía a sectores peronistas de derecha, conservadores, eclesiásticos y militares que, desde el aparato estatal, impulsaron la depuración y el reordenamiento jerárquico de la sociedad. La estrategia asumida –con métodos legales e ilegales– ocasionó una suerte de división social del trabajo: mientras las fuerzas regulares de seguridad y las FF. AA. combatieron a la guerrilla rural y urbana, la multiplicación de bandas parapoliciales y grupos de choques asociados a la derecha peronista persiguieron militantes políticos, sociales, estudiantiles, barriales.³⁰ Esa dimensión represiva se complementó con un andamiaje legal y técnico destinado a socavar legalmente a aquellos individuos considerados “subversivos”. Entre las medidas legales dispuestas entre 1973 y 1976 figuran las modificaciones al Código Penal, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el empleo de la Gendarmería para custodiar fábricas e instituciones públicas, la Ley de Prescindibilidad y la Ley de Asociaciones Profesionales. Los objetivos de las medidas buscaban la depuración ideológica, la desmovilización política y el disciplinamiento de los actores sociales, en línea con el “Documento Reservado” redactado por el Consejo Superior del Movimiento Justicialista (CSMJ) en septiembre de 1973, luego del asesinato de José Ignacio Rucci.³¹ En esa ocasión, la reunión del CSMJ fue liderada por el electo presidente de la Nación Juan Domingo Perón y con la presencia del presidente

30 Referimos a la “derecha peronista” en un sentido laxo, sin desconocer los problemas teóricos que su enunciación conlleva. Juan Besoky (2016) resalta el carácter heterogéneo de los orígenes, composición y prácticas políticas de las agrupaciones de la “derecha peronista”, y alerta sobre el carácter simplificador de reducir los enfrentamientos internos del peronismo a una oposición entre izquierda y derecha. Entre las agrupaciones que más crecieron y se expandieron durante el trienio 1973-1976 se encuentran el CdeO, la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), el Comando de Orientación Revolucionaria (COR), la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Por otra parte, el trabajo de Hernán Merele (2017) alerta sobre las implicancias y derivas de reducir el heterogéneo universo de bandas y grupos parapoliciales a la denominación de “Triple A” como sinónimo de violencia paraestatal.

31 José Ignacio Rucci, líder de la CGT, fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, dos días después de la elección presidencial que mandató a Juan Perón como presidente de la Argentina. Aunque su muerte es atribuida a Montoneros, la organización nunca se adjudicó el hecho.

interino Raúl Lastiri, el senador Humberto Martiarena (secretario general del PJ), José López Rega, Lorenzo Miguel, Jorge Camus, Julio Yesi, funcionarios del gabinete nacional, gobernadores provinciales, entre otros. El documento consideraba que el asesinato de Rucci “marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista,” perpetrados por “los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática” que llevan adelante “una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes”.³²

En un plano más amplio, una parte central de los destinatarios de la embestida restauradora fueron los jóvenes que, desde una década atrás, alimentaron las dinámicas de transformación y radicalización política. De ese modo, los jóvenes fueron crecientemente negativizados a partir de su asociación a la guerrilla, al consumo de drogas, a la promiscuidad, al desviacionismo sexual y al rechazo de cualquier forma jerárquica. Ese conjunto de elementos delineó su justificación como un “enemigo interno”, en la medida en que trastocaba los valores fundamentales de la sociedad occidental asociados a la familia, a la autoridad paternal y a la propiedad privada.³³

Desde 1974, el conjunto del sistema educativo fue uno de los escenarios de la lucha emprendida en aras de “restaurar la autoridad”. La llegada de Oscar Ivanissevich al Ministerio de Educación de la Nación resultó un epítome del poder acumulado por los sectores conservadores y de derecha en las altas esferas gubernamentales. En su discurso pronunciado en ocasión del Día del Maestro del 10 de septiembre de 1974, el ministro señalaba:

Los dineros destinados a educar al soberano no deben dedicarse a otras cosas y menos a estimular la indisciplina, el desorden y la subversión. Esto en ningún nivel de la enseñanza y menos aún

32 A pesar del intento de hermetismo, el documento se filtró y fue publicado por el diario *La Opinión y Crónica* al día siguiente. “Documento reservado”, *La Opinión*, 2 de octubre de 1974.

33 Por supuesto que esa imagen no comprendía a la totalidad de la juventud, sino que actuaba de contraparte respecto de otra juventud, correcta y deseable. Sin embargo, la consideración negativa sobre una parte sustancial de los jóvenes abonó la concepción de “irrecuperables” que, a partir de 1976, justificó su aniquilación. Al respecto véase Cataruzza (1997); Cosse I., Felitti K. y Manzano V. (2010); Manzano (2017), especialmente el capítulo VIII (347- 385).

en el orden administrativo y técnico. Quienes lo hagan se hacen pasibles de ser señalados como enemigos del pueblo que sostiene la educación. Por eso reclamamos autoridad y fiel cumplimiento de las tareas a todos los niveles y en especial a los responsables de cada área y de cada sector.³⁴

El paquete inicial de medidas y acciones de la “Misión Ivanissevich” incluyó la intervención de universidades públicas con el fin de “asearlas, ordenarlas y normalizarlas” (ídem). Muchos de los rectores/interventores designados fueron acompañados por grupos paramilitares y parapoliciales para ejercer el control y orden de las instituciones. Otras casas de estudios se mantuvieron cerradas durante algunos meses. En todos los casos se procedió a “depurar” las instituciones mediante el reemplazo de autoridades, la cesantía de docentes y no docentes y la persecución de estudiantes. Destacados profesores e intelectuales, como el caso de Rodolfo Ortega Peña o Silvio Frondizi, fueron asesinados y otros tantos docentes y estudiantes amenazados y secuestrados por fuerzas parapoliciales (Bonavena, 2008; Besoky, 2017).

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por Oscar Ivanissevich y su sucesor Pedro Arrighi, las FF. AA. que tomaron el poder en marzo de 1976 consideraron que, dada la situación de “caos” e “ingobernabilidad” que aún reinaba en el país, debía ejecutarse una política integral que abordase la raíz de los problemas. Como dijera el teniente general Jorge Rafael Videla:

Las Fuerzas Armadas asumieron el poder como ineludible consecuencia de un estado de necesidad nacional. No las movió ninguna vocación de mando político, ni las alentó ningún mesianismo. Fue la crisis moral, económica y social del País, y los graves riesgos que ella encerraba, el exclusivo factor determinante de la decisión del 24 de marzo último.³⁵

34 “Mensaje de su Excelencia el señor Ministro de Cultura y Educación doctor OSCAR IVANISSEVICH, 10 de setiembre de 1974”. Ministerio de Cultura y Educación. CENDIE. Centro Nacional de Documentación e Información Educativa. Buenos Aires, 1974. Fecha de consulta: 16/5/2022.

35 “Discurso pronunciado el 17 de abril de 1976 por el Excelentísimo Señor Presidente de La Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, y dirigido al Pueblo de la República con

A partir de entonces, la Junta Militar intervino fuertemente la arquitectura institucional del sistema universitario, a través de la derogación y/o sanción de leyes, el nombramiento de interventores y funcionarios militares y civiles, un férreo control sobre las actividades políticas, la reducción de la matrícula, entre otros aspectos, que dieron por tierra con el modelo de universidad construido desde la Reforma de 1918 (Buchbinder, 2005; Rodríguez, 2015). Apenas consumado el golpe de Estado, la Junta Militar colocó bajo los alcances de la Ley N° 21276 el control territorial y funcional de las universidades públicas argentinas, lo que permitió maximizar la vigilancia sobre toda la institución educativa. Pese a ello, la política universitaria llevada a cabo desde 1976 padeció de no pocas intermitencias a la hora de fijar una orientación de mediano plazo más o menos consistente con el proyecto global fijado por las FF. AA. Uno de los principales motivos derivó del reparto institucional entre las tres armas que, además de pujas y rencillas internas que dificultaron la convivencia de funcionarios, obstruyó una orientación concertada de decisiones estratégicas.³⁶

Según la Resolución N° 118/76, el 29 de marzo se dispuso el cese de funciones de los rectores, consejos y cuerpos colegiados designados durante la intervención previa dispuesta por el Gobierno de Estela Martínez de Perón. El reparto de las casas de estudios se hizo siguiendo el criterio territorial aplicado por el dispositivo operacional de las FF. AA.³⁷ Al frente de cada una de ellas se de-

motivo de la celebración de la Semana Santa y la Pascua de Resurrección” en *Mensajes Presidenciales, Proceso de Reorganización Nacional*, Tomo 1. *Ruinas Digitales*, pp. 13. Recuperado de <http://www.ruinasdigitales.com/revistas/dictadura/Dictadura%20-%20Discursos%20de%20Videla%20-%20201976.pdf>. Fecha de consulta: 12/5/2022.

36 A modo de ejemplo, durante el período 1976-1983, siete ministros revistieron al frente de la cartera educativa nacional: Ricardo Pedro Bruera (marzo 1976- abril y mayo 1977); Albano Harguindeguy (mayo-junio 1977); Juan José Catalán (junio 1977-agosto 1978); Harguindeguy (agosto a noviembre 1978); Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre 1978-marzo 1981); Carlos A. Burundarena (marzo 1981-diciembre 1981) y Cayetano Licciardo (diciembre 1981- diciembre 1983).

37 La Armada puso bajo su tutela a las universidades de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Sur, y Patagonia. La Fuerza Aérea intervino las universidades de Córdoba, Río Cuarto, Cuyo, San Luis y Tecnológica, mientras que el Ejército asumió el control de las universidades de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, La Pampa, Luján, Rosario, Comahue, Entre Ríos, Nordeste, Misiones, Centro de Buenos Aires y Litoral.

signaron Delegados Militares, que tenían máximas atribuciones y competencias. Luego de 4 o 5 meses de control directo, entre agosto y septiembre de 1976 se designaron autoridades civiles, muchas de ellas provenientes del claustro docente de las propias casas de estudios, lo que permitía enraizar y fortalecer los objetivos dispuestos por el PEN.

Desde el Ministerio de Educación se desplegó una intensa actividad destinada al disciplinamiento y control social de las instituciones educativas. Se modificaron normas de convivencia y de funcionamiento interno, se eliminaron materias de formación general, se modificaron contenidos curriculares y se ejerció un control estricto sobre alumnos y docentes. En 1977 se distribuyó el cuadernillo “Subversión en el ámbito educativo” con instrucciones para “facilitar la comprensión del fenómeno subversivo” y reconocer a los “enemigos de la Nación”. En 1978, la Junta lanzó el programa “Operación Claridad”, por el que fueron despedidos más de ocho mil docentes, maestros y trabajadores no docentes del sistema público de educación, se quemaron miles de libros y se censuraron otros tanto (Invernizzi y Gociol, 2002). Entre 1976 y 1980, momento en que se sancionó la nueva Ley Universitaria N° 22207, se introdujeron nuevas modalidades de ingreso a la universidad, se redujeron y/o crearon cupos de estudiantes por carreras, muchas de ellas fueron cerradas, diversos trámites administrativos se arancelaron y se suprimieron o fusionaron algunas universidades.³⁸

Una vez acaecido el golpe, el coronel Julio César Ruiz asumió la intervención de la UNLPam. Con premura informó a la comunidad universitaria la necesidad de “mantenerse al margen de cualquier actividad gremial, política o ideológica ateniéndose exclusivamente dentro de sus claustros a las tareas específicas ya sea en el orden docente, estudiantil o administrativo”.³⁹ Tres meses después

38 Las políticas de achicamiento y restricción abarcaron el conjunto del sistema educativo público. Según cifras del Ministerio de Educación, entre 1975 y 1980, las escuelas que más contrajeron sus matrículas fueron las comerciales y técnicas, cuyo alumnado se nutría principalmente de los hijos de familias obreras (Manzano, 2017: 370). La reducción de la educación pública fue compensada, parcialmente, con el crecimiento de instituciones privadas.

39 AHP, *La Arena*, 9 de abril de 1976. No obstante, el rector normalizador en funciones desde octubre de 1975, Armando Seco Villalba, permaneció 40 días más en el cargo, al igual

se reglamentó, mediante resolución del 16 de julio, un régimen disciplinario de marcada severidad, con penas de 2 a 10 años de suspensión para quienes participaran en tumultos, desmanes u ocupación de espacios universitarios. El articulado refería a toda la comunidad universitaria, pero resultaba particularmente riguroso con las actividades estudiantiles, y preveía la posibilidad de expulsión y puesta a disposición del PEN de aquellas personas que incurriesen en “formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo, o agitación de carácter político gremial, docente, estudiantil y no docente” (citado en Asquini y Dal Bianco, 2008: 79).

El recambio de autoridades militares por personal civil le permitió a Vicente Marquina y Ricardo José Telleriarte asumir como rector y vicerrector de la UNLPam, en agosto de 1976.⁴⁰ Ambos habían sido funcionarios provinciales en la gestión del Ismael Amit y pertenecían al Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa), uno de los partidos provinciales que más aportó a la estructura de funcionarios designados por la dictadura militar en La Pampa. Posteriormente se nombraron decanos y secretarios y se completaron los cargos institucionales. Según Asquini y Dal Bianco, en la UNLPam se perpetuó el orden jerárquico y vertical impuesto por el poder militar en los métodos de toma de decisiones, que se definían en “el reducido círculo del rector, los cuatros secretarios y los cinco decanos; es decir, una estructura que quedaba bajo el control militar por parte de la Subzona 14 de cualquier actividad no académica dentro de la casa de estudios” (2008: 81).

En términos estudiantiles, las agrupaciones políticas –FM, la JUP, el MOR y el MNR–debieron replegarse al anonimato y redujeron sus actividades hasta el punto de resultar casi inexistentes.

que los decanos, hasta que quedó cesante en sus tareas a inicios del mayo de 1976. Una resolución de rectorado firmada por el coronel Julio César Ruiz ratificó todo lo resuelto y actuado por los funcionarios salientes, lo que puede entenderse como una línea de continuidad de la gestión.

40 Permanecieron en el cargo hasta marzo de 1979, cuando fue nombrado Marcelo Iván Aguilar, que se mantuvo hasta 1981. Los tres funcionarios citados habían cumplido funciones en la provincia durante la Revolución argentina (1966-1973). En junio de 1981 asumió el contador José Ariel Núñez hasta agosto de 1983, con la llegada de Luka Poduje, hasta la intervención dispuesta por Raúl Alfonsín los últimos días de 1983.

El FAUDI prosiguió algún tiempo, clandestinamente, hasta que en 1977 varios de sus militantes fueron apresados por realizar actividades de propaganda política, situación que derivó en el repliegue del grupo. La Federación Universitaria Pampeana (FUP) se desarticuló. Los centros de estudiantes fueron disueltos, lo mismo que otros espacios de reunión y socialización estudiantil, como el comedor universitario, cerrado a fines de 1976. La presión y el celo respecto de las actividades estudiantiles redujeron sus márgenes de acción a partir del aislamiento y la fragmentación individual y colectiva.

Las políticas de achicamiento, restricción y control del sistema educativo en general y de las universidades en particular conllevaban el doble objetivo de “depurarlas” y “asearlas” de la “infiltración subversiva” y, al mismo tiempo, forjar una nueva generación de jóvenes disciplinados en el marco de los valores occidentales asociados a la institución familiar, la autoridad paternal, la obediencia, el respeto y la responsabilidad. Como apunta Valeria Manzano, el ideal de juventud que aspiraban a instaurar las autoridades educativas, los medios dominantes y amplios sectores de la sociedad –que habían apoyado el golpe de Estado en busca de “orden” y “tranquilidad”–, debía combinar “la disciplina con el respeto a las jerarquías, la obediencia a las autoridades y el patriotismo” (2017: 372). En palabras del general Videla:

Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos, tiene un natural heredero: la juventud argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos, la pureza de nuestras intenciones, nuestro trabajo sin desmayos. De ella reclamamos su fuerza creadora, sus patrióticos ideales, su sentido de responsabilidad en el claustro y en el taller, su participación en el proceso que se inicia, para que, en un marco de igualdad de oportunidades, se realice plenamente en beneficio exclusivo de la Patria.⁴¹

41 “Discurso pronunciado el día 30 de marzo de 1976 por el Excelentísimo Señor Presidente de la Nación teniente general Jorge Rafael Videla, al asumir la primera magistratura de la República Argentina”, en Mensajes Presidenciales, Proceso de Reorganización Nacional, Tomo 1. Ruinas Digitales, pp. 13. Recuperado de <http://www.ruinasdigitales.com/revistas/>

Según la historiadora Laura Luciani, “la dictadura pretendió construir una representación de juventud que buscaba marcar un corte respecto de aquella de los años sesenta y setenta, e intentó, en ese proceso, modificar la cultura juvenil a fin de adecuarla a las exigencias del contexto” (2017: 36). Como una suerte de Jano, la juventud resultaba la expresión más nítida del desorden y, al mismo tiempo, la materia prima fundamental para la producción de un nuevo orden que desterrase las ideas subversivas. Bajo esa mirada, la Junta militar y sus aliados se vieron compelidos a librar una guerra restauradora sobre la base de dos pilares fundamentales de la “reorganización nacional”: la familia y el sistema educativo. La intervención integral sobre este último, en todos sus niveles, se nutrió de una visión paternalista de la familia como institución natural e indelegable. En ese sentido, la dictadura militar se (auto)propuso como la única instancia “capaz de restaurar valores y normas, pero también como fundadora de nuevos sujetos” (ídem).

A partir de 1977, las autoridades de la UNLPam pusieron en marcha el programa de “jóvenes modelos” –ideado desde el Ministerio de Educación de la Nación y llevado a cabo en todo el país– con el objetivo de forjar referencias de lo que debía ser un correcto estudiante universitario. En la convocatoria de 1977, el vicerrector Ricardo Telleriarte les transmitió a los decanos las “pautas sobre las que el Ejército Argentino solicita se escojan jóvenes que puedan ser considerados modelos para el resto del país”. Esas pautas incluían la selección de una terna final, a partir de criterios específicos –una edad de entre 20 y 24 años, rendimiento académico– y de índole social, que incluían datos de las familias, “recursos”, “esfuerzos” personales, trabajos, viajes, etc.⁴² En 1979, el Gobierno nacional implementó el programa “Marchemos a las fronteras”. La iniciativa fue coordinada por la Gendarmería Nacional y consistió en la movilización de 5000 jóvenes varones a las grandes ciudades a las zonas fronterizas para interactuar, acampe de por medio, con sus pares de comunidades locales. Entre los objetivos, el programa

dictadura/Dictadura%20-%20Discursos%20de%20Videla%20-%201976.pdf. Fecha de consulta: 12/5/2022.

42 UNLPam ASG 643/77 (citado en Asquini, 2008: 309).

buscaba estimular “aptitudes de liderazgo”, un determinado sentido de solidaridad (antes del viaje, se realizaron distintas actividades de recolección de útiles escolares y alimentos), de territorialidad y de pertenencia “patriótica” (Manzano, 2017: 372-373).

En 1981 el Ejército dispuso la creación del IV Cuerpo, con asiento en la ciudad de Santa Rosa. El hecho generó un impacto significativo en la comunidad santarroseña, que fue valorado de diversas maneras. En el plano universitario, los pasillos y aulas de la UNLPam se poblaron de “nuevos estudiantes” que cursaban regularmente distintas carreras. A la presencia de los soldados se conjugó la convivencia y el respaldo de “compañeros” que literalmente espionaron a los alumnos y señalaron a los “peligrosos”, en conjunto con docentes, personal administrativo y de servicios nombrados por las autoridades militares para “hacer inteligencia” en las dependencias institucionales. Raúl Steffanazzi recuerda que “había calado muy hondo el miedo a la dictadura”, “no hablar, menos de política”, “no jodas, no me comprometas” terminaron por convertirse en conductas y posturas habituales de muchos jóvenes estudiantes (entrevista a Raúl Steffanazzi).⁴³

En ese sentido, la dinámica represiva combinó una dimensión simbólica que atravesó los imaginarios y repercutió en los modos de *hacer/decir* de los jóvenes universitarios. Para una porción significativa del estudiantado —en su mayoría jóvenes de 18 a 22 años que ingresaron a partir de 1977— la presencia de guardias con policías armados, el control de documentación y de identidades personales, el celo sobre las formas de vestir, actuar y relacionarse con otros pares, entre otras actitudes y conductas, formaron parte de la experiencia cotidiana que incorporó, casi imperceptiblemente, los modos de vinculación social que se promovieron como esperables. Esas actitudes sociales se vieron fortalecidas a través de la adhesión abierta de muchos docentes al rumbo del Proceso de Reorganiza-

43 Nacido en una pequeña localidad cercana a la ciudad de Santa Rosa, Steffanazzi ingresó a la UNLPam como estudiante de Agronomía y, desde los años finales de la dictadura, desarrolló militancia política en la FM. Años más tarde, fue funcionario de gestión en la UNLPam, como parte del equipo de Raúl Esteves Leyte, primer rector de la democracia en esa casa de estudios.

ción Nacional, y por la circulación de una suerte de secreto a voces que alertaba sobre la presencia de individuos que “reportaban” a las autoridades, la existencia y el desenvolvimiento de “servicios” de inteligencia en cualquier ámbito social de la vida cotidiana.

No pocos estudiantes y docentes se adaptaron con docilidad a los nuevos vientos, mientras que otros debieron recluir sus ideas, posturas y anhelos al ámbito de su entera intimidad. Esteban Kasic, estudiante de la carrera de Agronomía, recuerda que, poco a poco,

... empezamos a ver los docentes que estaban de un lado, y que estaban del otro, en el sentido de que había docentes que estaban un tanto reprimidos por la situación, pero mantenían de alguna manera intacta su visión de las cosas, y otros que directamente no tenían ningún problema en haberse plegado a lo que el régimen en ese momento impuso (entrevista a Esteban Kasic).⁴⁴

Esa dimensión subjetiva de la cotidianeidad que comulgaba con los valores de orden, autoridad y necesidad de control sobre una juventud que había “desviado” sus conductas y lugar dentro de la sociedad, podía robustecerse con circunstancias específicas que coadyuvaban a los fines gubernamentales, como la instalación del IV Cuerpo del Ejército o la ocupación del campo de Agronomía para entrenamiento y/o ejercicios militares, en el marco de la tensión con Chile por la cuestión limítrofe. De conjunto, se fue conformando una red de vigilancia —en parte planificada y montada estratégicamente, en parte robustecida espontáneamente— que funcionó como una malla de control sobre las subjetividades. El intento de reformular integralmente el sistema universitario, las transformaciones en la cultura académica, la currícula y las formas de tramitar cotidianamente la experiencia estudiantil fueron modelando un sujeto universitario que “naturalizó” el control y el terror desplegado como proyecto social.

44 Proveniente de la ciudad de Esquel, ingresó a la UNLPam en 1977, a la carrera de Agronomía. Con militancia en el MR-15, ocupó distintos espacios y cargos estudiantiles. Ya como graduado, en 1986 fue designado por Raúl Esteves Leyte en la Secretaría de Bienestar Estudiantil, cargo al que renunció al año siguiente.

En una mirada más amplia, el proyecto gubernamental iniciado en 1974 para “restaurar la autoridad” se alimentó y fortaleció a partir de una interpelación exitosa a aquellos ciudadanos que, en distintas circunstancias, ocupaban posiciones de mando y autoridad en diversos planos de la vida social (la familia, la escuela, instituciones, fábricas, etc.). De ese modo, el carácter nebuloso del control estatal pudo anclarse en la capacidad de producir una “normalidad” de la experiencia cotidiana que encubriese su carácter impositivo. Como afirma Manzano, el proyecto restaurador se sostuvo “en la *pax* de los centros clandestinos” y permeó “a la sociedad en general” y a “las filas de los jóvenes en particular” (2017: 384).

No obstante, el intento de forjar una nueva generación de jóvenes ajenos a las ideas y prácticas “subversivas” del pasado no llegó a fundar una ruptura definitiva. Muy a pesar de los objetivos militares, las propias políticas juveniles albergaron resquicios que fueron apropiados y resignificados por los jóvenes, que poco tiempo después se conjugaron en el reservorio de saberes y tradiciones de los años previos, funcionando como una superficie identitaria en la que se asentaron nuevas prácticas, discursos y modalidades de politización.

Capítulo II. Nuevas configuraciones de la militancia estudiantil

A mitad de los años ochenta, Guillermo O'Donnell (1984) sugería que, entre los objetivos perseguidos por la última dictadura militar, se encontraba el de implantar un *Pathos* de autoridad y orden que sustentase una cultura del silencio, individualista y despolitizada, perpetrado a través de un sistemático y profundo intento de penetrar capilarmente la sociedad. La militancia estudiantil fue uno de los blancos privilegiados del poder represivo, precisamente porque los sectores juveniles habían sido grandes protagonistas de los movimientos de activación política y cultural en los años sesenta y setenta. La intervención de las casas de estudios universitarios, la implantación de un orden policial y la persecución sistemática de los elementos más contestatarios del estudiantado tuvo como resultado el secuestro, tortura y desaparición de miles de activistas.

Si el movimiento estudiantil que precedió a la última dictadura militar configuró un campo experiencial que hizo de él un lugar colectivo, y que forjó subjetividades y lazos comunitarios —más allá de diversas tensiones, disputas, posicionamientos o enfrentamientos—, la intervención dictatorial se encargó de atacar y desmembrar ferozmente ese vínculo. El lazo comunicante que conectaba a cada individuo conllevaba una potencia inadmisibles para el poder terrorista: el pensarse como un sujeto colectivo, como parte de una comunidad que trasvasaba las fronteras de lo estudiantil. De modo que el poder terrorista, además de los cuerpos, arrasó con distintas y múltiples formas de solidaridad social.

A fines de los años noventa, fines de siglo XX, Dardo Scavino aludía al carácter “desolado, des-solidarizado” del individuo forjado por el poder dictatorial: un individuo apático, aislado, incapaz de reconocerse en otros, pero, al mismo tiempo, percibir en esos *otros* la posibilidad de una amenaza (1999: 77). Como sostiene Roberto Pittaluga:

La violencia sistemática fue dirigida a desarticular los colectivos de pertenencia y de intervención política, cultural, etc., que habían nacido como expresiones de rebeldía y anhelos emancipatorios. La destrucción incluyó las palabras, que fueron proscriptas o mutaron sus significados. El costado destructivo era complementado por uno productivo: el hombre *a-sola-do* no es un ser al que se lo ha despojado de toda relación con otros, sino que se halla inscripto en otro vínculo social, una nueva trama de relaciones que se conjuga en una nueva subjetividad y en una nueva palabra (2014:15).

En efecto, el poder no solo *reprime*, sino que *produce*: la desarticulación de determinados lazos sociales requiere, al mismo tiempo, la construcción de otros distintos. Resulta factible pensar que el amedrentamiento represivo impuesto por la dictadura militar impuso una instancia de silencio que el resurgimiento de la política juvenil, años más tarde, no siempre logró sortear. De ese modo, la transición democrática se vio afectada por los alcances, formas y objetivos del terror estatal. Esa mediación no solo significó la interrupción de miles de “futuros posibles” sino que afectó drásticamente las cadenas de traspaso de información, conocimientos y saberes sobre las que se inscribe el pasaje generacional (Oberti y Pittaluga, 2006: 13). Esa instancia de silencio, como corte en la transmisión experiencial en las tradiciones del movimiento estudiantil, quedó en evidencia en la *orfandad política* de gran parte de los estudiantes activistas del período posdictatorial, como también en el deslizamiento de los significados que modularon las intervenciones políticas durante los años de radicalización política y cultural. En ese sentido, la denominación de *orfandad política* no sugiere necesariamente la inexistencia de estudiantes militantes o politizados que venían

del período previo al golpe militar —de hecho estaban, y aunque su presencia fue reducida, resultaron un valioso aporte para las nuevas generaciones— sino que refiere a la marcada desarticulación en la retransmisión y reproducción como movimiento, y a los efectos des-articuladores que impuso el poder dictatorial a la palabra y la acción política. La transmisión generacional se vio afectada no solo por la ausencia física de los cuerpos, desaparecidos, sino también por aquellos que se vieron forzados o impelidos a abandonar la militancia, el estudio o el espacio público, literalmente clausurado.

Los estudiantes que poblaron las universidades del país en los años iniciales de la década de 1980 disponían de marcos de sentidos ambiguos respecto de la democracia como sistema político. Aún más, en 1983, la democracia ofrecía antecedentes poco sólidos respecto de lo que debía ser un funcionamiento regular y estable en calidad de régimen de gobierno, político e institucional. Desde entonces, los jóvenes universitarios tuvieron que afrontar sus presentes democráticos y construirlos al andar. ¿Qué rupturas, continuidades y mutaciones organizaron la *performance* de los estudiantes respecto de sus antecesores? ¿Cómo podía ser entendida la democracia y el ejercicio democrático tras la rehabilitación institucional de 1983? ¿De qué manera los jóvenes universitarios vertebraron sus espacios y dieron sentidos a sus prácticas políticas?

Avanzar sobre esos interrogantes, nos impone la necesidad de identificar ciertos marcos contextuales, que nos amplíe la mirada sobre las particularidades del momento histórico. En ese sentido, aunque se percibiera un clima social de rompimiento con el pasado dictatorial, fue desde los años previos cuando comenzó a gestarse un conjunto de condiciones que posibilitaron la construcción de un marco interpretativo de la democracia, en clave consensualista.⁴⁵ Como hemos referido, la intención aperturista del diálogo político insinuado por el general Viola en 1980 tuvo en el no reconocimiento de la Multipartidaria Nacional —como instancia mediadora de la esfera civil— un punto clave en el fracaso de la iniciativa. La postura castrense posibilitó que los partidos políticos se constituyeran como

45 En el capítulo VII ampliaremos sobre el clima de ideas que posibilitó el tránsito hacia la democracia, como instancia ineludible de organización social y política.

anclajes de la (creciente) presión social en el reclamo de la salida al régimen de facto, instituyéndose estos como los canales naturales de la representación política de las mayorías. Sin embargo, debemos añadir que ese proceso más vasto de reacomodamientos de los actores y relaciones de fuerza venía gestándose en diferentes planos y actividades desde algún tiempo atrás. Al respecto, Luciano Alonso apunta que para el período 1979-1983, “sin que necesariamente se planteara una política de resistencia ni la conformación de espacios clandestinos, muchas prácticas y discursos presentaron posicionamientos divergentes, disidentes u opositores” que resultaron una superficie en la que los agentes inscribieron modalidades políticas y expectativas en los años siguientes (2018: 66).

A modo de breve repaso, una de las transformaciones más notorias se dio en el ámbito sindical. Desde 1976, las organizaciones obreras establecieron relaciones complejas con las agencias estatales. Mientras que sectores combativos y/o confrontativos fueron amedrentados, perseguidos y/o aniquilados, hubo dirigentes y entidades gremiales que sostuvieron vínculos más o menos estrechos con el régimen, tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales. Muchos sindicatos fueron suspendidos y/o intervenidos mientras que otros tantos siguieron funcionando, sea como representantes de los trabajadores o como administradores de bienes y servicios. Desde 1980 se perfilaron dos espacios relativamente identificables: uno más dialoguista, reunido en torno a la Comisión Nacional del Trabajo, luego CGT sector Azopardo (dirigida por Jorge Triaca), y otro más confrontativo, expresado en la Comisión de los 25, que más tarde dio lugar a la CGT sector Brasil (dirigida por Saúl Ubaldini).⁴⁶ En los años siguientes adquirieron un claro rol opositor –aunque con políticas diferenciadas– mediante paros generales y manifestaciones públicas en reclamo de mejoras salariales y laborales, además de denunciar la crítica situación económica y social del

46 Desde 1979, este sector impulsó un conjunto de acciones contra la orientación económica de la dictadura y en reclamo de una apertura política. Aspectos como el “trabajo a reglamento” o “quite de colaboración”, los boicots a los comedores de fábrica, las concentraciones internas, los sabotajes, la presentación de petitorios y reclamos o el mismo mantenimiento o constitución de redes de relaciones o de grupos informales fueron listados casi en paralelo con los conflictos como otras tantas formas de resistencia (Alonso, 2018: 63).

país. Posteriormente, las cúpulas sindicales y los principales gremios se reagruparon alrededor de las tradicionales conducciones peronistas, que ya habían “depurado” el partido y las organizaciones de base respecto de aquellos trabajadores combativos y/o con militancia pasada en organizaciones revolucionarias.

El creciente clima antidictatorial se conjugó con el casi continuo proceso de cierre de fábricas y caída general de la actividad económica. Las grandes ciudades del país resultaron un caldo de cultivo para la amenaza latente de estallidos sociales. Las “ollas populares” en las barriadas más afectadas devinieron, en no pocos casos, en movimientos de ocupación de tierras que se extendieron por algunos lugares del país (aunque con una presencia fuerte en el sur del conurbano bonaerense). También se esparcieron “los vecinazos” y otras formas asociativas de inscribir el malestar social. En ese sentido, resultó de importancia la emergencia de instancias locales de participación comunitaria, a partir de la experiencia de activistas de izquierda, peronistas o mediante los grupos eclesiales de base, que dieron contención y cobertura al creciente protagonismo de migrantes, jóvenes y mujeres en la activación de espacios de resistencia (Jelin, 1987; González Bombal, 1988; Vommaro, 2009; Pinedo 2022).

En el ámbito artístico/cultural, una multiplicidad de expresiones –musicales, plásticas, literarias, teatrales y de vanguardias en general– comenzaron a brotar y crecer por los márgenes e intersticios de la gubernamentalidad oficial, en contraste con ciertas visiones del campo cultural como *tierra arrasada* que pergeñaban algunos intelectuales (Alonso, 2018: 66). Desde 1976 los diarios de mayor tirada nacional –*Clarín*, *La Nación* y la constelación de diarios menores cercanos a ellos– habían apoyado y legitimado el régimen, con matices según los temas, pero con una línea general de convalidación del proyecto dictatorial. Sin embargo, el rumbo y el desgaste de la dictadura a inicios de la década de 1980 mostraron un reacomodamiento estratégico que se acentuó en 1982 y 1983. De ese modo, el diario *La Nación* comenzó a plantear en sus editoriales el fracaso del régimen en la consecución de sus objetivos, al tiempo que, ya en 1982, reclamaba la vuelta de la constitución y la plena

vigencia de las libertades. Con una crítica cada vez más regular a la situación económica y social del país, el diario *Clarín* se mostraba en sintonía y cuestionaba de manera abierta la censura y los abusos del poder, los métodos utilizados en la represión. En ambos casos, se denunciaba la posibilidad cercenada de solucionar “el problema de los desaparecidos” por vías legales y se exigía la restitución de un marco de legalidad para la resolución de conflictos. Esos desplazamientos convergieron con otras iniciativas que habían mantenido posiciones críticas sobre la dictadura, como el *Buenos Aires Herald*, o con apuestas editoriales que nacieron a partir de la posibilidad de ejercer una prensa marcadamente opositora, como el caso de *Tiempo Argentino*, que comenzó su tirada regular en noviembre de 1982. En sintonía, ese mismo año, revistas como *Humor* aumentaron su circulación y ventas, mientras proliferaron incontables iniciativas menores y, en muchos casos, autogestivas.⁴⁷

Sin embargo, uno de los actores que mostró una presencia progresiva en el espacio público fue el heterogéneo movimiento de derechos humanos (DD. HH.).⁴⁸ Según refiere Luciano Alonso, desde 1977, “Argentina ya era considerada internacionalmente como un país donde se violaban gravemente los derechos humanos, en gran medida gracias a las campañas de denuncias emprendidas por exiliados y por diversas organizaciones políticas” (2018: 68). Las búsquedas iniciales de datos e informaciones sobre los detenidos/desaparecidos, las gestiones ante autoridades y agentes estatales,

47 Para un análisis de la prensa durante el período 1976-1983, ver Blaustein y Zubietta (1998). Para el caso de *Clarín*, ver Levín (2013). Para el caso de *Humor* y otras menores, ver Burkart (2016).

48 En Argentina ya existía una tradición de defensa de los DD. HH. de larga data, con organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH, surgida en la década de 1930), otras creadas en los años previos al último golpe militar, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) o el Movimiento Ecuaménico de los Derechos Humanos (MEDH). En 1976 se formó Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (FDDRP), y al año siguiente, en abril, se realizó la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo; poco después, en octubre de ese año, nació Abuelas de Plaza de Mayo. Ese conjunto de fuerzas, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aglutinaron el grueso de las luchas antidictatoriales durante el período 1976-1983. A partir de la rehabilitación democrática, las organizaciones nombradas experimentaron un renovado crecimiento, que se sumó al surgimiento innumerables iniciativas en los espacios provinciales y/o municipales.

la conformación de redes de sociabilidad entre familiares y afectados dieron paso a la articulación de diversos organismos pro DD. HH. en la reunión de denuncias e informaciones y en el despliegue coordinado de actividades. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 y la entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel en 1980 –responsable del SERPAJ de la Argentina y América Latina– resultaron dos hitos que fortalecieron la receptividad y presencia pública de los organismos y agentes relacionados al movimiento. Desde entonces “se coordinaron mejor las acciones de asistencia a detenidos y exdetenidos” y a sus familias, en muchos casos con “ayuda económica y legal” y la constitución de “redes de apoyo”. El aumento de la presencia en manifestaciones callejeras y en la prensa, el apoyo y financiamiento de organizaciones internacionales y la mayor apertura política interior “crearon un clima propicio para el afianzamiento de las organizaciones” (Alonso, 2018: 68-74), que desde entonces ampliaron su presencia territorial y su peso social por toda la geografía argentina.

En efecto, la deslegitimación de la dictadura y su gradual pérdida de apoyo alimentó la dinámica de otros actores que, de conjunto, modificaron las relaciones de fuerza y el humor de la ciudadanía. Es posible que la variedad de iniciativas y actores involucrados en el período referido –los años previos al retorno democrático– no puedan ser adscriptos a una suerte de *resistencia antidictatorial*, en el sentido articulado, relativamente homogéneo y orgánico que la denominación sugiere, sino que admiten su inteligibilidad en el marco de los resquicios producidos por la propia dinámica social. En todos los casos, el fracaso en la guerra de Malvinas amplificó las tendencias, voces y posiciones discordantes y/u opositoras a la dictadura militar que venían gestándose desde los años previos, al tiempo que la apropiación del espacio público modificó las agendas políticas y sociales del país. La sociedad argentina tradujo su indignación y sentimiento de engaño en un creciente clima antidictatorial y antimilitar. En efecto, a mediados de 1982 se clausuraron las posibilidades de recomposición del poder del régimen militar, mientras cobraron un impulso vitalista las múltiples fuerzas sociales que proyectaron la necesidad inmediata del retorno democrático.

1982, un año bisagra

En el plano estudiantil, la FUA había reorganizado, desde 1978, una estructura semiclandestina –denominada Junta Representativa– sobre la base de un acuerdo entre las agrupaciones de alcance nacional que tenían representación previa a 1976 (FM, MNR, MOR). El objetivo era preservar alguna forma de articulación y relaciones básicas que sostuviera un mínimo esquema de funcionamiento organizativo.⁴⁹ Las primeras acciones se dieron en 1979, con el anteproyecto de lo que sería la Ley Universitaria N° 22207. En octubre de 1980, las agrupaciones de la Junta Representativa eligieron como presidente al “Gallego” Roberto Vázquez, militante de la FM, y delinearon una serie de intervenciones con el objetivo de visibilizar las críticas a la Ley Universitaria (Beltrán, 2013: 174). Entre octubre y diciembre, la FUA efectuó críticas y promovió algunas acciones de denuncia a través de petitorios y reclamos públicos, principalmente en las grandes universidades del país y en buena medida al amparo de las estructuras partidarias de sus representantes. Esa línea de trabajo político se extendió a la UNLPam a través del contacto entre dirigentes partidarios y universitarios. Por ejemplo, en 1981 fueron apresados integrantes de la FM local, luego de una volanteada en reclamo de la derogación de la Ley Universitaria. Su detención activó la intervención de la Multipartidaria Provincial, que rápidamente repudió el accionar policial y reclamó al gobernador la liberación de los estudiantes universitarios.⁵⁰

49 Guadalupe Seia indica que, desde 1977, se advierten los esfuerzos para recuperar el funcionamiento (clandestino) de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Además de las agrupaciones mencionadas para el caso de la FUA, también participaron otras tendencias políticas como la Juventud Socialista del Partido Socialista de los Trabajadores (JS/PST), la Juventud Comunista Revolucionaria del Partido Comunista Revolucionario (JCR/PCR), la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista y luego la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero (TERSUS/PO). Al mismo tiempo, esas fuerzas políticas, con distinta presencia y peso en cada facultad, participaron desde 1977 de la conformación de las Comisiones Reorganizadoras de los Centros de Estudiantes (2020b: 108).

50 Los detenidos fueron Alberto Podestá, Mario Sergio González y los hermanos Horacio Ángel y Daniel Roberto Ali. Luego de los reclamos, fueron liberados. No obstante, se les inició una causa federal por infringir la Ley N° 21323 (prohibición de actividades políticas). La posterior derogación de la Ley hizo caer la denuncia penal en curso, siendo sobreseídos en septiembre de 1982. AHP, *La Arena*, 4 de septiembre de 1982.

En 1982, la Junta Representativa se reunió en la ciudad de Rosario y declaró “un plan de movilización estudiantil” para la derogación de la vigente Ley Universitaria, a favor del “ingreso irrestricto”, la “democratización de los claustros” y la “devolución de los centros de estudiantes”. En el documento emitido también se exigía la “eliminación del examen de ingreso y cupos, la eliminación de todo tipo de arancelamiento”. Además de “la habilitación de comedores, viviendas, becas, asistencia médica, concursos docentes por oposición de antecedentes, la libre expresión del movimiento estudiantil y la devolución de sus bienes a sus legítimos dueños”.⁵¹

No obstante, a pesar de la creciente repolitización y movilización social que se abría camino en el país, los años iniciales de reactivación de la militancia universitaria convivieron con el temor y la desconfianza de otros estudiantes a involucrarse en discusiones públicas y/o políticas. La adhesión y militancia en grupos u organizaciones partidarias no eran del todo bien vistas por una parte sustancial del estudiantado, atentos al mandato “a la universidad hay que ir a estudiar”. Como recuerda Gustavo Romero:

El grueso de la gente, de los universitarios, estaba con la idea de que no tenía que haber política partidaria en las aulas. Vos decías que eras del peronismo y ni las sillas te dejaban, no solo del peronismo, sino de cualquier fuerza al principio, después se fue entendiendo que no era como nos habían dicho los milicos y se pudo avanzar en ese sentido (entrevista a Gustavo Romero).⁵²

Sin embargo, el relajamiento sobre el control de la vida cotidiana de los estudiantes habilitó la emergencia de nuevos espacios de sociabilidad y la resignificación de otros. Las charlas en las pensiones, las actividades deportivas, las comisiones para armar apuntes, el desarrollo de acciones solidarias, entre otras, funcionaron como

51 AHP, *La Arena*, 7 de septiembre de 1982.

52 Nacido en Neuquén en el seno de una familia peronista, en 1982 inició sus estudios en la Licenciatura en Recursos Naturales, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Miembro del grupo inicial que dio forma a la JUP en la UNLPam, en 1983 fue el primer presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En los años siguientes fue consejero directivo y superior, siempre por el claustro estudiantil. En 1987 fue secretario general de DD. HH. de la FUA, en representación de la JUP.

instancias de vinculación que permitieron a los estudiantes reconectarse entre sí, sobre la base de la idea de que había que hacer algo y juntos. Gustavo Romero apunta que, a principios de 1982, la “dictadura misma estaba ya muy gastada”, así que, aunque “no había libertad para salir a expresarse, sí teníamos nosotros por lo menos muchas charlas”, tanto con los compañeros de la facultad, de las cursadas, como con los compañeros de la casa, pero “tampoco era que estábamos todo el día metidos en la política, en cuestiones políticas, sino que se estaba abriendo” (entrevista a Gustavo Romero). En la misma línea, Esteban Kasic recuerda que “se empezó a hablar de democracia en el 82 [...] en la pensión, en las reuniones de mate, en los asados” (entrevista a Esteban Kasic). Ese *modus operandi* de la militancia estudiantil fue relativamente común en todo el país. En algunas universidades más grandes, como la UBA, las iniciativas se fueron gestando desde 1979/1980 (Polak y Gorbier, 1994; Seia, 2016; Cristal y Seia, 2018). Carlos Vicente, quien fuera un destacado dirigente estudiantil de la Federación Universitaria de Córdoba, afirma que “en casi todas las facultades se habían organizado comisiones de apuntes, se hacían circular petitorios dirigidos a los profesores, se disputaban campeonatos de fútbol y se hacían viajes y peñas” (2018: 12). En sintonía, José Serra relata que, en los años previos a la recuperación democrática, algunos compañeros fueron adquiriendo una “experiencia” que les permitía moverse con mayor fluidez:

No podés decir dirigentes experimentados, pero sí compañeros que sabían cómo contactarse, cómo organizar una repuesta frente a un problema, que habían aprendido, que habían hecho una experiencia en quien confiar y en quien no, y esto se da con bastante extensión, sería faltar a la verdad decir que era el elemento generalizado. La mayor parte del estudiantado no participaba y temía incluso a participar en eventos, salvo de forma anónima (entrevista a José Serra).⁵³

53 José Serra fue estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la federación universitaria de esa casa de estudio y destacado dirigente de la Franja Morada-Corriente Nacional de Liberación.

En efecto, la masificación de la presencia pública juvenil y/o universitaria no resultó un fenómeno disruptivo en tiempo y espacio, sino que fue la configuración de una ventana de oportunidad –en términos del sociólogo Sidney Tarrow (1997), una “estructura de oportunidades políticas”– lo que posibilitó la disposición de las condiciones para la emergencia y el despliegue de la politización juvenil. El efecto Malvinas aceleró todo.

La creciente preeminencia de los partidos políticos en la arena pública nacional y provincial apuntaló el desarrollo de distintas instancias de participación juvenil, como el caso del Movimiento de las Juventudes Políticas (MoJuPo), que buscaron canalizar las energías movilizadas a partir del desarrollo de las juventudes partidarias.⁵⁴ En el espacio de las universidades, la presencia estable de militantes con filiación partidaria resultó un engranaje clave en la (re)constitución de las agrupaciones estudiantiles. Para 1982, ya se encontraban en funcionamiento aquellas de alcance nacional, como la FM, la JUI, el MOR, el MR-15 y el MNR. En la UNLPam, y con motivo de la celebración del aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, “las agrupaciones universitarias Franja Morada, Movimiento de Orientación Reformista, Movimiento Reformista 15 de Junio y la rama universitaria de la Juventud Intransigente” emitieron un documento conjunto por el que se pronunciaron por la “derogación de la llamada ‘ley’ universitaria actual” y a favor de “una universidad autónoma y no simplemente autárquica”, “cogobernada democráticamente” por la totalidad de los claustros que la integran, por una “universidad popular, gratuita y sin aranceles” y a favor de la eliminación de los cupos de ingresos.⁵⁵ En menor medida, la militancia peronista fue parte de ese movimiento, aunque su capacidad de reorganización institucional resultó menor tanto por las acciones represivas de la dictadura sobre la JUP como por la situación de crisis interna que atravesaba al PJ.

54 El MoJuPo nació en 1982 como reflejo de la Multipartidaria Nacional y reunía a la Juventud Radical (JR), Juventud Peronista (JP), Juventud Intransigente (JI), Federación Juvenil Comunista (FJC), Juventud del Partido Socialista Popular, Juventud Socialista Auténtica, Juventud Socialista Unificada, Juventud Confederación Socialista y Juventud Demócrata Cristiana. Su estructura se replicó, al igual que la multipartidaria, en los espacios provinciales.

55 AHP, *La Arena*, 19 de junio de 1982.

Aunque el rechazo de la política partidaria y de la política en general por parte de sectores del estudiantado se fue revirtiendo paulatinamente durante el transcurso de 1982 y 1983, es probable que algunas de las agrupaciones estudiantiles de filiación partidaria se vieran más afectadas negativamente en su presencia pública debido al desenvolvimiento y/o percepción general sobre el partido en cuestión al que pertenecían. El caso de la JUP resulta un ejemplo claro, cuya denominación podía asimilarse, bajo ciertos registros de sentido común, a la violencia política de la década previa, de ahí que “decías que eras del peronismo y ni las sillas te dejaban” (entrevista a Gustavo Romero). En cierto modo, la JUP expuso las dificultades para autodenominarse como tal en los años de la transición a la democracia, de ahí que se ensayaran variantes como Juventud Peronista Universitaria (JPU), en el caso de la UNLPam. Lo mismo sucedía con el campo de la izquierda, que solo paulatinamente asumió ese nombre y hasta bien avanzada la década siguió adjetivándose como “izquierda democrática”.⁵⁶ Aun así, esa percepción negativa alcanzó a expresiones políticas que se vieron beneficiadas positivamente por la coyuntura, como el caso de la FM con la figura de Raúl Alfonsín, pero que no alcanzaba a mitigar la percepción escéptica sobre las dirigencias locales.

Como parte de esa escena, en algunas universidades del país se registra, desde 1982, la formación de agrupaciones que se autodenominaron “independientes”, a partir de la distancia impuesta respecto de las organizaciones partidarias. Como ya hemos referido, algunos agrupamientos construyeron posiciones de izquierda y se desplegaron con autonomía de los partidos políticos, aun cuando sus activistas expresaran simpatías o adhesiones por alguno de ellos, mientras que otras agrupaciones se reivindicaron como “apolíticas” pero se definieron, en su praxis, por una marcada orientación liberal y de centro derecha.

56 En cierto modo, la denominación de “izquierda democrática” buscaba reforzar su disposición a las reglas del juego parlamentario y representacional, pero en simultáneo efectuaba una intervención discursiva que marcaba una ruptura con el pasado y con el imaginario que remitía a la fórmula “izquierda + lucha armada = violencia política”. Esa suerte de uniformización del propio campo de la izquierda difuminaba diversas tradiciones e iniciativas emancipatorias que se habían desarrollado por fuera o directamente en oposición a la vía armada.

Una de las universidades que cuenta con estudios al respecto es la UBA. En línea con el trabajo pionero de Polak y Gorbier (1994), Guadalupe Seia identifica un conjunto de agrupaciones (auto)definidas como “independientes de izquierda”, como los casos de Agronomía Independiente, Agrupación de Estudiantes Independiente (Ciencias Exactas y Naturales), Corriente Independiente de Ciencias Económicas, Estudiantes de Derecho No Alineados, Gestar (Veterinaria), Movimiento de Transformación Universitaria (Filosofía y Letras), Movimiento Independiente de Arquitectura y Urbanismo, Movimiento Independiente de Sociología (2020a: 260). Muchas de ellas confluyeron en el Bloque Universitario Independiente para la Transformación (BUIT), cuyos integrantes se definían como “apartidarios” —es decir, a distancia de las agrupaciones conformadas como extensión de partidos políticos— pero que buscaban formar “una clara conciencia universitaria nacional y popular de contenido latinoamericano y antioligárquico” (citado en Cristal, 2017: 10).

Por el lado de aquellas agrupaciones de orientación liberal que oscilaban del centro a la derecha, en la UBA se conformó la Mesa Coordinadora de Estudiantes Independientes (MCEI), que logró la conducción de tres centros de estudiantes. En 1983 ya se registra a la Unión Para la Apertura Universitaria (UPAU), quizás la agrupación que mayor presencia logró a lo largo de la década (Cristal 2023). Otras agrupaciones fueron Iustum (Derecho), Quantum (Ingeniería), Sinapsis (Medicina), Nexo-Revalúo (Ciencias Económicas), Nobis (Filosofía y Letras), Línea de Agronomía Independiente (LAI), Lista Veterinaria Independiente y Estudiantes Independientes de la Facultad de Odontología (Seia 2020a: 254). En la facultad de Filosofía y Letras, un volante propagandístico de la agrupación Nobis afirmaba que “queremos una universidad al margen de todo activismo político, adoctrinamiento y desorden” (citado en Cristal, 2017: 10). En general, las agrupaciones modularon un discurso que enfatizó la necesidad de mantenerse a distancia de la “contaminación” de la política, en cierta continuidad con el perfil de estudiante despolitizado que buscó legar la dictadura.

En la Universidad Nacional de Cuyo, Rodrigo Touza identifica la formación de algunas agrupaciones que, en 1983, ganaron cen-

tros de estudiantes, como el caso de Arco Iris, PAUN e Integración Independiente. En los años siguientes, esas agrupaciones fueron absorbidas por la UPAU, constituyéndose en una fuerza estudiantil de peso al promediar la década (2007: 246-254).

En el caso de la UNLPam, no se registran agrupaciones que se (auto)definiesen como “independientes”, en cuanto construcción política a distancia de los partidos, en ninguna de las orientaciones mencionadas. Lo que sí existió en la Facultad de Agronomía, principalmente, son agrupamientos integrados por estudiantes sin adscripciones partidarias en conjunto con otros activistas que efectivamente se reconocen como parte de la FM, el MR-15 o el MOR, por citar ejemplos.

Todo ello es revelador del clima político y de las condiciones de posibilidad de enunciación en los momentos iniciales de repolitización y reorganización del movimiento estudiantil, a la vez que ilumina aspectos de los cambios operados en la reconfiguración de las subjetividades juveniles mediante la intervención dictatorial.

Para el grueso de los estudiantes, resulta válido señalar que la coyuntura de 1982 funcionó como un catalizador de reconocimiento a las limitaciones impuestas por la dictadura a la expresión pública, a las libertades individuales y al disciplinamiento de aquellos sujetos que sentían la carga opresiva de las imposiciones militares. En efecto, el espacio universitario se erigió en el marco de referencia en el que muchos jóvenes tramitaron los descontentos y sus deseos transformadores. El punto de entrada para un cuestionamiento mayor, en clave antidictatorial y antiautoritaria, a las formas extendidas de ordenamiento social. El reclamo por la restitución de la democracia, en ese sentido, ancló los horizontes de expectativas a futuro y motorizó proyectos colectivos. Fue en esa dinámica que la politización creciente de los universitarios encontró en las agrupaciones que se referenciaban en los partidos políticos, precisamente, “una referencia” y un cobijo que les permitía encuadrar prácticas y deseos militantes, pero a la cual no siempre se subsumieron. De hecho, la politización juvenil y estudiantil no se trasladó directamente a una adhesión partidaria ni las simpatías se tradujeron en pertenencia orgánica y/o institucional, como lo muestra la crisis de la militancia partidaria al promediar la década.

Un elemento importante a destacar es que, en el caso de la UNLPam, todas las agrupaciones que se constituyeron fueron definiéndose como progresistas, populares y de izquierda. Corresponde aclarar que esa no fue una decantación natural de la militancia estudiantil. La dictadura militar y sus aliados realizaron ingentes esfuerzos por apuntalar formas de sociabilidad de los jóvenes que se alejasen del activismo político en la orientación referida. De hecho, las agrupaciones estudiantiles que surgieron en otros espacios y que se movían por el espectro del centro hacia la derecha, lejos estuvieron de marcar una ruptura con los esquemas legados por la dictadura, sino que, precisamente, los pusieron en juego para sostener un perfil despolitizado del estudiantado y de la universidad. La empresa no era menor, en la medida en que la dictadura buscó legar un horizonte de sentidos restringido a significados precisos de la democracia, aquellos solo validables en tanto no se cuestionasen los valores occidentales y cristianos que apuntalaban el orden dominante y/o deseable.

En el juego de condicionamientos mutuos, los vínculos entre partidos, juventudes políticas, agrupaciones y las formas de militancias se desarrollaron en términos más o menos regulares, pero no exentas de fricciones, de modo que en determinados momentos emergieron disputas y diferencias cuyas derivas resultaron en desprendimientos, quiebres o reconversiones de los espacios políticos estudiantiles. Aun así, los militantes orgánicos de agrupaciones partidarias –especialmente aquellos con experiencia previa– tuvieron un peso gravitante en la dinámica estudiantil. Funcionaron como una suerte de correa de transmisión de saberes, conocimientos y modalidades de intervención que nutrieron a sus compañeros más jóvenes.

Como actores sociales, las agrupaciones estudiantiles –formales y con ciertos vínculos institucionalizados respecto de los partidos políticos, pero con una lógica de funcionamiento más autónoma respecto de esas estructuras– se constituyeron en espacios que brindaron marcos identitarios para la acción del activismo estudiantil, aun cuando buena parte de él desbordó los canales formales de participación pública, sin que ello resultara excluyente. En efecto,

durante los años iniciales de nuestro período de estudio se fue acen-
tuando una práctica política más movimientista y de base que trac-
cionó al conjunto de la militancia estudiantil. Como recuerda Mirta
Zink, estudiante de la carrera de historia en la UNLPam:

El clima que se generó en el 82... vos no te podías mantener al
margen, eso fue lo que llevó a muchos a sumarnos y a militar.
No digo que todos los estudiantes militaban, pero sí éramos un
grueso importante los que salíamos a la calle y nos sumábamos
a toda esa demanda de que se vaya la dictadura, que venga la
democracia, etc. Era el clima que te llevaba y si vos tenías algu-
nas inquietudes, obviamente no dejabas pasar esa posibilidad
(entrevista a Mirta Zink).⁵⁷

En ese sentido, un rasgo común de la militancia universitaria
fue la temprana percepción del carácter fragmentado del campo po-
pular y social, como efecto directo de la desarticulación impuesta
por la dictadura. Ese discernimiento apuntaló una genuina disposi-
ción política y militante al trabajo común, que se manifestó inicial-
mente en la lucha por la recuperación de los espacios de interven-
ción estudiantil, en los procesos asamblearios de toma de decisión y
en las listas de “unidad” o “neutras” que propiciaron el objetivo de
que todos quedasen representados. En este punto, la percepción de
trabajo común se alimentó de una cuestión ineludible: en las pri-
meras elecciones de centros de estudiantes ninguna fuerza contaba
con un apoyo y caudal propio suficiente para imponerse hegemoní-
camente en las instancias eleccionarias, de ahí que se generase una
especie de “empate técnico” que obligaba a las fuerzas estudiantiles
a transitar cierto camino de unidad que, en no pocos casos, podía
desatenderse de las “líneas partidarias”. Siguiendo el testimonio de
Gustavo Romero:

Cuando nosotros hicimos la lista [refiere a la lista para las pri-
meras elecciones del centro de estudiantes de Ciencias Exactas

57 Nacida en una localidad al sur de Santa Rosa, inició sus estudios en la UNLPam en el
año 1980, en la carrera de Historia, en la que se graduó. Durante su trayecto estudiantil, tuvo
militancia en el MR-15. Luego, durante muchos años, se desempeñó como profesora en la
Facultad de Ciencias Humanas. En la actualidad, es docente universitaria jubilada.

y Naturales] la mayoría éramos peronistas, pero había alguno del PC, alguno del socialismo y varios del PI, entonces no nos poníamos de acuerdo con el nombre de la lista, porque aparte de eso, sabíamos que necesitamos a los que se denominaban “independientes”, entonces no le podías poner “Evita” o “Che Guevara” porque corríamos al resto y nos iban a ganar los otros, ¿Cuál fue la solución? Fuimos como lista “blanca”, o sea, tratando de sacarle todo tinte político [...]. Le ganamos en ese momento a FM, que iba como FM e independientes, porque también sabían que como FM solo no alcanzaba (entrevista a Gustavo Romero).

Más que una lógica pragmática del juego político electoral, el testimonio permite inferir características particulares que atraviesan a la militancia estudiantil durante la transición. Por un lado, la necesidad de “sacarle todo tinte político” a las listas de candidatos expone el carácter endeble de la representación política cierto malestar respecto de las practicas estudiantiles, pero al mismo tiempo se reafirma como gesto de inclusión de *todos* —tanto de los activistas “partidarios” como de los “independientes”—, y es en ese particular movimiento que se reafirma la politicidad que la militancia le imprime al período.

Sin embargo, entre la disposición movilizadora de los estudiantes y las instancias eleccionarias de representación política existía un elemento aglutinante que, al tiempo que forjaba un sustrato común de participación, establecía coordenadas y márgenes de funcionamiento a las agrupaciones partidarias y sus líneas políticas: nos referimos a las asambleas como modalidad *apropiada* para la toma de decisiones conjuntas. Decimos *apropiada* en la medida en que resultaba, metodológicamente, una forma plausible de que *todos* participaran de las decisiones. Sin embargo, también *apropiada* en el sentido de apropiación individual y colectiva de una forma común de gestionar e incluir las diferencias. En ese sentido, resulta valido afirmar que la reunión asamblearia produce un espacio *común y desjerarquizado* donde *cualquiera* puede tomar y ejercer la palabra, desvaneciendo ordenamientos previos y facilitando la apropiación de otros saberes cuya transmisión resulta inaprensible de otro modo.

Como refiere Judith Butler, en la medida en que el acto participativo produce una instancia de reunión, las personas involucradas hacen algo más que re-presentarse a sí mismas: construyen un “nosotros”. Es un acto performativo “y ese acto de auto-creación o auto-constitución no equivale a ningún tipo de representación. Algo no representativo y casi tautológico se vuelve entonces la base de las formas de gobierno democrático” (2014: 50). Fue en el propio proceso de las experiencias asamblearias, en el contexto de fragilidad subjetiva que impuso la dictadura, que se modularon prácticas que, aun sin poder semantizarse con precisión, forjaron modalidades políticas que significaron las expectativas de los concurrentes, sin que ello resultase excluyente de las instancias eleccionarias de órganos de gobiernos y/o conducción. En todo caso, se imprimía a esas instancias una dinámica específica de ejercicio del poder, en la medida en que reducía la brecha entre representantes y representados.

De ese modo, el carácter restringido y separado que solía asignársele a “la política”, como “asunto” de los partidos políticos y las autoridades, se veía alterado por el fondo común de las prácticas asamblearias, por la disposición al trabajo conjunto, por las conversaciones de pasillos y pensiones que interrumpían y reformateaban los ordenamientos sociales y simbólicos percibidos. Aunque las asambleas no estaban exentas de agrupaciones partidarias que trataban de “orientar” y “aparatear” las reuniones, debían hacerlo sometiendo al modo propio de constitución política que es la asamblea. Allí, la palabra de un militante partidario no valía más que la de un “independiente” o de un estudiante *cualquiera*, sino que la cuestión argumental del discurso político –y aun la posición ética del enunciador– se tornaba más relevante que la adhesión identitaria a determinadas agrupaciones políticas.

En efecto, y más allá de las instancias eleccionarias, se creaba *otra* trama de relaciones anclada en un fondo cooperativo de producción de la política. De ahí que los estudiantes hallaran en la reunión asamblearia un anclaje común que les permitía “activar”, “militar”, “participar” en espacios y ámbitos de la institución universitaria, en el movimiento de derechos humanos, en actividades barriales, sin que resultasen excluyentes y/o contradictorios, y *más*

allá de las especificidades de las líneas partidarias. En todo caso, la adhesión a un espacio u organización partidaria podía conferirle al activista estabilidad y anclaje a la praxis cotidiana, pero era la inscripción en el movimiento colectivo/común más amplio lo que dotaba de sentido su propia subjetivación.

En este punto, resulta oportuno destacar que los procesos asamblearios establecen un puente de continuidad con las tradiciones del movimiento estudiantil y, específicamente, con los modos de *hacer* de las décadas de 1960 y 1970. Yann Cristal resalta este aspecto para la UBA, entre 1982 y 1983, período en el que también se formaron cuerpos de delegados estudiantiles, en un contexto en el que “aún regía el estado de sitio y era recurrente la presencia de personal policial en los pasillos, con lo que las asambleas tuvieron que sortear reiterados intentos de censura y persecución” (2017: 6-8).

Como productores de un poder que excedía las representaciones políticas, los estudiantes podían intervenir en diversas escenas de interlocución mediante la capacidad de proposición, impugnación o veto de propuestas, iniciativas y/o modalidades de funcionamiento y toma de decisiones, como es el caso de las luchas contra el pago de aranceles, la intervención en los procesos de concursos docentes o el peso protagónico en la elección del primer rector en 1986, lo que no resulta excluyente de la propia presencia y dinámica de las agrupaciones políticas que vehiculizaban decisiones, propuestas y demandas estudiantiles en las instancias institucionales de la universidad (Consejos Directivos, Superior, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, etc.).⁵⁸ En efecto, la reunión asamblearia no colisionaba con los canales y formas de representación política, sino que dotaba al mandatado de una responsabilidad y un compromiso respecto del poder conferido y emanado de la propia reunión soberana. Diana Moro y Gustavo Romero señalan aspectos de ello en sus testimonios:

58 De hecho, las agrupaciones estudiantiles con vinculación partidaria mantuvieron importantes fricciones con los referentes de sus espacios políticos —como veremos en el capítulo IV— a partir de la performance relativamente autónoma de sus militantes. En cierta forma, resulta dificultoso *nominar* la relación ambigua en que se encontraban los activistas con filiación partidaria a la hora de sostener la línea política de sus organizaciones y la inscripción en el propio devenir del movimiento estudiantil como sujeto político.

Las decisiones sobre las posturas a seguir [refiere a los concursos] se tomaban en asambleas [...] En asambleas decidíamos quienes eran los que íbamos a ir a cada uno de los jurados. Teníamos asambleas todo el tiempo y definíamos este tipo de cosas (entrevista a Diana Moro).⁵⁹

Habíamos organizado una comisión, donde yo estaba, para organizar el estatuto, o para aprobar artículos que eran importantes, y llamábamos a asamblea, en esa época, tengo en la cabeza que éramos no más de 150 personas, y teníamos asambleas de 70, 80 personas, así que para nosotros era la gloria, y eran asambleas para ver si aprobábamos uno o dos artículos, ni siquiera el estatuto. Quiero decir con esto, el aula 13, que es el aula más grande de la facultad nuestra, estaba rebalsado de gente (entrevista a Gustavo Romero).

Esa dinámica de producción de un poder propio e irrepresentable (a título individual o agrupacional) por parte de los estudiantes puede observarse claramente en los primeros años de apertura política. Al promediar la década, la “normalización” institucional conllevaba, valga la redundancia, el objetivo de “normalizar” determinadas prácticas políticas, es decir, aquellas que surgen de la delegación de poder mediante el voto. La institucionalización de los centros de estudiantes, consejos directivos, superior y demás ámbitos de deliberación y toma de decisiones llevaba implícitamente la necesidad de su propia legitimación como instancia válida de producción de poder. De ese modo, las prácticas asamblearias podían ejercerse libremente en la medida que no perturbasen esa fuente de legitimidad de la representación política.

En ese juego, los partidos políticos se nutrieron de la dinámica movilizadora del activismo estudiantil, la apoyaron y le dieron estímulo a su participación. Sin embargo, como podremos advertir a lo largo de nuestro trabajo y conforme avanzase la década, el ejercicio democrático quedó subsumido, progresivamente, a la verticalidad

59 Ingresó a la UNLPam en 1982 a la carrera de Letras y en 1984 se incorporó a la JUI. Con una activa participación política, en 1986 fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Posteriormente, fue profesora de la carrera de Letras en la Facultad de Ciencias Humanas. En la actualidad, es docente universitaria jubilada.

de la disciplina partidaria. Una muestra de ello resulta la casi nula integración de los liderazgos estudiantiles a las estructuras de los partidos, dominados por una lógica distinta de toma de decisiones y ocupación de espacios. Al promediar la década, se advierten diversos procesos de disciplinamiento partidario respecto de las agrupaciones estudiantiles y de depuración de activistas considerados “díscolos”, en un contexto de permanencia de las mismas dirigencias al frente de los partidos que, en la mayoría de los casos, provenían de la década anterior.

Por otra parte, la percepción de fragilidad del campo popular, de precariedad de recursos y la disposición al trabajo conjunto produjo iniciativas novedosas. Hemos referido la importancia del vínculo entre viejos y nuevos activistas en la reconstrucción de saberes del activismo estudiantil, y de la importancia asignada a las acciones entre activistas de distintas adhesiones políticas. En esa línea se inscribe el surgimiento de la *Revista Universitaria (RU)* a mediados de 1982. Su publicación regular fue una experiencia material e intelectual que reunió a un importante grupo de estudiantes –pero no exclusivamente– con centro en la Facultad de Ciencias Humanas. En cierta forma, puede considerársela fruto del entusiasmo de época, pero también de la necesidad de poner en superficie una subterranidad política y discursiva que circulaba por los poros y contornos de los núcleos sociales inquietos y sensibles al tiempo ordenado que pretendía legar la dictadura. La *RU* fue una experiencia que se situó a distancia tanto de las organizaciones partidarias como gremiales (centros de estudiantes, federaciones, etc.), aun cuando su núcleo más estable pertenecía a la Juventud Intransigente (Monasterolo, 2013).⁶⁰

En retrospectiva, la revista intervino en la escena estudiantil como una instancia instituyente y contestataria frente a los efectos disciplinadores que el poder dictatorial había desplegado en la esfera social/cultural desde su implantación como gobierno de facto, y cuya praxis comportó un estatuto ejemplar al desplegarse como espacio multiplicador a través del arte y la cultura en el más vasto

60 En el capítulo VI abordaremos la experiencia de las revistas estudiantiles con mayor profundidad.

campo de la lucha social y popular. Desde sus páginas, se abordaron una variedad de temas que intervinieron sobre las agendas y discusiones del activismo estudiantil. La experiencia se convirtió en un espacio de autogestión voluntaria y militante que instituyó un sentido y una práctica que se pretendía colectiva y superadora de la inercia individual que los tiempos militares habían impuesto.

De la movilización a la institucionalización de los centros de estudiantes

A partir de 1982, esa suerte de apropiación genuina del derecho a participar en el gobierno de las instituciones y de la cosa pública marca un notorio cambio de actitud respecto de años precedentes. La lucha por la recuperación de los espacios estudiantiles –centros de estudiantes, consejos departamentales, gobierno universitario, comedor, entre otros– y la conformación efectiva de los centros de estudiantes se (re)presentaba como un desafío, en la medida en que albergaba las expectativas del ejercicio democrático y de construcción de espacios que permitieran cuotas de autonomía política. Sergio Maluendres recuerda que:

En el post Malvinas se empezó a organizar el centro de estudiantes, ahí ejercieron un liderazgo algunos estudiantes que habían empezado el año anterior, Leonardo Santesteban por ejemplo [...]. Todo nuestro grupo se incorporó al objetivo de crear un centro de estudiantes (entrevista a Sergio Maluendres).⁶¹

Con el objetivo de convocar a elecciones, comenzaron a organizarse comisiones de trabajo nutridas de numerosos estudiantes que discutían los modelos organizativos, las actividades a llevar a cabo y los detalles de funcionamiento. Para el grueso de los jóvenes veinteañeros que habitaban los pasillos universitarios, esas experien-

61 Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, con militancia en el MR-15, ingresó a la UNLPam a cursar la carrera de Historia en 1982, y se graduó en 1989. Años más tarde, se desempeñó como docente de la carrera de Historia. Entre 2002 y 2010 fue rector de la UNLPam (dos periodos) y, posteriormente, decano de la Facultad de Ciencias Humanas.

cias resultaban una novedad y un desafío. Diversos testimonios así lo refieren, entre ellos el de Mirta Zink:

Yo formé parte del grupo de gente que empezó a luchar por el centro de estudiantes, a exigirle a las autoridades de la dictadura, al último decano ya de la Facultad de Ciencias Humanas, que era Marquina, que queríamos tener centro de estudiantes, que queríamos participación, que queríamos tomar parte de las decisiones, de los cuerpos que antes existían dentro de la universidad (entrevista a Mirta Zink).

La dinámica de masificación de la presencia estudiantil, la confección de los estatutos y la discusión sobre las formas y modalidades de organización gremial finalmente se plasmaron en la convocatoria a elecciones para la normalización de los centros a partir de 1983. El primero en acudir a elecciones fue el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas (CEFCHu). El acto eleccionario se consumó el 11 de mayo de 1983, ocasión en la que compitieron dos listas: “Blanca” y “Celeste”. La lista Blanca estaba constituida por Jorge González, Mirta Lobos, Javier González, Carlos Montironi y María Elisa Sánchez. Por el lado de la lista Celeste se presentaron Leonardo Santesteban, Héctor Mareque, Laura Acevedo y Héctor Núñez.⁶² Los comicios dieron la victoria de la lista Blanca (cercanos a la FM) con 96 votos sobre 83 de la Celeste (cercanos al MR-15).

Posteriormente fue el turno de la Facultad de Agronomía. Allí se conformaron tres listas sin adhesión explícita a ninguna agrupación partidaria, aunque con participación de militantes referenciados en partidos políticos. Al respecto, Esteban Kasic recuerda que:

A fines del 82 se organiza el centro de estudiantes. Había tres listas. Una que se había organizado un poco por el lado de los chicos de FM, estaban Daniel Alí, otros éramos independientes, la lista nuestra se llamaba “Unión de Estudiantes de la Facultad de Agronomía”, y una tercera que también eran independientes (entrevista a Esteban Kasic).

62 Datos en RU n° 4, Año II, junio de 1983, “Los centros marchando”

Poco antes de realizarse los comicios, el recién designado decano Luka Poduje convocó a la comisión “pro centro de estudiantes” y les dio el acuerdo y el aval para las elecciones, otorgándole un lugar físico para el funcionamiento del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía (CEFA). Ante la nueva situación, los estudiantes llegaron a un consenso para conformar la Comisión Directiva sin necesidad de elecciones. La primera comisión del CEFA quedó compuesta con Esteban Kasic como secretario general, Mario Greco como secretario administrativo, Aníbal Pordomingo en la Secretaría de Hacienda y Daniel Roberto Alí a cargo de la Secretaría de Actas.

En Ciencias Económicas, la facultad más numerosa, acudieron tres listas a las elecciones realizadas el 16 de agosto de 1983. La lista Verde, la Morada y la Celeste. La vencedora fue la primera con 245 votos sobre la lista Celeste, que obtuvo 137, y la lista Morada, 94. La comisión se conformó con Marcelo Cuadrado como secretario general (Verde), Adrián Peppino en Asuntos Académicos (Celeste), Juan Carlos Ponce en Acción Social (Verde), Sergio Scalise en Cultura y Deportes (Morada), Edgardo Montero en Relaciones Públicas y Publicidad (Verde), y Nancy Guirardo en Administración y Finanzas (Celeste).⁶³

El último en concretar los comicios electorarios fue el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CENUP). Las elecciones se dirimieron entre la lista Blanca y la lista Morada. En la primera participaban activistas del peronismo, intransigentes, comunistas y del MR-15, mientras que la segunda estaba compuesta por militantes de la FM e independientes. El triunfo fue para la lista Blanca, y la primera comisión del CENUP estuvo conformada por Gustavo Romero en la Presidencia, acompañado por Eduardo Mata, Eduardo Mariño, Enrique Fra, Horacio Riesco y Silvio Casadío en el resto de las secretarías.

63 Datos en RU n° 5, Año II, septiembre de 1983, “Económicas”. La lista Morada estaba vinculada a la FM mientras que la Celeste al MNR del Partido Socialista Popular (PSP).

Imagen 1. Primera Comisión Directiva del CENUP, período 1983-1984



Fuente: gentileza de Gustavo Romero.

Para la primavera de 1983, todos los centros de estudiantes tenían normalizado su funcionamiento, con el acuerdo de las autoridades de facto. Las elecciones generales de 1983 y el triunfo de Raúl Alfonsín aumentaron las expectativas de una institucionalización mayor de la participación estudiantil en las distintas instancias del gobierno universitario. Esas expectativas incluían diversos objetivos, como la transformación de los contenidos curriculares y los planes de estudios, la regularización y concurso de los planteles docentes, la eliminación de cupos y aranceles mediante el acceso libre, gratuito e irrestricto al sistema universitario de educación pública.

Luchas contra el arancel

Desde 1980, a propósito de la sanción de la nueva Ley Universitaria, la FUA había sostenido reclamos contra las políticas de arancelamiento y cupos de ingreso. El clima de rechazo al intervencionismo militar fortalecía las demandas respecto de la autonomía universitaria

inscripta en la tradición reformista de 1918. La apertura política experimentada desde 1982-1983 amplificó en todo el país los reclamos, movilizaciones y petitorios en contra del pago del arancel.

En ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata y Buenos Aires, donde tenía presencia efectiva la FUA y/o federaciones regionales, y además estaban en proceso de reorganización numerosos centros de estudiantes, se realizaron petitorios con firmas y movilizaciones. Según Seia, en octubre de 1982, una marcha convocada con la consigna “la educación es un derecho, no un privilegio” reunió a 2000 personas en la ciudad de Buenos Aires (2020b: 114). Meses más tarde, en marzo de 1983, la FUA impulsó un plan de lucha nacional con importante repercusión en las ciudades citadas. En Buenos Aires, el Comité Reorganizador de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Centros de Estudiantes, agrupaciones, Cuerpos de Delegados, y la Junta Coordinadora de Ingresantes se movilizaron en dos ocasiones (10 y 22 de marzo) para presentar petitorios, acompañados de nuevas movilizaciones que contaron con una participación de alrededor de 1.000 personas. En esa ocasión, los estudiantes fueron acompañados con una delegación de Madres de Plaza de Mayo que exigía la “aparición con vida de los estudiantes desaparecidos”. Las consignas se mezclaban con canticos que condenaban al ingreso por cupos y se afirmaba “Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar”, entre otras consignas como “No a los cupos de la dictadura”, “Unidos por una universidad nacional y popular”, “Ingreso irrestricto”, “Ni olvido ni amnistía, aparición con vida”, “Hay que luchar por un ingreso popular”, “Examen de ingreso, se va con el proceso”, “Fua, fua, fua, la lucha continúa” (Seia, 2020b: 114-115).⁶⁴

En la ciudad de Córdoba, las protestas iniciadas en el mes de marzo culminaron en octubre con asambleas masivas en las facultades, movilizaciones y la toma del rectorado (Vicente, 2018: 39). Las luchas contra el pago de aranceles funcionaron como instancias aglutinadoras del conjunto de estudiantes, desde quienes ya esta-

64 Siguiendo con la UBA, los aranceles dispuestos se combinaban con cupos de ingreso. Según Cristal, el examen de ingreso de 1983 habilitaba 11.000 vacantes para un universo de 44.884 aspirantes, y finalmente ingresaron 8.065 estudiantes (2017: 2).

ban en la institución como de aquellos que buscaban hacerlo por primera vez. La recolección de petitorios como instrumento legal reconocido por las autoridades interventoras solía dar paso a las movilizaciones, habilitando formas de sociabilidad que sintonizaban con tradiciones y pasados de lucha de la militancia estudiantil.

En la UNLPam, con el impulso de los centros de estudiantes regularizados, los estudiantes ratificaron la decisión tomada en “asamblea general” de no abonar los aranceles correspondientes a 1983, haciendo hincapié en que resultaban “una medida inconstitucional”, al tiempo que denunciaban la acción de servicios de información de distintos organismos del Estado que estaban “infiltrándose en la universidad con el propósito de obtener información sobre quienes integran los grupos estudiantiles que promueven este tipo de iniciativas”.⁶⁵ El posicionamiento estudiantil recibió el apoyo explícito de los partidos políticos pampeanos. El PJ, a través de un comunicado firmado por el Consejo Provincial, hacía público su apoyo “a la lucha emprendida por los estudiantes universitarios de la UNLPam en rechazo al pago de aranceles”.⁶⁶ Desde el PSA se afirmaba que “el arancelamiento universitario constituye un eslabón más con que el Gobierno militar quiso atar al pueblo argentino”, y celebraba que “el movimiento gremial universitario, sistemáticamente castigado por la represión, ha tomado como primera bandera de lucha luego de su reorganización la de no pagar aranceles”. El PC hizo llegar su respaldo a los estudiantes en su lucha “contra el arancelamiento que la dictadura, derrotada en las urnas, impuso en las casas de altos estudios para impedir de esa manera el acceso popular a la educación, y hacer de esta un instrumento más de la dependencia”. El PSP se solidarizó con la lucha estudiantil por la gratuidad de la enseñanza, reivindicando los principios reformistas de 1918,

65 AHP, *La Arena*, 12 de noviembre de 1983. La denuncia sobre el accionar de los “servicios” fue relativamente extendida entre los activistas. Según algunos testimonios *—off the record—*, algunos informantes estaban más o menos identificados, mientras que otros casos no pasaron de la sospecha. A partir de 1984, la denuncia sobre el funcionamiento de los “servicios” convergió con los reclamos por el desmantelamiento del aparato represivo estatal, los cuales, aun en democracia, siguieron más o menos vigentes respecto del control y seguimiento de las militancias políticas.

66 AHP, *La Arena*, 15 de noviembre de 1983.

además, repudió cualquier eventual tipo de “sanciones destinadas a obligar el pago”. El PI consideró que “tanto el arancelamiento como los cupos y los exámenes de ingreso son imposiciones de las clases dominantes para transformar a la universidad en elitista y consolidar los esquemas de poder que impidan la liberación”. También la UCR respaldó la movilización estudiantil y rechazó la actitud adoptada por el rector normalizador, quien “desconociendo la voluntad popular expresada a través del sufragio del 30 de octubre, pretende aplicar sanciones, con retiro de obra social, uso de bibliotecas y autorización de exámenes a quienes no cumplen con una reglamentación de hecho ya derogada”. En esa línea, la UCR recordaba que el ministro de Educación de la Nación había reconocido esos derechos constitucionales, “reiterando lo sostenidos en la plataforma electoral que es tanto el ingreso irrestricto como el no arancelamiento”.⁶⁷ Finalmente, desde el rectorado de la UNLPam se decidió postergar ese pago, posponiendo la resolución del conflicto para el año próximo.

Imagen 2. Movilización estudiantil contra el pago de la última cuota anual del arancel universitario, noviembre de 1983



Fuente: archivo del diario *La Arena*, PEU, Resol. C. S. N° 847/12.

⁶⁷ AHP, *La Arena*, 16 de noviembre de 1983.

Como hemos referido al inicio del capítulo, la experiencia del poder terrorista afectó de manera notoria los procesos de retrasmisión del movimiento estudiantil, a partir de la ofensiva conservadora que, desde mediados de la década de 1970, buscó desmembrar los lazos de solidaridad y pertenencia identitaria constituyentes de las propias militancias estudiantiles. Pese a ello, los jóvenes estudiantes fueron, en su mayoría, un elemento de importancia en la gestación de un clima antidictatorial y antiautoritario que reclamaba el retorno de la democracia. Bajo ese ímpetu, se organizaron al interior de las universidades para reclamar por la recuperación de sus ámbitos específicos de intervención política. En ese itinerario, en la UNLPam se reconstruyeron las agrupaciones estudiantiles en línea con aquellas que reconocen existencia previa a 1976, como el caso de la FM, el MOR, el MNR y la JUP, no registrándose presencia de aquellas con orientación izquierdista que habían gravitado en la década previa, como el caso del FAUDI y la TUPAC. En todo caso, parte de ese legado fue recuperado con la formación de la JUI.⁶⁸

Con el horizonte de la recuperación de la democracia, destaca el hecho de que las agrupaciones se decantaron por una orientación que penduló del centro a la izquierda, a diferencia de otras universidades que mostraron la formación de agrupaciones que oscilaron en el sentido opuesto. En ese aspecto, reside una clave de explicación a cierta coincidencia general respecto de la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto de las organizaciones, más allá de las identificaciones partidarias o simpatías políticas. Las luchas contra los aranceles y los procesos de elaboración de estatutos y procedimientos eleccionarios en la recomposición de los centros de estudiantes así lo indican.

Algunos de los elementos referidos creemos que son aspectos destacables que mostró la reorganización estudiantil, aun en dictadura, de cara a lo que fueron otros procesos más amplios de apertura democrática, como analizaremos en los siguientes capítulos.

68 En el capítulo IV abordaremos con mayor especificidad la emergencia y trayectoria de las agrupaciones estudiantiles de la UNLPam durante nuestro período de estudio.

Capítulo III. La universidad en democracia, entre el optimismo y el desencanto

Con el triunfo electoral consumado en diciembre de 1983, el proyecto de gobierno del Dr. Raúl Alfonsín asignó a las universidades nacionales un papel relevante en la reconstrucción del país, no solo por el peso educativo en la capacidad de recomposición del tejido social sino como instancias de saber productoras de la masa crítica necesaria para avanzar en el proyecto modernizador de una sociedad que se juzgaba estancada. Apenas asumió el poder institucional, Alfonsín decretó la intervención de las casas de estudios mediante el Decreto N° 156/83 y ordenó la puesta en vigencia de los estatutos suspendidos desde 1966 por el Gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía.

En cierto modo, el modelo de universidad científica desplegada entre 1956 y 1966 se constituyó en una guía de la política gubernamental en la educación superior. El Gobierno nacional asumió públicamente “el compromiso de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, garantizando la libertad académica, como un modo de asegurar a la universidad su misión creadora, como institución abierta al pueblo afianzando el principio de igualdad de oportunidades y posibilidades” (Buchbinder y Marquina, 2008: 23). De ese modo, en línea con las tradiciones reformistas de 1918, se restableció el autogobierno mediante la representación por claustros, se reconoció el derecho a un centro de estudiantes por facultad, a una federación de centros estudiantiles por universidad y a la vigencia y legalidad de la Federación Universitaria Argentina.⁶⁹

69 AHP, *La Arena*, 15 de diciembre de 1983.

A nivel institucional, las relaciones entre Estado y universidad se caracterizaron por la mediación de filiaciones partidarias en la designación de las autoridades interventoras, al mismo tiempo que ese vínculo incidió en los realineamientos internos de la comunidad universitaria. La designación de los rectores, y en menor medida decanos y otros cargos institucionales, fueron negociados, en general, con las dirigencias locales de la UCR. Sin embargo, hubo excepciones, como el caso del interventor de la UBA, Francisco Delich, en quien Raúl Alfonsín personalmente depositó su confianza para que dirigiese la universidad nacional más grande del país y cuya designación se tramitó en el círculo más íntimo del presidente electo.⁷⁰

En la UNLPam, las deliberaciones sobre la reorganización institucional se iniciaron tiempo antes de diciembre de 1983. Al respecto, desde la Comisión de Educación de la UCR Pampeana “fueron convocados para proponer sus sugerencias los docentes universitarios que el radicalismo tiene tanto en esta ciudad [refiere a Santa Rosa] como en General Pico, y los estudiantes nucleados en Franja Morada, también de ambas ciudades”.⁷¹ No sabemos cuál fue el peso efectivo o el aporte final en la elección del candidato, pero sí resulta factible asegurar que la postulación fue consensuada al interior de la UCR, sobre la base de dos o tres posibles candidatos. En ese sentido, el comité provincial propuso la designación del contador Leopoldo Rómulo Casal, la cual fue aceptada y efectivizada días más tarde mediante el Decreto N° 228/83 firmado por el presidente de la nación.⁷²

Lo mismo ocurrió con los decanos interventores, solo que allí incidieron en las negociaciones actores del claustro de profesores y

70 Francisco Delich era un destacado intelectual que, desde su exilio en México, había colaborado estrechamente en el armado del proyecto alfonsinista.

71 AHP, *La Arena*, 28 de noviembre de 1983.

72 El flamante rector normalizador de la UNLPam asumió el 29 de diciembre de 1983. AHP, *La Arena*, 30 de diciembre de 1983. Leopoldo Rómulo Casal era un viejo dirigente de la UCR con una vasta participación en la esfera estatal. A fines de la década de 1950 fue contador de la provincia y en los años siguientes se desempeñó como asesor del Gobierno en temas vinculados a la planificación para el desarrollo. Además de su trayectoria en la UCR, fue síndico en la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Folco, 2008: 109).

estudiantes, ya sea para dar su conformidad, objeción o para abstenerse de participar en forma deliberada. De ese modo, según informase oportunamente el rectorado de la UNLPam, en los últimos días de febrero de 1984, el ministro de Educación de la nación, Dr. Carlos Alconada Aramburú designó al Ing. Héctor Eduardo Gómez como decano de la Facultad de Agronomía, al Ing. Nicolás Tassone a cargo de la Facultad de Ingeniería, al profesor Héctor Iervasi como responsable de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al contador Carlos Sáez en Ciencias Económicas y a la profesora Ana Delia Gatica de De Athayde en la Facultad de Ciencias Humanas, quedando pendiente de resolución el responsable de la Facultad de Veterinarias.⁷³

Tras conocerse la postulación y designación de la nueva decana de la Facultad de Ciencias Humanas, el CEFCHu elevó una nota en la que se oponía “terminantemente a la mencionada designación por haber sido la profesora De Athayde decana y vicedecana de nuestra facultad durante el anterior Gobierno militar”. La nota continuaba afirmando que el CEFCHu, pese a su voluntad de mantenerse al margen del nombramiento,

... no puede hacerlo en este momento ante la designación. Durante años la profesora ahora designada ejerció las funciones de vicedecana de la Facultad e incluso llegó a desempeñarse interinamente en el Decanato, con la aceptación que ello significaba de una serie de irregularidades que se sucedieron durante el anterior gobierno.⁷⁴

Días más tarde, el CEFCHu recibió el apoyo público del CENUP mientras que el 4 de marzo un conjunto de docentes hizo pública en los diarios locales una solicitada de apoyo a la nueva decana, por considerar que “a lo largo de su honesta carrera docente”, ha adquirido “más que méritos suficientes para lograr el apoyo y el respe-

73 AHP, *La Arena*, 28 de febrero de 1984. Meses más tarde se designó en esa unidad académica al Dr. Manuel Fernando Miranda.

74 AHP, *La Arena*, 2 de marzo de 1984. El CEFCHu había declarado prescindencia ante los nombres que se estimaban como posibles decanos normalizadores, entre ellos, el profesor Miguel Guerin.

to de todos aquellos que la hemos tenido como colega”.⁷⁵ El conflicto no se extendió y la profesora designada se mantuvo como decana, pero dejó al descubierto lo que sería un activo posicionamiento de los estudiantes respecto del “continuismo” y, posteriormente, la revisión de la plantilla docente y de los concursos realizados y por hacer.

La normalización institucional prosiguió con la confirmación de los consejos académicos consultivos y con la designación de secretarios en cada una de las facultades.⁷⁶ La Resolución N° 096 del 27 de abril de 1984 estableció las pautas para la conformación del Consejo Superior Provisorio de la UNLPam, integrado por el rector, los decanos, siete profesores, tres auxiliares docentes, tres estudiantes y un no docente. En representación de los estudiantes estuvieron Daniel Alí, Humberto Allende y José Ambroggetti, designados provisoriamente como delegados de la FUP, que aún no había formalizado su creación y lo haría en los próximos días (Asquini, 2008: 324).

Uno de los principales desafíos que debió enfrentar la nueva gestión normalizadora de la UNLPam “fue montar una nueva estructura normativa que inscribiera a la institución y sus actores en el proceso democratizador del país” (Folco, 2008: 113), con el horizonte de recuperar su función en el tejido social pampeano. En junio de 1984, el Congreso de la Nación ratificó el Decreto N° 154/83 y dictó la Ley Universitaria N° 23068, derogándose la Norma de Facto N° 22207. La nueva norma establecía 18 meses de plazo para efectivizar la normalización de las UU. NN. Como afirman Pablo Buchbinder y Mónica Marquina, la dictadura legó una universidad “vacuada de significación social”, con una pobre producción en materia de investigación, con el exilio creciente de muchos científicos y académicos y con una notoria formación de profesionales y docentes poco actualizados. En ese contexto, la (re)

75 AHP, *La Arena*, 4 de marzo de 1984. Entre los firmantes se encontraban Lucio Adolina, Aldo Reda, Marta Alessio, Oscar Nocetti, Nélida Oyhanarte, Ilda Barroso de Casalegno, Susana Montero de Gavazza, Marta Rousseu Salet, Edit Gregoire, Martha Vega, Miguel Motzo, María del Carmen Trouvé, Susana Rodríguez, Mabel Tours, Violeta Díez, María Picca y una veintena de colegas más.

76 Para la consulta en detalle sobre los integrantes de los consejos académicos y del proceso institucional de normalización, ver Folco (2008).

apertura de la universidad pública experimentó una demanda creciente de acceso por parte de nuevas camadas de jóvenes que volcaban su confianza en la institución, erigida en símbolo del nuevo tiempo democrático. Esa situación presentó un desafío “tanto en materia edilicia como de recursos humanos capaces de asumir la actividad docente con niveles adecuados de calidad” (2008: 26).

La agenda estudiantil

Entre 1982 y 1986, estudiantes activistas de todo el país lucharon por el ingreso irrestricto a la universidad pública, por la eliminación de los resabios procesistas y por la autonomía plena de las casas de estudios, lo que inevitablemente los enfrentó a los interventores designados por el PEN y a las políticas emanadas desde el Ministerio de Educación. Paradójicamente, podría sostenerse que el activismo estudiantil post Malvinas construyó una suerte de agenda común que incluía el pedido de intervención de las universidades a fin de despojarlas, como forma transicional, de “la herencia procesista”. El tránsito hacia las formas democráticas de gobierno buscaba recuperar aspectos del ideario reformista de 1918, mediante la vigencia plena del gobierno tripartito y la libertad de cátedra, además de la anulación de la Ley Universitaria militar y los concursos de profesores promovidos por la dictadura. Asimismo, debían garantizarse los derechos gremiales de los distintos actores de la comunidad universitaria y fundamentalmente el ingreso público e irrestricto de estudiantes, quizás el punto más urgente a resolver en los primeros días del nuevo Gobierno nacional.

Los reclamos contra los aranceles y cupos de ingresos sostenidos desde 1980 se amplificaron a fines de 1983. En la UNLPam se dieron avances favorables en el comienzo del ciclo lectivo de 1984, a partir de la Resolución N° 031/84 firmada por el rector Rómulo Casal en la que se derogaba la Resolución N° 015/81 que establecía el marco regulatorio del arancelamiento.⁷⁷ En el mismo sentido, mediante Resolución N° 033/84 se concedía el ingreso directo a:

77 La Resolución N° 015/81 había sido dispuesta por el rector de facto Marcelo Iván Aguilar, como parte de la implementación de la Ley Universitaria N° 22207 sancionada el año anterior.

a) Los graduados con título universitario en cualquier universidad del país o que hayan revalidado el título extranjero del mismo nivel; b) quienes tengan aprobado el primer año de alguna carrera que tenga como materias del curso de apoyo para el ingreso las mismas que se exigen para aquellas en las cual se inscriben; c) quienes se encuentren en las condiciones previstas en b) y no sean actualmente alumnos de esta universidad, siempre que no haya transcurrido un número de años superior al que resulte de adicionar uno al número que corresponda al curso aprobado.⁷⁸

La solución propuesta desde la institución podría considerarse intermedia respecto de los reclamos estudiantiles, en la medida en que anulaba aranceles, cupos y fijaba pautas a futuro, pero no intervenía en el curso de ingreso necesario para acceder formalmente a la carrera elegida. Esa situación fue común a nivel nacional y las distintas UU. NN. ofrecieron soluciones al tema en esa línea. Las autoridades educativas nacionales sostenían que el ingreso irrestricto no era posible en 1984, aduciendo dos argumentos centrales: el curso de ingreso resultaba necesario para nivelar los saberes de los aspirantes y las condiciones de infraestructura edilicia, material y financiera no alcanzaba para contener la creciente matrícula estudiantil.

Pese a ello, los estudiantes mantuvieron altos grados de movilización para con sus demandas. En la UBA hubo conflictos notorios en carreras como Psicología, Sociología y Filosofía y Letras, todas facultades con presencia fuerte de agrupaciones estudiantiles opositoras al radicalismo, como el caso de la JUI. Una situación análoga ocurrió en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en distintas regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en las que las direcciones estudiantiles correspondían a la FM. En la provincia de Santa Fe, los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) acordaron con los decanos el ingreso de todos los aspirantes, pero esa decisión no fue avalada por el ministro Alconada Aramburú, cuyo secretario de Políticas Universitarias era Hugo Storani, tío de Federico Storani, histórico “Coordinador” de la JCN

78 AHP, *La Arena*, 23 de febrero de 1983.

e integrante de los círculos más cercanos al presidente Alfonsín (Beltrán, 2013: 211-212). La tensión de las autoridades educativas respecto de los reclamos y reivindicaciones estudiantiles colocaron a la militancia de la FM –la mayor fuerza estudiantil del país– en una situación difícil de sostener para con sus bases, aliados políticos y activismo en general. Durante todo el período alfonsinista, la FM debió cargar con la doble apuesta de liderar al conjunto estudiantil y al mismo tiempo hacer equilibrio con los posicionamientos intrapartidarios y la línea política del Gobierno nacional, situación que sería definitiva en el derrotero posterior de la FM.

En la UNLPam, los centros de estudiantes se pronunciaron a favor del ingreso irrestricto, reivindicando el ideario reformista y recordando las promesas de campaña del radicalismo. Los jóvenes intransigentes se manifestaron a través de un comunicado del partido en el que sostenían que el ingreso irrestricto apuntaba al “principio de universidad popular” que el PI sostenía indisolublemente ligado “al proyecto de país con participación plena de su pueblo, camino a la liberación y a la construcción de una sociedad nueva”. El PC resaltaba la lucha estudiantil, “pues de su éxito depende en gran parte la futura orientación de lo que debe ser la universidad para que se inserte en el necesario proceso de liberación nacional”. En línea, la Juventud Peronista destacaba que “el ingreso restrictivo sería una traba más que imposibilitaría el ingreso a los estudios superiores de importantes sectores de la sociedad”.⁷⁹

Por otra parte, la FM presentó un plan de cinco puntos para regular el “sistema de ingresos” a la universidad, entendiendo que era necesario comenzar a analizar propuestas para “lograr un sistema educativo mejor, necesario para una nueva nación libre, justa e igualitaria”. De ese modo, la reestructuración del sistema universitario debía pasar necesariamente por “una reorientación de las carreras, una reforma de los planes de estudios y regímenes de correlatividades, además de garantizar la actuación de los docentes idóneos al frente de la casa de estudios”. La propuesta de los cinco puntos establecía que los aspirantes ingresaran por promoción, solo

79 AHP, *La Arena*, 28 de febrero de 1984.

con la aprobación de los exámenes parciales; en caso de salir mal en alguno de ellos, los estudiantes tendrían la opción de rendir un examen final antes del comienzo de las clases; si rindieran mal ese examen, podían iniciar la carrera de modo condicional hasta que regularizaran su situación; para ese fin, se agregarían dos mesas de examen (mayo y julio); por último, pasada la fecha del segundo recuperatorio, las materias cursadas pasarían a ser correlativas de las del curso de nivelación.⁸⁰

En un clima alborotado, los días se sucedieron con asambleas estudiantiles en las distintas facultades y conversaciones abiertas con los decanos recién designados. Mediante una comisión estudiantil, se entregó un petitorio con cientos de firmas y se propuso a las autoridades que el ingreso, por ese año, fuera no eliminatorio, enfatizando “la amplia capacidad física de las instalaciones universitarias”. Sin embargo, la negativa de las autoridades se mantuvo firme y los estudiantes decidieron rendir el examen de ingreso “bajo protesta”.⁸¹ Finalmente, el rectorado de la UNLPam dispuso una serie de pautas que flexibilizaba el ingreso e introducía la materia “Constitución Nacional” de manera común a los ingresos a todas las carreras.⁸²

Otro de los aspectos espinosos de la transición fue “la herencia procesista” recibida respecto del claustro docente. Desde la implementación de la Ley Universitaria en 1980, las autoridades militares buscaron redefinir las bases normativas de las universidades nacionales. En la UNLPam, se creó una “comisión de redacción de pro-

80 AHP, *La Arena*, 1 de marzo de 1984.

81 AHP, *La Arena*, 6 de marzo de 1984.

82 AHP, *La Arena*, 5 de marzo de 1984. La adopción de materias “comunes” a los ingresos a las carreras fue una estrategia que se utilizaron en diversas universidades del país. El caso más notorio fue el de la UBA, en la que las materias “comunes” sirvieron de base para la implementación del Ciclo Básico Común (CBC) a partir de 1985. El CBC consistía en dos materias comunes —Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado, e Introducción al Conocimiento Científico— y cuatro de orientación por áreas, vinculadas a la carrera elegida. En el caso de la UNLPam, desde 1985 el único requisito para ingresar a alguna carrera de la institución fue la aprobación del nivel medio educativo (secundario), aunque quedaba a cargo de las facultades la implementación de cursos nivelatorios o propedéuticos. En 1987, la Resolución N° 03/87 del Consejo Superior dejó sin efecto el dictado de la materia “Constitución Nacional” y quedó sin ningún tipo de restricción el acceso a los estudios superiores.

yecto y estatutos de la universidad” cuya propuesta fue finalmente aprobada el 14 de junio de 1983. A partir de allí se autorizaban llamados a concursos, pero cuya sustanciación fue congelada por la aplicación del decreto interventor de las casas de estudios dictado por el presidente Alfonsín a días de asumir la presidencia.⁸³

Sin embargo, en otras universidades del país, los proyectos de concursos docentes habían avanzado de manera más rápida. Como problema común a resolver por todas las UU. NN., la junta ejecutiva de la FUA aprobó “un proyecto global de impugnación de los casi 2.000 cargos docentes cubiertos luego de los concursos llamados por la dictadura en 1982 y 1983”.⁸⁴ La medida buscaba posicionarse como estrategia frente a la política de solicitud de impugnación y revisión caso por caso que impulsaban los interventores universitarios, tal la estrategia definida desde el ministerio dirigido por Alconada Aramburú. Los planteos de la FUA podrían sintetizarse en torno a tres ejes: el armado de las listas en cada facultad del país de todos los docentes con cargos concursados bajo la Ley de Facto N° 22207, la solicitud de anulación de los mismos a través de la participación en las comisiones revisoras que tenían a cargo las impugnaciones, y el estímulo a la implementación de cátedras paralelas, además denunciar la situación de los profesores “continuistas”. Según una declaración de dirigentes de la FUA:

De nada sirve la lucha del movimiento estudiantil [...] si choca reiteradamente con un claustro docente que podemos sospechar de dogmático, elitista y mediocre; de nada sirve el gobierno de los claustros cuando el claustro preponderante [...] está conformado según normas discriminatorias y regresivas inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional.⁸⁵

Vale destacar que, aún con el clima de reconstrucción democrática que reinaba desde finales de 1982, la presencia articuladora

83 La normalización universitaria incluyó la derogación de la Ley Universitaria y su reemplazo por la Ley N° 23068. Sobre ese marco normativo, la UNLPam derogó el Estatuto aprobado en 1983 y confeccionó un nuevo aprobado según Resolución N° 073/86.

84 *El Periodista de Buenos Aires*, 15 de septiembre de 1984.

85 *El Periodista de Buenos Aires*, 15 de septiembre de 1984.

de la FUA se restringía a las universidades más grandes del país, mientras que su vínculo con el resto de las universidades nacionales era más bien escaso y difuso, y recién comenzó a aceptarse luego de su efectiva normalización en julio de 1984, en el congreso realizado en la ciudad de Tucumán.⁸⁶

No obstante, las líneas de acción planteadas por la FUA funcionaron como una guía y apoyo general a los posicionamientos estudiantiles de cada universidad, en especial de aquellas más pequeñas y/o alejada de los centros de poder, como el caso de la UNLPam. A partir de 1984, con la efectivización de los consejos provisorios (Directivos y Superior) se conformaron las comisiones revisoras en las que se integraron los estudiantes, tanto para la revisión de los concursos realizados como aquellos por realizar. En efecto, la revisión se complementó con el llamado de nuevos concursos, de carácter público, de antecedentes y por oposición. En el país, fueron sustanciados alrededor de 15.000 entre 1984 y 1988, lo que redundó en una reconversión notoria de los planteles docentes de las universidades públicas. La renovación se completó con el regreso de profesores exiliados y/o cesanteados que retornaron al país y de quienes, permaneciendo en el país, se reincorporaron al *staff* docente (Buchbinder, 2005). Muchos cargos menores (ayudantes, jefes de trabajos prácticos) sirvieron para que jóvenes egresados se incorporaran a las cátedras que, en pocos años, vieron transformar notoriamente sus perfiles.

En la UNLPam, la convocatoria para revisar y renovar los planteles docentes fue vivida con gran entusiasmo y expectativas por el grueso de los actores de la comunidad universitaria, en la medida en que habilitaba la posibilidad de dotar de contenido democrático los estudios superiores, al fortalecer y favorecer una enseñanza que se alejase de la impronta conservadora y “oscurantista” imprimida por las gestiones militares. En términos de gestión, las autoridades interventoras tenían la potestad de elegir qué cátedras serían destinatarias

86 Entre 1980 y 1982, los vínculos se reducían a contactos de dirigentes nacionales con sus pares locales, a partir de la mediación y/o vinculación partidaria, como el caso de la FM y el MNR. La “bajada” de las líneas generales de la FUA y de las agrupaciones nacionales incluía asesoramientos, folletería y actividades de prensa y difusión en los medios locales.

de concursos, de modo que las expectativas democratizadoras se intersectaron con las disputas abiertas en las luchas por la ocupación de espacios que tuvieron al claustro docente. Aun así, primaron posiciones consensualistas; los graduados aseguraron su participación y los estudiantes integraron los jurados con voz y voto, aunque con algunas particularidades: podían expedirse sobre la clase pública y la entrevista, pero no sobre los antecedentes y la investigación.

A pesar de ello, los estudiantes no dejaron de tener una mirada crítica y de vigilancia hacia los mecanismos procedimentales. Entre otras cosas, por los márgenes de maniobra con que contaban las autoridades y el claustro docente. En octubre de 1984, en los albores del proceso de concursos, desde la *RU* se advertían una serie de puntos que mostraban la situación de ambigüedad que podía derivarse del escenario vigente. Allí alertaban sobre “la urgencia por convocar a concursos cuando aún no han sido reincorporados los docentes prescindidos, cesanteados o excluidos del sistema educativo por razones políticas y/o gremiales”. En el caso de quienes habían retornado a sus puestos de trabajo, estaban en situación de interinos o suplentes, “pero de ninguna manera, y en forma generalizada, se les ha reconocido la antigüedad correspondiente a los años que el proceso de facto los condenó al ostracismo”.⁸⁷

En su alegato, la *RU* abogaba por una discusión amplia y democrática que incluyese a todos los actores de la comunidad universitaria e incluso a otros externos, pero ligados de manera cercana a la institución, en la que pudiese discutirse “a qué universidad apuntamos en este proceso que queremos que sea de cambio hacia la democracia real y no formal” (idem). De modo que, según el punto de vista de la revista, debían tener prioridad aquellas cátedras que resultaban vertebradoras de las carreras. Asimismo, se reclamaba la participación efectiva de las asociaciones gremiales en la discusión, proposición y objeciones de los procesos de concursos en la medida en que allí se establecía qué “reglas de juego han de tener que enfrentar [los docentes] para ejercitar legalmente su derecho al tra-

87 *RU* n° 10, año III, octubre de 1984: “Concursos docentes: una cuestión a resolver”. Hasta mediados de la década, se sostuvieron los reclamos de los “prescindidos”, que poco a poco fueron solucionándose.

bajo” (ídem). El testimonio de Gustavo Romero ofrece algunos indicios de situaciones vividas durante el proceso, cuando afirma que:

... en los concursos tuvimos de todo [...] tuvimos varios problemas, uno de ellos era sacar de la universidad a todos los docentes que habían apoyado a la dictadura, en muchos lugares se logró, en otros no. Yo me acuerdo de dos o tres docentes que logramos que no se haga el concurso. Eran fundamentalmente tipos que venían de La Plata, justamente por el vínculo que tenían con la dictadura (entrevista a Gustavo Romero).

En sintonía, Diana Moro recuerda que en la Facultad de Ciencias Humanas estaba “el caso de Luisa Pérez Demonti”, profesora de Literatura Iberoamericana que había denunciado a colegas en el Colegio Nacional durante los años iniciales de la dictadura, en particular a Susana Berdasco y al contador Carlos Sáez, y agrega: “Bueno, con los testimonios de estas personas [Berdasco y Sáez] nosotros logramos que a esta persona [Pérez Demonti] se le impidiese presentarse a concurso por la vía de la recusación” (entrevista a Diana Moro).

Por otra parte, la iniciativa institucional de regularizar los planteles docentes puso en contacto, circulación y diálogo a numerosos científicos e intelectuales de prestigio que se relacionaron con sus pares de universidades más pequeñas o alejadas de los centros urbanos más grandes. En parte debido a que se buscaba imprimir un tono de excelencia y profesionalización académica, y también porque en el medio local, según se juzgaba, no existían los suficientes profesionales con los requisitos y antecedentes de fuste “considerados necesarios” para sostener la demanda de jurados. De ese modo, la presencia de jurados externos —muchos de ellos que habían regresado del exilio— redundó en actualizaciones bibliográficas, pedagógicas y científicas en general. No obstante, las limitaciones financieras y de disponibilidad de jurados externos coadyuvaron a que se dieran situaciones particulares dentro del claustro docente y que, en distintas oportunidades, la terna evaluadora fuese cubierta con referentes locales. Gustavo Romero recuerda:

... una situación donde un docente quería que se haga el concurso, pero él elegía a los jurados, bueno, donde detectábamos eso lo frenábamos [...] en muchos casos lo logramos, en otros no, lo que pasa es que nosotros éramos estudiantes, y a veces no te enterás o te enterás cuando ya es tarde” (entrevista a Gustavo Romero).

A pesar del esmero en la vigilancia procedimental por parte de los estudiantes, el conocimiento y la experticia de los funcionarios burocráticos por parte de camarillas docentes con años en la institución, colocaba a ciertos grupos en una situación de ventaja, aún más cuando se conjugaba con la eventual mayoría docente en los ámbitos de gobierno (consejos directivos) por los que debía pasar la aprobación de los concursos.

Por otra parte, los llamados a cubrir cargos por concursos tenían alcance nacional y debían ser publicitados en la prensa regional y nacional, lo que en muchos casos resultaba una erogación significativa para las arcas de las UNLPam. El marco legal establecido durante la normalización establecía que debía contarse con el 51% de los docentes concursados para efectivizar el funcionamiento autónomo de la casa de estudios, mediante la implementación de los distintos órganos de gobierno. Sin embargo, no todas las facultades de la UNLPam llegaron a ese porcentaje, en muchos casos por cuestiones de tiempo y de burocracia, de modo que se acordaron excepciones para poder normalizar las unidades académicas (Folco, 2008: 117). Pese a ello, la casa de estudio realizó un importante esfuerzo en procura de los objetivos. A modo de ejemplo, una convocatoria realizada a fines de agosto de 1985 alcanzaba a “193 cargos que representan aproximadamente el 50% de los que tiene la casa de estudios”.⁸⁸ Durante 1986 –en abril finalizó la normalización universitaria con la elección de autoridades– y 1987 continuaron los llamados a concursos y designación de profesores, aunque con una tendencia a la baja y a la discontinuación. Hacia 1988 el proceso decayó hasta su parálisis en función de los problemas presupuestarios que atravesó a la UNLPam y al conjunto de las universidades nacionales.

88 AHP, *La Arena*, 29 de agosto de 1985.

Otro de los aspectos inmediatos que debió enfrentar la gestión normalizadora y que los estudiantes asumieron como propia fue el reclamo por la devolución de los edificios universitarios cedidos a fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. En un comunicado público de la entonces Juventud Peronista Universitaria (JPU), se reclamaba la devolución de las propiedades “ocupadas por organismos de las Fuerzas Armadas y organismos de Inteligencia, para ser destinados a residencias estudiantiles”.⁸⁹ En el mismo tono se habían manifestado el CEFCHu y el CENUP. La exigencia de restitución edilicia encarnaba diferentes motivaciones. En principio, era un reclamo compartido por toda la comunidad universitaria a partir de las restricciones de infraestructura heredadas. Sin embargo, para las organizaciones estudiantiles allí se concentraba la necesidad de un corte y diferenciación con el pasado dictatorial. El edificio conocido como “El Palomar” –en la calle Mansilla 178– había sido la antigua sede del rectorado en tiempos de la nacionalización, devenido luego en un espacio donde se efectuaron tareas de inteligencia y control por parte de Gendarmería Nacional, en muchos casos sobre los propios estudiantes. Los reclamos incluían otro inmueble cercano –en la calle Quintana 253– donde había funcionado el Destacamento de Inteligencia del Comando en Jefe del Ejército.⁹⁰ Desde ambos espacios se habían pergeñado la persecución a activistas de diversa índole. En octubre de 1984, la *RU* publicó un extenso artículo que repasaba la historia de la cesión de los inmuebles y se exponía una mirada proyectiva sobre las necesidades y deberes de una “universidad democrática y al servicio de la liberación”:

Opinamos que uno de los elementos que no debemos descuidar en la tarea de normalizar y democratizar nuestra universidad es la de desarrollar un importante papel de extensión, de manera de acrecentar el área de influencia de la UNLPam, en cuanto a zonas y sectores de la población. Elementos que contribuiría a conformar el carácter popular de esta. Pero este carácter exige

89 AHP, *La Arena*, 20 de febrero de 1984.

90 “El Palomar” se ubicaba en la calle Mansilla N° 178, nombrado así por su forma arquitectónica. El otro inmueble se hallaba a unas 5 cuadras de distancia.

por sí mismo la necesidad de preparar una infraestructura adecuada a esta exigencia.⁹¹

Finalmente, el 6 de noviembre de 1984 se realizó la devolución institucional del inmueble, ante escribano público, y con la asistencia al acto de las autoridades de la UNLPam y de los centros de estudiantes.⁹²

Representaciones estudiantiles: listas, agrupaciones y espacios institucionales

Con los procesos de normalización institucional en marcha, los estudiantes se integraron en los consejos provisorios desde mayo de 1984 y meses más tarde se realizaron las segundas elecciones de centros de estudiantes, esta vez ya en democracia y en absoluta libertad. A diferencia de 1983, cuando las listas fueron conformadas a partir de acuerdos de unidad entre simpatizantes de diversas corrientes, activistas y estudiantes en general, el año 1984 mostró un mayor perfil público de las agrupaciones partidarias.

En la Facultad de Ciencias Económicas, la alianza entre la FM y el MNR se impuso a la lista integrada por sectores cercanos a la JUP, que habían ganado el año anterior. Esa alianza se mantuvo estable durante los años siguientes convirtiéndose en un bastión clave para ambas agrupaciones. La Facultad de Agronomía mantuvo el rasgo que había mostrado el año anterior y siguió al frente la agrupación “Unión de estudiantes de la Facultad de Agronomía”, con una presencia estable en sus filas de la FM y el MR-15. Un caso particular resultó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la que se presentaron cuatro listas: la lista 1 “Arturo Jauretche”, ligada a la JUP e integrada por Gustavo Romero (presidente), Claudia Forgiione (secretaría general), Horacio Riesco y Marcelo Pessino como delegados, José Gobbi (tesorero) y Marcela Mezquida, Claudio Godio y Sandra Carlino como vocales. La lista “Evolución”, liderada por la JUI, postulaba a Eduardo Mata a la presidencia y a

91 RU, año III, n° 10, “Por la recuperación de nuestros edificios”.

92 AHP, *La Arena*, 7 de noviembre de 1984.

Anahí Dandlen en la secretaría general, León Nicanoff y Enrique Fra como delegados, María de los Ángeles Irrazabal (tesorera) y Osvaldo Giacomelli, Claudio Santos y Claudia Araujo como vocales. La agrupación Franja Morada proponía a Enrique Bogado como presidente y a María Martinengo como secretaria general, el tesoro era Leonardo García y los delegados Silvio Casadío y José Barbona, finalmente Conrado Ducó, Alejandra Pérez y Fabián Crespi se postulaban como vocales. Por último, la “Agrupación programática 9 de julio” presentaba la lista 4 y postulaba de presidente a Héctor Colombato y a Héctor Pieraligi en la Secretaría General, mientras que Velia Bazán y Marcelo Saracho lo hacían como delegados, Ramón García como tesorero y Alejandra Pablo, Celia Traverso y Julián Miokovich como vocales.

Al momento de la elección, la lista 4 fue impugnada por irregularidades en la documentación y no pudo participar de los comicios. La elección fue muy reñida entre franjistas e intransigentes, definiéndose a favor de los primeros por un solo voto (70 a 69), más atrás quedó la “Jauretche” con 40 votos. En razón de la paridad entre las primeras, las agrupaciones decidieron de común acuerdo compartir la conducción del CENUP, bajo la presidencia de Eduardo Mata.⁹³

Otro caso particular se dio en la Facultad de Ciencias Humanas, a partir de las desavenencias en la conducción del centro de estudiantes que experimentó la lista “Naranja”. Pocos meses después de ganar las elecciones en mayo de 1983, la lista tuvo una crisis interna que dejó relativamente acéfala la conducción del CEFCHu. Ante esa situación, asumieron su dirección algunos referentes de la lista “Celeste”, cercanos al MR-15, quienes habían resultado derrotados en los comicios electorales. Con esos antecedentes, en 1984 se presentaron dos listas, una encabezada por una alianza conformada entre el MR-15, la JUI y el MOR —que buscaba ratificar una conducción que había asumido a mitad de camino— que postulaba a Sergio Maluendres para la Secretaría General, a Susana Badillo para la Secretaría de Acción y Asuntos Académicos, a Luis Díaz para la

93 AHP, *La Arena*, 25 de agosto de 1984.

Secretaría de Acción Social, a Beatriz Cossio para Cultura y a Ana Delmas para la Secretaría de Finanzas. Como contrincante aparecía nuevamente la lista Naranja, rebautizada como “Integración”, a partir de los acuerdos sellados entre adherentes de la JUP y de la anterior conducción del centro de estudiantes que se habían retirado de ella. La lista proponía a Griselda Giuliano para la Secretaría General, a Héctor Chianetta para la Secretaría de Finanzas, a Analía Melich para Acción Social y a Silvia Yasul y Javier González para Cultura. La victoria correspondió a Integración, con 136 votos sobre 126 de los Celestes, de modo que la comisión directiva quedó conformada con Griselda Giuliano en la Secretaría General, Susana Badillo en Asuntos Académicos, Héctor Chianetta en Acción Social, Sergio Maluendres en Cultura y Analía Melich en Finanzas. La ajustada votación tiene una posible respuesta, que se desprende del relato de Sergio Maluendres, de la lista Celeste, al recordar los hechos en clave anecdótica: “[Nosotros] perdimos por un hecho particular. En una asamblea se decidía si votaban los estudiantes de primer año o no, nosotros nos opusimos y perdimos y votaron los estudiantes de primer año que claramente nos castigaron un mes después” (entrevista a Sergio Maluendres).

En términos generales, la renovación de autoridades mostró el fortalecimiento de la presencia de la FM en las conducciones de los centros de estudiantes de Ciencias Económicas, Agronomía y, en menor medida, Ciencias Exactas y Naturales. La JUI se posicionó como segunda fuerza a partir de su performance en Exactas y Naturales y en la alianza de la Facultad de Ciencias Humanas. La JUP mantuvo su presencia en Humanas y en Exactas y Naturales, mientras que los activistas del MR-15 y el MOR se integraron a la lista oficialista de Humanas y dividieron sus apoyos en el resto de las facultades.

Unos meses antes de los procesos electorarios, las agrupaciones estudiantiles dieron nacimiento al Nucleamiento de Organizaciones Políticas Universitarias de La Pampa (NOPULP).⁹⁴ El espacio operó como una suerte de institucionalización de las agrupaciones

94 AHP, *La Arena*, 29 de marzo de 1984.

partidarias, en el que se integraron la JUI, la JUP, el MOR, el MR-15, el MNR, la Juventud Desarrollista Universitaria y la Democristiana. Unos días después adhirió la FM. El NOPULP buscó posicionarse como un espacio común de las corrientes y agrupaciones con el objetivo de mantener la unidad del movimiento estudiantil. De ese modo, se buscaba la inserción de la universidad en “un proyecto liberador y democrático”, mediante la participación de los estudiantes en las luchas del pueblo que permitan romper con “los lazos de dependencia”, en la búsqueda de una sociedad “con justicia social” y de respeto a los derechos humanos, “como condición indispensable para la realización del proyecto liberador que deberá ser humanista y en libertad”.⁹⁵ A lo largo del año, el NOPULP llevó adelante un ciclo de charlas y encuentros referido a la “Actualidad Nacional” por el que pasaron Arturo Frondizi, Julio Zamora, Alberto Salonia, Rubén Levenberg, entre otros. El NOPULP funcionó junto con otras organizaciones como el MPPDH, o espacios de militancias juveniles como el MoJuPo. La iniciativa tuvo corta vida, no más de un año, en la medida en que fue licuándose el espíritu fraterno entre las agrupaciones y la capacidad de la movilización tanto de los estudiantes como de otros sectores de la sociedad.

Además del NOPULP y con los centros de estudiantes en pleno funcionamiento, las agrupaciones dieron cuerpo a la Federación Universitaria Pampeana (FUP). De ese modo y tras ocho años sin posibilidades de ejercer el derecho a agruparse, el sábado 5 de mayo de 1984 se inició el congreso regional acordado y requerido para la conformación de la FUP. Las sesiones se realizaron en el edificio central de la UNLPam y se prolongaron hasta las 23 horas del domingo 6. El congreso contó con la presencia de 36 congresales que representaban a las listas participantes de los centros estudiantiles. Fue presidido por Esteban Kasic (Agronomía) y por Humberto Allende (Veterinarias, de la ciudad de General Pico) en la función de secretario. Tras aprobarse el orden del día, los congresales funcionaron en dos comisiones: una denominada “de Principios y Miembros” y otra como “Órganos”.

95 RU n° 7, Año III, abril de 1984, “Juventudes políticas universitarias”.

El trabajo de las comisiones tenía por objetivo la redacción y aprobación del estatuto y la posterior elección de autoridades. De esa forma, entre los principios que debían regir a la FUP se encuentra:

La participación de la UNLPam en la lucha por la Liberación Nacional y Justicia Social de nuestro pueblo; encauzar las aspiraciones sosteniendo los principios de libertad y democracia; basados en los derechos inalienables del individuo, sin ningún tipo de discriminaciones; bregar por la integración latinoamericana y solidarizarse en la lucha por la autodeterminación de los pueblos; coordinar la acción del movimiento estudiantil de La Pampa con el movimiento estudiantil del resto de las universidades; impulsar y organizar la lucha del movimiento estudiantil de La Pampa por sus reivindicaciones gremiales y políticas; luchar por la autonomía universitaria y la participación igualitaria de todos los claustros en el gobierno de la universidad, fomentar con la participación de los estudiantes el desarrollo científico y tecnológico al servicio del país; estimular la integración de las distintas disciplinas, enriqueciendo su propio desarrollo; garantizar el derecho de estudio mediante una digna asistencia social.⁹⁶

Además de ello, la FUP tenía la función de coordinar los centros de estudiantes para la participación en instancias mayores, de tercer grado, como la FUA y, según el Decreto N° 154/83, constituía un requisito indispensable para la representación estudiantil en el gobierno de la universidad a través del Consejo Superior. Al momento de elegir autoridades, se presentaron dos listas: Independientes y Liberación Nacional. La primera lista resultó ganadora, y designó como primer presidente de la FUP a Daniel Alí (FM) y como vice a Hugo Fernández. Como secretario general resultó electo Juan Carlos Ponce. En tanto que Esteban Kasic, Jorge González, Sergio Scalise, Pablo Gagliarini y Gustavo Romero ocuparon el resto de las secretarías. La lista ganadora estaba conformada por estudiantes independientes de la Facultad de Ingeniería, de la

96 Al no contar con el documento original de la FUP, reproducimos la transcripción que de este realizase la RU, en RU n° 8, junio de 1984, "Se conformó la FUP", pág. 2.

Facultad de Veterinarias y del Departamento de Pedagogía, que participaban en agrupamientos sin adscripción partidaria, como el EFA (Estudiantes de la Facultad de Agronomía) y la UDEFA (Unión de Estudiantes de la Facultad de Agronomía). A su vez, se complementaba con la lista Verde de la Facultad de Ciencias Económicas y con estudiantes de la FM, los únicos con ligazón partidaria explícita (UCR). Por el contrario, la lista Liberación Nacional estaba integrada por activistas de la JUI, la JPU (luego JUP) y el MR-15.

Con motivo de la celebración del Congreso Normalizador de la FUA –pactado para el 19 de julio de 1984 en la ciudad de Tucumán– una delegación de 56 estudiantes federados viajó hasta allí en representación de la FUP. La reconstrucción de la federación y la asistencia al congreso resultó un verdadero desafío para los jóvenes militantes pampeanos. Gustavo Romero rememora el acontecimiento en los siguientes términos:

Cuando vamos en el 84 a la primera reunión de la FUA, la primera después de la dictadura, yo fui como congresal, y fui con el grupo del peronismo. En la tarjeta decía “lista blanca”, no decía JUP. Entonces nos reíamos, daba vergüenza andar con la tarjeta de “lista blanca” en un ámbito de militancia así. Como JUP no podíamos ir porque había otros sectores políticos (en la lista), y en esa época éramos un grupo [refiere a la JUP], no estaba reconocido por el partido, pero nosotros nos identificamos como JUP (entrevista a Gustavo Romero).

El congreso nacional mostró la supremacía de la FM, secundada por la JUI y la JUP, pero también expresó una tendencia que a lo largo de los años siguientes se consolidaría: un socavado malestar con determinadas políticas alfonsinistas y la progresiva articulación de un bloque opositor que, en el siguiente congreso de 1987, mostraría su cenit, para luego declinar.

Imagen 3. Los estudiantes de la UNLPam ante de emprender el viaje hacia la ciudad de Tucumán, al congreso normalizador de la FUA



Fuente: archivo del diario *La Arena*, PEU, Resol. C. S. N° 847/12.

En 1985 se celebraron los comicios de renovación de representantes de los centros de estudiantes. En Agronomía se presentó únicamente la lista de la agrupación FM, con Marcelo Arancio a la cabeza, mientras que en Exactas y Naturales lo hizo la JUI. En Ciencias Económicas compitieron cuatro listas: la lista N° 1 Alternativa (JUI) postulaba a Juan Carlos Ponce, la lista N° 2 Scalabrini Ortiz (JUP) a José Luis Díaz; la lista N° 3 12 de abril (MNR) a Adrián Peppino, y la N° 4 Franja Morada a Aníbal Ambrogetti, siendo esta última la vencedora. En la Facultad de Ciencias Humanas hubo lista única que proclamó como secretario general a Juan José Sena, con la particularidad de que las elecciones se realizaron en noviembre de 1984, debido a una situación de acefalía en secretarías cuyos responsables habían renunciado. Al respecto, sus integrantes afirmaban que la lista “es fruto de la voluntad de las fuerzas políticas e independientes [...] de aunar criterios en base a la tan ansiada

unidad de los estudiantes”.⁹⁷ Además de Juan José Sena (independiente), un escritor y antropólogo que estaba cursando sus últimas materias como profesor de letras, la lista se completó con María Angélica Diez (MR-15) en Asuntos Académicos, Carolina Scuri (FM) en Acción Social, Mario Luis Blande (JUP) en Cultura, Leticia García (independiente) en Finanzas, Ricardo González (MOR) en Prensa y Difusión y Luis Díaz (JUI) en Derechos Humanos.⁹⁸

La normalización universitaria y el triunfo de “El rector de los estudiantes”

En el espacio de la militancia estudiantil, a fines de 1985 comenzaron a configurarse dos bloques diferenciados más o menos estables, con centro en la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas y Naturales. Por un lado, la FM y aliados –independientes y más tarde el MNR– y por el otro el tándem JUP-JUI junto con el MOR y el MR-15, que conformaron el Frente Estudiantil Pampeano (FREP).

El 23 de abril de 1986 se llevaron a cabo elecciones en el CEFCHu, en las que compitieron el FREP y la FM. Por el FREP, los candidatos fueron Diana Moro para la Secretaría General, Leticia García para Asuntos Académicos, Claudia García para Acción Social, Sandra Delmas para Cultura, Ana Rodríguez para Prensa y Difusión, Beatriz Cossio para Derechos Humanos y Mario Higonet – el único hombre de la lista– para Finanzas. Por el lado de la FM, los candidatos fueron Carolina Scuri para la Secretaría General, Lucio Mir para Asuntos Académicos, Ana Rifaldi para Cultura y Susana Villa para Derechos Humanos. Las elecciones fueron ganadas por el FREP, que obtuvo 118 votos contra 112 de la FM, por lo que se repartieron 3 a 2 las secretarías del CEFCHu.

97 AHP, *La Arena*, 7 de noviembre de 1984.

98 Además, fueron designados como representantes a la FUP, Beatriz Cossio y Ana Delmas (MR-15), Héctor Chianetta y Griselda Giuliano (JUP), Susana Badillo y Teresa Pérez (MOR), José Perrota y Luis Díaz (JUI) y Susana Villa (FM).

En el CENUP, las elecciones fueron a fines de agosto y también se impuso el FREP, que ubicó a Enrique Fra como presidente, a Roxana Wisner como secretaria general, a Marcelo Pessino en Acción Social, a Juan Diego Martigani en Derechos Humanos, a Natalia Trapaglia en Prensa, a Silvana Maggio en Cultura y a Griselda Reale en Deportes y Recreación.⁹⁹

En la Facultad de Ciencias Económicas, la FM resultó victoriosa con 277 votos sobre 91 del FREP. La victoria del FREP en dos centros de estudiantes claves por su capacidad de movilización y de presencia institucional resultó un golpe relativamente fuerte para la militancia morada, que de repente se hallaba en una situación peculiar y ambigua respecto de las orientaciones del Gobierno nacional y de los posicionamientos partidarios. Casi en simultáneo con las elecciones estudiantiles se dio inicio al cronograma final del proceso de normalización universitaria. Con la presentación del nuevo estatuto a fines de 1985, el gobierno de la UNLPam se conformó a partir de diversas instancias de representación política y de gestión institucional. La Asamblea Universitaria se erigió como la máxima instancia de decisión, conformada por representantes de los diversos claustros y con facultades para designar al rector. Además, se establecieron los mecanismos y procedimientos de conformación del Consejo Superior y de los Consejos Directivos. En cada unidad académica, los integrantes de cada claustro elegían representantes para el Consejo Directivo y votaban electores para conformar el Consejo Superior.¹⁰⁰ La Asamblea Universitaria se constituía con los integrantes de ese Consejo y los integrantes de todos los Consejos Directivos, incluidos los decanos. En total, contaba con 120 miembros y mediante votación simple se elegía al rector, cuya postulante debía reunir un mínimo de 61 votos.

A fines de abril se conformaron los Consejos Directivos de cada facultad y el 26 de abril se eligieron decanos. En Ciencias Económicas fue electo Horacio Guibelalde, en Ciencias Humanas Alejandro Socolovsky, en Exactas y Naturales el cargo recayó en Augusto Pa-

99 Revista *Huerquen*, año 1, N° 1, 1986.

100 Para un listado de los integrantes del Consejo Superior provisorio, ver Folco (2008: 126).

blo Calmels y en Agronomía fue designado Héctor Gómez (en una reñida compulsa frente a Raúl Esteves Leyte). Dos días más tarde se reunió la asamblea universitaria que eligió al primer rector de la UNLPam en democracia. En los momentos previos de la asamblea, los candidatos eran el vigente interventor —el contador Leopoldo Rómulo Casal— que contaba con el visto bueno partidario (UCR) y gran parte del consenso de los claustros de profesores y graduados, y el exdecano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Sáez, apoyado por una parte menor de docentes y graduados. La distribución de los apoyos hacia uno y otro —a pesar de contar con mayoría el primero— produjo una virtual paralización de la asamblea, al encontrarse en una situación en la que ningún candidato alcanzaba la mayoría requerida. Los representantes estudiantiles de la FUP sostuvieron una posición neutra frente a los dos candidatos en carrera, de modo que resultaban la llave para destrabar la elección. Los acuerdos programáticos que todas las agrupaciones venían sosteniendo al interior de la FUP se habían plasmado en la conformación de una lista de unidad denominada Universidad Popular Agustín Tosco.¹⁰¹ En ese marco, la posición neutra de la FUP tenía sus argumentos: en primera instancia por falta de consenso sobre la figura de Rómulo Casal, que dividía posiciones dentro de la FM a partir del apoyo a Casal por parte de algunos dirigentes estudiantiles de mucha relación con el partido, y en segunda instancia porque desde el FREP y desde sectores de la FM de Agronomía se apoyaba la figura de Raúl Esteves Leyte, quien, pese al apoyo estudiantil y de algunos docentes, había perdido la elección para ser decano en esa unidad académica, en la que había resultado electo el ingeniero Héctor Gómez, con el decisivo apoyo del claustro de profesores.¹⁰²

101 El dato no es menor, en la medida en que permite inferir un aspecto particular de la militancia estudiantil de la UNLPam, anclada en la defensa del trabajo conjunto y unitario por sobre las especificidades políticas y partidarias.

102 Raúl Esteves Leyte era un ingeniero agrónomo uruguayo que había llegado a la UNLPam en 1974 y que, además de docente, se desempeñaba como secretario general de la Asociación Gremial de Docentes Secundarios, Terciarios y Universitarios (AGDSTU).

En la coyuntura política que atravesaba la UNLPam, ningún candidato arriesgaba asumir el cargo sin un respaldo mínimo del estudiantado. A diferencia de los demás claustros, con mayores diferencias internas, los estudiantes habían logrado un funcionamiento de “unidad”, con acuerdos, apoyos y posicionamientos en cada una de las unidades académicas y, posteriormente, en la Asamblea Universitaria. Esa particular configuración estudiantil se sostenía a partir de la apuesta al trabajo común, posicionándolos como actores de peso en la resolución de las candidaturas puestas en juego.

Esa situación produjo que, luego de un cuarto intermedio, se propusiera a la asamblea la postulación Esteves Leyte, lo que habilitó febriles consultas y negociaciones que dieron como resultado una nueva correlación de fuerzas. Luego de tres días de asamblea universitaria, el ingeniero uruguayo fue elegido por 64 votos positivos contra 46 abstenciones, por lo que se consagró como el primer rector de la UNLPam en democracia.¹⁰³ Su nombramiento efectivo fue vivido como un triunfo por parte del activismo estudiantil y de los sectores progresistas, en la medida en que podían confluir un programa y un horizonte de expectativas en torno al proyecto de una universidad abierta al pueblo y en la búsqueda de aquello que se significaba como la *liberación nacional*.

Días más tarde se completó el equipo de trabajo del nuevo rector con la designación de Julio Colombatto como vicerrector, el contador Jorge Podestá en la Secretaría Administrativa, el Ing. Alberto Golberg en la Secretaría Académica, Ernesto Del Viso en Cultura y Extensión Universitaria, el Ing. Esteban Kasic en Bienestar Estudiantil y Acción Social (la sede de General Pico quedó a cargo de Aníbal Ambrogetti), y el Dr. Juan Manuel Cuadrillero en la Asesoría Letrada. Al año siguiente, E. Kasic pasó a la Secretaría Administrativa y su lugar fue ocupado por el Ing. Raúl Steffanazzi. Precisamente, este recuerda que la elección de Esteves Leyte fue “un proceso de quiebre fuertísimo que dejó sin retorno a todos los que participamos” y agrega que “el proceso eleccionario del flamante

103 AHP. *La Arena*, 30 de abril de 1986.

rector se sostuvo sobre la base de un notable acuerdo entre las agrupaciones estudiantiles”, en un contexto en el que estaban

... los centros de estudiantes fuertes, las agrupaciones fuertes y además la Federación Universitaria fuerte [...] que haya llegado Esteves a ser rector en ese marco político universitario no es casualidad, que el diario *La Arena* haya titulado ‘el rector de los estudiantes’ no fue casualidad (entrevista a Raúl Steffanazzi).

Poco menos de un mes más tarde, el 21 de mayo de 1986 se realizó el acto de asunción del flamante rector. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio central de la UNLPam, colmado por un público mayoritario de estudiantes y docentes, y en menor medida graduados, autoridades de los distintos niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal, representantes de organizaciones gremiales y público en general. Luego de unas palabras del interventor saliente y del Dr. Hugo Storani –director de Asuntos Universitarios de la Nación–, el flamante rector se dirigió a la audiencia con un discurso centrado en la necesidad de reflexión y discusión del rol de la institución universitaria en la nueva etapa democrática, como un paso necesario para abordar un amplio debate sobre las posibilidades de transformación de la institución y de sus relaciones con el medio social en que se inscribe.¹⁰⁴

La elección de Esteves Leyte produjo un reacomodamiento de los actores y fuerzas políticas internas. Por una parte, llegaron al rectorado algunos referentes estudiantiles, ya graduados, como Kasic, Steffanazzi, Ambrogetti, lo que daba cuenta del peso político logrado. Por otra parte, en el espacio estudiantil se produjo la renuncia de Enrique Bogado a la presidencia de la FUP, en desacuerdo por la decisión adoptada de brindarle el apoyo al nuevo rector y no a

104 A nivel nacional, una experiencia similar se dio en la Universidad Nacional de Córdoba, donde los estudiantes resultaron claves en la designación del arquitecto Luis Rébora. El electo rector había sido delegado titular de la CONADEP-Córdoba y un reconocido activista del movimiento de DD. HH. La unidad estudiantil resultó clave para inclinar la balanza en las relaciones de fuerzas internas de la UNC. Según Carlos Vicente, llegó al rectorado “un militante que no era miembro del partido de gobierno, que se posicionaba en el espacio político-cultural progresista y que se referenciaba en el pensamiento de izquierda democrática de Lisandro de la Torre” (2018: 91-92).

Rómulo Casal, el candidato de la UCR. Bogado era referente de la FM en Ciencias Exactas y Naturales y uno de los dirigentes con vínculos más estrechos con el partido y la juventud radical. La presidencia de la FUP fue ocupada interinamente por Laura Sánchez, estudiante de historia y adscripta a la JUI, hasta el 14 de junio de ese año, cuando se realizó un congreso para resolver la acefalía. La FM retuvo la presidencia —fue designado Horacio Romano, estudiante de Agronomía— pese a la pérdida de peso electoral y los cimbronazos internos que sacudían la vida interna de la agrupación. Sin embargo, la moción hecha por el FREP y la agrupación 12 de abril de proponer al Consejo Superior de la UNLPam el cogobierno cuatripartito e igualitario volvió a mostrar las diferencias internas de la FM, que se pronunció a favor de continuar una discusión más amplia sobre el tema, postergando el consenso de la FUP sobre el proyecto de gobierno cuatripartito.¹⁰⁵

Días más tarde, los consejeros del FREP José Perrota y Gustavo Romero ofrecieron una conferencia de prensa, acompañados por Natividad Ponce y Luis Morete, integrantes de la Asociación del Personal de la UNLPam (APULP), en la que hicieron público el proyecto de cogobierno cuatripartito.¹⁰⁶ Allí sostenían que debía desterrarse la idea de que la comunidad universitaria se limita al ámbito educativo para avanzar en el concepto de “comunidad de trabajadores” en la que los no docentes cumplen un rol fundamental.¹⁰⁷ El trabajo conjunto entre los estudiantes y los espacios gremiales fue paulatinamente fortalecido a partir de iniciativas que buscaron dotar de derechos a los integrantes de la comunidad universitaria y de bregar por mejoras salariales, presupuestarias y edilicias a la UNLPam y al sistema educativo en general. Por entonces fue creada la Comisión Mixta por mayor presupuesto educativo, que se mantuvo por el resto del año y en 1987 sostuvo el plan de lucha más largo de la década.

105 RU n° 16, año IV, junio de 1986, “H. Romano es el nuevo presidente de la FUP”.

106 AHP, *La Arena*, 26 de julio de 1986.

107 Para esa fecha, varias universidades —San Luis, Córdoba, Río Cuarto— habían avanzado en ese sentido.

Por otra parte, en junio de ese año debía haberse llevado a cabo el Congreso Nacional de Centros de Estudiantes, en la ciudad de La Falda (Córdoba). Sin embargo, este se vio malogrado debido a la crisis interna de la FM a nivel nacional –que ya había tenido un capítulo importante con la imposibilidad de retener la conducción de la FUBA–, y cuyos congresales alineados a la JCN se retiraron de las sesiones¹⁰⁸. La virtual paralización de la FM nacional alcanzaba a la Juventud Radical, muy cuestionada desde el MoJuPo y desde sus propias bases por acatar cerradamente las posiciones partidarias. En su visita a Santa Rosa, invitado por la JR local, Carlos “El Negro” Raimundi –secretario nacional de esa rama– señalaba que la JR estaba cansada del “internismo”, de la “excesiva” competencia y del “cannibalismo”, y que por eso se encontraban “trabajando junto a otras juventudes” que no fueran “reaccionarias”, ya sea de “de derecha o de izquierda”, en referencia a aquellas vinculadas “a la oligarquía y a los militares” y a “la izquierda reaccionaria como el FrePu”.¹⁰⁹ A nivel nacional, el MoJuPo se había reactivado luego de un parate en 1985, aunque no escapaba al internismo de los radicales. La Juventud Peronista, el integrante de mayor peso del agrupamiento y enrolado en el peronismo renovador, se hallaba dividido en torno del liderazgo de Juan Carlos Dante Gullo –proclive a la reincorporación de los radicales al espacio multipartidario– por un lado, y a Patricia Bullrich y Pablo Unamuno por el otro, partidarios de rechazar la presencia radical y fortalecer el vínculo con el ala sindical de Saúl Ubaldini.

El 30 de noviembre de 1986 se llevó a cabo otro congreso de la FUP –para la renovación efectiva de los mandatos conferidos en 1985– en el que Horacio Romano (FM) fue ratificado al frente de la federación, con Luis Díaz en la vicepresidencia (JUI) y Francisco Lemme (FM) en la Secretaría General. El resto de las secretarías se completó con José María Barbona en Acción Social, José Gobbi en la Secretaría Académica, Pablo Miskoff en Prensa y Difusión,

108 En el capítulo IV abordaremos aspectos de la crisis interna de la FM.

109 AHP, *La Arena*, 8 de septiembre de 1986. El FREPU era una coalición entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Comunista. Su presencia en la UNLPam fue acotada y muy breve.

Carlos Félix en la Secretaría de Derechos Humanos, Hugo Tiereni en la Secretaría Administrativa, Darío Moglie en la Secretaría Obreiro-Estudiantil, Estela Viola en Integración Comunitaria y Eduardo Lluch en Cultura. Los cargos y mandatos se lograron por unanimidad, en parte porque los representantes de la FM pertenecían al sector más a la izquierda de la agrupación —y con cierta distancia al partido—, ubicados claramente en posiciones críticas respecto del rumbo nacional. Por otro lado, esa situación se alimentaba de la coyuntura nacional, atravesada por reclamos de docentes y estudiantes, cuyas últimas movilizaciones habían sido respondidas con una represión ordenada por el ministro del interior Antonio Trócoli.¹¹⁰ En el cruce de las dinámicas nacionales y locales, los integrantes de la FM optaban por fortalecer el espacio conjunto de la FUP y el proyecto común de universidad con Esteves Leyte en el Rectorado.

Al respecto, Francisco Lemme caracterizaba la situación socioeconómica como “muy crítica” y consideraba que los lineamientos de la política económica nacional —Plan Austral, disminución del déficit fiscal mediante las privatizaciones, entre otras— terminaban por constituirse en una “variable de ajuste” para los sectores trabajadores. En tal sentido, el documento elaborado por la FUP proponía “frenar el drenaje de divisas a través de la anulación de los pagos de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y una mayor integración con Latinoamérica y el Tercer Mundo”, entre otras medidas.¹¹¹ En términos generales, una mirada compartida con el resto de las fuerzas estudiantiles.

Con la crisis de la FM —a nivel nacional y local— los espacios estudiantiles fueron capitalizados por el FREP, que consolidó su presencia en el CEFCHu y en el CENUP, mientras que en Agronomía y Ciencias Económicas se mantuvieron los marcos de alianzas previos. Sin demasiados cambios en términos electorales, la militancia estudiantil cerró 1986 en estado de movilización junto con la AGDSTU y otros gremios, con reclamos presupuestarios y laborales. Esa movi-

110 El 18 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una masiva movilización de docentes y estudiantes que terminó con un saldo de más de 20 estudiantes heridos y alrededor de 42 detenidos. AHP, *La Arena*, 19 de noviembre de 1986.

111 AHP, *La Arena*, 5 de diciembre de 1986.

lización coincidió con el debate y la aprobación de la Ley de Punto Final que impulsaba el alfonsinismo. Al respecto, desde meses antes los estudiantes manifestaron su oposición al proyecto. La FUP había declarado su rechazo al Punto Final y el reclamo de “juicio y castigo a todos los culpables del genocidio”.¹¹² El MPPDH –en el que participaban muchos estudiantes– lo hacía en iguales términos, en sintonía con organizaciones del espacio nacional, como integrantes de la ex CONADEP y de organizaciones del movimiento de DD. HH.¹¹³

El proyecto de ley fue ingresado el 9 de diciembre de 1986 y sancionado el 24 de ese mes, luego de que la Cámara de Senadores votara 25 votos a favor contra 10 en contra, y la Cámara de Diputados lo ratificara con 127 votos positivos contra 17 negativos. La ley le ponía un “punto final” a las acciones penales contra militares y civiles comprometidos en “delitos violentos de acción política”, perpetrados entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Además, otorgaba 60 días corridos para la presentación de nuevas denuncias y concluido ese período de tiempo –que incluía una feria judicial de 30 días– se extinguía la posibilidad de nuevas acciones legales. El proyecto fue aprobado por ambas cámaras ante un importante despliegue policial y de seguridad en repuesta a las movilizaciones de los organismos de DD. HH. El senador pampeano Antonio Berhongaray –integrante de Renovación y Cambio y uno de los nexos con la JR y la FM local– fue el encargado de fundamentar el proyecto en esa cámara. Durante un extenso recorrido por la política alfonsinista en materia de DD. HH., el senador señaló que el radicalismo planteó

... el juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, distinguiendo a quienes plantearon el programa de exterminio, a los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes recibidas y a quienes amparados por el marco de la Obediencia Debida se limitaron a la subordinación jerárquica que marca la disciplina militar.¹¹⁴

112 AHP, *La Arena*, 5 de diciembre de 1986.

113 AHP, *La Arena*, 9 de diciembre de 1986.

114 AHP, *La Arena*, 9 de diciembre de 1986.

Siguiendo con su reseña, indicó que fue Alfonsín quien dijo que las responsabilidades debían caer sobre los dos primeros, mientras recordaba que la Unión de Centro Democrático (UCeDe) decía que “no había que revisar el pasado”, el PI que “los desaparecidos tenían que aparecer con vida”, el MAS reclamaba “el esclarecimiento de los hechos” y el peronismo “pedía la intervención de la justicia”, aun cuando Ítalo Luder –candidato a presidente del PJ en 1983– hablaba de “una amnistía”. En su cierre, el senador remarcaba la “necesidad de acelerar la justicia para librar de sospecha a los cuadros militares que no hayan tenido responsabilidad”, mientras reafirmaba que “los radicales no claudicaremos nuestros principios éticos”, y que por ello no aceptaban “una amnistía de ninguna clase” (ídem).

A pesar de las fundamentaciones, la sanción de la Ley de Punto Final representó un parteaguas al interior de la militancia estudiantil y de una parte de la ciudadanía que reclamaba una política más profunda respecto de las responsabilidades durante la última dictadura militar. Sin embargo, el rumbo del Gobierno nacional parecía ir a contramano del apotegma que antaño Raúl Alfonsín solía referirles a los jóvenes, aquello de que cuando los Gobiernos civiles hacen concesiones al poder se debilitan. El discurso alfonsinista que en 1983 exponía que con la democracia “se come, se cura y se educa” comenzaba a mostrar grietas que alejaban las posibilidades de ciertos consensos mínimos. Tras la economía de guerra, el éxito inicial del Plan Austral se desvanecía y la “Convergencia Democrática” resultaba una propuesta más retórica que efectiva, en la medida en que las exigencias externas del Banco Mundial (BM) y el FMI –reducción de gastos mediante disminución de presupuestos en Educación, Salud, Seguridad Social, Infraestructura– vertebraban el rumbo económico del Gobierno nacional. Los frentes políticos abiertos en el alfonsinismo, sin capacidad de renovar sus apoyos y consensos, fueron otorgándole al peronismo renovador –aun en sus disímiles expresiones– la posibilidad de apropiarse de un discurso centrado en la necesidad efectiva de apuntalar una democracia social, redistributiva y justa. En ese sentido, la pérdida de caudal electoral de la UCR en las elecciones de medio término de 1987 a

manos del peronismo nos sugiere el alcance profundo de la crisis partidaria, así como del desmoronamiento de las expectativas que buena parte de la sociedad había construido desde 1983.

1987, la otra bisagra

La hegemonía política de la Franja Morada fue, sin dudas, uno de los rasgos característico del período democrático abierto en 1983. Desde entonces, la agrupación había logrado acaparar el apoyo de miles de estudiantes a lo largo y ancho del país, traducido en la conducción de cientos de centros de estudiantes, federaciones regionales y la FUA. Sin embargo, el congreso de renovación de autoridades de la FUA llevado a cabo los días finales de marzo de 1987 –por primera vez desde entonces– expuso la posibilidad de perder esa hegemonía política.

A inicios de 1987, las dificultades internas de la FM alineada a la JCN –muy pegada a los avatares de las políticas alfonsinistas y a las gestiones oficialistas de las principales universidades del país– colocaron a la agrupación en un lugar de cierta fragilidad y ante el peligro latente de desbande de sus bases. El progresivo deterioro y desfinanciamiento del sistema de UU. NN., la incapacidad para sostener políticamente el rumbo del Gobierno nacional y la sanción de la Ley de Punto Final fueron elementos decisivos en la reconfiguración interna de la agrupación radical. En febrero de 1987 se formalizó la constitución pública y articulada de la Corriente Nacional de Liberación (CNL), conformada a partir de numerosos contingentes militantes de distintas partes del país. Según Carlos Vicente, el congreso reunió “a los cordobeses y a las regionales de San Juan, Chaco, La Pampa, San Luis, Bahía Blanca y los tecnológicos [de las distintas sedes de la UTN]”. También se sumaron las agrupaciones que dirigían el Centro de Ingeniería de la UBA, Ciencias Políticas de Rosario, Comunicación Social de Lomas de Zamora (2018: 130-132). En total participaron siete presidentes de federaciones universitarias y 67 presidentes de centros de estudiantes de once universidades.

Su maduración como espacio interno del radicalismo universitario funcionó como un elemento cohesionador de las oposiciones a la FM-JCN. El clima de movilización contra la Ley de Punto Final, en conjunto con las organizaciones de DD. HH., actuaba como telón de fondo de una oposición cada vez más marcada a la FM, alineada con el Gobierno nacional. Por otra parte, los sectores de la JUP y la JUI venían auspiciando una política frentista a partir de un entendimiento mutuo que, en alianza con la CNL y otros sectores minoritarios, podía proyectar la alternativa concreta de un frente opositor que minase la hegemonía de la JCN. Esa posibilidad de construcción política formó parte de las expectativas de un conjunto numeroso de agrupaciones de base de distintas universidades del país que acudieron al congreso nacional de la FUA, previsto para los últimos días de marzo de 1987.

En el caso de la CNL, los radicales disidentes llegaron a Santa Fe con la propuesta de un frente opositor —el Frente Amplio Santiago Pampillón (FASP)— que postulaba al cordobés José Serra (FM-CNL) a la presidencia de la FUA y José Reatti (JUI) en la Secretaría General, secundados por Carlos Gallo (MOR) y Emilio Roldan (Agrupación 26 de julio, cercanos al Peronismo de Base), todos de Córdoba. El programa partía de concebir una FUA movilizadora desde sus propias bases, con una severa crítica al Gobierno nacional, y con eje en el rechazo a los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito (FMI, BM), la suspensión del pago de la deuda externa y el aumento del presupuesto para educación superior.

Si bien la propuesta del FASP dejaba al descubierto el peso mayoritario de la combativa Federación Universitaria de Córdoba, el éxito del frente opositor dependía en buena manera de cerrar la alianza con sectores de la JUP y la JUI. Desde estos últimos, se sostenía la idea de un “Frente Amplio de Liberación Nacional”, pero sus congresales de base mantenían distintas posturas respecto de la CNL y a la JUP. En términos generales, puede sugerirse que el éxito del frente radicaba en la capacidad de entendimiento entre la CNL, la JUI y la JUP que ordenase el universo de alianzas que las agrupaciones de base tenían en cada una de las universidades, de manera

tal que se capitalizase la mayoría de los congresales. Desde la UCR veían con preocupación la posibilidad de perder la conducción de la FUA, de modo que los excoordinadores “Freddy” Storani, “Coti” Nosiglia y “Changui” Caceres llevaron adelante las negociaciones de la FM. De ese modo, la FM-JCN y sus aliados del MNR tejieron acuerdos y promesas con distintos aliados menores y apuntaron el objetivo de lograr la no concreción del frente opositor.

Según refieren algunos testimonios, de entrada se iniciaron conversaciones entre los principales agrupamientos en pos de lograr acuerdos de unidad del frente opositor. Sin embargo, las especulaciones, la “rosca”, las definiciones ambiguas, fueron diluyendo los márgenes de maniobrabilidad para que la alianza opositora se concretase. Por el lado de la JUP —adscripta al peronismo renovador, recientemente normalizada, pero con notable fragilidad interna—, el encargado de llevar adelante las negociaciones fue el diputado nacional José Luis Manzano, de vínculo estrecho con la JP nacional y muy cercano a los sectores universitarios del peronismo. El punto de conflicto de las negociaciones entre los opositores parecía situarse en el reclamo de los peronistas para encabezar la lista y en el excesivo peso de los cordobeses en el armado del frente, quienes no estuvieron dispuestos a ceder la presidencia a la JUP. Entre sus argumentos, los estudiantes de la CNL exhibían la conducción de varias federaciones provinciales y/o regionales y la presidencia de 67 centros de estudiantes en once universidades del país.¹¹⁵ Un día antes de la votación, la JUP emitió una declaración en la que aducía que

... siendo en números de delegados la segunda fuerza de este congreso y conocedora de su irrefutable derecho de encabezar este bloque de la oposición, reafirma su voluntad de participar de dicho frente y resigna su pretensión de encabezarlo, convocando a los radicales de la CNL a que retiren la candidatura de Serra a la presidencia de la FUA. Asimismo ofrece, y espera que la CNL también haga lo suyo, que la Juventud Universitaria Intransigente encabece nuestro frente.

115 Entre las federaciones cuyas presidencias estaban alineadas en la CNL se encuentran la Federación Universitaria de Córdoba, La Pampa, San Luis, San Juan, Chaco, Mendoza y Bahía Blanca.

Para la CNL, el problema recaía en que el candidato intransigente que apoyaba la JUP era un aliado estrecho del peronismo, de modo que renunciar a la presidencia del frente significaba aceptar un rol minoritario dentro de la coalición.¹¹⁶ Como espacio nacional, la CNL articulaba un conjunto de agrupaciones de base relativamente autónomas de sus líneas partidarias que habían sabido construir sus liderazgos a través de un vínculo estrecho entre bases y direcciones. La CNL casi no tenía vínculos con la estructura partidaria de la UCR o la JR, y apenas tenía diálogo con algunos dirigentes radicales sensibles a la temática de DD. HH.¹¹⁷ De ahí la desconfianza hacia dirigentes estudiantiles con mayor propensión a la disciplina partidaria, como el caso del candidato de la JUI, de aceitados vínculos con la dirección nacional de la JUP y la Juventud Radical.

No obstante, las negociaciones siguieron hasta último momento, pero la suerte resultó sellada cuando sectores de la JUP presentaron públicamente el Frente Rodolfo Walsh, una tercera lista con sectores minoritarios de la JUI. Caída la posibilidad de un frente unitario, muchas agrupaciones terminaron por seguir su propio camino, liberando de dificultades el horizonte político de la alianza FM-MNR. Según registra Carlos Vicente, la alianza entre la FM y el MNR sumó 1134 votos contra 1005 votos del Frente Amplio Santiago Pampillón, mientras el Frente Rodolfo Walsh obtuvo 465 votos y los liberales de la UPAU 116 (2018: 143).¹¹⁸ El nuevo presidente de la FUA fue Claudio Díaz (FM), estudiante de derecho y presidente de la Federación de la Universidad de Rosario (FUR), alineado en las filas de Luis “Changui” Cáceres.

116 El candidato de la JUI era Alejandro Ambrogí, perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto.

117 Además de la militancia franquista –que en muchos lugares solían llamarlos “radicales de izquierda” o “radicales para la liberación”–, las agrupaciones independientes que se sumaron al FASP también carecían de vínculos con el sistema de partidos. Solo los universitarios comunistas contaban con una estructura partidaria en la que se inscribían y funcionaban de manera más o menos orgánica.

118 Del congreso también participaron distintas corrientes del campo de la izquierda, como la Unión de Juventudes por el Socialismo, la Corriente Socialista de Base, la Juventud Comunista Revolucionaria, la Juventud Guevarista o agrupaciones independientes de orientación izquierdista.

En el caso de los congresales pampeanos, por la Franja Morada-CNL asistieron Horacio Romano, Claudia Giorgis, Marcelo Arancio, Francisco Lemme, Raúl Beato, entre otros. Los congresales de la JUI –Eduardo Matta, Luis Díaz, José Perrota, Ana Muñagorri, entre otros– apoyaron la propuesta del FASP impulsado por la CNL, al igual que muchos delegados Intransigentes de distintas universidades del país. Según recuerda Diana Moro “nuestra posición era la de formar un frente único opositor [con la JUP, el Pampillon y la Federación Juvenil Comunista e independientes]” (entrevista a Diana Moro).¹¹⁹ Por el contrario, los peronistas pampeanos se alinearon a la estrategia de la dirección de la JUP y participaron del Frente Rodolfo Walsh, y obtuvieron la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, a cargo del pampeano Gustavo Romero.

Una posible explicación sobre el frustrado frente opositor sugiere que fue determinante una serie de acuerdos –muy por encima de la militancia estudiantil– entre el radicalismo y el justicialismo. Este “acuerdo de cúpulas” habría expresado el compromiso estratégico de sostener los esquemas de gobernabilidad hacia el interior de las universidades públicas, en la medida en que la posibilidad concreta de que la conducción nacional de la FUA quedase en manos de sectores dotados de una mayor radicalidad y, aún más riesgoso, distanciados de la disciplina partidaria y de las dinámicas propias del juego parlamentario y representacional. La presencia de los diputados y referentes de la UCR y el PJ no es un dato menor si consideramos el lugar que cada uno de ellos ocupaba en el ordenamiento más amplio del juego partidario, y en el que la variable universitaria podía formar parte de los acuerdos y consensos de gobernabilidad en el tablero general de la política nacional. Por el contrario, los negociadores de la CNL eran estudiantes comunes, con cierta experiencia de militancia, pero sin el adiestramiento y capacidad de maniobra e intermediación que sus pares negociadores del PJ y la UCR.

En ese marco, no resulta menor la capacidad de adhesión que expresó el FASP, puesto de relieve en los 1000 votos conseguidos a partir de, a priori, una heterogénea alianza entre la CNL, el MOR,

119 Revista *Humos*, n° 5, año II, abril de 1987: “FUA, la lucha continúa”.

agrupaciones independientes de izquierda y el decisivo apoyo de sectores de la JUI y del peronismo, que se distanciaron de sus conducciones y/o partidos. En ese sentido, la propuesta del FASP buscaba otorgarle un sentido de unidad a un conjunto de militancias que, desde la coyuntura de 1982/1983, había apuntalado una disposición más amplia a la articulación y al trabajo de base – relativamente autónomo de las organizaciones partidarias– que expresaba en el propio *hacer* de la militancia una praxis política que, en su despliegue y movimiento, vertebraba *otra* forma de lo democrático, anclada en la capacidad de participación, organización y movilización de los estudiantes y la sociedad en general.

Por el contrario, la alianza de la FM-JCN, el MNR y los sectores de la JUP y la JUI que integraron el Frente Rodolfo Walsh expresaron una mayor preponderancia a la organicidad partidaria, más allá de que sus activistas compartieran las luchas, reivindicaciones y el espacio público con sus pares “opositores” y tuviesen, al menos la mayoría de ellos, una genuina disposición militante. Sin embargo, sus posicionamientos se vieron supeditados a las estrategias y dinámicas más amplias de las luchas internas de dirigencias y conducciones partidarias que priorizaban la preeminencia de los partidos políticos como canales privilegiados de construcción política y de ejercicio de la democracia.

A nivel nacional y en términos generales –en la medida en que aún no contamos con estudios relativamente específicos–, la reelección de la FM-JCN al frente de la máxima instancia estudiantil acentuó su hegemonía en los espacios de representación estudiantil y en los esquemas de gobernabilidad intrauniversitarios. Por ejemplo, a fines de 1987 se normalizó el funcionamiento de la FUBA –desde el frustrado congreso de 1986 había quedado bajo la dirección de los presidentes de los Centros de Estudiantes– con el acceso a la presidencia de Rogelio Ley Leyes, acompañado de Juan Curuchet (UPAU) en la Secretaría General (Beltrán, 2013: 277). La tendencia general de la FM fue desacoplar aquellas militancias consideradas díscolas, a la vez que acentuó el acercamiento a los sectores liberales como la UPAU y a un creciente abanico de agrupaciones que se movían del centro hacia la derecha.

Por el lado de la JUP y la JUI, se mantuvieron las alianzas en el marco de acuerdos partidarios y desde ese año formaron el Frente Universitario Nacional y Popular (FUNAP) en varias universidades, entre ellas la UBA y la UNLPam. Ese fortalecimiento de la alianza universitaria expresaba el movimiento más amplio de cercanía entre corrientes renovadoras del peronismo y de los intransigentes. En ambos casos, se dejaba fuera de los acuerdos a sectores del comunismo y del socialismo, muchos de los cuales migraron hacia el FASP o hacia nuevas configuraciones de izquierda.

En el caso de la CNL, sus agrupaciones de base decidieron el paso estratégico de consolidar el armado del Frente Amplio Santiago Pampillón en aquellas facultades y espacios universitarios en los que resultara factible. En ocasiones, la vigencia del FASP motivó la efectiva rotura del vínculo partidario con la UCR, mientras que en otros casos se sostuvieron delicados equilibrios para sostener el sello de FM-CNL, de allí que los estudiantes franjistas conformasen, junto con sectores independientes, agrupaciones con denominaciones neutras, sin referencia a la FM, pero tampoco al FASP.

Obediencias y caras pintadas

Sin dudas, el trabajo de la CONADEP, la circulación del informe *Nunca Más* y el posterior Juicio a las Juntas resultaron acontecimientos que modificaron el conocimiento de la sociedad sobre el pasado inmediato, al mostrar —además del horror— el carácter planificado y sistemático del terror dictatorial.¹²⁰ En la sentencia emitida en diciembre de 1985, en el marco del Juicio a las Juntas, los jueces reconocieron que la represión masiva e ilegal había sido implantada desde los altos mandos militares, pero que las juntas no podían ser culpadas por actos que no habían sido cometidos directamente por los acusados, de modo que fueron atribuidas solo las responsabili-

120 En ese proceso, las organizaciones de derechos humanos —y el conjunto de militancias que aglutinaban a su alrededor— se fueron constituyendo en actores relevantes de la arena política nacional, en la medida en que exhibían una notable capacidad de interpelación al rumbo del Gobierno, que incluía críticas severas a la errante y poco auspiciosa situación económica del país.

dades individuales. Sin embargo, el “punto treinta” del dictamen solicitaba el enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones represivas. De ese modo, se inició en la justicia civil una catarata de juicios a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos en actividad, que puso en estado de confrontación a los sectores (pro) militares.

En simultáneo, ese resquicio jurídico abrió una enorme grieta en la estrategia gubernamental de contener simultáneamente la presión castrense y los reclamos vinculados a los movimientos de derechos humanos. Como estrategia, el presidente Alfonsín buscó poner un corte al procesamiento judicial de militares y policías – con el objetivo de delimitar y restringir el círculo de “culpables” posibles–, buscando validar su apuesta por una justicia ejemplar.¹²¹ De ese modo, en abril de 1986, el PEN remitió a las FF. AA. las “Instrucciones a los fiscales militares”. El rechazo en alza a la iniciativa por parte de amplios sectores políticos y sociales, junto con el creciente malestar interno (y público) de los círculos castrenses, apuraron la decisión presidencial de enviar al poder legislativo el proyecto de Ley de Punto Final, aprobado por diputados y senadores en diciembre de 1986. Durante el plazo de 60 días que contemplaba la Ley para presentar nuevas denuncias, se realizaron unas 300 presentaciones judiciales contra militares de distintos rangos, activos y retirados. El malestar generalizado de los integrantes de las FF. AA. dio paso a un estado de crisis interna que erosionó la capacidad de mando de la superioridad, a la vez que limó la estrategia gubernamental de contención a los círculos militares (Canelo, 2008). Pocos meses después, se concretó la primera asonada militar desde el retorno a la democracia.

121 La idea de una justicia ejemplar se inscribía en el esquema de responsabilidades diferenciadas, ya esbozado en 1980 y durante la campaña presidencial. En ese marco, la justicia ejemplar buscaba funcionar como instancia eleccionadora a partir de un conjunto de juicios acotados y de corta duración a las cúpulas castrenses, a las organizaciones armada y a un conjunto restringido de inculpadlos.

Los sucesos de Semana Santa en 1987 se iniciaron el miércoles 15 de abril en la ciudad de Córdoba, a partir de la negativa del mayor Ernesto Guillermo Barreiro a prestar declaración indagatoria ante la Cámara Federal de esa ciudad, en el marco de las acusaciones por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Rápidamente, un acto de indisciplina acotado al III Cuerpo del Ejército se rebeló como la punta de un iceberg. El día anterior, el teniente coronel Aldo Rico, acompañado por un grupo de oficiales de su máxima confianza, había iniciado un viaje desde su destacamento operativo (en la provincia de Misiones) hasta las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Poco después, la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, una de las guarniciones militares más importantes del país, se levantó en armas. Como un reguero de pólvora, la sublevación se extendió a otros destacamentos, los amotinados tomaron las instalaciones y aislaron, detuvieron o directamente echaron a los oficiales a cargo que se negaron al levantamiento. En Campo de Mayo, los “carapintadas”, llamados así por el betún que se esparcieron en los rostros, estaban armados con ametralladoras y vehículos pesados como tanques de guerra. Liderados por Rico, expresaron sus reivindicaciones: una solución “política” a los juicios en curso por las responsabilidades que las Fuerzas Armadas tuvieron en las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, no sancionar a los sublevados –incluido el prófugo Barreiro– y una renovación íntegra de la cúpula del Ejército, para lo cual sugirieron un puñado de nombres “factibles”.

En las siguientes 48 horas, el país se sumió en una angustiosa tensión. No solo por la posición cerrada y desafiante de los sublevados, al mando de un cabecilla con una personalidad explosiva que lo tornaba impredecible, sino también porque los mecanismos de control y aislamiento de la insubordinación estaban en crisis. En el Ejército no había organicidad ni mando, y en el resto de los organismos de seguridad la situación era poco confiable. Frente a este panorama, la ciudadanía salió masivamente a la calle en defensa de un sistema democrático que se revelaba endeble y era necesario protegerlo y consolidarlo. El accionar de los rebeldes fue repudiado por un amplio espectro político, mientras las organizaciones sociales de

derechos humanos, estudiantiles y sindicales rápidamente ganaron la calle en la defensa de la democracia.

El domingo 19 de abril de 1987 –domingo de Pascuas– no fue uno más en la ciudad de Santa Rosa ni en el país. Las plazas argentinas se llenaron de vecinos y vecinas que se apropiaron del espacio público para rechazar enérgicamente la sublevación militar en curso. En Santa Rosa salieron a la calle las organizaciones sociales, el MPPDH, los centros de estudiantes y algunos gremios, junto con la presencia constante de vecinos que poblaron la plaza San Martín. La sede central de la UNLPam fue uno de los puntos centrales de reunión de los integrantes de diversas instituciones políticas, gremiales, sociales y agrupaciones estudiantiles. Entre el jueves y el domingo a la tarde se mantuvo una permanente vigilia. Los claustros universitarios (estudiantes, graduados y docentes) convocaron a una asamblea extraordinaria para el jueves 16 de abril en la que se resolvió la toma simbólica del edificio y se le otorgó mandato al rector Raúl Esteves Leyte para participar en el Comité de Defensa de la Democracia creado con delegados de distintas entidades civiles.¹²²

La municipalidad fue el otro epicentro de concentración y allí se había reunido el Comité de Defensa, encabezado por el gobernador Rubén Marín, al que se sumaron los diputados/as, el intendente Eduardo Félix Molteni, los concejales, funcionarios provinciales y comunales y representantes de todas las fuerzas políticas y organizaciones gremiales, barriales, estudiantiles y sociales. Esta medida estaba en consonancia con la convocatoria emitida por el PEN con el propósito de firmar un “Compromiso Democrático” en Capital Federal que sería rubricado como documento público “ante la rebeldía y amenaza al orden constitucional” provocada por las acciones de un grupo de sediciosos. Mientras la ciudadanía expresaba consignas “contra el golpismo” y “no a la amnistía y a la impunidad”, desde el balcón del edificio municipal el gobernador pampeano leía el documento suscripto, en el que se ratificaba el deseo de apoyar con todas las acciones a su alcance “la vigencia irrestricta de la Constitución nacional y provincial [...] y el normal desenvolvimiento de

122 AHP, *La Arena*, 18 de abril de 1987.

las instituciones del Estado y la democracia como único estilo de vida para los argentinos, conforme la voluntad popular libremente expresada”.¹²³

Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo por el presidente Raúl Alfonsín y los términos de la resolución del conflicto dejaron sensaciones ambiguas en una parte importante de la ciudadanía, y un mayor malestar entre los sectores estudiantiles y la militancia de derechos humanos, cuyo descontento se acrecentaría con la Ley de Obediencia Debida enviada por el PEN a las cámaras legislativas y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia en junio de 1987.

En un clima de descontento que fue mutando a desencanto, a inicios de agosto de 1987, un grupo de estudiantes de la UNLPam se declaró en estado de huelga “contra la impunidad” y las leyes de “Punto Final y Obediencia Debida”, en defensa de “una universidad democrática, nacional y popular”, por “mayor presupuesto educativo” y por la defensa del “derechos al estudio”.¹²⁴ Unidos de bolsas de dormir y frazadas, los estudiantes se declararon en huelga de hambre y se establecieron en las escalinatas de acceso a la UNLPam, frente a la plaza central de la ciudad de Santa Rosa. Los huelguistas eran Francisco Lemme, Gabriela Lluch, Daniela Gorosito y Nora Cervera, mientras que el presidente de la FUP Horacio Romano se sumó días después. La huelga duró más de una semana y se levantó por decisión de una asamblea entre estudiantes y el movimiento de derechos humanos. En cierto modo, la decisión mostraba cierta impotencia generada a partir de la falta de eco en una sociedad que se desmovilizaba y daba pie a la proliferación de discursos que validaban la “lucha contra la subversión” (Monasterolo, 2018b). Precisamente, durante los días del reclamo, el estudiante Marcelo Arancio, perteneciente a la FM-CNL y expresidente del CEFA, fue asaltado en su lugar de residencia, golpeado y maniatado.¹²⁵ El hecho fue relacionado con la acción de sectores pro militares que, al igual que en muchos otros puntos del país, violentaron a personas relacionadas con el movimiento de DD. HH., en sintonía con la

123 AHP, *La Arena*, 20 y 21 de abril de 1987.

124 AHP, *La Arena*, 11 de agosto de 1987.

125 AHP, *La Arena*, 13 de agosto de 1987.

reivindicación pública de la “guerra sucia” por parte de miembros activos y retirados de las FF. AA.

En el enrarecido clima de mediados de 1987, la serie de sucesos asociados al levantamiento carapintada se conjugó con la persistente situación de crisis del sistema universitario. Desde fines del año anterior, la Comisión Mixta de la UNLPam —compuesta por estudiantes, docentes y no docentes— venía ensayando distintas medidas y modalidades de lucha respecto de su situación laboral, de presupuesto educativo y del estado general de la infraestructura y funcionamiento de la UNLPam. Sin embargo, la situación comenzó a entrar en un punto sin retorno a mediados de septiembre de 1987, cuando distintos gremios educativos, junto con la FUA y las federaciones regionales, decidieron un endurecimiento de las medidas con paros indeterminados y tomas de universidades.¹²⁶ En la UNLPam, la asamblea general del 17 de septiembre decidió la toma de la institución, en consonancia con otras casas de estudio del país.

El endurecimiento de las medidas de fuerza se realizó a partir de una fuerte presión de las bases docentes y estudiantiles, que obligaron a sus organizaciones a una mayor confrontación con el Gobierno, pese a la indiferencia de la CGT, los partidos políticos y demás sectores de la sociedad involucrados en cuestiones educativas, aun cuando el Gobierno decidió recurrir a un viejo decreto de la década de 1960 para descontar del sueldo docente los días de paros realizados.¹²⁷ Finalmente, el 24 de septiembre, la CONADU decidió levantar la medida de fuerza permanente, supeditada a la firma de un acta-acuerdo con el PEN y el CIN (Consejo Interu-

126 Entre ellos la CONADU (Confederación Nacional de Docentes Universitarios), la UDA (Unión de Docentes Argentinos) y la rama universitaria de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

127 AHP, *La Arena*, 14 de septiembre de 1987. Pocos días antes se habían llevado a cabo las elecciones de medio término de diputados nacionales en todo el país, además de cargos provinciales y municipales. Los resultados mostraron la derrota del radicalismo y expusieron la profundidad de sus crisis internas, mientras que el peronismo salió fortalecido de la contienda. En cierto modo, la centralidad del capital político que se ponía en juego en las elecciones puede explicar, parcialmente, la falta de involucramiento de la central sindical y de los principales partidos políticos, en la medida en que el conflicto universitario podía constituir un arma de doble filo que esmerilase la imagen de los dirigentes partidarios en la percepción pública de la ciudadanía.

niversitario Nacional). No obstante, el mes siguiente hubo nuevas medidas de fuerza que, intermitentemente, se sucedieron hasta fin de año.

En una mirada amplia, el año 1987 fue eslabonando una serie de acontecimientos que resultaron definitorios en la disposición activista de los estudiantes pampeanos. En el plano estrictamente universitario, los términos en que se dirimió el XV Congreso de la FUA resultaron decisivos para los posicionamientos y expectativas de las agrupaciones locales, que fueron diluyendo su capacidad de trabajo conjunto. Por otra parte, la pérdida de esa sinergia se alimentó de la mayor disposición de los partidos políticos a “disciplinar” la militancia universitaria: varios activistas de la CNL fueron desafiliados de la UCR, la reorganización formal de la JUP alineó más orgánicamente a sus integrantes, y a mitad de año formaron el FUNAP junto con la JUI, en sintonía con la tendencia nacional. En contrapartida, las agrupaciones se volvieron raquílicas por el sangrado y la dispersión de otros militantes, menos dispuestos a la organicidad partidaria en los términos que la coyuntura imponía, marcada por la desmovilización social. Como recordase Luis Díaz, “pasado el entusiasmo, las organizaciones terminaron siendo pequeños sellos” (entrevista a Luis Díaz).¹²⁸ Otro elemento importante fue el impacto del recambio generacional de los militantes, menor en términos numéricos y también en cuanto al bagaje y carga experiencial respecto de quienes forjaron sus procesos militantes al calor de la recuperación democrática, además de la poca receptividad de las dirigencias partidarias a los pedidos, demandas y preocupaciones de los sectores juveniles.

Luego del Juicio a las Juntas, el rumbo adoptado por el alfonsinismo en materia de DD. HH. resultó un golpe letal para los jóvenes que, desde 1982, pugnaron por la profundización de la democracia en términos sociales, redistributivos y de justicia. De hecho,

128 Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, con militancia en la JUI. Nacido en Santa Rosa, ingresó a la UNLPam en 1980 a la carrera de Agronomía, en la que estuvo un año. En 1982 comenzó estudiar el profesorado de Inglés, carrera que abandonó algunos años después. Tuvo una amplia participación en distintos espacios estudiantiles. En la actualidad es periodista.

el MPPDH también sufrió la dispersión de sus activistas, que debió replegarse defensivamente y redefinir nuevas estrategias de funcionamiento. El proceso desmovilizador del conjunto de la sociedad rehabilitó los discursos impugnadores de la lucha social, pero también los partidos políticos y distintos estratos de dirigentes fueron encontrando mecanismos, dispositivos y estrategias para prescindir de los reclamos y la movilización ciudadana, como lo demostró la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –votadas en los recintos institucionales a puertas cerradas y con dispositivos de seguridad en la calle debido a la oposición social– o las últimas luchas de docentes y estudiantes por el presupuesto educativo que terminaron en un callejón sin salida ante la indiferencia gubernamental y sindical.

Capítulo IV. Las agrupaciones estudiantiles: trayectorias y reordenamientos políticos

En el ya clásico trabajo de Silvia Sigal *Intelectuales y poder en la década del sesenta* (1991), la autora sugiere que, a partir de mediados de esa década, comenzó a producirse una “partidización” de la comunidad académica, por la cual las identidades políticas dejaron de ordenarse a partir de temas y conflictividades inherentes al propio devenir interno de la universidad, como la adhesión o distancia de los postulados reformistas, la impronta democrática o conservadora de la educación o su carácter laico o libre. Por el contrario, comenzaron a hacerlo por su identificación con determinadas agrupaciones político-partidarias. En palabras de la autora, “hasta fines de los 50, las corrientes en el seno del movimiento estudiantil mezclaban simpatizantes o afiliados de diversos partidos, pero fue solo con la aparición de la Juventud Universitaria Peronista que una tendencia se refería explícitamente a un partido”. De ese modo, al menos por una década, hasta 1976, “ni la institución ni la reforma serán ya productoras de identidad, y los partidos se encargarán de canalizar los conflictos estudiantiles” (1991: 71).¹²⁹

De ese modo, la partidización de las agrupaciones estudiantiles devino una característica propia del período, no solo referible al peronismo sino al conjunto de otras tradiciones y expresiones

129 De manera abierta o solapadamente, diversas investigaciones discutieron los alcances de la partidización estudiantil a mediados de los años sesenta, especialmente en lo que respecta a la llamada peronización estudiantil. Al respecto, puede verse cierto estado de la cuestión y un contrapunto de posiciones en el dossier coordinado por Nicolas Dip (2017).

políticas de entonces que intervenían en la arena pública (radicales, socialistas y de la izquierda en general). La dinámica represiva en los años iniciales del terrorismo de Estado, junto con la prohibición o ilegalización de los partidos políticos, centros de estudiantes, federaciones y demás instancias organizativas de la militancia estudiantil buscaron desmembrar ese vínculo, al tiempo que el PEN promovió otras instancias de integración estudiantil en los espacios universitarios, mediante métodos y estrategias centradas en una participación controlada y limitada a la gestión gremial de aspectos académicos y administrativos.¹³⁰

En nuestro período de estudio, diversas investigaciones han referido como un rasgo distintivo el proceso de reconstrucción de la militancia estudiantil en los años ochenta fuertemente ligado a las agrupaciones partidarias (Polak y Gorbier, 1994; Larrondo, 2014; Blanco y Vommario, 2018, Cristal, 2017; Seia y Cristal, 2022). En ese sentido, resulta elocuente la partidización del activismo estudiantil en la restitución de formas organizativas de la década previa. Sin embargo, creemos necesario matizar la mirada a partir de los márgenes de autonomía que las agrupaciones estudiantiles de la UNLPam construyeron y modularon en el propio devenir de la experiencia estudiantil, especialmente en los años finales de la dictadura y los inicios de la democracia. En ese sentido, la formación de agrupaciones con raigambre partidaria dio cuerpo a la militancia estudiantil, pero el vínculo con esas organizaciones estuvo atravesado por fricciones y desavenencias que en muchos casos derivaron en rupturas, desprendimientos y/o reacomodamientos. De ese modo, las relaciones entre partidos, juventudes partidarias y agrupaciones estudiantiles no fueron lineales ni armónicas, sino que, por el contrario, expresaron un sinuoso vínculo que resultó determinante en las trayectorias particulares de sus espacios.

Por otra parte, nos encontramos con dos problemas que suelen dificultar nuestra aproximación a la experiencia del activismo estudiantil. En principio, casi no contamos con estudios en profundidad que aborden la militancia durante la década de 1980, y

130 Una aproximación a las políticas desplegada por el PEN hacia las juventudes universitarias puede verse en Luciani (2017).

en aquellos casos que sí existen suelen referirse a espacios como la UBA, cuyas características institucionales –ubicación, matrícula, relación con otros actores sociales– nos habla, más que de una generalidad, de su carácter particular. Aun así, es posible identificar una serie de rasgos generales para el período que nos ayudan a organizar la comprensión del asunto.

En primer lugar, el cambio de década marcó el predominio de la agrupación Franja Morada como uno de los fenómenos políticos estudiantiles de alcance nacional más convocantes a partir de 1983. Como extensión orgánica de la UCR y del alfonsinismo, la FM emergió de la dictadura más o menos íntegra –a diferencia de las corrientes universitarias peronistas, maoístas y trotskistas, que fueron un blanco predilecto de la política represiva militar– y se convirtió en un actor clave del ámbito universitario durante la década. Sin embargo, su masificación se configuró desde un lugar ambiguo: se desplegó como un espacio crítico y abierto a la politización democrática de los jóvenes universitarios, y a la vez quedó enmarcado en las referencias partidarias (la UCR y el liderazgo de Alfonsín) que resultaron elementos decisivos en la trayectoria posterior de la agrupación.

En segundo término, desde 1982 se registra la emergencia de la Juventud Universitaria Intransigente como una fuerza gravitante y movilizadora tanto en el plano electoral como en el más amplio campo cultural y social de la arena pública. La conformación de la JUI materializó un espacio que atrajo a una considerable porción de la militancia universitaria, a partir de un posicionamiento prudente respecto del optimismo alfonsinista y en buena medida acaparando parte del espacio que la endeble Juventud Universitaria Peronista dejaba relativamente disponible.

Precisamente, la Juventud Universitaria Peronista emergió de la dictadura muy diezmada, tanto como efecto de la dinámica represiva sobre sus militantes como por el estado de dispersión y crisis en que se encontraba el Partido Justicialista en la transición democrática. Solo con el impulso y fortalecimiento de la corriente renovadora, ya en democracia, la JUP se reinsertó institucionalmente con relativo peso político.

El Movimiento de Orientación Reformista adoleció de síntomas similares. Aunque sus adherentes no sufrieron la ferocidad represiva de sus pares peronistas, las decisiones y lineamientos del partido desde 1975 motivaron una profunda crisis interna visibilizada desde la transición a la democracia y efectivizada en el “viraje” de la línea partidaria que expresó el VXI Congreso del Partido Comunista. En ese sentido, la juventud comunista debió lidiar con un ambiguo horizonte de expectativas que solo encontró cierta estabilización a partir de 1986.

En el espacio del socialismo, el Movimiento Nacional Reformista inscribió su presencia universitaria a partir de la capacidad articuladora del partido (PSP), de larga presencia en la institución universitaria. Al igual que en la década previa, el MNR sostuvo una alianza regular con la FM a partir de su fuerte anclaje en las tradiciones del reformismo y en la presencia estable en los órganos de gremiales y de representación estudiantil. Por el lado del Movimiento Reformista 15 de junio (PSA), se desarrolló una militancia localizada en pequeños pero activos núcleos, cuya identificación cercana al ideario de la liberación nacional los ubicó en el radar de alianzas factibles de agrupaciones como la JUI y la JUP.

En el caso de las corrientes universitarias de orientación trotskista o maoísta, no volvieron a tener la presencia y el peso que manifestaron en la década de 1970, siendo determinante para sus espacios –tanto nacionales como locales– la desarticulación llevada a cabo por la dictadura militar. En ese sentido, surgieron y se desarrollaron diversas agrupaciones que, pese al esfuerzo voluntarista de sus militantes, no lograron construir espacios estables de representación política y solo en la segunda mitad de la década conformaron algunas alianzas y frentes que se expresaron en sintonía con las líneas partidarias. En La Pampa, hubo algunos intentos de conformar algunos núcleos estables de militancia, pero resultaron muy fugaces.¹³¹

131 Por otra parte, ya hemos referido a la presencia de núcleos de militancias de organizaciones que se definían como “independientes”, orientadas tanto a la izquierda como hacia la derecha, como en el caso de la UBA y de Cuyo, no registrándose agrupaciones de ese tipo en la UNLPam, salvo en los casos aclarados en el capítulo previo.

De ese modo, las agrupaciones listadas nutrieron la cartografía de la militancia estudiantil pampeana. El estudio de sus trayectorias específicas nos permite detectar elementos y factores que resultaron relevantes en determinadas coyunturas, y que habilitan una mejor aproximación tanto a las dinámicas regionales como nacionales.

La Franja Morada

Como señalamos oportunamente, los inicios de la FM no remiten a una agrupación exclusivamente radical, sino que se integraba con expresiones políticas de diversas orientaciones reformistas y anarquistas. Fue en el transcurso de la década de 1970 que se estableció como expresión universitaria y orgánica del radicalismo, al calor de la alianza entre los coordinadores de la JCN y el líder del movimiento Renovación y Cambio. Hasta bien avanzados los años ochenta, convivieron tres líneas claramente identificables, aunque no exentas de fricciones: los alineados con Luis “Changui” Cáceres (con base en Santa Fe, en las universidades del Litoral y Rosario), los platenses (UNLP) alrededor de Federico Storani, y los porteños de “Coti” Nosiglia (UBA).¹³² Por fuera de esos núcleos duros, las agrupaciones moradas del resto del país, como el caso de La Pampa, se organizaron en vínculo con el partido y se plegaron, en general, a la línea y direccionamientos trazados por la estructura provincial y nacional.

En la UNLPam, la FM se constituyó públicamente a inicios de la década de 1970, durante las luchas estudiantiles que dieron paso a la nacionalización de la institución. Entre 1973 y 1976 consolidó una presencia estable en todas las facultades, al punto de conducir los centros de estudiantes de Ciencias Económicas y Agronomía. Luego del golpe de Estado de 1976, en línea con la decisión nacio-

132 A partir de 1983, los tres dirigentes tuvieron una gravitación importante en el esquema nacional del alfonsinismo, tanto por su cercanía a Alfonsín como por la capacidad de movilización de militancia. En 1983, Luis “Changui” Cáceres fue diputado nacional y en 1987 disputó la gobernación de la provincia de Santa Fe. Federico “Freddy” Storani fue diputado nacional entre 1983 y 1991, mientras que Carlos “Coti” Nosiglia ocupó distintos cargos ejecutivos en el PEN.

nal de replegar sus militantes para cubrirse de la avanzada represiva, la FM redujo su presencia al mínimo, en especial entre 1976 y 1980.

En el ocaso dictatorial, los máximos referentes de la JCN resultaron un engranaje significativo en el despliegue del triunfo alfonsinista. Sin embargo, a partir de 1983, la “coordinadora” se disolvió formalmente y sus referentes “saltaron” a distintos espacios y niveles del poder ejecutivo y legislativo en el país. Además de los “coordinadores” ya mencionados, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moreau y Marcelo Stubrin fueron diputados nacionales. Desde allí organizaron “segundas” líneas políticas y comenzaron a funcionar “mini” coordinadoras en distintas provincias del país. Mediante esa red de relaciones sostuvieron la presencia de la FM a nivel nacional y fundamentalmente el control sobre la UBA, la UNLP y la UNR. Entre 1982 y 1983, el proceso de recuperación de los centros de estudiantes en las UU. NN. mostró el predominio de la Franja Morada: en la UBA obtuvo 10 de 13 centros de estudiantes,¹³³ en Córdoba (UNC) todos a excepción de Filosofía y Humanidades,¹³⁴ igual que en la Universidad de Tucumán (UNT), en la que lideró todos a excepción del centro de Filosofía y Letras y el de Agronomía.¹³⁵ Situaciones así se repitieron en otras universidades públicas del país y la tendencia se mantuvo hasta mediados de la década, cuando la aparición de fisuras y divisiones internas, por un lado, y el surgimiento de fuerzas políticas de centro derecha, por el otro, restaron poder a su hegemonía.

En línea con la tendencia general, la reactivación política a inicios de los años ochenta posibilitó la reorganización de la FM en la UNLPam, favorecida por la presencia temprana de algunos militantes del período anterior al golpe de Estado, como el caso de Jorge González, Jorge Podestá, Daniel y Horacio Alí, entre otros. La experiencia política de esos militantes resultó un plus diferen-

133 Datos en Polak y Gorbier (1994) y Cristal (2017). Téngase en cuenta que, como arrastre de los setenta, hacia 1983 había dos tendencias importantes al interior de la Franja en la UBA: una era la Corriente Nacional y Popular (CNP) y la otra, rápidamente convertida en mayoritaria, la Junta Coordinadora Nacional.

134 Datos en Chabrandó (2012).

135 Datos en Valdez, Fernando. En http://www.archivo.unt.edu.ar/attachments/054_valdez.pdf.

cial que, aun sin pretenderlo, los colocó en un lugar de referencia para los estudiantes más jóvenes que comenzaban a politizarse, permitiendo un vínculo más fluido con compañeros de cursos y de otras facultades. Por otra parte, la cercanía inicial al partido o a dirigentes de Renovación y Cambio funcionó como instancia organizativa y de encuadramiento, facilitando la integración de los jóvenes estudiantes.

En la UNLPam, las elecciones de centros de estudiantes se concretaron entre mayo y agosto de 1983. Pese a que no hubo listas que refiriesen explícitamente a las agrupaciones partidarias, aunque sus activistas formaran parte de ellas, los estudiantes franquistas tuvieron una presencia gravitante en el CEFCHu y en el CENUP, a diferencia de la Facultad de Ciencias Económicas (CEFCE), en la que el peso fue menor, tendencia que se revirtió al año siguiente y se mantuvo durante todo el período. Como hemos aludido, la adopción de nombres “neutros” expresaban los acuerdos alcanzados entre activistas partidarios e independientes, cuyos consensos buscaban fortalecer una unidad considerada indispensable para poner en marcha los centros de estudiantes, unidad que incluía a una pluralidad de simpatías que no siempre se plasmaron en adhesiones a corrientes políticas. Por otro lado, la situación expresaba las dificultades de enunciación política, por el propio hecho de que aún se estaba en dictadura, pero también por los efectos que la intervención militar había provocado en los jóvenes y en la sociedad en general, respecto de la política y la participación pública.

A nivel nacional, la FM pudo captar una parte sustancial de la politización de los jóvenes universitarios. La repuesta a ese fenómeno debe contemplar algunos aspectos que, en términos generales, delinearon un marco de posibilidades para esa expansión cuantitativa de la FM. Por una parte, la agrupación se había mantenido relativamente organizada durante la dictadura, con un funcionamiento mínimo en términos de estructura, pero que operó como un soporte relevante cuando el cerrojo dictatorial comenzó a ceder. Ese esquema agrupacional, presente en las universidades más grandes del país, había logrado sostener instancias más amplias de la militancia estudiantil —clandestinamente— como algunas federaciones y la propia FUA, al menos desde 1978/1979. En efecto, la coyuntura

del post Malvinas encontró a la FM organizada y con presencia relativamente extendida en las universidades del país. En ese proceso, resultó decisiva la capacidad articuladora de los viejos coordinadores y dirigentes de Renovación y Cambio, que fueron claves en la capacidad de movilización de bases en el triunfo alfonsinista. Precisamente, el candidato y luego electo presidente atrajo la simpatía de miles de ciudadanos, que veían en su figura y su discurso un elemento diferenciador –sobre todo del peronismo– y esperanzador en las posibilidades de una democracia sustentada en el diálogo, el respeto a la constitución y a la vida en común.

Pese a ello, resulta necesario destacar que las desavenencias al interior de la militancia franjista fueron constitutivas de la misma recuperación de la democracia. Ya en el congreso de la FUA de 1984 se expresaron posiciones disímiles respecto del Gobierno nacional y la política educativa universitaria. Allí la FM hegemonizó la conducción (con apoyos del MNR) por sobre la JUP, la JUI y el MOR, en una elección en la que primó el acuerdo general, pero dejó entrever roces y desacuerdos con las autoridades universitarias y entre las propias filas moradas, a partir de las formas y alcances de los procesos de normalización institucional en curso. En ese congreso, los sectores afines a la JCN (encabezados por la influencia de la FUBA, la FULP y la FUR)¹³⁶ pretendían que el documento final señalara un apoyo explícito al Gobierno nacional. Sin embargo, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), junto con las federaciones de La Pampa, San Luis y San Juan –una alianza que se consolidará con el paso de los años– levantaron un conjunto de críticas hacia el alfonsinismo con consignas antimperialistas y de condena de los resabios del “proceso”.

Un mes antes, una marcha del MoJuPo –en ocasión de la visita oficial de funcionarios del FMI– había motivado un conflicto en el espacio nacional de las juventudes partidarias. La Juventud Radical, a instancia del presidente Raúl Alfonsín y a sabiendas del peso político de la presencia juvenil en la marcha, había logrado cambiar la consigna de condena al FMI y “contra la dependencia” por una más

136 FUBA (Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires); FULP (Federación Universitaria de La Plata); FUR (Federación Universitaria de Rosario)

atenuada de “contra la usura internacional”, mas en línea con la posición diplomática argentina en la discusión sobre el peso y alcance de la deuda externa. Desde ese momento, la JR y principalmente sus dirigentes se vieron atascados en el enredo de apuntalar unas bases movilizadas y al mismo tiempo mantenerse orgánicos a sus referentes (mayores) del partido, que no eran ni más ni menos que los coordinadores de la JCN y, en última instancia, el propio Raúl Alfonsín. La marcha del MoJuPo resultó un rotundo éxito –con réplicas en las ciudades capitales del país– pero al mismo tiempo mostró las fisuras internas de la JR, que vio mellado su vínculo no solo frente a otras juventudes (peronismo, intransigentes, comunistas) sino con relación a sus propias bases. Y buena parte de esas bases correspondía al campo estudiantil, cuyas simpatías no siempre se correspondieron con pertenencia o adhesión orgánica al partido.¹³⁷

En todo el país, la FM expresó un fuerte sostén inicial al proyecto alfonsinista, pero el avance de la década dejó al descubierto que, tras la cáscara orgánica de la agrupación, con matices según los distintos lugares, coexistían voces críticas del rumbo que adoptaba el Gobierno y de las formas que adquiriría la democracia ganada. En efecto, la trayectoria del Gobierno nacional terminó por acrecentar fisuras preexistentes de una unidad que se reveló aparente. Fisuras que iban desde divergentes concepciones de la política, más o menos explicitadas pero visibles en sus prácticas, hasta muy diferentes expectativas sobre el sentido y los alcances de la democracia. Los procesos de normalización y las políticas moderadas de las gestiones universitarias, en cuanto al acceso irrestricto, la readecuación de la planta docente y el presupuesto expusieron diferencias palpables que, en el mediano plazo y en la coyuntura más amplia de la trayectoria del Gobierno nacional, volvieron irreconciliables las grietas internas, que alcanzaron su significación plena en el marco de las políticas alfonsinistas post 1985. Como señalaba Carlos Vicente:

[en el congreso de la FUA de 1984] se debatió el rol que debían jugar los sectores más avanzados del radicalismo en la democra-

137 Mónica Beltrán apunta que en 1984 la JR significaba el 25% de los afiliados del partido radical (2013: 194).

cia. Allí surgen dos líneas de pensamiento: los que manifiestan su total obsecuencia hacia el proyecto alfonsinista, más allá del contenido del mismo, y quienes levantábamos un programa alternativo de carácter democrático y antiimperialista. Desde el 84 en adelante, y fundamentalmente a partir de la derechización del alfonsinismo, las aguas se fueron dividiendo cada vez más entre estas dos posiciones.¹³⁸

La crisis interna de la Franja Morada y la formación de la Corriente Nacional de Liberación

En abril de 1986, la FUBA —la federación de mayor peso político a nivel nacional— quedó acéfala a partir de que la Franja no pudo lograr los acuerdos necesarios para la reelección de Martín Baintrub (Beltrán, 2013: 226).¹³⁹ En los momentos previos, algunos sectores de la FM se mostraron muy cercanos a la UPAU —fuerza estudiantil en ascenso, de orientación liberal— como eventual alianza para sostener la presidencia, lo que resultaba inaceptable para los sectores más a la izquierda de la agrupación. De ese modo, otras fracciones internas buscaron un acercamiento a la JUI, que solía funcionar en tándem con la JUP, de manera de obtener el quorum necesario y sellar el acuerdo de conducción (ibídem: 227). Sin embargo, esos posibles esquemas de gobernabilidad se vieron alterados cuando cientos de estudiantes del CBC (Ciclo Básico Común) y del Centro de Estudiantes de Ingeniería irrumpieron en el congreso con reclamos de mayor presupuesto y mejoras en la infraestructura, además de criticar la pasividad de la FUBA.¹⁴⁰

138 Revista *Crisis*, n° 50, enero de 1987, p. 71.

139 En diciembre de 1983, Andrés Delich —primer presidente de la FUBA en los ochenta— declaraba que la Federación contaba con 150.000 estudiantes aproximadamente, y que en las elecciones normalizadoras habían votado alrededor de 60.000 estudiantes. Revista *El Porteño*, año II, n° 24. Entrevista a Andrés Delich: “Estamos cansados de la violencia”.

140 El Centro de Estudiantes de Ingeniería era dirigido desde 1983 por un sector interno de la FM con cierta distancia de la JCN. Además, en la práctica, tenía acuerdos con la militancia comunista, algunos sectores más combativos del peronismo, independientes y MAS. Ese sector se integró, tiempo después, a la Corriente Nacional de Liberación.

La presencia movilizadora de las bases estudiantiles rompió la posibilidad de acuerdos entre la FM y eventuales aliados (tanto por izquierda como por derecha). El congreso no pudo terminar de sesionar porque se produjeron peleas políticas y, literalmente, a golpes entre militantes de varias agrupaciones. Caídos los acuerdos de cúpulas, las decisiones en la FUBA pasaron a tomarlas una junta integrada por los presidentes de todos los centros de estudiantes, hasta su normalización en 1988. En términos prácticos, se materializaba un reparto de poder entre los centros estudiantiles, al tiempo que repercutía directamente sobre el aparato político de la FM-JCN, en la medida que limitaba una fuente de recursos e inmovilizaba la posibilidad de toma de decisiones unilaterales.

Meses más tarde se produjo otro acontecimiento clave en la crisis interna de la FM. El 5 y 6 de julio de 1986, en la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Centros de Estudiantes, convocado por la FUA para ordenar las elecciones previstas para el año siguiente. En el acto de recepción, el flamante rector de la UNC Luis Rébora planteó la necesidad urgente del aumento presupuestario para el sistema universitario y educativo en general, una opción viable a partir del no pago de la deuda externa (Vicente, 2018: 140). Ese y otros aspectos más de la realidad nacional se colaron en las comisiones de trabajo, cuyos debates y discusiones fueron socavando los argumentos de aquellos delegados de la FM que sostenían una defensa cerrada del Gobierno nacional. En ese sentido, resultó determinante el liderazgo de la Regional Córdoba de la FM, que marcó con presencia y con alianzas una oposición articulada al bloque de la FM porteña, santafecina y platense, liderada por el “changuicacerista” Abel de Manuele. Según apunta Mónica Beltrán, la FM cordobesa dio prioridad a los acuerdos vigentes con los intransigentes, el MNR y sectores del peronismo, y difundieron un documento en el que acusaban a la conducción nacional de la FM de ser oficialista y “no prestar la debida atención a las posturas estudiantiles que condenaban el plan austral y exigían la moratoria en el pago de la deuda externa” (2013: 246). Según Carlos Vicente, “la regional [Córdoba de la FM] había tenido una actitud de autonomía política desde [...] 1983” y progresivamente se había corrido

hacia “posiciones más avanzadas” que “se alejaban del control partidario de la UCR”, en manos de Eduardo Angeloz (Vicente, 2018: 130).¹⁴¹ Esa dinámica política se expresaba en la conducción de la FUC, a partir de una aceitada madeja de relaciones con un sector de la JUI, sectores cercanos al Peronismo de Base, comunistas e independientes.

El congreso sesionó parcialmente porque numerosos delegados de la FM-JCN dejaron el congreso sin fijar posiciones, de modo que el encuentro terminó por naufragar a partir de las diferencias irreconciliables entre los sectores internos de la FM. En octubre de ese mismo año, la mesa nacional de FM convocó a un seminario interno en la ciudad de Tucumán, con el objetivo de dirimir los conflictos arrastrados desde 1984.¹⁴² Sin embargo, allí se plasmaron las posiciones cuasi irreconciliables de los dos bloques enfrentados. Un documento firmado por representantes de las universidades de Santa Fe (Litoral), Capital (Bs. As.), Tucumán, Rosario, La Plata, Mendoza, Lomas de Zamora, Salta, Noroeste y la sede central de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) consideraba a los partidos políticos como “la herramienta más apta en el que el campo popular pueda ir avanzando sobre la oligarquía y hacia la liberación del imperialismo”, al mismo tiempo que expresaba su “desconfianza política hacia la Regional Córdoba por privilegiar las organizaciones de masas por sobre los partidos políticos y declarar la democracia actual como una democracia formal”. El despacho de minoría lo

141 Mariano Faraci, dirigente de la franja cordobesa, de la FUC y presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura en 1984, recuerda que “la inmensa mayoría” del movimiento universitario que fue gestándose a inicios de la década fue alfonsinista, “y fue alfonsinista hasta el 86 cuando ya nos veíamos venir que la mano no venía bien”, luego de “aquella plaza que convoca Alfonsín y que larga la economía de guerra. Bueno ahí es que la frustración se profundiza digamos y poco después es que rompemos, porque hasta ahí, aunque no teníamos un sentimiento grande de pertenencia del partido, tampoco estoy diciendo que éramos unos infiltrados, para nada, simplemente no teníamos una raíz partidaria y en todo caso tomabas de lo partidario la historia de Irigoyen, de Alem, de esas referencias históricas” (entrevista a Mariano Faraci).

142 A mediados de 1985, los principales dirigentes de la FM (platenses, santafecinos y porteños) formaron la mesa nacional de coordinación, con el objetivo de contener a otras federaciones y conducciones del resto del país. En la práctica, su funcionamiento federal fue escaso, limitándose más bien a un reparto de poder entre las principales universidades del eje La Plata-Buenos Aires-Rosario-Santa Fe.

firmaron las regionales de Córdoba, San Luis, San Juan, Jujuy y las UTN de Entre Ríos, Villa María y Avellaneda; y sostenía el compromiso en “la defensa y consolidación de la democracia y la lucha por la unidad popular para la liberación nacional y social” al mismo tiempo que criticaba la política económica del Gobierno nacional, en especial las privatizaciones, el blanqueo, la política monetarista y el pago de la deuda externa, además de repudiar “la alianza con partidos de la dictadura”. En el caso de La Pampa, el representante Francisco Lemme no firmó ningún despacho hasta “consultar a las bases”, aunque declaró que “si nuestra regional firma este proyecto [refiere al primero] desde ya presento mi renuncia”.¹⁴³ De las conclusiones del seminario salió la votación (dividida) que determinó la expulsión de la Regional Córdoba de la agrupación nacional.¹⁴⁴

El lenguaje utilizado en la redacción de los documentos nos brinda indicios de las posiciones de cada sector. En el caso del dictamen de mayoría –bloque conformado alrededor de la FM-JCN–, su defensa de “los partidos políticos” por sobre las “organizaciones de masas” perfila su posicionamiento respecto de las formas de la democracia puestas en juego –la primacía de las instancias representacionales–, pero además expone las intenciones de alinear y disciplinar una militancia que de manera cada vez más abierta cuestionaba a los dirigentes partidarios, provinciales y nacionales. La apelación a un lenguaje de tono antiimperialista y liberacionista se advierte más como una estrategia retórica, que opera como dique de contención a las críticas, que la manifestación efectiva de su praxis política. En el contexto de 1986, muchas de las políticas efectuadas por el Gobierno nacional resultaban difíciles de argumentar y sostener por parte de sus militantes, sin embargo, la situación imponía que no pudiesen renunciar a la retórica empleada, en la medida en que minaría buena parte de sus adhesiones de base. En

143 AHP, *La arena*, 1º de octubre de 1986.

144 Aun así, la regional Córdoba de la FM disputó el uso del nombre, sin aditamentos, por la vía jurídica ante las autoridades electorales de la UNC, conservándolo hasta 1990, cuando el rector Francisco Delich prohibió el uso del nombre y le concedió la exclusividad a la denominada Franja Morada Juventud Radical RA (Vicente, 2018: 130-132).

la contraposición entre discurso y práctica resulta factible inferir las tensiones de la militancia franquista, no solo en la conformación de “bloques” a nivel nacional sino en cada uno de los espacios en los que la FM participaba, incluso en los núcleos duros de la Capital Federal, La Plata o Rosario, más proclives a una mayor disciplina partidaria.

Las aguas se dividieron aún más a partir de la conflictividad del período. En noviembre de 1986, una masiva marcha de docentes y estudiantes con reclamos gremiales sobre salarios, presupuesto e infraestructura, terminó con un abultado saldo de heridos y detenidos a partir de la represión ordenada por el ministro nacional Antonio Trócoli¹⁴⁵. Desde entonces comenzaron a pergeñarse planes y acciones de luchas más sistemáticos en muchas universidades del país. Al año siguiente, la falta de repuesta y el endurecimiento de las posiciones llevaron al mayor paro con cese de actividades de la década.

Por entonces, ya circulaban algunos borradores del proyecto de Ley de Punto Final, por el cual el alfonsinismo buscaba acotar la cuestión legal de los juicios a militares y también el papel creciente del movimiento de DD. HH. en la agenda política. La “marcha de la resistencia” llevada a cabo los días 3 y 4 de diciembre convocó a más de 20.000 personas y dejó al descubierto la enorme disconformidad con las acciones del Gobierno nacional.¹⁴⁶ En ese marco, la FM de la UNLPam transitaba su propia crisis interna, con la pérdida de conducción de dos centros de estudiantes (CEFCHu y CENUP) y la renuncia de Enrique Bogado a la presidencia de la FUP en desacuerdo con el rol jugado por la agrupación en la elección del rector Esteves Leyte. Desde mediados de 1986, las relaciones con el partido se tensionaron y nuevos liderazgos estudiantiles emergieron, como el caso de Horacio Romano en la FUP y la presencia institucional de Raúl Steffanazzi (como coordinador de las secretarías del rectorado) en el gobierno ejecutivo de la UNLPam.

En febrero de 1987, el bloque opositor de la FM-JCN hizo pública la constitución de la Franja Morada-Corriente Nacional de

145 AHP, *La Arena*, 8 de septiembre de 1986

146 AHP, *La Arena*, 5 de diciembre de 1986.

Liberación (FM-CNL) en un congreso realizado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, y al que asistieron, además de activistas de una decena de universidades nacionales y representantes de las federaciones regionales que dirigían, un conjunto de personalidades vinculadas a la cultura, el campo sindical y la militancia por los derechos humanos (Monasterolo, 2018a). En esa oportunidad, la mesa de conducción quedó integrada por José Serra (Córdoba), Roberto Pittaluga (Capital Federal), Emilio Falbo (UTN Avellaneda), Sergio Tognelli (San Luis), Darío Gómez (Chaco), Francisco Lemme (La Pampa), Guillermo Belazcoain (San Juan) y Gustavo Martínez (Rosario).

Sin dudas, la fuerza de tracción de la CNL residía en la Regional Córdoba, alineada (casi) en su totalidad con lo que se denominaba el “radicalismo de liberación” o la “Junta Coordinadora Regional”. Los cordobeses venían con un aceitado trabajo con sectores de la JUI, el MOR y sectores del Peronismo de Base, a partir de las luchas conjuntas contra el ingreso irrestricto en la UNC, a favor de las políticas de DD. HH. y mediante la alianza que llevó al rectorado de la UNC al arquitecto Luis Rébora, delegado de la CONADEP y referente del movimiento de DD. HH. En efecto, el vínculo no era solo una coincidencia programática de fuerzas políticas, sino que se constituía como una forma específica de la propia reconfiguración del activismo estudiantil cordobés, que desde sus inicios había ponderado una lógica más de movimiento que de disciplina y verticalidad partidaria. El peso protagónico en la provincia, la legitimidad política y la fisonomía propia y relativamente autónoma de las rencillas de poder que derivaban del carácter personalista de los “viejos coordinadores” de la JCN hacía de la experiencia cordobesa un elemento díscolo al interior de la Franja. La propia denominación de “Junta Coordinadora Regional” (como instancia que aglutinaba al grueso de las Franjas Moradas de cada facultad de la UNC) establecía una diferencia a la vez que un puente respecto de las tradiciones franjistas. Desde 1982, los activistas de la UNC habían popularizado la consigna “con la lucha se van, con la unidad no vuelven”. Ese lema —referido a la intervención de la dictadura, pero también a aquellos civiles que encarnaban el continuismo de la

gestión militar— actuaba como un significante que permitía incluir al vasto conjunto de jóvenes que, sin adscripción partidaria más o menos estable, simpatizaban con el alfonsinismo y con la idea de una democracia ligada al ejercicio de derechos plenos.

En el caso particular de La Pampa, la Franja en su totalidad se alineó bajo la forma de Franja Morada-Corriente Nacional de Liberación, en cierta forma precedidos por una trayectoria similar, aunque menos confrontativa y más moderada que los cordobeses, a partir de los acuerdos programáticos y de funcionamientos en la conducción de la FUP y el NOPULP, junto con la JUP, JUI, MOR, MNR y el MR-15. De ese modo, la adhesión a la CNL alejó a la agrupación del control partidario, de la Juventud Radical pampeana y del carácter personalista y verticalista que imponía la mesa nacional de la FM.

En efecto, podría sugerirse que la FM-CNL congregó importantes núcleos del activismo estudiantil franjista más politizado y de base que “divergía” con el camino adoptado por el alfonsinismo (política económica, universitaria, de derechos humanos, etc.) y los sectores que privilegiaban la gobernabilidad y el “síraulismo”.¹⁴⁷ La CNL funcionó como una suerte de federación de agrupaciones de base que se relacionó transversalmente con otros sectores tradicionalmente opositores, como la JUI, la JUP, los comunistas y eventualmente algunas fracciones del trotskismo. Además, sus prácticas militantes debieron lidiar con distintos planos en simultáneo: la discrepancia con la línea partidaria y en no pocos casos con las mismas juventudes de las que formaban parte, la defensa y recuperación de la vertiente más popular del radicalismo (Irigoyen, Crisólogo Larralde) y del campo popular en general (Evita, Agustín Tosco, los curas tercermundistas), sus alianza con sectores peronistas y/o de izquierda y sobre todo una forma de construcción política que trataba de no disociar fines y medios. Al respecto, Raúl Steffanazzi recuerda que “recogemos todo el ideario de los sesenta y setenta en términos democráticos y le añadimos

147 En el vocabulario de la época, el “síraulismo” era un eufemismo para referirse a aquellos dirigentes que, a ojos cerrados, acataban y se escudaban en la figura presidencial.

que queríamos una democracia participativa y de construcción de un poder democrático, no una democracia burguesa de las formalidades” (entrevista a Raúl Steffanazzi).

El paso siguiente de confrontación entre los dos sectores internos se dio en el congreso nacional de la FUA, desarrollado en los últimos días de marzo de 1987 en la ciudad de Santa Fe. Desde el frustrado Congreso Nacional de Centros de Estudiantes (en 1986), muchas agrupaciones de base vislumbraban la posibilidad de una alianza entre la CNL y sectores de la JUI, la JUP, el MOR y otros menores, que permitiese la creación de un frente que disputara la conducción de la FUA y la orientación del movimiento estudiantil. La factibilidad de ese frente y sus posibilidades fue advertida agudamente por dirigentes del radicalismo y la FM-JCN que, como hemos expuesto en el capítulo anterior, apelaron a los históricos coordinadores alfonsinistas para llevar adelante las negociaciones de la FM, lo que nos sugiere, en cierta forma, la envergadura de la amenaza que representaba la materialización del frente opositor. “Freddy” Storani, “Coti” Nosiglia y “Changui” Cáceres resultaron claves en el armado de alianzas y acuerdos que dieron reelección al sector mayoritario de la FM. El trabajo de los operadores políticos abordó las particularidades de cada regional, caso por caso, y permitió neutralizar la posible alianza opositora, pudiendo encauzar y dar curso efectivo a los acuerdos —muy por encima de la militancia estudiantil— entre la UCR y el PJ.

A partir de 1987, muchos sectores de la CNL marcaron su ruptura con la mesa nacional de la FM, en muchos casos con desafiación partidaria. A partir de allí conformaron el Frente Amplio Santiago Pampillón. En Córdoba, el FASP reunió a la FM-CNL, la JUI, el FREPU y algunas expresiones del peronismo. En las elecciones generales de centros de estudiantes reafirmó su fuerza gravitante y obtuvo siete sobre nueve centros.¹⁴⁸ En la UNLPam se siguió un camino similar. Según el relato de Silvia Siderac “en La Pampa no queda FM como rama estudiantil del radicalismo, directamente todos nos vamos. Rompemos con el radicalismo y nos quedamos sin

148 AHP, *La Arena*, 20 de mayo de 1987.

un brazo político. Entonces había que salir a construir, de ahí surge el Movimiento 29 de mayo” (entrevista a Silvia Siderac).¹⁴⁹ Precisamente, en el FASP confluyen la CNL y sectores de la izquierda vinculados al PC y a activistas del socialismo, que también sufren el sangrado de militantes.¹⁵⁰ Al mismo tiempo, mucha militancia se integra a las listas electorales y a los grupos de militancia del Frente Amplio de Liberación (FRAL), que compitió en las elecciones de medio término de septiembre de 1987.¹⁵¹

Los resultados de las elecciones a nivel nacional mostraron la crisis interna del radicalismo, y apresuraron la decisión de muchos dirigentes de dotar de mayor organicidad a los agrupamientos estudiantiles. La “depuración” de la FM de los sectores “díscolos” permitió reencauzar a las agrupaciones moradas sobre una militancia más disciplinada y orgánica. En ese sentido, la UCR pampeana determinó la desafiliación de Raúl Steffanazzi, Oscar Constantino, Francisco Lemme, Horacio Romano y Marcelo Arancio, acusados de “inconducta partidaria” por participar en las listas del FRAL.¹⁵² A partir de 1988, se dispuso de manera estable la denominación de Franja Morada RA, en alusión a un viejo logo alfonsinista que filiaba las

149 Huelga una aclaración del testimonio citado: el Movimiento 29 de Mayo (ML29, en adelante) fue una organización política partidaria que obtuvo la personería jurídica para participar de instancias eleccionarias a nivel nacional y que en 1987 participó en el Frente Amplio de Liberación (FRAL). El FASP era un frente estudiantil que reunía a la militancia de la CNL, sectores intransigentes, comunistas, independientes, cuyos integrantes y pertenencias podían variar según las facultades y universidades del país. Sin embargo, muchos militantes de la CNL integrados en el FASP participaron del ML29 y el FRAL. La entrevistada, Silvia Siderac, ingresó a la UNLPam a cursar estudios en el profesorado de Inglés, en 1984. Allí se integró a la Franja Morada, luego Corriente Nacional de Liberación. En la actualidad es docente universitaria en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.

150 En 1987, el FASP funcionó en la Facultad de Ciencias Humanas, mientras que, en otras unidades académicas como Ciencias Económicas o Agronomía, se mantuvo el sello de Franja Morada.

151 El FRAL estaba compuesto por el Movimiento de Liberación 29 de Mayo, por el Partido Comunista, el Partido Humanista, la Corriente Patria Libre, el peronista Movimiento 26 de Julio y otros partidos menores. En la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente fue el candidato a la intendencia. En La Pampa, Raúl Steffanazzi, por entonces funcionario del rectorado de la UNLPam, fue candidato a intendente. El bajo caudal de votos obtenido muestra las dificultades de trasladar los liderazgos estudiantiles a la arena electoral en un contexto de desmovilización y dispersión del campo de la izquierda.

152 AHP, *La Arena*, 28 de octubre de 1987.

letras iniciales del presidente con las de “República Argentina” y cuyo juego buscaba invocar el “espíritu del 83” con los valores de lealtad y compromiso partidario. De ese modo, la agrupación morada fortaleció su presencia universitaria de manera más articulada con los esquemas de gobernabilidad institucional, favorecida en buena medida por la misma desarticulación y/o fragmentación de los sectores opositores.

La Juventud Universitaria Intransigente

Desde 1982, el Partido Intransigente se nutrió de diversas experiencias políticas que buscaron la convergencia de un “Tercer Movimiento Histórico” mediante el fortalecimiento de un proyecto de “izquierda democrática”. En 1983, el partido lanzó la campaña presidencial para la fórmula Oscar Alende-Lisandro Viale. La plataforma de gobierno se basaba en los lineamientos programáticos esgrimidos en 1975 y buscaba fortalecer “una democracia nacional, popular y revolucionaria”, que estuviese signada por el papel de “un Estado con finalidades indelegables en cuanto a la organización política, económica y social”. El PI proponía “desmontar el aparato represivo e impulsar el respeto irrestricto de los derechos humanos”, impulsar “formas institucionales que asegurasen la participación y el control popular” (revocatoria de mandatos, derecho a la iniciativa, veto popular, plebiscito, referéndum), de manera que los grandes problemas de la vida social fueran resueltos por el conjunto de la población.¹⁵³ Bajo ese horizonte, el partido se nutrió de viejos militantes de izquierda, con pasados en distintas organizaciones, como el caso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o Vanguardia Comunista (VG); activistas alejados del peronismo luego de los procesos de depuración; y con jóvenes que se politizaban en el marco de la dinámica de deslegitimación y pérdida de consensos de la dictadura militar, la emergencia de una agenda de derechos humanos y las expectativas de construcción de la democracia. En

153 PI, *Aportes para el proyecto nacional*, 1983 [1975].

ese marco, el PI delineó el surgimiento de su rama juvenil y, poco tiempo después, universitaria.

Precisamente, la aparición de la JUI a inicios de la década fue uno de los sucesos estudiantiles novedosos del período, en la medida en que se erigió como una fuerza gravitante del espacio estudiantil universitario. Como hemos referido, la distancia prudente que la agrupación construyó respecto del alfonsinismo y del peronismo le granjeó el apoyo de muchos estudiantes que podían simpatizar con determinados dirigentes o figuras políticas pero que no terminaban de fijar una adhesión sobre los partidos mayoritarios de la Argentina. Con un fuerte anclaje en el ideario de la liberación nacional y la patria latinoamericana, la militancia de la JUI supo cultivar un espíritu de involucramiento en los circuitos culturales emergentes que los dotó de una presencia singular en el espacio universitario.

La expansión universitaria tuvo su cenit entre 1982 y 1986, ralentizándose y estancándose al promediar la década. Los casos más notorios de la presencia intransigente fue el posicionamiento como segunda fuerza estudiantil en la UBA (Polak y Gorbier, 1994; Cristal y Seia, 2018) y en la Universidad Nacional de Córdoba (Servetto y Chabrando, 2012). En esa casa de estudio, Carlos Vicente señala que, hacia 1985, la JUI se había constituido en la segunda fuerza estudiantil, con el 25% de los congresales en la FUC (2018: 66).¹⁵⁴

Casi como un rasgo de la militancia del período, la posibilidad de reconstruir la trayectoria de las agrupaciones estudiantiles no puede hacerse sino a costa de invertir cronologías, es decir, partiendo de los momentos en que se constata su efectiva identificación como espacio político. En parte porque no existe precisión sobre el o los momentos fundacionales —aún en dictadura y con prohibición sobre las actividades políticas— sino que la aparición se inscribe en la propia dinámica de emergencia e intervención en la esfera pública. En la UNLPam constatamos la presencia efectiva

¹⁵⁴ En términos generales, la JUI tuvo una performance más o menos parecida en el grueso de las UU. NN., aunque la falta de estudios específicos nos impide la certeza.

de la JUI hacia mediados de 1984, hasta entonces sus activistas se identificaban como “juventud intransigente” o “rama universitaria” del partido.

En efecto, el núcleo estable de quienes conformaron la JUI en la UNLPam comenzó a formarse a fines de 1979 e inicios de 1980. Nilda “Paty” Redondo relata que “un conjunto de jóvenes empezó a frecuentarse” bajo el argumento de “compartir lecturas y escritos personales”, impulsados por el deseo y la necesidad de fisurar el disciplinamiento de sus impulsos artísticos (Entrevista a Nilda Redondo).¹⁵⁵ Ese grupo, que luego se identificaría como el “Nuevo Grupo Joven de Poesía”, se reunía en la casa de Teresa Poussif y participaban, con cierta asiduidad, la propia “Paty” Redondo, Susana Berdasco, Gabriel de la Cruz, José Perrota, entre otros. Antes del golpe, algunos de ellos habían tenido militancia en el peronismo o en espacios de la izquierda, como Vanguardia Comunista.

La conformación de la Rama Universitaria de la Juventud Intransigente se nutrió tempranamente de militantes con experiencia política de los años setenta —el caso de Nilda Redondo, Susana Berdasco, Teresa Poussif— que permitió conectarse con estudiantes más jóvenes como José Perrota, Héctor Mareque o Luis Díaz. Esa dinámica de retransmisión de saberes y tradiciones políticas se reveló, aun precariamente debido a la intervención dictatorial, de vital importancia en el grupo fundacional de la JUI.

Una arista que expuso la importancia de ese vínculo fue la práctica de la escritura. A mediados de 1982, se materializó el proyecto de editar una revista universitaria que funcionase como diálogo e intervención política en el ámbito específico de la institución y en el espacio más vasto del campo social, político y cultural. La iniciativa se fue armando junto con otros compañeros con iguales inquietudes, pero que no necesariamente adherían al PI o a la JUI.

155 Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas y docente de nivel medio, durante la dictadura fue prescindida laboralmente, bajo el argumento de desarrollar actividades políticas. Con amplia trayectoria en la militancia política, previo a 1976 tuvo militancia en Vanguardia Comunista y luego en la década de 1980 formó parte del PI. En la Facultad de Ciencias Humanas fue parte del grupo fundador de la *Revista Universitaria*. En la actualidad es docente universitaria en la carrera de Letras (UNLPam).

Al año siguiente, algunos de esos militantes fueron partícipes regulares de la Asociación Pampeana de Escritores (APE), fundada casi simultáneamente con el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.

En septiembre de 1982, en la ciudad de Córdoba, el partido realizó el Congreso Nacional Provisorio de la Juventud Intransigente y allí el comité pampeano participó a través de la presencia de sus delegados Carlos Ortellado, José Perrota, José Carlos Depetris y Carlos Rodríguez. A propósito, “Hormiga” Ortellado señalaba que el Partido Intransigente “no se propone ser cabeza de este tercer movimiento, sino tan solo uno de sus propulsores, para lo cual aporta su línea ideológica que está encuadrada dentro de lo popular, lo nacional, lo revolucionario”.¹⁵⁶ Durante el congreso, José Perrota, estudiante de la carrera de historia de la UNLPam, fue designado secretario nacional de Prensa y Difusión de la Juventud del partido. A finales de octubre, Oscar Alende visitó la ciudad de Santa Rosa, junto con el presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Arabolaza. El objetivo era apuntalar la presencia pública del PI y fortalecer las bases militantes del partido. En un acto público callejero y con buena concurrencia de público, los dirigentes locales Raúl Gallo, Ricardo Di Nápoli y José Perrota acompañaron al líder intransigente en el panel de oradores.¹⁵⁷ Días más tarde sesionó en la ciudad el secretariado nacional de la Juventud Intransigente, con la presencia de su presidente Darío Díaz.¹⁵⁸ El conclave sirvió para fortalecer el impulso organizativo de la Juventud Intransigente y de sus activistas universitarios. Por entonces, el PI buscaba desbordar sus nichos habituales de simpatizantes, con la inauguración de locales partidarios en barriadas de la ciudad y con presencia en algunos gremios provinciales.

156 AHP, *La Arena*, 15 de septiembre de 1982.

157 AHP, *La Arena*, 24 de octubre 1982.

158 AHP, *La Arena*, 7 de noviembre de 1982.

Imagen 4. Acto y Peña en el Centro Popular “Con todos por la Liberación”, local del Partido Intransigente en una barriada de la zona norte de la ciudad. Noviembre de 1982



Fuente: archivo del diario *La Arena*, PEU, Resol. C. S. N° 847/12.

Los estudiantes de la JUI fueron piezas importantes de la reorganización estudiantil entre 1982 y 1983, tanto en las luchas contra la dictadura como en la dinámica organizativa y asamblearia de elaboración de los estatutos para los centros de estudiantes. No resultan menores los aportes de la JUI —como de todos aquellos militantes que venían del período previo a 1976— para las nuevas camadas estudiantiles que ingresaron a la universidad a partir de 1981 hasta 1983; todos jóvenes que habían trascendido su adolescencia durante la intervención dictatorial, bajo la carga tutelar y restauradora que el Gobierno militar le imprimió a la educación en particular y a la sociedad en general.

En la provincia de La Pampa, la apertura política de 1983 y el inicio de las campañas electorales puso a los militantes de la JUI en la tarea de afiliar personas y sumar adhesiones, en el contexto de un claro dominio del PJ y la UCR y la presencia relativamente importante del MoFePa, partido que durante la dictadura había brindado

una cantidad no menor de dirigentes al proyecto castrense. A pesar de los esfuerzos militantes, la performance del PI en La Pampa fue menor a la media nacional, y lejos quedó de la posibilidad de acceder a una diputación provincial o alguna banca del municipio santarroseño, ciudad donde mayor presencia tuvo.

El 30 de septiembre de ese año, tres militantes del PI iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la aparición con vida de Rubén Álvarez, un militante salteño aparentemente desaparecido. Los huelguistas eran José Perrota, Carlos Ortellado y Miguel de la Cruz, a los que se sumaron Horacio Maldonado, Aníbal Prina y Jorge Rojas. Días más tarde se sumaron Pablo D'Atri y Héctor Mareque. La huelga tuvo una enorme repercusión porque coincidió con la visita del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En ese marco, se llevó a cabo la “Marcha por la Paz y la Democracia”, bajo la tutela organizativa del MoJuPo.¹⁵⁹ Esas acciones funcionaron como piedra de toque para la organización del MPPDH, oficializado un mes después, exactamente el 12 de noviembre de 1983.

En el ámbito universitario, los militantes de la JUI tendieron a confluir en alianzas con la JUP, el MOR y el MR-15. En 1985, Luis Díaz y Diana Moro fueron claves en el armado de la lista de unidad del CEFCHu que llevó a la Secretaría General a Juan José Sena. A partir de 1985, la militancia de la JUI y la JUP acordaron la constitución del FREP, que se complementó con la presencia del MOR y del MR-15. Con esa alianza, en 1986 accedieron a la conducción del CEFCHu, a cargo de la estudiante de letras Diana Moro. Ese mismo año, Eduardo Matta presidió el CENUP, y ambas conducciones fueron ratificadas en 1987. Por varios años, José Perrota participó del Consejo Superior provisorio y fue elegido para este tras la normalización institucional en 1986.

Aunque sostuvieron presencia en todas las facultades, los núcleos más fuertes de la JUI estuvieron en las facultades de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas y Naturales. En abril de 1986, los referentes del FREP José Perrota (JUI) y Gustavo Romero (JUP) tuvieron una participación determinante en las elecciones normali-

159 AHP, *La Arena*, 1 de octubre de 1983.

zadoras de autoridades universitarias, siendo una de las patas estudiantiles claves en la llegada de Esteves Leyte al rectorado. Al mismo tiempo, el FREP retuvo la conducción de los centros de estudiantes, pero a partir de 1987 el frente se desarmó y las dos agrupaciones mayoritarias conformaron el FUNAP.

Hacia 1985, en el espacio partidario provincial se conformaron dos líneas internas dentro del PI, de cara a las elecciones de medio término. La línea “Militancia” reunía el grueso del activismo de la JUI y de referentes como Ricardo Di Nápoli, Susana y Estela Berdasco, Nilda Redondo, entre otros, y se presentó en las elecciones internas con el nombre de lista “Roja y Negra”.¹⁶⁰ Mientras que la línea “Unidad Intransigente” gravitó en torno a los dirigentes con mayor arraigo en el PI, como Raúl Gallo, Eduardo Aguirre, Edgar-do Ruffini y Roberto Ottaviano, además de sostener los vínculos con militantes de otras localidades de la provincia.¹⁶¹ Finalmente, esta última ganó las elecciones internas, pero la ocasión sugiere las discrepancias del grueso de los jóvenes intransigentes respecto de la conducción partidaria.¹⁶² Si bien en la provincia de Buenos Aires y otros distritos de mayor peso electoral ya se había abierto la discusión respecto del vínculo del partido con las corrientes renovadoras del peronismo (Ferrari, 2017), este no parece haber sido el motivo de las internas pampeanas, sino más bien diferencias en las prácticas militantes. La línea “Militancia” buscaba imprimirle una dinámica más movimientista al partido, sin que la disputa de los ámbitos electorales acaparase la presencia militante en otros espacios de articulación política, sea en lo gremial, lo barrial o lo estudiantil. En ese sentido, aunque el activismo de la JUI promovió una política frentista con la JUP a través del FREP y cultivó buenos vínculos con otras agrupaciones del campo de la izquierda, no era el objetivo extender esa dinámica al terreno electoral, en el que el PI buscaba erigirse como alternativa al bipartidismo provincial del PJ y la UCR. En todo caso, la actitud frentista de los activistas de la JUI

160 AHP, *La Arena*, 12 de agosto de 1985.

161 AHP, *La Arena*, 13 de agosto de 1985.

162 AHP, *La Arena*, 28 de agosto de 1985.

expresaba más bien una práctica militante de base compartida con otros agrupamientos estudiantiles.

Desde 1983, el PI había desarrollado una retórica que enfatizaba la necesidad de romper la dependencia en el camino hacia la liberación nacional y social. En el caso de las universidades, los discursos buscaban cimentar el proyecto de “Universidad del Pueblo” al servicio de la “Liberación”. Esa retórica admitía, en cierta forma, una serie de coincidencias con tradiciones y posiciones de la izquierda peronista, de modo que no resultaban extraños los vínculos relativamente cercanos entre la militancia de la JUI y la JUP. En una entrevista de la *RU* a dirigentes del FREP, estos apuntaban que el frente es “una experiencia de militancia pluralista” y que “una de las coincidencias fundamentales que tenemos las agrupaciones del FREP es el logro estratégico de un frente nacional de liberación”. La coincidencia hallaba su fundamento en el común diagnóstico sobre la situación del país, “dependiente y subdesarrollado que transita por una de las crisis más grandes de su historia”. Entre las razones de su situación refieren a “la agobiante deuda externa”, cuyo pago el Gobierno no se decide a cortar, obstruyendo cualquier posibilidad de “reactivación del aparato productivo”.¹⁶³

El año 1987 resultó determinante en las discusiones del PI respecto del vínculo con el peronismo renovador. Las dificultades para tramitar interna y democráticamente la diversidad de posiciones derivaron en la formación de corrientes afines a los acuerdos con el PJ, como la CONAP (Corriente Nacional de Acción Popular) y la TENAP (Tendencia Nacional y Popular). Los estudiantes de la JUI en la UNLPam tomaron partido por fortalecer las relaciones con la JUP a través de la creación del FUNAP. En otros lugares del país, sectores de la militancia intransigente se escindieron en otros agrupamientos, como Patria Libre o el Movimiento Todos por la Patria (MTP). De cualquier modo, la militancia de la JUI sufrió un desgaste que, en algunos casos, representó una fragmentación y sangrado de militantes, y que debilitó internamente su presencia local y su proyección nacional.

163 *RU* n° 16, año IV, junio de 1986, “El FREP es una experiencia de militancia pluralista”.

La Juventud Universitaria Peronista

Desde inicios de la década de 1980, el Partido Justicialista estuvo atravesado por luchas internas heredadas del vacío de poder que produjo la muerte de Juan D. Perón. El armado de las listas para las elecciones de 1983 mostró la hegemonía de figuras que habían mantenido estrechos vínculos con la dictadura militar, como el caso de Ítalo Luder, Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias, candidato a presidente de la nación, vicepresidente del PJ y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, respectivamente. La derrota de 1983 profundizó la crisis interna, a pesar de obtener 12 gobernaciones y la mayoría política en el senado. En los años siguientes, el peronismo a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires se vio sacudido por una constante agitación interna cuya deriva más cabal fue el surgimiento de las corrientes renovadoras.

En 1982 y 1983, los militantes estudiantiles que tempranamente adhirieron y reivindicaron el peronismo debieron lidiar con la carga más o menos negativa de la imagen pública del partido, a partir de su asociación con el pasado violento de la década previa, y reforzada con el cierre de la campaña presidencial, cuando el entonces candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quemó un ataúd con la insignia radical y cuyas imágenes televisivas recorrieron las retinas de miles de argentinos.

Podría sugerirse que la constitución de la JUP pampeana se debió más al empuje de los propios militantes universitarios que reivindicaban su pertenencia identitaria que a una política deliberada y asumida por la conducción del partido. Formalmente, la JUP se reorganizó en 1987, lo que le permitió integrarse orgánicamente a la mesa nacional de las Juventudes Regionales. Hasta entonces, su funcionamiento partidario fue informal, reconocido de hecho, pero sin lugar en la estructura formal del partido.

Desde el inicio de la década de 1980, no todas las agrupaciones universitarias peronistas se identificaron como JUP, sino que lo hicieron con otros nombres, como Juventud Peronista Universitaria (JPU) en el caso de la UNLPam. Recién en 1984, con el visto bueno

partidario, pero sin representación orgánica en el partido, los militantes peronistas comenzaron a nombrarse como JUP.

En la UNLPam, el núcleo inicial comenzó a trabajar relativamente estable luego de la derrota de Malvinas. En ese grupo estaban Gustavo Romero, Héctor Chianetta, Griselda Giuliano, Sergio Drake, Fabián Dirassar, Marcelo Pessino, José Gobbi, entre otros. En conjunto con activistas de otras agrupaciones formaron parte de los procesos de reactivación de los espacios estudiantiles y de movilización general que atravesó a la ciudadanía. Sin embargo, el proceso eleccionario de 1983 marcó a fuego los posicionamientos posteriores de la JUP. Gustavo Romero refiere que:

Nosotros apoyábamos al peronismo a nivel nacional pero no estábamos de acuerdo con las definiciones de Luder con respecto a la autoamnistía que se habían hecho los milicos, pero no significa que dejáramos de votarlo. No estábamos de acuerdo con Herminio Iglesias [...] estaban lo más a la derecha del peronismo [...] no coincidíamos en nada con esa gente. Encima teníamos toda la carga del arrastre que tenía Alfonsín y por otro lado el desprestigio que tenía a nivel nacional la dirigencia nuestra. Imaginate, el más rescatable era Luder, sabiendo que iba a apoyar la autoamnistía de los militares, así que imaginate el resto (entrevista a Gustavo Romero).

A nivel local, los alineamientos eran distintos. La fórmula integrada por Rubén Hugo Marín-Manuel Justo Baladrón alineó tras de sí a todos los sectores del peronismo, luego de una interna en la que participaron cuatro líneas distintas. Aun así, el apoyo de los universitarios obedecía, en no pocas situaciones, a una cuestión de lealtad y obediencia partidaria. Al respecto, dice Romero que:

En la provincia, la JUP estaba mayormente alineada con el Gobierno [provincial] que ganó, con Marín. Nosotros, el grupo de Exactas y Naturales y algunos otros compañeros apoyábamos a Marín, pero [...] había personajes políticos con Marín que nosotros no estábamos de acuerdo y teníamos resquemores. No quiero dar nombres, pero el único que te puedo decir es Aragónés. A ese tipo nosotros nunca lo quisimos, por supuesto, estuvo

siempre, nosotros no incidiíamos, pero igual nunca lo quisimos. Hay otros más, no es que era el único. En ese sentido siempre había discusiones dentro de la JUP si apoyamos o no acciones del partido provincial, y dentro de esas discusiones teníamos sectores más de acuerdo con la línea política del partido y otros que estábamos más en desacuerdo (entrevista a Gustavo Romero).

En ese sentido, la JUP fue una de las agrupaciones universitarias que se caracterizó por una marcada organicidad, más allá de los estatutos y a pesar de los vaivenes que atravesó el PJ a nivel nacional. En 1984, en Exactas y Naturales se formó la agrupación La Jaurechte, que se mantendría por algún tiempo. En 1986, la JUP se integró al FREP, junto con los intransigentes de la JUI, al MOR y al MR-15. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Ciencias Humanas fueron los puntos fuertes de la JUP, aunque también lograron una presencia estable en la Facultad de Ciencias Económicas. Precisamente allí, en 1985 se organizó la agrupación Scalabrini Ortiz y junto con estudiantes independientes se presentó a las elecciones del CEFCE como parte de la lista Naranja. La nómina de candidatos estaba encabezada por José Luis Díaz, Sergio Drake, Adrián Colli, Alfredo García, Carlos Cestac y Pedro Cáceres. Ya hemos referido al papel gravitante del FREP en las elecciones universitarias de 1986. En esas elecciones, Gustavo Romero fue elegido consejero superior por el FREP, junto con José Perrota, una dupla que trabajó en tándem con muy buena sintonía. Recuerda Romero que:

... desde la JUP acordábamos mucho con la JUI, no así con la FM y con el socialismo popular [...]. Cuando hacíamos alianzas, porque solos no llegábamos, esa era la verdad, y ellos tampoco, lo hacíamos con la JUI, pero no era solamente por sumar ladrillos, sino que había una cierta afinidad, y en la militancia también (entrevista a Gustavo Romero).

A pesar de la presencia estable de la agrupación en todas las facultades de la UNLPam, su relación orgánica con el partido estaba limitada por la falta de formalización en la mesa de la JP pampeana. Entre los motivos, la mesa nacional de la JUP no se había normali-

zado por las dificultades internas de encontrar equilibrios entre sus distintas fracciones. Con la emergencia de la corriente renovadora, desde 1984 habían surgido distintos liderazgos en la rama juvenil del PJ. Los más visibles eran Juan Carlos Dante Gullo, Patricia Bullrich y Pablo Unamuno. Esos dirigentes, con cierta experiencia acumulada desde la década previa, tenían gravitación a partir de la capacidad de movilización de la JP y de su participación en el MoJuPo, pero no escapaban al “internismo” peronista de mediados de la década, uno de los momentos de mayores disputas y enfrentamientos internos. De modo que las posibilidades de “normalizar” la JUP estaban atadas a la posibilidad de acuerdos mínimos de funcionamiento, poco visibles en el horizonte de 1984-1985. La lucha por el control de la FUBA había marcado cierto mapa de cómo estaban configurados los acuerdos y posicionamientos. En cierta forma, las agrupaciones universitarias respondían a las líneas de las juventudes partidarias, pero esa organicidad podía variar según el espacio geográfico. Sin dudas, los sectores más verticalistas y disciplinados eran aquellos que gravitaban en torno a dirigentes de peso, como el caso de la JUP de Capital Federal. En ese juego, la JUP pampeana estaba alineada estratégicamente a Dante Gullo, a cargo de la reorganización nacional, pero sus militantes se movieron con otros márgenes de funcionamiento, tanto por la distancia física/territorial y el limitado peso político en las intrigas internas de la JUP como del propio PJ pampeano.

A inicios de mayo de 1986 sesionó en la ciudad de Santa Rosa la “mesa promotora del congreso de normalización de la Juventud Universitaria Peronista”, con la presencia de siete regionales (Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Tandil, La Plata, La Rioja y La Pampa) y la JUP-Rosario de invitada. Entre los puntos salientes se acordó fijar la fecha del congreso normalizador, finalmente efectivizado los días 28, 29 y 30 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Allí se designó a Gustavo Romero como secretario de Derechos Humanos de la mesa nacional de la JUP.¹⁶⁴

164 AHP, *La Arena*, 5 de mayo de 1986.

No siempre los alineamientos políticos respondían a una lógica puramente instrumental, sino que otros factores podían canalizar los apoyos y solidaridades. Como hemos mencionado, el vínculo entre la JUP pampeana y Dante Gullo comenzó a gestarse en el congreso de la FUA en 1984 y fue construyéndose poco a poco mediante gestos recíprocos, como apunta Gustavo Romero:

Por ejemplo, nosotros necesitábamos conseguir para poder movernos algo de plata, mínimo, pero algo de plata. ¿Entonces qué dicen los compañeros de Capital Federal? Bueno, nosotros les prestamos libros y ustedes salgan a vender libros de política. Entonces todos los fines de semana nosotros en la plaza, los domingos, íbamos a vender libros, cuando salían de misa, ahí teníamos el kiosquito en la plaza y vendíamos libros, de Jauretche, de Scalabrini Ortiz, lo más nacional y popular que encontrábamos. Ese préstamo original para arrancar nos lo dieron ellos, entonces después les pagamos esos libros y nosotros seguimos vendiendo libros, y tuvimos por mucho tiempo esa biblioteca (entrevista a Gustavo Romero).

El vínculo de ida y vuelta entrelazaba relaciones políticas y de cercanía con otros dirigentes peronistas, tanto pampeanos como nacionales:

La revista *Unidos* era algo que seguíamos siempre y nos llegaba a través de los colaboradores de los diputados nacionales, me acuerdo de Baladrón, por ejemplo. Salía hoy en Bs. As. y nosotros la teníamos mañana acá. Después había muchos libros, el grupo de los ochos, por ejemplo, muchos de ellos eran intelectuales [...] desarrollaban mucha información escrita, todo eso nos llegaba casi al instante a nosotros (entrevista a Gustavo Romero).¹⁶⁵

165 Huelga una aclaración: la referencia al grupo de los ochos es un desfase temporal de la rememoración durante la entrevista. Puntualmente, el grupo de los ochos refiere a un bloque de diputados dentro del PJ que, entre fines de 1989 e inicios de 1990, se distanciaron de la conducción oficialista en razón de los indultos otorgados por el presidente Carlos Menem a militares condenados por su actuación durante la dictadura de 1976-1983. Entre los integrantes del grupo de los ochos había referentes políticos e intelectuales que habían sido claves

De ese modo, con la JUP normalizada y alineada en la corriente renovadora, los congresales peronistas llegaron al congreso de FUA con disímiles posturas, a partir de los acuerdos y marcos de alianzas en curso en las distintas universidades del país. Esa situación explica, parcialmente, la presencia de José Luis Manzano para oficiar de interlocutor político. El entonces diputado nacional mantenía un trato regular con los jóvenes universitarios, tanto en lo político como en la mediación de recursos económicos, prensa, etc. Como ya mencionamos, es probable que la JUP formase parte del acuerdo más amplio del PJ-UCR, que permitió a la hegemónica FM-JCN el acceso a la reelección de la FUA (en acuerdo con el MNR). En el reparto de cargos, ese sector del peronismo universitario obtuvo la Secretaría de Derechos Humanos, a manos del pampeano Gustavo Romero.¹⁶⁶

Los meses siguientes fueron comunes al resto de la militancia. El atisbo movilizador que mostró la Semana Santa de abril de 1987, cuando mucha gente salió a la calle a rechazar el alzamiento militar, dio paso a la decepción y la dispersión militante. Romero reflexiona:

Yo creo que la política no supo resolver las cuestiones económicas, entonces veníamos de mal en peor [...] ya teníamos problemas de hiperinflación, hoy te levantabas y el plan austral se había caído. Entonces veníamos golpeados en lo económico y también en la parte política con los levantamientos de los militares. Entonces hay muchos que empiezan, no sé si a descreer de la política, pero que no era lo que nos habíamos creído en el 83 (entrevista a Gustavo Romero).

En los meses siguientes, la alianza con la JUI sostuvo la representación en los espacios estudiantiles y se fortaleció la presencia institucional del peronismo. Años más tarde, en 1990, el contador Oscar Mario Jorge, hombre del PJ pampeano, accedería al rectorado de la UNLPam.

en la constitución de la revista *Unidos* y de la corriente renovadora, como el caso de Carlos “Chacho” Álvarez y Luis Brunatti.

166 AHP, *La Arena*, 15 de abril de 1987.

El Movimiento Reformista 15 de junio

En 1980, con el resurgimiento de los partidos políticos que participaron de las primeras rondas de diálogo político, comenzó a reorganizarse el Partido Socialista Auténtico (PSA). A partir de 1982, el PSA conformó el Movimiento Reformista 15 de junio, a partir de la adhesión de numerosos estudiantes que se sumaron a la militancia universitaria, con el objetivo de fortalecer su presencia en la universidad, uno de sus tradicionales espacios de adhesión política. En ese proceso de encuadramiento de las militancias en espacios partidarios, Mirta Zink recuerda:

Yo me acerco al MR-15 del PSA, algunos ya venían militando dentro del partido y lo que querían era fortalecer el movimiento estudiantil dentro de la universidad [...]. Ahí empezamos a militar varios. Daniel Pérez Funes era un poco el referente, otro era Eduardo Mariños [...], me sumé yo, Eduardo Kasic, Sergio Maluendres, Bety Dillon, Carlos Schultz, Roberto Petic, Leonardo Santesteban, Claudia Páez, Darío Mogle (entrevista a Mirta Zink).

Precisamente, Sergio Maluendres recuerda que a inicios de 1982 se dio un conflicto importante por el plan de estudios de la carrera de historia. Un momento de tensión surgió cuando, en ocasión de la visita del ministro de Educación de la nación, Cayetano Licciardo, para la inauguración del Colegio Secundario de la UNLPam, un grupo de estudiantes de historia motorizaron un encendido reclamo público sobre la necesidad de aprobar el nuevo plan de estudios de la carrera, proceso que motivó cruces y disputas abiertas con sectores del claustro docente. La trascendencia pública del conflicto y la resolución favorable a los reclamos estudiantiles aglutinó a un conjunto de compañeros que se relacionaron con el PSA. De ese modo,

... a fines del 82 yo empecé a participar [...]. Muy rápidamente, con un grupo [en el] que recuerdo a Daniel Pérez Funes (historia), Margarita Bastián (historia) y otros compañeros, nos afiliamos al Partido Socialista y empezamos a militar políticamente.

Ahí también estaba Leonardo Santesteban. Varios de nosotros fuimos candidatos simbólicos a concejales en el 83 (entrevista a Sergio Maluendres).

En el transcurso de ese año, el PSA buscó fortalecer la presencia partidaria en la institución, en vista de las elecciones generales de octubre. El espacio universitario le proveyó un ámbito de acción y nombres para conformar las listas municipales. Sin embargo, como hemos venido apuntando, las relaciones entre militancia universitaria y adhesión al partido no eran directas, de hecho, Mirta Zink afirma que “algunos que nos sumamos al MR-15 no estábamos dentro del PSA y de hecho no nos afiliamos tampoco” (entrevista a Mirta Zink).

Los escasos resultados obtenidos en la contienda electoral de octubre de 1983 abrieron grietas y discusiones más amplias que se trasladaron a la universidad. Mirta Zink recuerda que “empezó a ver más fricción entre el MR-15 y el PSA”, y quienes estaban al frente del partido “empezaron a querer marcar una línea dentro de la universidad, con quiénes hacer alianza, etc., y nosotros no acordamos con eso, algunos de nosotros nos fuimos” (entrevista a Mirta Zink). El alejamiento de activistas de la órbita del partido y posteriormente del MR-15 fue gradual, en la medida en que el compromiso y la disposición militante para apuntalar los procesos de movilización, de recuperación de espacios gremiales y de apuestas al fortalecimiento democrático ralentizó la salida abrupta del partido. De hecho, en las elecciones de centro de estudiantes de 1984, el MR-15 participó de las alianzas electorales con una presencia estable en la Facultad de Ciencias Humanas, en la que Sergio Maluendres fue candidato a presidente del CEFCHu, en alianza con la JUI y el MOR, perdiendo las elecciones por escasos votos. Las estructuras partidarias podían funcionar de referencia para los activistas, pero el marco de acción que construían los militantes de base podía ir a contramano de los acuerdos y líneas políticas del partido, lo que generaba rispideces con los activistas universitarios:

Yo fui uno de los que planteé dentro del partido empezar a trabajar con el Partido Comunista, con el Partido Intransigente,

estaba la Democracia Cristiana, digamos, toda una serie de partidos de centro izquierda...empezamos a generar toda una serie de reuniones, fuimos consecuentes en la facultad (entrevista a Sergio Maluendres).

La propia dinámica estudiantil de trabajo conjunto por sobre las adhesiones identitarias alimentó el carácter autonómico de la praxis política, autonomía entendida como una tensión recurrente frente a la heteronomía partidaria. El testimonio de Mirta Zink permite advertirlo:

Discutíamos con Eduardo Mariño, que era un poco quien llevaba la voz del partido, le dijimos la política del partido no, nosotros vamos a mantenernos con independencia, vamos a ir actuando y a hacer nuestras alianzas en función del contexto que tenemos dentro de la universidad, y como éramos mayoría quienes sostenían esa posición en el partido se la tuvieron que aguantar y seguimos militando un tiempo en el MR-15 (entrevista a Mirta Zink).

El momento de mayor presencia del PSA en la militancia estudiantil comenzó a desestructurarse a mediados de 1984, cuando algunos activistas que habían sido referentes desde 1982 se alejaron de la agrupación, como Sergio Maluendres: “Dejé de militar políticamente en el PSA porque fui expulsado con el grupo de estudiantes que promovíamos una alianza con otros sectores como el PC, el PI”, en una asamblea en la Casa del Pueblo en la que “el oficialismo nos expulsa a los díscolos” (entrevista a Sergio Maluendres).

De ese modo, el éxodo de activistas hacia otros espacios limita la presencia real del MR-15. A esa situación deben agregarse algunas particularidades comunes a toda la militancia estudiantil del período, como el caso de aquellos que van finalizando sus carreras universitarias y pierden la presencia regular en la institución. Otros regresan a sus localidades de origen. En el caso de las mujeres, el embarazo y/o nacimiento de hijos condiciona la militancia. Todas variables que marcan el carácter dinámico y a veces irregular de la militancia universitaria y que dificulta la transmisión de saberes, conocimientos y/o formación política de los estudiantes. En los años

siguientes, el MR-15 siguió funcionando con algunos núcleos de activistas. Sus marcos de alianzas se afianzaron con la participación en el FREP, en 1986 y 1987. Sin embargo, hacia 1988 sus núcleos de activistas y simpatizantes se vieron muy mermados, reducidos a un puñado de militantes, al mismo tiempo que el avance de la década mostraba la disminución progresiva en la capacidad de dinamizar la participación estudiantil.

El Movimiento de Orientación Reformista

Durante los últimos años de la dictadura militar, la Federación Juvenil Comunista (FJC) inició un período de reorganización y de autocrítica interna que se expresó de manera evidente algunos años después, en el XVI Congreso Nacional del PC (1986), cuando los comunistas decidieron un viraje de su línea partidaria, dejando atrás la línea reformista y abrazando la vía revolucionaria para la acción (Gilbert, 2009). En ese proceso mucho tuvo que ver la presión de las bases juveniles que asumieron una dura crítica contra los principales dirigentes que guiaron el desenvolvimiento y orientación del Partido durante las décadas previas. A pesar de las luchas internas en el seno del Comité Central –agudizadas tras el fracaso de la estrategia electoral de 1983, cuando el PC apoyó la fórmula presidencial del Partido Justicialista (I. Luder y D. Bittel)– la FJC buscó desplegar, al menos desde 1980, una importante actividad política con el objetivo de reinsertarse en los espacios de la juventud, fabriles y estudiantiles, a través de diversas manifestaciones culturales, como recitales de música, ferias de artes e intercambios, actividades teatrales, entre otras (Ermosi, 2015).¹⁶⁷ En los años siguientes al retorno democrático, la FJC promovió una centralidad inédita del “Che” Guevara, una figura controversial para las tradiciones del PC, al

167 Para una historia general de la FJC ver Gilbert (2009). En 1983, frustradas las posibilidades de acuerdo con otros sectores de la izquierda, como el PI, el PC decidió brindar el apoyo electoral a la fórmula peronista. A pesar de la estrategia oficial, Gilbert afirma que “luego se corroboró que muchos simpatizantes comunistas votaron por el radical” (2009: 675). En todo caso, el fracaso de la apuesta electoral incidió en el reordenamiento posterior de los equilibrios y relaciones de fuerza internas del partido.

menos desde fines de la década de 1960. Ese rasgo distintivo de los tempranos años ochenta se combinó con la estrategia internacionalista de apoyo logístico y material a países como Nicaragua, El Salvador o Chile. El cúmulo de experiencias y (auto)críticas de la performance del Partido fue madurando el viraje de la línea partidaria e imponiéndose la expresión de Frente de Liberación Nacional y Social, que abrió las puertas para el despliegue de una política novedosa en términos de aliados, como fue el acercamiento al MAS mediante el Frente del Pueblo (FrePu) y luego el FRAL, con humanistas, radicales disidentes e independientes (muchos de ellos nucleados en el Movimiento 29 de Mayo).

En el plano universitario, el MOR se sostuvo semiclandestino durante la dictadura, y desde 1978/1979 algunos de sus dirigentes nacionales (especialmente de Capital Federal) participaron de la Junta Representativa de la FUA. Desde la FJC se estimuló la reorganización de las regionales, entre ellas La Pampa, que derivó en el fomento de las actividades estudiantiles en el espacio de la universidad. De ese modo, desde 1982, el MOR se integró al conjunto de agrupaciones y militancias que en la UNLPam reclamaron contra los aranceles, por la restitución de los espacios estudiantiles y por la democratización efectiva de la institución universitaria.

En términos generales, el MOR tuvo una militancia estable y regular pero poco masiva en la UNLPam, sus espacios de mayor presencia fueron en la Facultad de Ciencias Humanas y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Algunos de sus militantes participaron en las listas neutras de 1983 y al año siguiente se integraron a las alianzas con la JUI, la JUP y el MR-15. En 1985, la lista única del CEFCHu encabezada por Juan José Sena, tuvo a Ricardo González en la Secretaría de Prensa y Difusión y a Susana Badillo y Teresa Pérez como congresales para la FUP, mientras que desde el año siguiente participaron del FREP en la conducción del CEFCHu y del CENUP.

En el marco de la campaña de apoyo a la ayuda internacionalista, los últimos días de marzo de 1985 visitó la ciudad de Santa Rosa Luis Schenone, uno de los jóvenes comunistas integrante de las brigadas que participaron en Nicaragua en el Frente Sandinista

de Liberación (FSLN). En compañía de Luis Brinatti, referente de la FJC de La Pampa, Schenone afirmó que “el Frente Sandinista es realmente la vanguardia de la revolución”, a partir de que “han logrado incorporar al proceso revolucionario a todas las capas de la población: no solo al campesinado, al estudiantado, a la clase obrera, sino también a las capas medias de la burguesía nacional”. Luego de narrar los detalles de su experiencia, el joven brigadista sostuvo que la experiencia vivida en el país centroamericano “no hace más que reafirmar nuestras convicciones de vivir en democracia, que es nuestro compromiso político [...] y que debemos profundizar en el aspecto de la justicia social”.¹⁶⁸

La FJC había saludado el proceso nicaragüense desde 1978, con el ascenso del FSLN. Tras la descomposición de la dictadura argentina, a mediados de 1984 comenzó a gestarse el apoyo argentino mediante el envío de la “Brigada General San Martín”, compuesta por 120 voluntarios destinados a colaborar en la cosecha de café. Los brigadistas partieron el 3 de enero de 1985 en un vuelo chárter con escala en Panamá. Luego de la primera experiencia se sucedieron otras que involucraron países como El Salvador y Chile, todos destinos donde la FJC mantenía estrechos vínculos políticos (Gilbert, 2009: 693-706).

Los cambios internos que venía expresando el PC fueron el marco para el acercamiento a otros sectores de la izquierda, como el MAS, y a otras militancias de extracción radical, peronista o sin filiación partidaria, que confluyeron en el FrePu.¹⁶⁹ En ese sentido, en el congreso de la FUA de 1987, el MOR acompañó la propuesta del FASP y posteriormente sus agrupaciones de base se integraron al frente en todos los lugares en los que se replicó la estrategia, entre ellos la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. De ese modo, el acercamiento a la CNL, al FASP y al Movimiento 29 de Mayo tuvo su correlato en la conformación del FRAL.

168 AHP, *La Arena*, 30 de marzo de 1985.

169 La alianza participó de los comicios electorales para la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. En La Pampa, el FrePu organizó algunos comités de bases, pero la performance electoral fue más bien limitada, ubicándose detrás del PI, en el sexto lugar.

De igual manera que otras agrupaciones universitarias, los militantes del MOR participaron en diversos espacios de articulación como el MPPDH o el MoJuPo, alineados a las luchas conjuntas en la defensa de los derechos humanos o en la reivindicación de los sectores populares. A partir de 1987/1988, la presencia de los comunistas en la UNLPam se vio aún más limitada, en el marco de la desmovilización general de la sociedad y la crisis de las militancias partidarias.

El Movimiento Nacional Reformista

El MNR es una fuerza de origen estudiantil conformada a inicios de la década de 1960 luego del conflicto “laica o libre” durante la presidencia de Arturo Frondizi. Entre sus fundadores estaba Guillermo Esteves Boero, Edgardo Galetti y Marcos Rosa y sus principales bastiones eran la ciudad de Rosario y en menor medida Córdoba y Tucumán (Suárez, 2018). Durante los años siguientes, la agrupación formó parte de la radicalización de corrientes reformistas que se opusieron a la dictadura de Juan Carlos Onganía y años más tarde condujeron la FUA, en los años 1971 y 1973 (Califa, 2014). En 1972, el MNR fue parte de la conformación a nivel nacional del Partido Socialista Popular, integrado por sectores del Partido Socialista Auténtico y diferentes grupos de extracción universitaria y gremial, como el MAPA (Movimiento de Acción Popular Argentino, creado en 1970 sobre la base del MNR), Militancia Popular y el Grupo Evolución. Sin embargo, a poco de andar comenzaron las discrepancias, disputas y escisiones que diezmaron su presencia efectiva como fuerza política (Suárez, 2018).

En La Pampa, esas querellas internas recrudecieron a inicios de la década de 1980, cuando comenzó a despuntar la posibilidad de reapertura democrática. Mientras el PSA, con personería jurídica, se presentó en las elecciones de 1983, el PSP no pudo hacerlo e inició un lento trabajo de reinserción institucional. En La Pampa, el MNR se organiza como parte del impulso reorganizador del Partido Socialista Popular y se integra al círculo de agrupaciones partidarias del espacio pampeano. Desde 1983, la rama juvenil del partido –al-

gunos de ellos estudiantes— participa en el MoJuPo y en las distintas iniciativas que ese espacio lleva adelante. Al calor de la recuperación democrática, en la UNLPam se fue armando un pequeño núcleo de activistas con base en la Facultad de Ciencias Económicas, que en 1984 llegó a la presidencia del centro de estudiantes, con Adrián Peppino a la cabeza. Al año siguiente, en 1985, el MNR es derrotado por la FM y pierde la conducción de ese centro de estudiantes. Sin embargo, al año siguiente, forman una alianza ante la conformación del FREP y retienen juntos la presidencia.

A nivel regional, el MNR pampeano mantuvo estrechos vínculos con la Regional Santafecina, acaso el mayor núcleo de militancia del MNR y de la juventud socialista. En febrero de 1984, visitó la UNLPam Miguel Zamarini, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Nacional Reformista. Acompañado por Adrián Peppino, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, los dirigentes estudiantiles manifestaron la preocupación por la demora en los nombramientos de los decanos interventores y reclamaron la pronta resolución del tema del ingreso, la situación de los planes de estudio y los concursos docentes.¹⁷⁰ Meses más tarde, visitó la ciudad Rubén Giustiniani, a cargo de la agrupación nacional y miembro de la mesa directiva de la FUA.¹⁷¹

Precisamente en el congreso nacional de la FUA de 1984, el MNR revalidó su estrecha alianza con la Franja Morada y participó de la dirección de ese órgano. El vínculo con los sectores radicales, forjado durante la década de 1970 en la tradición del reformismo universitario, fue una línea rectora del MNR que se replicó en el espacio regional de la FUP hasta 1987. Durante nuestro período de estudio, la presencia del MNR en la UNLPam fue relativamente acotada a la Facultad de Ciencias Económicas, en la que se integraron al Consejo Directivo —además del CEFCE— buscando replicar un modelo de gestión estudiantil que se proyectara hacia otras unidades académicas.

170 AHP, *La Arena*, 20 de febrero de 1984.

171 AHP, *La Arena*, 18 de octubre de 1984.

Algunas notas finales

A lo largo del capítulo, hemos reconstruido las trayectorias de las agrupaciones que, con cierta estabilidad, modularon la cartografía de la militancia estudiantil de la UNLPam durante el período. En páginas precedentes mencionamos a la partidización como un rasgo característico durante la transición y posterior recuperación democrática, aspecto que restituyó modalidades de organización distintiva del período 1966-1976. En ese sentido, si bien las agrupaciones se referenciaron en los partidos políticos a partir del vínculo con las estructuras provinciales, esa relación se vio condicionada por la propia dinámica interna de la UNLPam, en la medida en que las agrupaciones pudieron construir y sostener, sin dejar de lado la contienda electoral en los espacios de representación, una agenda común de trabajo, tanto en la recuperación de centros de estudiantes como en aquellos reclamos vinculados a los aranceles, a la restitución de edificios universitarios, los concursos docentes y la reconstrucción de la FUP. Ese conjunto de elementos diversos fortaleció la presencia de una orientación política que osciló del centro hacia la izquierda, diferenciándose de experiencias en otros puntos del país donde proliferaron agrupaciones estudiantiles que buscaron apuntalar una participación despolitizada del estudiantado, y cuya gravitación fue expandiéndose a lo largo de la década.

En ese marco, la politización de los jóvenes universitarios desbordó los ámbitos institucionales de la UNLPam, inscribiéndose en un espacio más amplio de intervención social, sobre todo con expresiones como el movimiento de DD. HH. Esa suerte de “unidad en la acción” que las agrupaciones desplegaron en determinadas coyunturas y temas particulares, pudo resultar gravitante en la trayectoria específica de distintos espacios políticos. Resulta evidente el caso de la FM, que desde mediados de la década comenzó a marcar una acentuada distancia respecto del partido y de la propia agrupación a nivel nacional, situación que se corroboró tiempo después con su adhesión a la CNL.

Por el contrario, fue la JUP la agrupación que más exploró la posibilidad de vinculación e integración en espacios de militancias

a escalas diferenciadas. En ese sentido, los activistas locales participaron activamente en los esfuerzos por (re)organizar formalmente a la mesa nacional de la JUP, en cierto modo apuntalados por el carácter movilizador que la emergencia de la renovación peronista le imprimió a un conjunto de militancias de base.

Sin embargo, las relaciones entre partido, juventudes y agrupaciones estudiantiles se configuraron de modos sinuosos, a partir de distintos cortocircuitos internos, reacomodamientos y/o desprendimientos de activistas que, en definitiva, terminaron por marcar el tono de nuestro período de estudio. Acaso un punto importante de esa dinámica fue la capacidad de sostener una unidad estudiantil en la llegada al rectorado de Raúl Estévez Leyte, el “rector de los estudiantes”, como se lo denominó en la época. Esa confluencia se plasmó en la lista “Universidad Popular Agustín Tosco”, acaso una denominación que atravesaba las adhesiones identitarias del conjunto de las militancias estudiantiles y marcaba el pulso de la apuesta al trabajo común, más allá de las querellas electorales internas y de los alineamientos partidarios en la casa de estudios.

Sin embargo, las expectativas estudiantiles reunidas a partir de esa experiencia se vieron muy condicionadas por el más amplio contexto nacional, marcado por la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el desfinanciamiento del sistema público de universidades –incluidos los salarios docentes– y los problemas de una democracia que parecía encontrarse en un callejón sin salida, amenazada por la presencia creciente de sectores militares que, en abril de 1987, encabezaron una nueva asonada militar.

En ese contexto, las agrupaciones estudiantiles asistieron al congreso de la FUA, acaso con expectativas de que el movimiento estudiantil ofreciera una alternativa que recuperase su dimensión más política y movilizadora, de cara a una realidad que mostraba el deterioro progresivo de las universidades y del conjunto de la sociedad en general. Sin embargo, los términos de resolución del congreso universitario lejos de apuntalar una más amplia y generalizada posición de unidad estudiantil, marcó un nuevo reordenamiento en la cartografía de la militancia, pampeana y en general, a tono con el derrumbe generalizado de las expectativas forjadas al calor de la recuperación democrática.

Capítulo V. Liberación nacional, democracia y derechos humanos

Años de dictadura han llevado a confundir el concepto de democracia – gobierno del pueblo– con los conceptos de libertades y garantías, eso que tanto empeño se ha puesto en conceder a la población [...] nada hay más difícil que establecer la democracia, u operar democráticamente, porque esto exige acciones tendientes a incrementar la chance de participar en el poder a todos los ciudadanos.

Rodolfo Fogwill, “La herencia cultural del proceso”¹⁷²

En un viejo escrito, Héctor Schmucler (2004) sugería que la política, en cuanto creación humana, se apoya en la certeza de que habitar humanamente la tierra es, sustancialmente, habitar *con otros*. ¿Cómo (re)constituir los lazos generacionales quebrantados, alterados, por el poder dictatorial? ¿Cómo des-sujetar la apatía del hombre *desolado y desolidarizado*? ¿Cómo (re)construir una nueva palabra política que apunte nuevos futuros *junto con otros*?

Entre 1982 y 1988, la militancia estudiantil de la UNLPam fue parte del activismo que, a lo largo y ancho del país, se movilizó y bregó por la recuperación de ámbitos de participación política y por sus derechos a intervenir en la vida universitaria. Un conjunto de preocupaciones y reclamos los entrelazó con otros pares del país, desdibujando particularismos y construyendo agendas comunes; es el caso de las luchas por la eliminación de las restricciones al ingreso y al arancelamiento, el rechazo al continuismo de los funcionarios

172 Revista *El Porteño*, mayo de 1984.

y de las políticas heredadas del período dictatorial, la revisión de la planta docente y la “normalización” de las instancias de participación política (centros de estudiantes, consejos directivos, consejos superiores, asambleas universitarias), entre otros. Al mismo tiempo, y con distintos énfasis, los estudiantes de la UNLPam compartieron preocupaciones respecto de las formas y los alcances en que la casa de estudios participaba de la trama social ¿Cuál era el rol e implicancia de la institución universitaria en la escala regional, nacional e incluso latinoamericana? ¿De qué manera la universidad podía participar en la reconstrucción democrática? Acaso como una década antes, la casa de estudio se ubicaba en un lugar expectable para pensar futuros, apuntalar cambios y resituar la posibilidad de nuevos proyectos colectivos. En ese sentido, la militancia estudiantil intervino activamente en el más vasto espacio de la arena pública, mediante manifestaciones, expresiones e intentos de materializar diversas perspectivas políticas, sociales, económicas y culturales, la mayoría de las cuales se orientaba por el intento de trascender el quietismo y la moderación impuesta por el proceso de facto de los años previos.

Esas inquietudes, en mayor o menor medida, se encontraron atravesadas por temas prominentes de la agenda pública a la salida de la dictadura: los reclamos en torno a las violaciones de DD. HH. y el terrorismo de Estado, el rechazo de la impunidad, la denuncia sobre la vigencia del aparato represivo, la situación agobiante de la deuda externa, la orientación de la política económica, las presiones internacionales. Cada uno de esos temas y preocupaciones adquirió ribetes diferenciales en cada región. El activismo estudiantil pampeano, con sus propias especificidades, no fue ajeno a la dinámica de la política nacional, se alimentó de ella y moduló sus variaciones de acuerdo con sus propios ritmos y circunstancias.

El ideario tercermundista y de la liberación nacional

Como apuntamos al inicio del libro, la intervención del terrorismo de Estado produjo una marca profunda en las cadenas de transmisión generacional de las tradiciones y saberes de la militancia

estudiantil. Sin embargo, en el laborioso trabajo de reconstruir tradiciones políticas y marcos de sentido, la militancia estudiantil de los años ochenta rescató parcialmente el imaginario liberacionista de dos décadas antes, saltando por encima de los años dictatoriales y sus legados de orden, disciplina y *statu quo*. El ideario tercermundista y de la liberación nacional, como signifiante político, reconocía una filiación directa con el discurso revolucionario de las décadas de 1960 y 1970. Como apunta Valeria Manzano, entre “fines de los años sesenta y principios de los setenta, la socialización política de los jóvenes argentinos transcurrió y se forjó al calor de una novedosa trama ideológica cuyo componente clave era la asimilación de nuestro país al Tercer Mundo” (2017: 263). El lenguaje tercermundista y liberacionista, dominado por palabras como “dependencia”, “opresión social”, “violencia”, fue corriente entre las agrupaciones estudiantiles de izquierda, un abanico amplio que incluía a los sectores de la izquierda partidaria, peronistas, católicos e incluso a los grupos considerados “reformistas”, como la FM y algunas expresiones del socialismo. En cierta forma, ese imaginario funcionó como crisol de una cultura política que tiñó la experiencia cotidiana de los jóvenes, al tiempo que expresaba la disconformidad con los cánones y parámetros modernistas de la sociedad de consumo.

A pesar de la intervención dictatorial, desde 1982, la cuestión de la liberación nacional fue un aspecto relativamente presente en los discursos del campo político que se identificaba con posiciones de (o cercanas a) la izquierda. En julio de ese año, la multipartidaria provincial expresaba su acuerdo para consensuar un “programa de liberación nacional”.¹⁷³ En abril de 1983, Guillermo Pérez Funes, dirigente provincial del PSA, sostenía que la contradicción fundamental “es liberación o dependencia”, a pesar de que “hay sectores que hacen prevalecer la contradicción capital-trabajo, que sin dudas existe, pero hay cosas que no se pueden dejar de lado”.¹⁷⁴ El diputado nacional Augusto Conte, adscripto a la corriente Humanismo y Liberación, dentro del PDC, visitó la ciudad de Santa Rosa en ocasión de la “Marcha por la democracia y la vida y contra el apa-

173 AHP, *La Arena*, 6 de julio de 1982.

174 AHP, *La Arena*, 29 de abril de 1983.

rato represivo”, al cumplirse un año de las elecciones generales que determinaron el fin de la dictadura militar. En esa ocasión, “el diputado de los derechos humanos” –como se lo nombraba a Contexplicaba que “el tema de la defensa de la democracia, en vigencia de la justicia social y de la vida democrática pasa por el de levantar las banderas de la liberación nacional, sin la cual nada del resto será posible”. Al mismo tiempo, reclamaba al presidente Alfonsín que el “diálogo que mantiene en secreto con las FF. AA.” sea convertido “en un gran debate público”. Ese deseo entroncaba con la necesidad de no aceptar las pautas recesivas del FMI, al verse en evidencia “el estrecho vínculo entre la patria financiera y la represión de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.¹⁷⁵

En diciembre de 1985 se realizó en la ciudad de Rosario el “Encuentro de intelectuales por la democracia y la liberación”, en el que más de 500 personalidades de 15 provincias del país debatieron sobre “la crisis orgánica que atraviesa al país y a la sociedad civil argentina” y la incidencia que sobre ella tiene “la propia crisis internacional del capitalismo, por nuestro carácter de país dependiente y por las exigencias del nuevo modelo de acumulación a escala mundial”.¹⁷⁶ En el marco del lanzamiento de la campaña por la Paz y la Justicia por parte del SERPAJ, en junio de 1986, Adolfo Pérez Esquivel declaraba que “el proceso de liberación en Argentina será una obra de todos o no se libera ninguno”.¹⁷⁷

Pero sin dudas fue el Partido Intransigente quien extrajo del ideario liberacionista sus principales consignas y argumentos. A inicios de la década, y bajo la conducción de su veterano líder Oscar Alende, el partido reeditó el documento “Aportes para un Proyecto Nacional”, originalmente aprobado en diciembre de 1975. Una parte sustancial de este refería a un detallado “Programa contra la Dependencia y por la Liberación”.¹⁷⁸ De hecho, la campaña presi-

175 AHP, *La Arena*, 31 de octubre de 1984.

176 Revista *Crisis*, n° 50, enero de 1987, p. 63.

177 AHP, *La Arena*, 20 de junio de 1986.

178 Entre sus propuestas incluía: la planificación económico-social obligatoria para los sectores público y privado en un marco de descentralización operativa; la predeterminación de las áreas de inversión extranjera; la estatización de la banca, el crédito y el seguro con excepción del crédito cooperativo; el monopolio del Banco Central en la tenencia y negociación de

dencial del PI buscó ubicarse como la alternativa de izquierda democrática que rompiese con el tradicional bipartidismo argentino. Un volante de propaganda para el acto del 24 de junio de 1983 en el estadio Luna Park, decía que “así como el liberalismo económico es la ideología de la dependencia, el nacionalismo popular revolucionario [...] es la ideología de la liberación nacional y social”, y acto seguido proponía un

... proyecto de desarrollo autodeterminado, caracterizado por la plena vigencia de las libertades públicas y privadas, el respeto de la Constitución Nacional, la participación popular plena, la ejecución de una política agraria que elimine latifundios y minifundios, el desarrollo de la industria básica y política económica independiente, un programa científico-tecnológico para la autonomía tecnológica, el desarrollo cultural en pos de una filosofía de la solidaridad social que garantice la realización del individuo, la integración latinoamericana y el apoyo al Movimiento de Países No Alineados.¹⁷⁹

En efecto, la retórica liberacionista atravesaba, con distintas intensidades, los discursos políticos del campo de la izquierda y adyacencias. Un rasgo que, conforme el avance de la década, fue perdiendo su vigor y capacidad de interpelación social, al tiempo que se reponían y *aggiornaban* discursos políticos con foco en los problemas de la modernización y de la eficiencia estatal.

En el caso del movimiento estudiantil, el tema de la *liberación nacional* fue paulatinamente incorporado, desde 1982, a los discursos del grueso de las agrupaciones políticas de orientación

divisas extranjeras; la eliminación progresiva los impuestos indirectos y su sustitución por los que gravan a la renta y a los patrimonios; la estatización del comercio exterior; la promoción de cooperativas de producción, distribución y consumo y de fondos compensadores para la producción agropecuaria; la reforma agraria y el ordenamiento de la producción según las características ecológicas y las infraestructuras; la estatización de las industrias básicas y estratégicas; y la reforma de la empresa para asegurar la co-gestión obrero-empresaria y el ajuste automático de salarios. El documento completo puede consultarse en línea en el sitio web del PI: <http://www.pi.org.ar>, sección “Documentos”.

179 Volante “Habla Oscar Alende. Luna Park 24 de junio. 20 hs.”, CeDInCI, SHB/CPA C1/10-7, Código de referencia VL0028.

izquierdista.¹⁸⁰ ¿Cómo era significada la liberación nacional por la militancia estudiantil? En principio, remitía a una de las contradicciones fundamentales, según los enunciarios, que atravesaba el país: la cuestión de la dependencia de las estructuras económicas al imperialismo, encabezado principalmente por los Estados Unidos de América.

Para Eduardo Aguirre, dirigente provincial del PI, “la idiosincrasia de nuestro país hace que el proceso de liberación sea posible solo con la unión de grandes sectores, trabajadores, clase media, burguesía, que incluye a pequeños y medianos comerciantes, productores industriales, quienes deben integrarse al movimiento liberador”.¹⁸¹ En esa línea de análisis, la JUI emitió un documento en diciembre de 1983 en el que consideraba fundamental reclamar “una política de apoyo al sistema democrático” recién instaurado, lo que no significaba “inmovilidad y verticalismo” sino “una mirada crítica que aplauda y reafirme” los aciertos y “ ejerza un papel impulsor y orientador de aquellas que deban ser corregidas o profundizadas”, aspectos indispensables para lograr una superación de “las estructuras tradicionalmente dependientes de nuestra sociedad”. En sintonía, la JUI insistía en la unidad del movimiento estudiantil, “sin caer en los sectarismos partidistas, que introducen falsas divisiones entre los sectores populares y que deben estar más aliados que nunca para enfrentar al enemigo común: el imperialismo, la oligarquía nativa y las dictaduras militares”.¹⁸²

En mayo de 1984, el dirigente estudiantil Rubén Levenberg, secretario general del MR-15 a nivel nacional, señalaba a la prensa santarroseña que “nosotros entendemos la Reforma Universitaria no como un fin en sí mismo sino como una proyección de justicia social, de universidad al servicio del pueblo. Es una herramienta

180 En la UNLPam, nos referimos a la FM, JUI, MR-15 y el MOR. El MNR no asumió de manera directa el discurso liberacionista, aunque en ocasiones compartió actos, declaraciones conjuntas, comunicados de prensa o ámbitos gremiales (como la FUP) que enfatizaban el ideario liberacionista. Respecto del peronismo, sus militantes de base se ubicaron en la tradición izquierdista del peronismo, reivindicando las luchas y anhelos de la JUP de los setenta, sin embargo, contamos con pocas fuentes documentales que refieren a esa posición.

181 AHP, *La Arena*, 19 de mayo de 1983.

182 AHP, *La Arena*, 4 de diciembre de 1983.

para la transformación, para alcanzar la liberación nacional en camino al socialismo”.¹⁸³ Su presencia en la ciudad obedecía al plenario llevado a cabo por la regional pampeana del MR-15, que en su declaración final convocaba a

... estudiantes, docentes, graduados y trabajadores no docentes de nuestra provincia a sumarse a la tarea emprendida por este movimiento en lucha por una universidad reformista, humanista, científica y popular al servicio de la liberación nacional en camino a la construcción de una libre e inteligente sociedad humana basada en la justicia económica y social.¹⁸⁴

En 1983, un comunicado de la Juventud Peronista Universitaria afirmaba:

Esta lucha que apuesta a la unidad nacional para rescatar el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia y por sobre todas las cosas a la recuperación de la identidad del ser humano argentino, la JPU afirma que los pueblos del continente latinoamericano están de pie luchando por su liberación, aunque algunos países en mano de gobiernos cipayos traicionen la causa más sagrada para los pueblos: SU SOBERANÍA.¹⁸⁵

Tanto a escala regional como nacional proliferaron las referencias al carácter dependentista del país. La propia reorganización de la FUP estableció entre sus principios estatutarios la “participación de la UNLPam en las luchas por la Liberación Nacional y Justicia Social de nuestro pueblo”.¹⁸⁶ Allí, todas las agrupaciones estudiantiles coincidieron programáticamente en el horizonte liberacionista como elemento de cohesión política.

Por el lado de la FM, el documento *La contradicción fundamental* fue uno de los principales materiales de estudio y formación

183 AHP, *La Arena*, 2 de mayo de 1984.

184 AHP, *La Arena*, 3 de mayo de 1984.

185 RU n° 6, año I, noviembre de 1983, “Unidad Nacional”. La nota corresponde a un comunicado enviado por la JPU a propósito del llamado a la unidad de las fuerzas populares y democráticas realizado por Adolfo Pérez Esquivel en ocasión de su visita a la ciudad de Santa rosa el 30 de septiembre de 1983.

186 RU N° 8: “Se conformó la FUP”. Junio de 1984.

de la militancia franquista desde 1973. Desde sus páginas iniciales, el documento se presenta como

... el fruto de un profundo análisis interpretativo que se fue gestando y decantando poco a poco, paralelamente a una dura militancia de lucha revolucionaria contra la dictadura militar y el sistema oligárquico-imperialista y junto a todos los sectores populares. Es pues la síntesis de una ideología y de una práctica política, conformada la primera por una interpretación materialista histórica de la vida nacional, y dialéctica de la sociedad argentina; y la segunda realizada en un profundo compromiso con la lucha popular que modeló un realismo político determinante de nuestra actitud revolucionaria militante, que se diferencia con nitidez y descarta todas las variantes infantiles, aventuristas u oportunistas.¹⁸⁷

Desde el propio título se infiere la influencia de Mao Zedong y el maoísmo, la presencia del centralismo democrático leninista e incluso reminiscencias de la izquierda nacional y popular, todas tradiciones teóricas de uso en corriente en la década de 1970. El párrafo final del documento señala:

La síntesis de la resolución de esta contradicción será lograda con el triunfo de las fuerzas populares, la destrucción de la oligarquía y el imperialismo como clases sociales actuantes en el país y la Revolución de Liberación Nacional que rompa los lazos de la dependencia y comience la construcción de un sistema económico independiente, integrado y autosuficiente sobre el que se asiente una sociedad justa, libre e igualitaria, como primer paso hacia la construcción de la sociedad del futuro, sin explotadores ni explotados, sobre bases socialistas (ídem).

El documento fue utilizado por generaciones de militantes de la FM en todo el país, y se mantuvo hasta bien entrados los años ochenta, solamente con correcciones introducidas en 1983. En esa ocasión, las modificaciones alcanzaron a las palabras “clases socia-

187 *La contradicción fundamental*. Documento básico de formación interna. Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, Cuaderno N° 2, La Plata, 1973, “Presentación”.

les”, que fueron reemplazadas por “factores de dominación”, mientras que “revolución” fue eliminada del párrafo final, que finaliza con “la sociedad del futuro”, suprimiendo la oración siguiente “sin explotadores ni explotados, sobre bases socialistas”.¹⁸⁸ Las correcciones, aunque menores, expresan el cambio de signo tras el paso de la dictadura militar.

En *La contradicción fundamental*, los protagonistas son “el pueblo argentino, por un lado, y el complejo antinacional oligárquico-monopólico-antinperialista por el otro”. Dentro del campo del *pueblo*, se ubicaba a las clases trabajadoras (urbanas y rurales), las clases medias (pequeña burguesía comercial, industrial, rural), los profesionales, la intelectualidad progresista y el movimiento estudiantil, constituyendo, como conjunto, más del 95% de la población. En el espacio antagónico, el campo del *antipueblo*, se situaba a los grupos económicos y empresarios vinculados al imperialismo norteamericano, inglés, europeo y multinacional; la oligarquía terrateniente; los monopolios exportadores e importadores y de la intermediación; y la oligarquía financiera. De modo que la contienda fundamental no se ubicaba por el lado del reparto entre capital y trabajo sino en el manejo de los resortes económicos claves de la economía del país. El carácter expoliador de esa minoría parasitaria podía observarse a partir de las condiciones de atraso del país, además de la exorbitante y fraudulenta deuda pública. La resolución de la contradicción fundamental solo podía materializarse a partir del triunfo de las fuerzas populares, la destrucción de la oligarquía y el imperialismo como factores de dominación actuantes en el país y la realización de la liberación nacional que rompiese los lazos de dependencia y comience “la construcción de un sistema político, económico y cultural independiente, integrado y autosuficiente sobre el que se asiente una sociedad justa, libre e igualitaria” (ídem).

Recién en la segunda mitad de la década de 1980 el documento fue paulatinamente abandonado por parte de sectores de la FM-JCN, al tiempo que reivindicado por la FM-CNL.¹⁸⁹ En febrero de

188 *La contradicción fundamental*. Documento interno de la Junta Coordinadora Nacional. Juventud Radical. Cuadernos de formación política N° 1. Argentina, 1984.

189 Véase la entrevista a Carlos Vicente publicada en forma de libro (Vicente, 1987).

1987, Carlos Vicente marcaba sus diferencias con los sectores de “la coordinadora”, cuando afirmaba que “el documento fundacional de la JCN y el de *Renovación y Cambio* señalan claramente que ‘*nuestra lucha termina en la socialización de los medios de producción*’. Nosotros somos totalmente consecuentes con esos planteos (las cursivas son del original)”.¹⁹⁰

Sin embargo, la apelación al discurso liberacionista admitía una pluralidad de usos que, en diversos escenarios y situaciones, podían funcionar como estrategia retórica para sostener posiciones políticas plausibles de cuestionamientos. En julio de 1985, a poco de ponerse en marcha el Plan Austral, la JR reunió en la ciudad de Córdoba a delegados de todo el país para deliberar sobre los alcances del programa antiinflacionario y sobre las modalidades de intervención en la crisis del país. En una rueda de prensa, Jesús Rodríguez, Mario Negri y Pablo Soria afirmaban:

Estamos luchando contra las minorías del privilegio que nos sometieron y explotaron e intentan retrotraernos a un pasado oscuro, cuyos efectos son las angustias del presente [...] luchando por consolidar la justicia social y encaminar el país hacia la liberación, banderas que reclaman hoy menos de oratoria fogosa y más de trabajo cotidiano, libre de mezquindades y apetencias sectarias.¹⁹¹

Nótese el lenguaje antiimperialista y liberacionista de los referentes de la JR, que un año antes, en ocasión de la marcha nacional del MoJuPo contra el FMI, habían realizado un ingente esfuerzo para modificar y atenuar la consigna de condena y rechazo a la presencia del organismo internacional. Resulta factible aseverar que la retórica liberacionista –en boca de dirigentes que tenían injerencia directa sobre la dirección política de la FM-JCN– resultaba fundamental para sostener discursos que fueran legitimados por las bases, aun cuando

190 Revista *Crisis*, n° 50, enero de 1987, p. 71.

191 *Córdoba*, 15 de julio de 1985. Jesús Rodríguez era el presidente de la JR, además de diputado nacional, surgido de la FM de Capital Federal (Bs. As.) y parte del núcleo de la JCN cercana al presidente Raúl Alfonsín. Mario Negri era vicepresidente de la JR nacional y referente de la provincia de Córdoba. Pablo Soria era secretario general de la JR.

el despliegue de sus prácticas políticas no fuera consistente con su predicamento. En cierta forma, ese lenguaje resultaba necesario aun para aquellos que, paulatina y pragmáticamente, se fueron *aggiornando* a nuevas estrategias retóricas, como el caso de los discursos sobre la modernización o sobre una suerte de posibilismo que enfatizaba la necesidad de cautela a la hora de “hacer política”.¹⁹²

A pesar de ello, resulta claro que el imaginario tercermundista y de la liberación nacional operó como una instancia constituyente de la subjetividad estudiantil y militante, en la medida en que resultaba una forma particular de cohesionarlos como sujetos políticos, es decir, como comunidad. Eran, también, discursos heredados de la década previa, pero resignificados como efectos de la intervención dictatorial. Repetición con diferencia, podríamos sugerir, en la medida en que la clausura de las expectativas de transformación revolucionaria devino en la lucha y anhelos de una democracia profunda y sustantiva, capaz de poner en acto el derecho a la vida digna.

Democracia y liberación nacional

Si la liberación nacional organizó expectativas y anhelos de transformación de la militancia de izquierda, nacional y popular, la democracia funcionó como el marco regulatorio a partir del cual dirimir las luchas por su obtención. Si el par de opuestos *dictadura/democracia* funcionaba como elemento de corte respecto del pasado, *democracia y liberación nacional* organizaba los futuros posibles, a partir de los cuales traccionar los presentes.

En ese sentido, la militancia de la JUI reclamaba un rol más activo de las fuerzas populares y, en el caso del movimiento estu-

192 A través de una comunicación personal, un militante del período recordaba que, ya en la segunda mitad de la década, la mesa nacional de la FM distribuyó panfletos con la leyenda “Modernización es Liberación”. En cierta forma, la leyenda exhibe la pretensión de *aggiornar* el discurso liberacionista a la prédica modernizante del alfonsinismo, pero también su incapacidad de prescindir de él. Por entonces, los sectores opositores a la hegemonía FM-JCN, que luego integrarían la CNL, levantaban las banderas de las tradiciones populares del radicalismo, de modo que no solo disputaban el imaginario liberacionista sino los propios fundamentos del partido centenario.

diantil, se reclamaba un rol “más político”, de modo de “ir desarrollando, a través de la organización, nuevas formas organizativas que generen con la reivindicación del elemento democrático, la presencia activa del grueso de los estudiantes”. La posibilidad de construir formas dinámicas de democracia requería la elaboración de objetivos conjuntos sobre la base de una movilización permanente, de modo que el horizonte de expectativas pugnaba por una “democracia real” que pudiese “romper” las viejas estructuras, es decir, los tentáculos de la oligarquía y el imperialismo. Para la JUI, el movimiento estudiantil debía ser parte de un frente de *Unidad Nacional* que diera salida a la crisis del país y que abriese el camino definitivo a la liberación nacional. Sin embargo, esa unidad debía ser “posible y concreta” para la

... defensa y profundización del sistema democrático [...] Unidad concreta y posible que por un lado se defina a favor de las libertades individuales, la vigencia plena de los derechos humanos y repudie los mecanismos autoritarios y represivos. Y por otro profundice los canales democráticos formales dentro de una concepción participativa y autogestionaria.¹⁹³

Desde las páginas de la *RU* se instaba a intervenir “bien desde abajo”, a “PARTICIPAR en pleno uso de nuestro espacio político como estudiantes-ciudadano y PARTICIPAR en la labor cotidiana denunciando las chiquitas y profundas necesidades de la gente; ORGANIZARSE para conseguir la auténtica democracia que hasta hoy no conocimos”.¹⁹⁴ Entonces, ¿cómo hacer avanzar la democracia como vehículo de transformación social?, ¿cómo mutar la democracia formal en real, profunda o sustantiva?

A partir de 1983, *democracia* actuó por oposición a la *dictadura*, pero la tradición liberal de la representación parlamentaria no parecía suficiente para una militancia que reclamaba y ponía en juego instancias de participación democrática en el sentido originario del término. En efecto, la militancia estudiantil apostaba a una práctica política que demandaba ampliar constantemente las formas

193 *RU* N° 9: “La Universidad necesaria”. Agosto de 1984.

194 *RU* N° 4: “Al cierre”. Junio de 1983.

representativas. De ahí que en muchos casos la palabra *democracia* necesitara complementarse con algún adjetivo: “real”, “participativa”, “profunda”, “sustancial”, que permitiese dar cuenta del carácter acotado y limitado de la representación política. *Liberación nacional* y *democracia* operaban como significantes que podían ser congruentes en la medida en que esta se constituyera como instancia plausible de la lucha por la igualdad y la justicia, lo que solo puede ser entendido como una petición de significación excedente para la “política” de la representación, un excedente que solo podía sostenerse en las expectativas ancladas en la capacidad de participación, organización y movilización de los estudiantes y la sociedad en general.

La tramitación del presente democrático anudaba ciertos pasados y proyectaba otros futuros. La configuración específica de los “espacios de experiencias” (Koselleck, 1993) apelaba a otros estratos de tiempos para recrear tradiciones emancipatorias que pudiesen sostener luchas y anhelos actuales. Los pasados reunidos dotaban de contenidos a los significados puestos en juego respecto de la democracia y la liberación nacional. ¿Cuáles eran esos pasados? Allí estaba la reivindicación de la Reforma de 1918 y sus facetas más disruptivas expresadas en el juvenilismo y el antiimperialismo, la tradición peronista de la justicia social, la praxis política condensada en la figura de Agustín Tosco y el sindicalismo clasista, las experiencias barriales de los años sesenta y setenta, la impronta del Cordobazo que revelaba la capacidad e inteligencia del pueblo reunido y organizado.

Ese conjunto de experiencias pasadas fue resignificado en las particulares condiciones que la dictadura militar legó a los jóvenes de la década de 1980. El activismo forjó una forma de militancia que, en su devenir, podía desajustarse de los esquemas partidarios, al habilitar la posibilidad de producir efectos no predecibles para el juego político representacional. Esa praxis y performance no era continua, ni menos aún uniforme, pero en determinados momentos se configuró como elemento de quiebre de lo esperable. Como dimensión disruptiva puede visibilizarse, por ejemplo, en los momentos iniciales del retorno democrático –cuando el peso estudiantil resultó un factor clave en los reacomodamientos de las estructu-

ras de poder—, en los concursos docentes —en especial en las luchas contra las “herencias procesistas”—, en la trama de funcionamiento del movimiento de DD. HH. o en el acceso de Raúl Esteves Leyte al rectorado de la UNLPam.

¿Cómo se articulaba la petición de una democracia profunda como herramienta para la liberación nacional? A partir de una significación que reclamaba al Estado de derecho *una política de derechos* en términos sociales, es decir, una política que garantizase el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia. Con distintas modulaciones, la militancia estudiantil compartía la noción respecto de quienes conformaban el *pueblo*, como parte del *nosotros* que configuraba sus prácticas y estrategias de acción. De ese modo, podían apoyar iniciativas del Gobierno nacional —la decisión de avanzar con la investigación sobre los crímenes y vejaciones perpetradas por las FF. AA. o la creación de la CONADEP— del mismo modo que mantener una cerrada oposición y distancia, como ocurriese con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La militancia podía funcionar como aliado de los sectores que impulsaron el divorcio vincular y la patria potestad compartida,¹⁹⁵ sostener la posición del *SÍ* en el plebiscito no vinculante respecto del conflicto limítrofe con Chile por el Canal de Beagle pero rechazar la injerencia de la Iglesia en cuestiones de salud y educación.¹⁹⁶

Sin embargo, el rumbo del Gobierno nacional modificó y restringió sustancialmente esa base de apoyos, además de limitar la dimensión movilizadora de la ciudadanía. El viraje de la agenda pú-

195 En 1985 el Gobierno de Alfonsín restableció la patria potestad compartida mediante la Ley N° 23264, un derecho reclamado especialmente por las mujeres. En junio de 1987 se sancionó la Ley de Divorcio Vincular. En ambos casos, frente a una fuerte oposición de sectores conservadores y de la Iglesia Católica.

196 El plebiscito ponía a consideración de la ciudadanía la aceptación de la mediación papal como árbitro del diferendo con Chile. El conflicto limítrofe con el país vecino permanecía abierto desde 1977. Para Raúl Alfonsín, se había convertido en una consigna de resolución pacífica desde la campaña presidencial de 1983. En cierto modo, el SI podía expresar una apuesta a la resolución pacífica de los conflictos, no dando lugar al peso protagonista de las FF. AA. En noviembre de 1984, el Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y la Argentina fijó el límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake al sur del Cabo de Hornos, a propuesta del Papa Juan Pablo II.

blica y la preocupación constante por la gobernabilidad desplazó los ejes articuladores de la militancia estudiantil. Aunque en términos políticos el presidente Raúl Alfonsín podía concentrar la carga de las críticas, estas no escapaban a las dirigencias políticas, especialmente aquellas de los partidos tradicionales del país, como lo expresa el testimonio de Gustavo Romero:

Hubo muchos políticos a nivel nacional que no estuvieron a la altura de la circunstancia, o sea, se dejaron entregar ya sea por la fuerza del mercado, o sea, no peleaban para el pueblo, desde mi punto de vista, o por lo menos vacilaban. El problema ya no era liberación nacional sino llegar a fin de mes y hoy te decían una cosa y mañana hacían otra los políticos, los propios dirigentes (entrevista a Gustavo Romero).

Quizás la marca más visible de la decepción en el alfonsinismo provenga desde el propio núcleo del radicalismo universitario, a partir de la formación de la CNL. En 1987, Carlos Vicente repasaba “las traiciones” del alfonsinismo cuando sostenía, por ejemplo, que con el tema de la deuda “se había dicho hasta el cansancio que no se iba a pagar con el hambre del pueblo y se terminó aceptando sumisamente las pautas del FMI”, mientras que “el famoso *proyecto de la modernización* significa el abandono de una propuesta de desarrollo que venía levantando el partido en los últimos 40 años (las cursivas son del original)”,¹⁹⁷ de ese modo, el criterio de avanzar “con una economía autónoma donde el crecimiento está basado en el desarrollo del mercado interno, ha sido sustituido por nuestra reinserción en la división internacional del trabajo”, favoreciendo a pequeños núcleos del país.¹⁹⁸

Las elecciones de medio término de 1987 conjugaron y expresaron la crisis del radicalismo, y también los límites de los sueños democráticos: la ingobernable economía, las leyes de Punto Final

197 El proyecto de modernización que señala Vicente refiere a uno de los ejes que articuló la “convocatoria para una convergencia democrática”, propuesta explicitada en el llamado “discurso de Parque Norte”, el 1° de diciembre de 1985. Volveremos sobre ese punto en el capítulo VII. Revista *Crisis*, n° 50, enero de 1987, p. 71.

198 Revista *Crisis*, n° 50, enero de 1987, p. 71.

y Obediencia Debida, los levantamientos carapintadas y “la casa está en orden”, fueron mojones que trazaron el derrotero de una democracia en tensión, mientras que los años siguientes mostraron el deslizamiento hacia formas de funcionamiento que se mostraron prescindibles de su dimensión más movilizadora.

La formación del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y su vínculo con la militancia estudiantil

Como hemos referido, el clima antimilitar y antiautoritario se evidenció, desde 1982, en la pérdida de temor de amplias franjas de la sociedad que se movilizaron y, bajo distintos registros, resultaron receptivas a distintos colectivos y organizaciones de entonces. “Ganar la calle” fue tanto un modo metafórico de nombrar la reorganización de las instituciones de la sociedad civil a partir de la participación popular, como literalmente volcarse a las calles en manifestaciones, actos, ferias, fiestas, y eventos políticos o culturales cuya masividad reflejaba las ansias contenidas por años de prohibiciones. No obstante, tanto en los años finales de la dictadura como en los primeros años de la democracia, el temor a una vuelta al ciclo de golpes —que desde 1976 habían cobrado una nueva significación— fue también un elemento característico de esos años de construcción democrática desde abajo. Muchas de las expresiones de una sociedad movilizadora recogieron las prácticas puestas en liza por el movimiento de derechos humanos, al tiempo que parieron otras.¹⁹⁹

199 La denominación de “movimiento de derechos humanos” refiere, en un sentido amplio, a una diversidad de activismos que se fueron estructurando desde los años finales de la dictadura y, ya en democracia, se desplegaron a través de múltiples instancias organizativas que iban desde organizaciones nacionales hasta comisiones de trabajo en las escalas municipales. En el capítulo II mencionamos las principales organizaciones nacionales gestadas en ese proceso, sin embargo, coincidimos con Paula Zubillaga en que “reconocer la diversidad de actores, de estilos de liderazgo, de ideologías, de generaciones, de demandas y de organización al interior del movimiento, contribuye a su comprensión y explicación” (2019: 16). En términos de investigaciones, una parte sustancial de la bibliografía especializada se ha centrado en diversos aspectos de las organizaciones de mayor relevancia, ubicadas geográficamente en ciudades de envergadura y peso político, como es el caso de Buenos Aires y La Plata. Por el contrario, nos interesa aquí una mirada que recupere la dimensión regional, descentrada —pero no aislada— de los procesos desarrollados en los centros de mayor gravitación sociopo-

En La Pampa, la visita de Adolfo Pérez Esquivel resultó el impulso necesario para el conjunto de personas que, aun de manera dispersa, se habían involucrado en la cuestión de los DD. HH. El 30 de septiembre de 1983, a propósito de la conmemoración de los 50 años del diario *La Arena*, el representante del SERPAJ brindó una charla a sala llena en las instalaciones del Club Español de la ciudad de Santa Rosa. También se reunió con estudiantes, trabajadores, familiares de detenidos-desaparecidos y dirigentes políticos. Las actividades de Pérez Esquivel coincidieron con el inicio de una huelga de hambre emprendida por un grupo de jóvenes pertenecientes a la JUI.²⁰⁰ Uno de los efectos inmediatos fue la formalización de una comisión pro derechos humanos. A partir de allí, en los siguientes jueves de octubre se realizaron marchas en la plaza de la ciudad, en sintonía con las rondas de Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y se delinearón los trazos a seguir por el movimiento.²⁰¹

El 12 de noviembre de 1983 se constituyó formalmente el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, a partir de una asamblea abierta realizada en las instalaciones de la Asociación Mutual Pampeana.²⁰² Luego de declararse “la presidencia honoraria de los detenidos y desaparecidos, presos políticos y todos los mártires del campo popular” se conformó la primera comisión

lítica. Nuestra propuesta de acercarnos a las militancias de los actores en la escala regional no se limita a un mero recorte espacial como objeto de estudio, sino que se propone como una vía de entrada para pensar efectivamente el carácter múltiple y heterogéneo de su propia constitución y percepción como movimiento (tanto de derechos humanos como estudiantil/universitario). La bibliografía referida al movimiento de derechos humanos excede los propósitos de este apartado, sin embargo, una aproximación al estado de la cuestión ver en Zubillaga (2019) y Alonso (2022). Para el caso de la relación entre juventudes, estudiantes y activismo en DD. HH. en democracia, ver Scocco (2021) y Solís (2023). Para una aproximación inicial al tema abordado en este apartado, ver Monasterolo (2021)

200 Como referimos en el capítulo IV, los huelguistas eran José Perrota, Carlos Ortellado y Miguel de la Cruz, a los que se sumaron Horacio Maldonado, Aníbal Prina y Jorge Rojas y, unos días después, Pablo D’Atri y Héctor Mareque.

201 La tercera marcha realizada, de amplia convocatoria, contó con la visita de Rosa Dinelli, madre de un desaparecido en Mar del Plata e integrante de Madres de Plaza de Mayo. AHP, *La Arena*, 21 de octubre de 1983.

202 Desde unos días antes circuló un petitorio de adhesión en el que se registraron más de 150 firmas de adherentes. Para un listado parcial de las personas firmantes, ver *La Arena*, 12 de noviembre de 1983.

del MPPDH, compuesta por Pablo Fernández, Miguel de la Cruz, Roberto Yacomuzzi, Carlos Ortellado, Juan Carlos Pumilla, Carlos Maldonado y José Perrota.²⁰³ Entre los participantes había referentes de otras localidades de la provincia (General Pico, Trenel, Victorica, 25 de mayo y Colonia Barón), integrantes de centros culturales y de estudiantes, además de familiares de desaparecidos pampeanos, como el caso de Alejandro y Carlos Knobel, Liliana Molteni y Oscar Antonio Di Dío. La constitución del MPPDH contó con la adhesión del grueso de los partidos políticos, otras organizaciones afines (APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, LADH) y personalidades como Pérez Esquivel y Augusto Conte. También estuvo presente Graciela Lois, integrante de FDDRP, quien al hacer uso de la palabra afirmó que “la *aparición con vida* no debe ser solo una consigna sino una causa fundamental (las cursivas son del original)”, mientras advertía sobre la existencia de informaciones concretas sobre desaparecidos con vida.²⁰⁴

Las primeras resoluciones ratificaron la moción de continuar con la marcha de los jueves y otorgarle prioridad a la difusión y esclarecimiento de “la violación de los derechos humanos como instrumento de imposición de un sistema de dependencia”. A propuesta de Mauricio Knobel, padre de Alejandro y Carlos, se resolvió impulsar la justicia y la verdad como un reclamo humanitario tendiente a preparar las instituciones para que “no suceda nunca más”, además de instar al Gobierno nacional a que asuma con firmeza su defensa.²⁰⁵

203 Quienes conformaron la primera comisión provenían de ámbitos diversos: sindicales, periodísticos, artísticos y estudiantiles, este último en la figura de José Perrota, estudiante de historia en la Facultad de Ciencias Humanas y activista de la JUI.

204 AHP, *La Arena*, 13 de noviembre de 1983. Por entonces, para muchos familiares de detenidos-desaparecidos resultaba factible la aparición con vida de sus seres queridos. Aun no existía un conocimiento extendido del funcionamiento de los centros clandestinos de detención y de las personas allí recluidas

205 AHP, *La Arena*, 13 de noviembre de 1983.

Imagen 5. Asamblea de conformación del MPPDH



En la mesa central, de izquierda a derecha, se observa a Pablo Fernández, Miguel De la Cruz, Roberto Yacomuzzi, Carlos Ortellado, Graciela Lois (FDDRP), Juan Carlos “Pinky” Pumilla, Horacio Maldonado y José Perrotta.

Fuente: archivo del diario *La Arena*, PEU, Resol. C. S. Nº 847/12.

El MPPDH estaba conformado por activistas y simpatizantes de diversos ámbitos y trayectorias políticas, muchos de ellos con experiencia previa a 1976. Sin embargo, una parte de la militancia activa eran jóvenes estudiantes y en menor medida docentes. Luis Díaz apunta que

... los grupos estudiantiles, algunos docentes, fueron partícipes de la organización de lo que fue el MPPDH. Había una explícita y entusiasta voluntad de participar en todo lo que eran las reivindicaciones de DD. HH. por un lado, de las organizaciones de DD. HH. por el otro, además de la posibilidad que abre el Gobierno de Alfonsín de enjuiciar y condenar a los militares del 76 al 83 (entrevista a Luis Díaz).

El MPPDH no tuvo una adhesión o alineamiento particular respecto de las organizaciones nacionales. A pesar de los contactos y

vínculos de sus integrantes, las diferencias internas terminaron por ponderar un sentido de unidad, privilegiando la distancia a cualquier organización específica. Según el primer informe del movimiento, se buscaba

... no partidizar al MPPDH, no introducir ni hacer prevalecer cuestiones partidarias sobre las decisiones del conjunto, condenar los oportunismos políticos y los criterios utilitarios en torno al tema de los derechos humanos, insistir en la unidad y la amplitud sin sectarismos. Esta identidad de criterios recorrió también al conjunto de compañeros que asumieron la responsabilidad de dar vida a las Comisiones de trabajo. Esto ha permitido que coexistan en el trabajo general peronistas, intransigentes, comunistas, radicales, marxistas, socialistas, independientes, desarrollistas, etc.²⁰⁶

Al respecto, Juan Carlos Pumilla recuerda:

El propio movimiento es una especie de frente único donde había compañeros de otros partidos, que además se caracterizaron por ser muy generosos y amplios... Prescindíamos del debate de tipo partidario para privilegiar las coincidencias que teníamos alrededor del tema de derechos humanos [...] y creo que fueron los mayores aportes a la investigación, a la consolidación del frente y al trabajo colectivo lo que nos permitió trabajar en varias sedes partidarias en esa época, como producto de esa inclinación (entrevista a Juan Carlos Pumilla).²⁰⁷

206 Informe del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. *Represión y Derechos Humanos en La Pampa*. Junio de 1984, pág. 6. El informe fue presentado a seis meses de la constitución del movimiento, con un balance de las actuaciones y definiciones sobre la coyuntura. También se presentaron 33 denuncias de situaciones de detenciones ilegales, desapariciones, y fusilamientos, con reconstrucción de los hechos. Mucha de la información fue compartida con la CONADEP y fue puesta a disposición de la Justicia Federal, así como también a la Comisión de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Provincial y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de La Pampa.

207 Juan Carlos Pumilla es un reconocido periodista, escritor e investigador de La Pampa. Con militancia política desde su juventud en Vanguardia Comunista, fue víctima del terrorismo de Estado. En 1983, participó en la fundación del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y de la Asociación Pampeana de Escritores.

Luego del nacimiento del MPPDH, otros grupos análogos surgieron en distintas localidades de la provincia. La primera en constituirse fue la Asamblea por los Derechos Humanos de la ciudad de General Pico el 1° de diciembre de 1983.²⁰⁸ Le siguieron la Comisión de Derechos Humanos de Trenel,²⁰⁹ la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Realicó,²¹⁰ entre otras.

El 20 de diciembre de 1983, el electo gobernador de La Pampa Rubén Marín dio curso al Decreto 99/83 que ordenaba la investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el territorio de la provincia. La norma facultaba al asesor letrado del Gobierno provincial, abogado Juan Carlos Tierno, a recepcionar denuncias referidas al caso y establecía los marcos legales para llevar a cabo la investigación.²¹¹ El MPPDH colaboró con la investigación oficial, pero mantuvo su propia dinámica de trabajo e investigación, convocando a la ciudadanía a aportar datos, realizar denuncias y todas aquellas acciones que pudiese ayudar a tal fin.²¹² De hecho, la nómina de desaparecidos que brindó el Poder Ejecutivo Provincial, a través del asesor letrado, ya era conocida por el MPPDH, que la incluyó en su primer informe semestral.²¹³

El dato no es menor, porque desde sus inicios el MPPDH contó con la participación de familiares de detenidos y/o desaparecidos, lo que marcaba la legitimidad y la confianza depositadas en el movimiento por aquellas personas afectadas directa o indirectamente por el accionar estatal. Según el informe citado:

208 AHP, *La Arena*, 30 de noviembre de 1983.

209 AHP, *La Arena*, 2 de diciembre de 1983.

210 AHP, *La Arena*, 18 de febrero de 1984.

211 A inicios de marzo de 1984, el gobernador designó al comisario general Timoteo Omar Trouilh a cargo de la instrucción de sumarios administrativos y determinación de responsabilidades *prima facie*. AHP, *La Arena*, 13 de marzo de 1984.

212 La investigación oficial mostró, entre otras cosas, la orden emitida por la Dirección General de Seguridad Interior (dependiente del Ministerio del Interior, cuyo titular era Yamil Reston) al entonces jefe de la policía provincial Coronel Daniel Virgilio Correa Aldana de remitir toda la documentación referida a la lucha contra la subversión al IV Cuerpo del Ejército, con el objetivo final de ser incinerada. La orden fue recibida por el jefe de la policía el 25 de noviembre de 1983 y se estima que, según informa el diario, fue cumplida cuatro días después. AHP, *La Arena*, 3 de febrero de 1984.

213 AHP, *La Arena*, 2 de marzo de 1984. Allí también se pueden consultar los nombres de la nómina de desaparecidos pampeanos confirmados hasta esa fecha.

Otro rasgo peculiar de nuestra organización es que se conforma como una especie de síntesis de lo que es hoy el movimiento de derechos humanos en el orden nacional. Esto es, que en un mismo organismo participen familiares, liberados, abogados, madres, abuelas, torturados, etc., lo que de por sí constituye un ejemplo en el país y no reconoce antecedentes. Más, cuando otra de las decisiones del conjunto fue la de mantener relaciones fluidas con todos los organismos nacionales de derechos humanos, sin depender orgánicamente de ninguno de ellos.²¹⁴

Al mismo tiempo, el MPPDH no estableció en marzo de 1976 un corte tajante respecto de la implementación del terrorismo de Estado –como sí lo hicieron las investigaciones estatales, tanto nacional como provincial–, explorando los procesos represivos montados desde 1975 durante la estadía de Ramón Camps al frente de la Subzona 14.²¹⁵ Existía un elemento clave en esa lógica, y era que el MPPDH trabajaba y exponía, en conjunto y públicamente, los testimonios de los afectados por la represión, de modo que surgían allí aspectos de las biografías que difuminaban las fronteras entre un momento y otro.²¹⁶

La militancia estudiantil colaboró de distintas maneras en la dinámica del movimiento de derechos humanos. Muchos estudiantes lo hicieron a título personal, pero en general fueron las agrupaciones políticas quienes sostuvieron la presencia de “la cuestión de los DD. HH.” –como solía referirse en la época– en la universidad. Esa

214 Informe del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. *Represión y Derechos Humanos en La Pampa*. Junio de 1984, p. 6.

215 En octubre de 1975 se creó la Subzona 14 y quedó bajo el mando operacional del coronel Ramón Camps, al mismo tiempo responsable del Regimiento de Caballería Blindada 101, con asiento en Toay. A su cargo estuvo la coordinación de los operativos represivos llevados a cabo entre noviembre y diciembre de 1975, hasta el día 19 de ese mes, cuando le entregó el mando al Coronel Fabio Iriart. Poco tiempo después, Ramón Campos fue designado al frente de la Policía Bonaerense, organismo clave en la dinámica represiva de la provincia de Buenos Aires.

216 Por ejemplo, en una entrevista del diario *La Arena*, Ivo Koncurat relataba que “fui detenido en la época de López Rega y la triple A y nosotros, como integrantes de la Juventud Peronista, batallamos enérgicamente contra López Rega y la política implementada en ese momento, y a raíz de eso se produjo mi detención y sufrí todos esos años de prisión”. AHP, *La Arena*, 7 de agosto de 1984.

participación fue un aspecto significativo que atravesó a la militancia estudiantil del período, al establecerse como una suerte de cruce nodal del activismo político en general. Esa adhesión cristalizaba un sentido público que condensaba la rehabilitación y legitimidad de los reclamos, y al mismo tiempo redefinía una mirada de futuro, como proyección y como campo de disputa de la significación democrática. Progresivamente, el movimiento de DD. HH. había logrado instalar una suerte de agenda pública respecto de lo que se entendía como violaciones a los derechos humanos. Ese conjunto de consensos aludía, en 1983, aquellas situaciones que involucraban:

- a) la existencia de *desaparecidos* —incluidos sus hijos/as, algunos de ellos nacidos en cautiverio— b) y de *presos* reconocidos como tales en penales, sean estos con condena de Consejos de Guerra o a disposición del P.E.N., c) las alternativas sobre el *destino* de los desaparecidos, ligado a la aparición de enterramientos clandestinos, d) los *exiliados* y el problema del retorno, e) y el reconocimiento de los *asesinados* por la represión (las cursivas son del original) (Solís, 2011: 86).

En la UNLPam, las agrupaciones estudiantiles funcionaron como nexo entre el MPPDH y la institución, a través de los vínculos establecidos en el NOPULP o la FUP.²¹⁷ Una de las primeras actividades fue la visita que realizó Luis Zamora, integrante del CELS y excandidato a presidente de la nación por el MAS.²¹⁸ El 6 de agosto fue el turno del pampeano Ivo Koncurat —detenido por nueve años y ocho meses en distintas cárceles y centros de detención del país—, que expuso la charla “Derechos humanos y liberación nacional” en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado,²¹⁹ mientras

217 La imbricación estudiantil en la cuestión de los DD. HH. no fue un rasgo específicamente pampeano. En 1984, la Federación Universitaria de Córdoba —con el apoyo de la FUA— llevó adelante una fuerte campaña a favor de la detención y el posterior procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez. La campaña se inició en abril y concluyó con la presentación de un petitorio con 20.000 firmas, realizada por la APDH de Córdoba, la FUC y el MoJuPo (Solís, 2011: 151). En otras ciudades del país, las agrupaciones estudiantiles formaron parte de las movilizaciones y demandas de los distintos colectivos y movimientos de DD. HH., aunque aún no contamos con estudios específicos sobre ello.

218 AHP, *La Arena*, 27 de junio de 1984.

219 AHP, *La Arena*, 6 de agosto de 1984.

que Jorge Federico Watts –sobreviviente del centro clandestino de detención “El Vesubio” y testimoniente en el film “Nunca Más”, producido por la CONADEP y exhibido en la ciudad– visitó Santa Rosa y Winifreda para realizar charlas-debates coordinadas por el MPPDH y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas.²²⁰ Un tiempo después tuvo lugar la presentación del libro *Con vida se los llevaron*, a cargo de Arturo “Chacho” Vázquez –padre de Martín, detenido-desaparecido en el CCD “El Vesubio” –²²¹ y la visita de Augusto Conte en el marco del primer aniversario del retorno de la democracia.²²²

Con esas coordenadas en el horizonte, el trabajo lento y continuo del MPPDH tenía un efecto pedagógico. Para muchos jóvenes del período fue una fuente de conocimiento sobre los alcances de la intervención dictatorial en La Pampa:

Yo ahí me empiezo a enterar, por ejemplo, de pilas de compañeros que se habían quedado sin laburo, yo comencé a enterarme de la situación que habían pasado mientras yo estaba en la secundaria y no había tenido ni noticias. Se empieza a hablar y mucho, de compañeros que la habían pasado muy mal, empiezan a contar cosas (entrevista a Luis Díaz).

En septiembre de 1984, la CONADEP presentó su informe final al presidente Raúl Alfonsín. En conjunto con los organismos de derechos humanos se recogieron miles de testimonios, tanto en las grandes ciudades como en aquellas más pequeñas y periféricas, lo que permitió ensanchar el registro de las actividades represivas. Esos testimonios sirvieron para identificar CCD, circuitos de detención y *modus operandi* de los grupos de tareas (Crenzel, 2008). Resulta factible asegurar que el trabajo de la CONADEP sobrepasó las provisiones oficiales y sus propios objetivos. La publicación en formato libro del informe *Nunca Más* expuso narrativamente las características y dimensiones del sistema planificado de detención, secuestro y desaparición de personas, llevado a cabo por las fuerzas militares y

220 AHP, *La Arena*, 26 de agosto de 1984.

221 AHP, *La Arena*, 9 de octubre de 1984.

222 AHP, *La Arena*, 26 de octubre 1984.

de seguridad en todo el país. De ese modo desbarató los argumentos sostenidos en la teoría de los excesos y los comportamientos anómalos.²²³ Meses más tarde comenzó el Juicio a las Juntas Militares, en abril de 1985. Los fiscales intervinientes seleccionaron casos sobre la base de la información reunida por la CONADEP, mostrando víctimas de distintos estratos sociales, ocupación, ubicación espacial y períodos temporales. Los casos fueron presentados en la línea expositiva que mostraba el *Nunca Más*, sin referencias a sus compromisos políticos ni militancias. En el dictamen final, en diciembre de 1985, los jueces reconocieron el carácter masivo e ilegal de la represión ordenada desde los altos mandos militares, pero arguyeron que las juntas no podían ser culpadas por actos que no habían sido cometidos directamente por los acusados, de modo que fueron atribuidas solo las responsabilidades individuales.

Sin dudas, tanto el trabajo de la CONADEP, la circulación del informe *Nunca Mas* como el Juicio a las Juntas resultaron acontecimientos que modificaron el conocimiento de la sociedad sobre el pasado inmediato, en la medida en que mostraron el carácter planificado y criminal de la represión.²²⁴ A pesar de que esos eventos tuvieron una fuerte dimensión reparadora hacia las personas afectadas —e indirectamente hacia el conjunto del país, lo que constituyó un hecho inédito en la cultura política argentina—, tanto el informe como el juicio omitieron las motivaciones que guiaron tanto a los victimarios como a las víctimas, lo que dio lugar al reforzamiento de “la teoría de los dos demonios”.²²⁵

223 La repercusión pública del informe fue inmediata y el libro, publicado por la editorial EUDEBA de la Universidad de Buenos Aires, resultó un boom de ventas nacionales y transnacionales, con traducciones a otros idiomas. En julio de 1984 fueron adelantadas algunas conclusiones del informe en el programa televisivo “Nunca Más”, que fue visto por miles de argentinos. En septiembre, el informe fue entregado oficialmente al presidente de la nación y a fines de noviembre se publicó en formato libro.

224 Desde entonces, comenzó a edificarse lo que podemos denominar un particular régimen de memoria sobre el pasado, en la medida en que modeló la lectura sobre las desapariciones y la violencia política de la década de 1970. Una narrativa en clave humanitaria que funcionó de superficie para la transmisión de la memoria sobre ese pasado.

225 En los años ochenta, la metáfora demoníaca no fue irruptora, más bien condensaba un sentido común que, más o menos matizado, se había prefigurado años antes, durante el período de mayor violencia política. En ese sentido, la evocación del demonio/infierno permitía ubicar lo sucedido por afuera de lo humano. En efecto, el enfrentamiento entre las organiza-

En ese contexto, el desenlace del Juicio a las Juntas evidenció posicionamientos disímiles según los actores. El Gobierno nacional se mostró relativamente satisfecho en la medida en que reforzaba la idea de una *justicia ejemplar* como estrategia de resolución de las violaciones cometidas en el pasado. Ese axioma le permitía contener las crecientes presiones de los círculos militares, que vivieron los sucesos como “una estafa” y un “agravio” a la lucha realizada en “la defensa de la patria”. Por el lado de los organismos de DD. HH., se dieron distintas modulaciones que oscilaron entre la decepción por los fallos y una mirada positiva que rescataba el avance sin precedentes en la materia. No obstante, el proceso abierto desde la conformación de la CONADEP hasta la finalización del juicio hizo eclosionar las diferencias internas dentro de Madres de Plaza de Mayo, que se dividieron en dos líneas en 1986. Mientras un conjunto de Madres alineadas con Hebe de Bonafini definió una oposición dura contra el alfonsinismo, el otro grupo –la Línea Fundadora– adoptó una posición más moderada respecto del Gobierno y los alineamientos políticos nacionales. La línea encabezada por Hebe de Bonafini comenzó a sostener posiciones más duras y confrontativas que articulaban demandas específicas de derechos humanos –“Juicio a todos los culpables”, “No a las exhumaciones”, “No a las reparaciones económicas”, entre otras– con una crítica sobre el rumbo general del país y especialmente contra los procesos de achicamiento del Estado y ajuste del gasto público impulsadas desde el Gobierno nacional. De ese modo, articularon un nuevo mapa de aliados junto con los partidos de izquierda tradicionales, sectores de la militancia universitaria y muchos movimientos de DD. HH. provinciales.

En diciembre de 1986, el presidente envió al congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Punto Final. Algunos borradores ya estaban en circulación, de modo que más o menos se sabían los

ciones armadas y las fuerzas armadas del Estado había colocado a la sociedad en un lugar de indefensión, prisionera de las circunstancias frente a las atrocidades de los “dos demonios”. Como ha mostrado Marina Franco, el conjunto de discursos y representaciones asociadas a la llamada “teoría de los dos demonios” no fue una construcción unívoca y lineal, sino que, al contrario, se constituyó a través de un largo proceso de disputa de sus significaciones, y en que su carga semántica/valorativa varió de acuerdo con quienes fueran sus enunciadores y las correlaciones de fuerza en la que se encontraban insertos (2015: 23-80).

alcances de la normativa propuesta. Los organismos de DD. HH. organizaron distintas actividades de rechazo y el 4 de diciembre se llevó a cabo “la marcha de la resistencia”, con más de 20.000 personas y con el apoyo de casi todos los partidos políticos.²²⁶ Días antes, Adolfo Pérez Esquivel había declarado que la iniciativa del Punto Final implicaba “una claudicación ética intolerable”, teniendo en cuenta que unos de los ejes del programa de gobierno habían sido “el respeto de la vida, la justicia y los derechos humanos”, al tiempo que rechazaba los intentos del Gobierno de colocar a los organismos en el lugar de la “ultraizquierda” cuando en realidad, las entidades “respaldaron y respaldan las necesidades del pueblo”.²²⁷ Pese al rechazo generalizado de diversos sectores y movimientos sociales, el proyecto de ley fue aprobado y promulgado el 24 de diciembre de 1986. A pesar de la decepción, los organismos de DD. HH. respondieron a la ley con un intenso trabajo de preparación de nuevas denuncias, con el apoyo decidido de muchos trabajadores del poder judicial que interrumpieron sus vacaciones y se abocaron a la tarea. El 23 de febrero, cuando finalizó el plazo previsto por la ley, alrededor de 300 nuevas denuncias fueron presentadas contra mandos superiores y medios de la oficialidad.

En la UNLPam, la militancia estudiantil se alineó en sintonía con los sectores más críticos del movimiento de DD. HH., a partir de las posturas más o menos en común que las agrupaciones estudiantiles ejercieron respecto del rumbo general del Gobierno (tanto el FREP como la FM línea CNL, por entonces virtualmente constituida, aunque no formalizada). Diana Moro recuerda que “siempre tuvimos [como agrupación] una permanente vinculación con las consignas de ‘Verdad y Justicia’, de ‘Castigo a los culpables’ [...] siempre reivindicamos las marchas y la militancia de Madres y Abuelas” (entrevista a Diana Moro).

Además de la crítica al rumbo económico y a la Ley de Punto Final, la comunidad universitaria venía ensayando medidas de fuerza frente al desfinanciamiento educativo, agudizado por la estrategia de Antonio Trócoli de responder con dureza las movilizaciones

226 AHP, *La Arena*, 5 de diciembre de 1986.

227 AHP, *La Arena*, 28 de noviembre de 1986.

callejeras. De ese modo, desde fines de 1986, se fueron ordenando piezas de un rompecabezas que mostraban el endurecimiento de una oposición común al alfonsinismo. El trabajo conjunto con el MPPDH, especialmente en el marco de la FUP, ratificaba el rumbo adoptado. El 20 de febrero, Leonor Alonso –Abuela de Plaza de Mayo– dio una charla en la UNLPam referida a la Ley de Punto Final, en el marco de actividades organizadas entre el MPPDH y centros de estudiantes para rechazar la norma sancionada.²²⁸ Un mes más tarde, las Madres “Porota” Meroño y María Gutman visitaron la ciudad de General Pico, Trenel y Santa Rosa para hacer el lanzamiento local de la “campana de los pañuelos”. La visita fue organizada por la FUP, el MPPDH, la APDH de General Pico y la Comisión de Trenel.²²⁹ En rueda de prensa, las Madres afirmaron que seguían más vigentes que nunca las consignas de “Cárcel a los genocidas”, “Aparición con vida”, “Libertad a los presos políticos”, “Restitución de los niños”, “No a las exhumaciones”, “No a la reparación económica” y “No a los homenajes póstumos”, además de denunciar que la próxima visita del Papa Juan Pablo II buscaba “el perdón y la reconciliación para con los militares implicados en violaciones a los derechos humanos”.²³⁰

La visita de las Madres motivó un extenso reportaje publicado en la revista *Humos* del CEFCHu, en abril de 1987. Casi en simultáneo, la *RU* publicó un documento del MPPDH en el que se reafirmaban las consignas citadas y manifestaban que el movimiento “seguirá su labor estrechando filas con todos los organismos de derechos humanos que a lo largo del país reclaman en defensa de elementales derechos que surgen del acto de vivir”.²³¹ En el número siguiente de la *RU*, el artículo “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón” –firmado por Carlos Félix, secretario de Derechos Humanos de la FUP– reivindicaba la figura de Hebe de Bonafini, ilustrada con una enorme foto sonriente, mien-

228 AHP, *La Arena*, 20 de febrero de 1987.

229 Revista *Humos*, n° 5, abril de 1987.

230 AHP, *La Arena*, 23 de marzo de 1987.

231 *RU* n° 19, año V, abril de 1987: “PUNTO FINAL: Una ley inhumana que debe ser derogada”. A continuación del documento del MPPDH, se publica una carilla con información sobre la campaña de los pañuelos, las consignas citadas y otras informaciones afines.

tras reseñaba aspectos del acto de conmemoración de los 10 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, llevado a cabo el 30 de abril de 1987 en la ciudad de Buenos Aires.²³²

La impugnación de amplios sectores de la sociedad respecto de la situación general del país mostraba el carácter endeble del Gobierno de Raúl Alfonsín, que no pudo contener la insubordinación de las FF. AA., expresada en el levantamiento carapintada de abril de 1987. La sanción de la Ley de Obediencia Debida, ratificada por la Corte Suprema de la Nación en junio de 1987 –pese a las numerosas apelaciones interpuestas– fue percibida como un *continuum* de las políticas alfonsinistas, que dieron por tierra la promesa democrática inicial de realización de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. A propósito, Luis Díaz reflexiona lo siguiente:

Siempre nos pareció que [el presidente Alfonsín] partió de un punto y desde ese punto siempre retrocedió. El conjunto de elementos que hizo que Alfonsín llegara al Gobierno fueron desmantelados uno por uno por el propio Alfonsín, por la presión evidente de los factores de poder, entre ellos los militares. La sensación que teníamos es que terminó entregando todo, y si faltaba algo era promocionar a Angeloz como su sucesor (entrevista a Luis Díaz).

Efectivamente, la sanción de ambas leyes resultó en una desmoralización generalizada de los sectores activistas, tanto de organizaciones de DD. HH. como de la militancia general relacionada con la izquierda. La institucionalización de la impunidad afectó profundamente a aquellos que, bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, había soñado otra democracia posible. Al año siguiente, se produjeron dos nuevos levantamientos militares, cuya rendición fue negociada rápidamente. En ese marco, el PEN decidió dar curso a los reclamos de mejoras salariales y presupuestarios reclamados por los subordinados. De manera sugerente, también proliferaron declaraciones de funcionarios respecto del papel de las FF. AA. en la lucha ganada “contra la subversión”.

232 RU n° 20, año V, junio de 1987: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón”.

Capítulo VI. Practicas político-culturales, discursos e imaginarios del activismo estudiantil

Cualquier experiencia política, o en un sentido más amplio, cualquier proceso de politización de un sujeto, comprende siempre una dimensión simbólica y subjetiva que remite a una experiencia común, con *otros*, como espacio de pertenencia e identificación que se reafirma como parte de un colectivo más amplio, que lo antecede y lo trasciende. En ese sentido, consideramos que puede percibirse la dimensión experiencial de la militancia política como una forma de vivir, comprender y sentir la realidad, que desborda y trasciende las identificaciones o adhesiones políticas y/o ideológicas de los sujetos, al mismo tiempo que produce modos específicos de *hacer/decir*, que devienen en instancias constituyentes de sus experiencias políticas.

Si en el capítulo anterior detectamos y revisamos la presencia de un conjunto de discursos e imaginarios inscriptos en el ideario de la liberación nacional —que podían amalgamarse con determinadas ideas sobre la democracia o, en un sentido práctico, una concepción democrática asociada a la defensa de derechos humanos—, en la paginas siguientes buscamos mostrar cómo ciertos consumos y prácticas culturales corporizaron formas de tramitar los presentes democráticos y los horizontes de expectativas. En ese marco, nos interesa rastrear algunos de los modos en que el activismo estudiantil construyó sus propias prácticas de autoformación militante, se relacionó con otros pares del país, se apropió de discursos e imaginarios inscriptos en redes más amplias de circulación o se vio limitado en

la posibilidad de romper tabúes y comportamientos arraigados en estructuras profundas de la sociedad.

Como hemos mostrado, los estudiantes que se politizaron y se apropiaron de diversas formas de activismo en los tempranos ochenta debieron lidiar con la necesidad de reconstruir marcos interpretativos y de acción política que diese sustento a sus praxis políticas. A diferencia de otras universidades que, por envergadura, cercanía u otros factores, vieron favorecido el vínculo entre estudiantes de distintas casas de estudio, la militancia más de base que surgió en la UNLPam a inicios de la década carecía, en buena medida, de lazos vinculares con otros pares del resto del país. En efecto, luego de la normalización de los centros de estudiantes y de la FUP, los estudiantes pampeanos se propusieron la asistencia y participación en el congreso normalizador de la FUA, en julio de 1984.

Para el medio centenar de estudiantes que viajaron a la ciudad de Tucumán, el encuentro funcionó como un espacio de re-conocimiento de otros grupos y agrupamientos que permitió, entre otros aspectos, interiorizarse de las dinámicas provinciales, tomar contactos con dirigentes de las juventudes partidarias a nivel nacional y/o reconocerse en posturas, discusiones y posicionamientos de colegas de otras universidades nacionales. Según Gustavo Romero, de la JUP,

No teníamos ni idea en aquel momento, como estábamos organizándonos, quienes eran los “amigos” y quienes eran los “enemigos”, nos estábamos conociendo [...] Después sí empezamos a tener relación con compañeros de distintas universidades y ahí sí tenemos más acercamiento con Dante Gullo, pero el primer toque era ¿y este quién es? Es más, en muchos casos, muchos compañeros no le reconocían la trayectoria, otros ni sabían quién era [los pibes más jóvenes]... hasta que entramos a tener confianza con los compañeros y con Dante Gullo y así es como empezamos a tener una militancia más orgánica a nivel nacional, porque todo eso se hace con lazos de amistad, hay mucho de eso (entrevista a Gustavo Romero).

Efectivamente, esas instancias abrieron canales de diálogo y comunicación que, poco a poco, podían fortalecerse o desvanecerse,

a veces casi como resultado de un proceso de prueba y error. La vinculación con otros pares del país, las reuniones regionales, los viajes de formación reclamaban la apelación a una serie de prácticas y saberes que motorizaban la praxis militante. El fondo económico para costear la estadía de algún compañero, el viaje a dedo o enganchado en el auto del algún conocido, la hospitalidad militante, la confianza en la delegación de los mandatos conferidos, el intercambio de correspondencia, prensa y materiales de estudio, entre otras prácticas conformaban un eslabón fundamental de la coordinación más amplia del universo militante, que solía continuarse con la organización y participación en campamentos y encuentros de formación política (locales/regionales/nacionales) o la asistencia a instancias nacionales, por ejemplo, de las juventudes partidarias. Raúl Steffanazzi recuerda que “todos aportaban un poquito” de lo que obtenían de su trabajo o de lo que le mandaran los familiares para estudiar, entonces “se juntaba, se ponía una cuotita y poníamos todos y había alguien que administraba”, y era para “el viaje a dedo de alguno a una reunión en Buenos Aires, el otro a Córdoba, por si venia alguien para acá y pagarle los gastos” (entrevista a Raúl Steffanazzi).

Al avanzar la década y solidificarse las pertenencias institucionales de las agrupaciones universitarias, mucha de esa logística básica y artesanal comenzó a ser apoyada y costeadada, relativamente, por las estructuras de los partidos y/o dirigentes de líneas internas. En el caso de la JUP, el vínculo se dio a través de diputados provinciales que mediaban con referentes del peronismo renovador, como José Luis Manzano o Carlos Grosso. Los intransigentes solían hacerlo a través de la estructura partidaria provincial, los radicales mediante el vínculo con la mesa nacional de la FM, la Juventud Radical o el senador Antonio Tomas Berhongaray, muy cercano a Raúl Alfonsín.

Un rasgo común de la militancia estudiantil de la UNLPam fue la coincidencia general en la música folclórica de raigambre local. Desde inicios de la década de 1980, la provincia de La Pampa mostró un escenario favorable para el resurgimiento de expresiones folclóricas y populares que marcaron una continuidad con la prime-

ra mitad de los años setenta.²³³ Las peñas y festivales reeditaron las sinergias entre escritores, músicos e intérpretes locales. Por ejemplo, en 1980 se editó el trabajo discográfico *Agrupación Pampeana Confluencia interpreta a Juan Carlos Bustriazo Ortiz*. En 1985, esa misma agrupación presentó su segundo trabajo discográfico, denominado *Cantamento* (“Testamento del canto contemporáneo de raíz folklórica”). Como sostiene Ana Romaniuk, el proyecto de *Confluencia* estuvo declaradamente orientado “a la promoción y difusión del repertorio pampeano dentro y fuera del ámbito provincial”, aspecto visible a partir de “la elección de las obras a interpretar, en las declaraciones ante los medios, en los comentarios de los programas de mano de sus presentaciones en vivo y en la implementación de otras acciones de difusión” entre las que cabe destacar el proyecto “El canto de La Pampa en las escuelas”, por el que brindaron “conciertos y charlas vinculadas con la historia del repertorio pampeano” ejecutado en numerosas escuelas del interior de la provincia y en presentaciones en diferentes escenarios de la provincia de La Pampa, Neuquén y Buenos Aires (2018: 90). Durante todo el período se extendió la presencia folclórica asociada al cancionero pampeano, mediante producciones discográficas, presentaciones en vivo y en conjunto con otras expresiones artísticas.

Por otra parte, si el cancionero regional trabajaba sobre “la pampeanidad”, esa dimensión localista no excluía una mirada más amplia de alcance transnacional. En ese sentido, la “nueva canción latinoamericana” revistió un carácter paradigmático. En el imaginario militante, autores e intérpretes como Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Quilapayún e Inti Illimani, por nombrar algunos, se convirtieron en referencias musicales tanto por sus canciones como por sus posicionamientos políticos y sociales. Sus letras rescataban y contaban historias de los desposeídos, de los sin nombre, de los deseos de una América hermanada.

233 Desde la década de 1960, en La Pampa se desarrolló un importante movimiento cultural que tuvo entre sus aristas la reflexión, producción y discusión artística e intelectual sobre aspectos de la cultura local y la identidad provincial. Entre sus expresiones e iniciativas podemos nombrar al grupo Joven Poesía Pampeana, a la revista *Huerquén*, al grupo de Teatro Estable, a la Peña Cultural Temple del Diablo, al Grupo Cultural Raíces, a las Voces de la Patria Baya. Al respecto, ver Salomón Tarquini (2015), Bassa (2017) y Romaniuk (2018).

Al inicio de la década de 1980, un grupo musical con marcada visibilidad en el espacio estudiantil pampeano fue la agrupación Vilcabamba. El grupo se había formado a fines de la década del setenta, pero fue en los años siguientes cuando desplegó su mayor actividad y rodaje a través de la ejecución de música andina y del altiplano. “Vilca”, como se lo nombraba popularmente, estaba integrado por Sergio Santesteban (guitarra), “Mono” Fraile (charango), Quique Mario (bombos), Carlos Schulz (flauta) y Aníbal Prina (sikus), casi todos estudiantes universitarios y activistas políticos desde fines de la dictadura. Aníbal Prina y Carlos Schulz participaban del *staff* de la *RU*, en la que cada publicación solía acompañarse de presentaciones artísticas que incluían músicos locales, muestras de pinturas, charlas, lecturas de poesías, entre otras actividades. En 1982, en ocasión de la presentación pública del tercer número de la revista, los “Vilca” llenaron el aula magna de la UNLPam.²³⁴ Al año siguiente, el sexto número se presentó con un encuentro musical titulado “Por el derecho a la vida y en defensa de la democracia”, realizado en la planta alta de la Municipalidad, con entrada libre y gratuita y con la participación de artistas locales como Eduardo Castro, Sergio Santesteban, Roberto Yacomuzzi, Sergio Lacorte, Eduardo del Viso, Jorge Ludueña, Oscar Leguizamón, Beto Leguizamón, Mario Cejas, Daniel Camiletti, entre otros.²³⁵ A mediados de agosto de 1985, el Grupo Ensamble fue la nota central de la presentación del número trece de la revista,²³⁶ mientras que en 1986 fueron los grupos Iraupen, Cultrum, entre otros, y sobre fin de año, a inicios de noviembre, el grupo Markama –de gran presencia nacional– fue la figura central de la presentación del n°18 de la *RU*.

Ese fenómeno musical de impronta latinoamericanista mantuvo nexos con otras expresiones musicales, y junto con la *performance* de los autores e intérpretes y las adhesiones del propio público juvenil, participaron de una escena musical y cultural que podía incluir indistintamente al folclore, la nueva canción argentina o el rock. A

234 En mayo de 1986, en ocasión del n° 15 de la *RU*, los “Vilca” volvieron a colmar el Aula Magna. AHP, *10 de mayo de 1986*.

235 AHP, *La Arena*, 16 de noviembre de 1983.

236 AHP, *La Arena*, 21 de agosto de 1985.

modo de ejemplo, figuras como León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Litto Nebbia, Fito Páez, Charly García o David Lebón podían compartir escenarios y públicos con Cesar Isella, Los Olimareños o Daniel Viglietti.

Imagen 6. Actuación musical del grupo Vilcabamba en el aula magna de la UNLPam, con motivo de la presentación del tercer número de la RU-Revista Universitaria, en noviembre de 1982



Fuente: archivo del diario *La Arena*, PEU, Resol. C. S. N° 847/12.

Además de la música, otras experiencias estéticas nutrieron las redes de sociabilidad de la militancia estudiantil. En 1983, algunos activistas fueron partícipes de la fundación del MPPDH y de la Asociación Pampeana de Escritores (APE). Desde sus inicios, la asociación promovió el rescate y desarrollo de obras relacionadas con la investigación histórica, arqueológica y sociológica, a través del auspicio y apoyo de sus integrantes o mediante convenios con instituciones como la Secretaría de Cultura Provincial, la UNLPam, medios de comunicación como el diario *La Arena*, radios y canales de televisión. En ese marco, la APE se propuso la realización de seminarios de literatura regional, trabajos de recolección y difusión de valores, prácticas de culturas antecesoras, historias orales y testimonios, etc. (Bassa, 2009).

En 1986 se fundó CoArte (Cooperativa de Arte), un emprendimiento que reunió a músicos y trasvasó fronteras hasta convertirse, durante sus 10 años de existencia, en un espacio multidisciplinario de intervenciones artísticas (Romaniuk, 2018: 90). Por allí pasaron músicos pampeanos de fuerte impronta en la música folclórica regional, escritores, pintores, ceramistas, escultores. El funcionamiento de la CoArte —a través de peñas, talleres, muestras, etc.— terminó por aglutinar diversas iniciativas artísticas del medio, al erigirse como un punto de referencia de un circuito cultural cada vez más condicionado a los esfuerzos solidarios, colectivos y autogestivos de sus propios participantes, en un momento del país en el que la crisis económica y el deterioro de la presencia estatal ponían en entredicho las promesas de la democracia. Por esos espacios circularon y se nutrieron muchos jóvenes activistas de la militancia universitaria, a pesar del carácter menguante y desmovilizador que ya se palpaba en la ciudadanía en la segunda mitad de la década y sin que resultase excluyente con otras tendencias y expresiones de la juventud argentina de entonces, como la música disco, los salones bailables o las modas de ropa, peinados y demás.

La dimensión localista de lo “pampeano” también expresó la insistencia por recuperar una mirada sobre el “oeste profundo” de la provincia. La región, además de la marcada falta de desarrollo, tenía la problemática del escaso caudal de los ríos, mermados luego de la construcción de la represa Los Nihuiles a fines de la década de 1940.²³⁷ Desde entonces, lo que antes había sido un páramo que albergaba prominentes posibilidades de desarrollo, se hallaba en estado de sequía cuasi permanente, con las derivas negativas para la supervivencia de los pobladores allí asentados. Carlos Mateu —por entonces estudiante de Agronomía— recuerda que en 1984 propusieron, junto con otros colegas, la realización de una travesía de navegación por el Río Atuel, con el objetivo de visibilizar y reivindicar

237 En el noroeste de la provincia de La Pampa entran dos ríos —Atuel y Salado— provenientes de Mendoza, que luego se unifican y se denominan Salado-Chadileuvu (primer tramo) y Curaco (segundo tramo). Al sur se encuentra el río Colorado —de oeste a este— que funciona como límite con la provincia de Río Negro.

el carácter interprovincial de ese curso de agua: “En esa época corría algo de agua [...] fuimos de Santa Isabel a Puelches [...] hicimos durante 24 días una travesía en ocho canoas canadienses prestadas [...] y bueno, navegamos el Atuel por primera vez a remo” (entrevista a Carlos Mateu).²³⁸

El *raid* de navegación por el río pampeano contó con distintos apoyos y llevó algún tiempo organizar la travesía. Según los participantes “los mapas eran de Ciencias Naturales, los equipos fotográficos de Humanas, la Dirección de Turismo nos dio película”, las canoas fueron aportadas por el Club Náutico de Pico, entre otros apoyos. Al regreso, los navegantes afirmaban que “el oeste es el aislamiento total, una Pampa aparte” y que era necesario y urgente “que todos se enteren de cómo viven pampeanos como nosotros”, porque “es más grave que nosotros desconozcamos lo de ellos que ellos lo nuestro”.²³⁹

En junio de 1983, la *RU* publicó la nota “Necesidad de una Universidad Regionalizada”, firmada por el investigador Walter Cazenave. Allí se exponía un recorrido extenso por las derivas de los ríos pampeanos –y el florecimiento de sus zonas circundantes– hasta fines de la década de 1940, cuando “el agua ya dejó de correr”. Tras una amplia introducción, el autor abogaba para que

... la universidad deje de estar a espaldas de la provincia y, sin perder su condición universalista que es la esencia de la institución misma, esclarezca los puntos oscuros de su entorno y eche las bases de un conocimiento regional que se acople a sus similares de Cuyo, de Patagonia, del Litoral, y así construir una síntesis nacional.²⁴⁰

238 Estudiante de la facultad de Agronomía, participó de manera independiente en el centro de estudiantes y en distintas iniciativas estudiantiles del período. Abandonó la carrera y luego estudió periodismo, actividad en la trabaja actualmente.

239 AHP, *La Arena*, 3 de octubre de 1984.

240 *RU* n° 4, año II, junio de 1983, “Necesidad de una Universidad Regionalizada”. Otras notas menos específicas pero que podían abordar tangencialmente el tema en *RU* n° 4, año II, noviembre de 1983, “La región en el país y el continente”; *RU* n° 14, año III, octubre de 1983, “El otro oeste” y “El cancionero de los ríos”; *RU* n° 15, año IV, mayo de 1986, “un rector al servicio de la región y del país”; *RU* n° 20, año V, junio de 1987, “La realidad regional pampeana-patagónica”.

El reclamo hacia la institución universitaria para que se imbricara en los problemas de la región tuvo en los intentos de reeditar la experiencia del Instituto de Estudios Regionales un capítulo importante. A pesar de las restricciones que la intervención dictatorial impuso a las memorias políticas y revolucionarias de los años setenta, la militancia de los ochenta pudo convocar ese pasado a través de la recuperación de dos experiencias fuertemente ancladas en el imaginario pampeano: la nacionalización de la Universidad de La Pampa y, bajo su influjo, la creación del IER.²⁴¹

Como refieren Monasterolo y Pittaluga (2018), si la nacionalización de la UNLPam permitió instituir una forma novedosa de *comunidad* –identitaria e integrada a lo “nacional” pero que permitía pensarse desde la región– el reclamo de una universidad regional e imbricada en los problemas del (sub)desarrollo requería un doble movimiento: perfilar y desarrollar la región como artilugio para romper el aislamiento y la falta de integración con el resto del país a la vez que asumir y fortalecer una identidad pampeana y una conciencia autóctona. Para Huarte y Pittaluga “lo regional” funcionaba como “una de las piedras de toque de lo que se precisaba conocer tanto como de aquello que se proponía constituir” (2018: 33).

Efectivamente, el nacimiento del IER en 1974 se propuso, bajo la dirección de Hugo Chumbita, “coordinar y realizar estudios e investigaciones en el ámbito de la región pampeana central argentina [...] en la perspectiva de su desarrollo orientado hacia las metas de la liberación nacional y la integración latinoamericana”.²⁴² Técnica-

241 La UNLPam fue nacionalizada en abril de 1973, mientras que el IER funcionó desde fines de marzo de 1974 hasta su intervención en octubre de 1975, ordenada por el interventor Armando Seco Villalba. Respecto de la nacionalización de la UNLPam ver Asquini (2005: 85-102); Crochetti (2008); Monasterolo y Pittaluga (2018). Respecto del IER ver Huarte y Pittaluga (2018); Asquini y Dal Bianco (2008).

242 Ya en 1974, Hugo Chumbita contaba con una vasta trayectoria política e intelectual. A inicios de la década de 1960, había sido parte del núcleo estable de la revista *4161*, publicación muy imbricada en el nacimiento de la Juventud Universitaria Peronista, a mediados de esa década y de la cual también formó parte. Además de historiador, se graduó como abogado en al UBA y participó en la CGT de los argentinos y en diversos sindicatos en la defensa jurídica de los trabajadores. Con la llegada del FreJuLi al Gobierno nacional, y la nacionalización de la UNLPam en el mismo tiempo, se integró a esa casa de estudios en calidad de secretario académico. Al año siguiente, lideró el proyecto del IER. Años después, fue preso político de la dictadura hasta 1978, cuando partió al exilio en España. Regresó a la Argentina en 1984.

mente, los objetivos del IER buscaban dotar a la UNLPam de una instancia de conocimientos especializados que sirviera de apoyo y sostén a iniciativas destinadas a promover el desarrollo regional.²⁴³ Sin embargo, por detrás de los aspectos técnicos y operativos, la experiencia del IER desbordó su propia especificidad, al tornarse, por un lado, una expresión significativa de la renovación académica e intelectual de la UNLPam —en sintonía con los nuevos aires que soplaban en otras universidades del país—, y al mismo tiempo, su capacidad de interpelación social motorizó una dinámica particular capaz de formular una instancia inédita de interlocución entre el ámbito académico y el resto de la comunidad. Su urgente intervención y desarticulación en octubre de 1975 por parte de sectores de la derecha peronista pone de manifiesto los alcances que su *hacer* ponía en juego.

Las memorias sobre el IER funcionaron como puente hacia el pasado a la vez que proyectaron un futuro, tanto para los “viejos” estudiantes que habían participado de la experiencia como para las nuevas camadas estudiantiles que encontraban allí un reservorio de experiencias, prácticas y sentidos. Desde inicios de 1984 existieron iniciativas para reeditar la experiencia del IER. Luis Díaz rememora:

En 1983, cuando se pone en discusión revisar la universidad, en investigación la referencia era el IER, se hablaba del IER. Yo no sabía qué era el IER, salvo por lo que me comentaban otros compañeros. Entonces, cuando se hablaba de investigación en el 83, 84, se hablaba de recuperar el IER, como idea. Es decir, una universidad que se planteara una fuerte intervención en todo lo que es la cultura, la producción, el consumo, la educación, etc., de la región (entrevista a Luis Díaz).

En abril de 1985, la *RU* publicó una extensa entrevista a Hugo Chumbita, quien había regresado al país luego de su exilio en 1978.

243 Como apuntan Huarte y Pittaluga, el conjunto de proyectos cursados durante 1974 y 1975 permite observar el carácter multidisciplinario del Instituto, en el que “investigaciones sobre la población convivían con indagaciones geológicas, problemáticas sobre energías alternativas con preocupaciones sobre reformas constitucionales, el sistema jurídico social del trabajador rural con el habla y la expresión literaria popular en el oeste pampeano” (2018: 25).

La nota repasa la historia del IER, sus funciones y objetivos como parte de un programa mayor de alcances liberacionistas.²⁴⁴ Sin embargo, las condiciones de posibilidad de renovar la experiencia hallaron límites precisos en las condiciones precarias de la universidad pública argentina a mediados de la década de 1980, marcada por la falta de financiamientos, infraestructura y con bajos niveles de actividades de investigación. En una nota de la *RU*, Pedro Cuello –docente de la UNLPam y exintegrante del instituto en 1974– consideraba “poco factible su reedición”, al afirmar que “para llegar a ese tipo de instituto integrador hay que desarrollar y profundizar unidades de investigación en las facultades, recién después será factible dar ese gran salto”.²⁴⁵

Las revistas estudiantiles

Una marca notable de la emergencia juvenil de los años sesenta fue la apropiación de una cultura lectora y escrituraria. En el universo de la nueva izquierda, no solo se leía de manera diversa, sino que el público lector se había ampliado y, ergo, las posibilidades de intervención a través de la palabra escrita. Coincidimos con Pujol (2002) cuando sostiene que los años sesenta fueron el reinado del paradigma escritural, concretado a partir de una provechosa herencia alfabetizadora, en buena medida como efecto de la ampliación del sistema educativo y de los estudios superiores en particular. Una cultura de la lectura se desplegó, en parte, por la acción de una vasta red de agentes mediadores: bibliotecas populares, encuentros literarios, folletos, libros mediante entrega en cuotas a través de los periódicos, hasta el *boom* de empresas editoriales. En efecto, junto con los grandes sellos editorialistas, pulularon un sinfín de pequeños editores “independientes” que animaron la escena cultural, algunos por apuestas económicas y otros por desafíos políticos, o ambos a la vez.

244 *RU* n° 11, año III, abril de 1985, “El exilio enseña muchas cosas. Entrevista a Hugo Chumbita”.

245 *RU* n° 17, año IV, septiembre de 1986, “Esperar para el gran salto”.

En los primeros ochenta, con el ocaso de la intervención militar y la reemergencia de flujos culturales diversos, muchas iniciativas restituyeron, en los términos singulares que legó la dictadura, la práctica escrituraria y de intervención a través de publicaciones de distinta índole. Desde matutinos diarios hasta publicaciones semanales o mensuales de corte político/cultural, que se conjugaron con numerosas revistas de discusión política e intelectual.²⁴⁶ En ese marco, la experiencia estudiantil de la UNLPam alumbró una publicación novedosa como la *RU* y, años más tarde, comenzaron a editarse revistas desde los propios centros de estudiantes, acaso como una iniciativa aglutinante en momentos de merma de la participación estudiantil.

La Revista Universitaria

Como hemos mostrado en el capítulo II, una de las claves del éxito de la *RU* en el espacio de la UNLPam estuvo ligado indefectiblemente al movimiento de activación política posterior a Malvinas, cuyos horizontes anclaron la necesidad de recuperar el Estado de derecho y la democracia como formas organizativas de lo social. “Paty” Redondo afirma que el emprendimiento fue “un territorio de la militancia” al calor de la época, y que “nosotros veníamos todos de experiencias militantes [...] éramos gente que queríamos militar en la política desde una perspectiva de izquierda y estábamos convencidos de la importancia de nuclear, de producir, de contar desde la perspectiva nuestra” (entrevista a Nilda Redondo). La cuestión fundamental era participar, movilizar, organizar. Eran las formas de perforar aquello que denominaron “la universidad del silencio”.

Luego de una convocatoria pública para participar del proyecto y unos meses de organización y planificación editorial, el primer

246 En el caso de los diarios, un ejemplo es *Tiempo Argentino*, en funcionamiento desde noviembre de 1982. En el caso de revistas de orientación político/cultural, aparecen *El Porteño-Cerdo&Peces*, *El Periodista de Buenos Aires*, *Fin de Siglo*, que se suman a otras previas como la revista *Humor*. Entre las publicaciones de intervención política e intelectual sobresalen *La Ciudad Futura* y *Unidos*, junto con la preexistente *Punto de Vista*.

número salió a la calle el 2 de octubre de 1982. A partir de allí, la revista mantuvo una regularidad de cuatro números anuales (dos por cuatrimestre) hasta junio de 1987, cuando dejó de publicarse sin previo aviso de cierre. En total, fueron 20 números de una publicación que terminó por erigirse en una plataforma de discusión, difusión y participación pública de una población estudiantil por entonces poco proclive a la interacción política. En una mirada más amplia, fue parte del movimiento de activación cultural y social que, a modo de estructuras moleculares, se gestó y expandió por toda la geografía argentina a principios de los ochenta, unificado por el reclamo de apertura y defensa de las instituciones democráticas (Monasterolo, 2013).

Desde sus inicios, la revista contó con un *staff* de diez integrantes permanentes y algunos colaboradores rotativos o eventuales. El grupo estable estuvo conformado por Nilda Redondo, José Perrota, Leonardo Santesteban, Héctor Mareque, Roberto Petit, Héctor Somacal, Lidia Golbert, Carlos Schultz, Gabriela Esteves, Claudia Forgione, Horacio Echaniz, Marita Otalora. En los siguientes números participaron Luis Díaz, Aníbal Prina, Margarita Bastián. Según comenta Luis Díaz, quien se incorporó luego del tercer número:

La decisión de creación de la revista hoy la llamaría de tipo estratégica, en el sentido que nace como idea política en el partido [refiere al PI]. Se impulsa como una herramienta para desarrollar militancia en la universidad, y es una gran convocatoria que incluyen a otros partidos, activistas independientes, artistas, participan un montón de gente, después empieza a decantar. Es una herramienta política muy fuerte, no necesariamente partidaria, sí política, porque la revista plantea, además de información relacionada a la universidad, una serie de ejes de debate: los DD. HH., la cuestión Malvinas, lo regional. La revista era producto de la militancia de un grupo. Yo me incorporo en el 83, en el número 3, y se la vivió así, fue creciendo, fue madurando en el estilo, en el diseño, imáginate, el 83 (entrevista a Luis Díaz).

El emprendimiento editorial tiene su origen en el PI, pero desde el inicio se integraron compañeros de diversas corrientes. El éxito

promisorio de la publicación disparó discusiones internas acerca su rol estratégico. Desde el PI hubo intentos de capitalizarla en un instrumento partidario. También en el seno de la FUP se discutió la posibilidad de erigirla como publicación de ese espacio. Sin embargo, prevaleció la idea de mantener la publicación a distancia de cualquier organización, sea partidaria o gremial. Podría sugerirse que solo en los últimos números se advierte cierta homogeneización discursiva en línea con la militancia de la JUI.

El trabajo de confección de la revista era enteramente artesanal y colectivo. Los integrantes participaban en la planificación, armado y distribución, aunque algunas funciones estratégicas estaban delimitadas dentro del *staff* y su dirección se mantuvo más o menos estable durante todo el período.²⁴⁷ Nilda Redondo afirma que “nosotros teníamos una reunión sistemática, una vez por semana [...] y todas las notas que aparecían se debatían” (entrevista a Nilda Redondo). La aparición de cada número no era un simple ejercicio de rutina. Como hemos referido, se buscaba producir un suceso que permitiese abrir campos y puentes hacia la cultura a la vez que fortalecer una lógica de funcionamiento autogestiva, militante y solidaria. La tramitación de la propiedad intelectual de la revista, desde sus inicios, sugiere expectativas al menos de mediano plazo, dadas las dificultades técnicas y el contexto de producción (aun en dictadura). La financiación se sustentaba íntegramente con aportes de fondos propios y pequeñas publicidades. Solo después de los primeros números editados consiguieron el acceso al uso de la imprenta universitaria.

Rápidamente, la revista se configuró como una emergencia discursiva que buscó fisurar el tono monocorde en la habitualidad universitaria. La posición de equidistancia y autonomía que construyó el grupo de la *RU* le permitió estrechar y fortalecer vínculos con diversas tendencias y posicionamientos políticos, tanto individuales como colectivos, visible en el manejo de las notas y colaboracio-

247 Desde sus inicios hasta el n° 6, los editores responsables fueron Leonardo Santesteban, Nilda Redondo y José Perrota, cuando Santesteban fue reemplazado por Héctor Mareque, que se mantuvo allí hasta el n° 16, en agosto de 1986. Los últimos números estuvieron bajo la dirección de José Perrota y Nilda Redondo.

nes. Por otra parte, la falta de nexos generacionales con el pasado pre-dictatorial y la reivindicación de los derechos estudiantiles encontraron en la Reforma Universitaria de 1918 un pasado histórico que dio sustancia a sus reclamos a la vez que una superficie para los discursos del presente. En términos generales, puede decirse que la transición a la democracia modeló un “relato posible” que necesitaba “filtrar” la experiencia de la violencia radical de los setenta. En ese proceso, la militancia estudiantil de los ochenta pudo habitar un horizonte de expectativas anclado en las luchas por la liberación nacional sin entrar *formalmente* en contradicción con la institucionalidad del Estado de derecho.

En esa línea se inscribe la apelación al Manifiesto de la Reforma de 1918, expuesto a partir de numerosas notas sucesivas.²⁴⁸ Como apunta Nilda Redondo “la Reforma es amplia, polifacética, teórica por lo incumplido de algunos de sus aspectos, o de todos, a veces”.²⁴⁹ En efecto, el ejercicio intelectual trabajaba sobre la reflexión y crítica de dos momentos históricos específicos: el pasado, aquel inicio del siglo XX cargado de significaciones decadentistas, y el presente, atravesado por la necesidad de avanzar en la liberación nacional. Ambos contextos —el de 1918 y el presente, legado de la dictadura— eran homologados como momentos de una universidad oscurantista y antidemocrática, negadora de la ciencia y el conocimiento (como herramienta social). En ese marco, la apelación al derecho y a la participación de los estudiantes en los asuntos universitarios se combinó con una crítica política-ideológica: a diferencia del Manifiesto de 1918, en el que “las universidades han llegado a ser así un fiel reflejo de las sociedades decadentes”, en el presente se sostiene que “no es toda la sociedad la decadente sino la clase que controla el poder y establece el ordenamiento de esa sociedad” (*ídem*). El resultado fue la construcción de una imagen de lucha irredenta, por la que los destinos de la universidad estaban irre-

248 RU n° 3, año II, abril de 1983, “La Reforma Universitaria de 1918”. RU n° 4, año II, junio de 1983, “La Reforma Universitaria de 1918”. RU n° 5, año II, septiembre de 1983, “Reforma Universitaria 1918-1930”. RU n° 6, año II, noviembre de 1983, “La Reforma Universitaria de 1918”. RU n° 8, junio de 1984, “¿Qué es eso de la autonomía universitaria?

249 RU n° 3, año II, abril de 1983, “La Reforma Universitaria de 1918”.

mediablemente ligados a los del país, y viceversa. La universidad, y especialmente los estudiantes, se convertían en trinchera a partir de la cual construir el futuro. Las luchas emprendidas por los reformistas de 1918 *significaban* las luchas actuales de los estudiantes pampeanos y permitían construir un horizonte de expectativas que legitimaba sus reivindicaciones políticas. Un futuro liberado de la dependencia y el imperialismo.

En ese sentido, es perceptible una mirada política de la *RU* anclada en el nacionalismo popular, antiimperialista y a favor de las luchas por la liberación nacional, un rasgo más o menos común a toda la militancia estudiantil de los tempranos ochenta. Numerosas notas acerca del rol de la cultura y la educación funcionaban como una interpelación social en torno al desenvolvimiento de una práctica de corte “popular”, entendiendo por ello a las mayorías trabajadoras, junto con profesionales, pequeños empresarios y campesinos/chacareros.²⁵⁰ En términos más amplios, la posición antiimperialista significaba enarbolarse con el resto de las luchas que atravesaban a Latinoamérica, entendida como una unidad. Las experiencias dictatoriales de Chile, Paraguay y El Salvador eran puestas en conocimiento y discusión, subrayando una matriz discursiva focalizada en el repudio, la resistencia y la unión de los pueblos latinoamericanos frente a los Gobiernos militares y la complicidad norteamericana.

250 *RU* n° 3, año II, abril de 1983, “Identidad cultural II”; “¿Qué sucede con la educación en nuestro país?”. *RU* n° 4, año II, junio de 1983, “La educación como instrumentos de dependencia”; “América: de cara a la liberación”. *RU* n° 5, año II, septiembre de 1983, “Aportes de la Psicología a la función docente”; “Penetración del capital internacional (1952-1970)”; “América: de cara a la liberación”. *RU* n° 6, noviembre de 1983, “La cultura como identidad nacional”. *RU* n° 7, año II, abril de 1984, “La cultura como identidad nacional”. *RU* n° 8, año II, junio de 1984, “Hacia el gran movimiento de Liberación Latinoamericana”; “El imperialismo en el sistema alimentario argentino”; “Las variantes del Desarrollo”; “Experiencia como docente en Santa Isabel”; “Relato de una docente”. *RU* n° 9, año II, agosto de 1984, “Hacia el gran movimiento de Liberación Latinoamericana”; “Sobre un aspecto de la normalización universitaria”. *RU* n° 10, año II, octubre de 1984, “El Imperialismo y la Literatura”. *RU* n° 11, año III, noviembre de 1984, “El docente, un trabajador de la Educación”. *RU* n° 12, año III, junio de 1985, “FORJA: una experiencia de lucha”; “FUP: La universidad no puede ser una isla, entrevista a varios dirigentes estudiantiles”. *RU* n° 13, año III, agosto de 1985, “¿Somos todos iguales? Los países en el sistema internacional”. *RU* n° 14, año III, octubre de 1985, “La bomba deuda (acerca de la deuda externa latinoamericana)”. *RU* n° 18, año V, noviembre de 1986, “La deuda es ilegítima y un instrumento de dominación”.

De ese modo, fueron rescatadas las experiencias de los países del llamado “Tercer Mundo”. Una visión que fue acentuándose sobre los últimos números de la revista, desde mediados de 1985.²⁵¹

Otra temática que atravesó a la *RU* fue el abordaje del pasado más cercano a partir del eje en los DD. HH., un aspecto que en los inicios de los ochenta se tradujo de forma traumática para amplios sectores de la sociedad y por el que la palabra política estuvo limitada por los condicionamientos vinculados a las posibilidades y expectativas para tramitar ese pasado. Hasta fines de 1983 el abordaje en *RU* del pasado más inmediato fue, podría sugerirse, de forma “lateral”, mediante la palabra de *otros* puesta en nombre propio: la primera nota que se publica en la revista refiere a las consecuencias indirectas de la represión física y política que empujaron a miles de activistas a un exilio forzoso; “Los niños del exilio” es una nota que aborda la desestructuración psicológica que afecta a los hijos que fueron testigos y víctimas de la clandestinidad, la represión y el exilio.²⁵² Allí se sostiene que cuando se somete a una persona a la tortura y al exilio, “no se trata solo de un atentado a su propia integridad, sino también a la de su familia y especialmente a la de sus hijos, actores precoces de una situación que los trasciende.” En el siguiente número aparecen dos notas: “La represión en la Literatura” y “Crónica de la tortura”.²⁵³ En la primera, se recurre al análisis literario para visibilizar los mecanismos del terror que desplegaron los regímenes represivos de América Latina, en distintas épocas. El análisis en las novelas *El señor presidente* de Miguel Ángel Asturias y *Amalia* de José Mármol, les permite enunciar aspectos del proceso represivo:

251 *RU* n° 14, año III, octubre de 1985, “Israel: gendarmes del Imperialismo”. *RU* n° 15, año IV, mayo de 1986, “¿Qué es el Tercer Mundo?”. *RU* n° 16, año IV, junio de 1986, “YAMAHIRIYA LIBIA-guía del tercer mundo”; “Los países de la OCDE, el ‘norte’ capitalista”. *RU* n° 17, año IV, septiembre de 1986, “Una Charla que nos cuenta de Chile”; “Paraguay, la dictadura que regreso del olvido”. *RU* n° 18, año V, noviembre de 1986, “La lucha libertaria del pueblo salvadoreño”; “Por Chile libre”; “Andará Nicaragua su camino en la gloria”. *RU*, n° 19, año V, abril de 1987, “Solidaridad con Nicaragua”; “Paraguay: el régimen cae y el pueblo debate”.

252 *RU* n° 4, año II, junio de 1983, “Los niños del exilio”.

253 *RU* n° 5, año II, septiembre de 1983 y continuada en el n° 6 (año II, noviembre de 1983). En ambos casos, las notas son firmadas por Nilda Redondo.

En la instalación y control de redes de espionaje, la delación y la traición, incentivación del individualismo y falta de comunicación entre los ciudadanos, deshumanización del enemigo, sacralización del partido gobernante, despersonalización de los adictos al régimen, control de los medios de comunicación, control de los representantes de la iglesia, prosperidad de la “policía secreta” y corrupción de los cuerpos policíacos y total eliminación de la oposición a través de destierros, emigraciones, desapariciones, detenciones, etc.²⁵⁴

La segunda nota, “Crónica de la tortura”, es un artículo que hace referencia a las torturas sufridas por el militante peronista Eduardo Rulli, luego de ser emboscado, baleado y golpeado por la Policía Federal durante el Gobierno de facto de Onganía. Allí se describen las formas adoptadas en esa tortura y especialmente el uso de la picana como metodología.

El sexto número de la revista (noviembre de 1983) da cuenta de un hecho importante para el activismo social pampeano: la visita de Adolfo Pérez Esquivel a la ciudad de Santa Rosa. La *RU* publica una extensa entrevista realizada al premio Nobel de la paz, junto con un artículo denominado “RU. Informe de situación”.²⁵⁵ Y efectivamente aquí la palabra es tomada como propia, denunciando la extensión del dispositivo represivo al interior de la universidad operado por la dictadura militar, en el proceso más amplio de destrucción nacional. Allí la *RU* dice:

Esta universidad fue también otro más de los ámbitos de nuestra realidad donde se proscribió, se persiguió, se encarceló, se prescindió, se discriminó a los ciudadanos argentinos por el solo hecho de disentir con el proyecto antipopular y reaccionario de gobierno. Esta situación la vivimos bien de cerca en la provincia de La Pampa, recordemos sino a los muchos profesionales cesantes, los profesores encarcelados y torturados, los estudiantes encarcelados, los estudiantes con sus carreras truncas porque no se les permitió seguir, los recientes egresados de la UNLPam que

254 *RU* n° 5, año II, septiembre de 1983, “La represión en la literatura”.

255 *RU* n° 6, año II, noviembre de 1983, “RU. Informe de situación”.

no pueden ejercer sus especialidades, víctimas de listas negras y proscripciones por razones políticas, recordemos también como ayudaron al salvajismo represivo la delación, el miedo, la falta de solidaridad, la desconfianza, el deseo de seguridad individual, en medio del caos político y social.

De ahí en adelante la mayoría de los números de la *RU* presentan artículos referidos al tema, como la lucha para lograr el juicio y castigo a los responsables del terrorismo estatal, la consigna de “No Olvido” y el recuerdo de las víctimas pampeanas.²⁵⁶

Revistas de los centros de estudiantes: *Humos*, *Huerquen* y *Mangrullo Universitario*

En 1986 comenzaron a circular revistas estudiantiles gestionadas por los centros de estudiantes, como *Humos* en el CEFCHu, *Mangrullo* en el CEFA y *Huerquen* en el CENUP. Son publicaciones relativamente regulares, construidas desde la precariedad de recursos y la autogestión, y se advierte en ellas la intención de dotar de prolijidad las publicaciones, teniendo en cuenta su carácter enteramente artesanal.

La revista *Humos* comenzó a editarse en junio de 1986 y se presentó como órgano oficial del Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. El equipo de redacción estaba compuesto por Ana Rodríguez, Ana Muñagorri, Sandra Sombra, Tata Di Liscia, Dini Calderón, Omar Lobos, Myrna Urquiza, con colaboraciones de Luis Díaz y José Perrota. El editorial n° 1 de la publicación afirmaba:

256 *RU* n° 7, año II, abril de 1984, “Acerca del enfoque Psicoterapéutico de un Horror”; “La UNLPam y los DD. HH.”. *RU* n° 10, octubre de 1984, “Al hablar de la violencia no se puede ser simple, se debe ser claro (nota de Adolfo Pérez Esquivel)”; *RU* n° 11, año III, abril de 1985, “Vamos a quemar a las brujas (acerca de la demonización de las luchas de los DD. HH.)”. *RU* n° 12, año III, junio de 1985, “Educación y Derechos Humanos: sobre los que nos pasó”. *RU* n° 13, agosto de 1985, “Educación y DD. HH.: de su vigencia, su enseñanza y su práctica”. *RU* n° 14, año III, octubre de 1985, “Juicio a las EX-JUNTAS: la ‘obediencia debida’ y los ‘excesos’”. *RU* n° 16, año IV, agosto de 1986, “¡NO a la amnistía!”. *RU* n° 19, año V, abril de 1987, “PUNTO FINAL: Una ley inmoral que debe ser derogada”. *RU* n° 20, año V, junio de 1987, “Hay OBEDIENCIAS que matan”.

El hecho de haber logrado la creación de este medio, de haber logrado constituirnos en equipo de trabajo que garantice la presencia de humos...es haber alcanzado parte de nuestro compromiso. Lo que sigue, por una parte, es mantener esa presencia a través del tiempo para cumplir con el más importante de nuestros compromisos: informar. Pero informar así, de esta manera, con cierto bagaje de humor y buena disposición para el optimismo, porque el objetivo común último resulta tu participación, compañero. Este es el móvil fundamental de esta tarea de entretener e informar. Es posible que la puesta en intercambio de información devenga, en última instancia, en participación, ya que el conocimiento de nuestras necesidades nos anima a la solidaridad, y ella es amiga de la democracia.²⁵⁷

Por una parte, llevar adelante la tarea de *informar*, por otro lado, fomentar la *participación*. Dos elementos que nos ayudan a comprender aspectos específicos del contexto que atraviesa a la militancia estudiantil a mediados de 1986. Respecto de la primera – un tópico que enfatizaron también otras revistas estudiantiles– la preocupación por informar es una actividad habitual de los centros de estudiantes de entonces, de ahí que exista un conjunto de informaciones más o menos estables referidas a aspectos académicos (situación de cada carrera, materias específicas, cursadas y novedades, entre otras). Como lo enuncia Diana Moro –presidenta del CEFCHU– en la entrevista que *Humos* le realiza, tenemos “una comisión directiva” que delinea proyectos globales a través de cada secretaría, “un cuerpo de delegados de áreas y de cursos” que opera como nexo entre la comisión y la base estudiantil, y finalmente la Asamblea General, que “es el órgano máximo del Centro, donde se debate, se informa y se resuelve”.²⁵⁸ La misión de informar conlleva la invitación a sumarse y *participar* tanto del centro de estudiantes como de la vida académica de la facultad y de la universidad, como pilar fundamental de lo que se considera debe ser un estudiante crítico y a la altura de su tiempo.

257 Revista *Humos*, n° 1, junio de 1986.

258 Revista *Humos*, CEFCHU, año I n° 1, “La participación es el objetivo. Reportaje a Diana Moro”

El segundo número sale en agosto del mismo año, con la entrada de José Insausti y la salida de José Perrota del equipo de redacción. El *staff* se mantuvo hasta fin de año, con la salida de dos números más (n° 3 en octubre y n° 4 en noviembre). Además de repetir secciones de humor y noticias académicas, se publican notas acerca del rescate de obras y materiales culturales pampeanos. Otras notas reproducen documentos y las medidas de luchas dispuestas por la FUP, en una línea que parece ir de la mano de la agudización de los conflictos laborales y presupuestarios hacia fines de 1986.

En abril de 1987 vuelve a salir *Humos*. El número cinco modifica parcialmente el equipo de redacción, con el ingreso de José Maristany, Alicia Ruggeri y Horacio Obialero, y la salida de Sandra Sombra y Omar Lobos. También se suman a colaborar Diana Moro y José Perrota. La revista da cuenta de las nuevas representaciones estudiantiles en el Consejo Superior y en el centro de estudiantes, con un breve informe de cada uno de los nuevos secretarios. También aparece una sección dedicada a los gremios (APULP, AGSD-TU, ADU). Una novedad es la extensión de páginas, que llega a 22, lo que permite darle mayor tratamiento a las notas centrales, como la entrevista que los editores realizan a “Porota” Meroño y a María Gutman, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, quienes visitaron la ciudad en el marco de la “Campaña de los pañuelos”.

El número seis de *Humos* sale en junio de 1987 y está marcado por los sucesos aún frescos del levantamiento carapintada, a través de notas referidas a la defensa de la democracia, a la lucha por presupuesto y al rechazo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Las notas centrales son una entrevista al rector Esteves Leyte, respecto de los sucesos de Semana Santa y de la participación de la comunidad universitaria en el espacio público, y un reportaje a Horacio Romano y a Luis Díaz, dirigentes de la FUP, que versa sobre las derivas del congreso de la FUA realizado a fines de marzo.

La revista *Huerquen* se presenta como la “revista del CENUP” y aunque no explicita la fecha de su primer número podemos suponer que es junio de 1986. El equipo de redacción está integrado por Natalia Trapaglia, Ana María Parras, Ernesto López, Claudia Páez, Hugo Tickyj, Enrique Fra y Nora Ferreira. Además, colabo-

ran Juan Diego Martigani, José Gobbi, Héctor Mareque, Marcelo Pessino, Gustavo Fábrega, Osvaldo Giacomelli e integrantes de las secretarías del CENUP. Respecto de la denominación “Huerquen” —en lengua mapuche significa “mensajero”— los editores señalaban que “elegimos un vocablo mapuche en honor a la cultura indígena avasallada por aquellos que pretendieron y pretenden imponer un modelo de país ajeno a nuestras verdaderas raíces”, de modo que la revista “pretende llevar un mensaje de lucha a todos los estudiantes para que juntos podamos lograr una Universidad del Pueblo en la Patria Liberada”. En las páginas siguientes, se presentaban los puntos centrales del documento: “La educación reclama presupuesto, el pueblo exige moratoria”, elaborado por la Comisión Mixta (la FUP, la ADGSTU y APULP), en la que se definían y reclamaban una serie de puntos estratégicos para sostener y capear la crisis del sistema educativo. Un reportaje a Enrique Fra, presidente del CENUP, refiere a la actualidad del centro, los modos de funcionamiento y la necesidad de que los estudiantes se involucren “para construir un CENUP y una universidad más democrática”. La revista incorpora notas sobre el quehacer de las distintas secretarías y el Consejo Directivo.²⁵⁹

El segundo número no muestra cambios significativos y mantiene una línea de redacción similar a la revista *Humos*, con secciones de humor, notas científicas, académicas y de actualidad universitaria, en sintonía con los temas que atraviesan la agenda de la militancia estudiantil (presupuesto, derechos humanos, elecciones, entre otras).²⁶⁰ La revista deja de editarse provisoriamente en 1987 y vuelve a salir en 1988.

El centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía comienza a editar *Mangrullo Universitario* en sintonía con *Humos* y *Huerquen*, a mediados de 1986, lo que parece haber sido una suerte de estrategia conjunta de los centros estudiantiles, en el intento de retomar iniciativas que resultasen atractivas como prácticas de legitimación y de intervención política. Se editan cuatro números

259 Revista *Huerquen*, CENUP, año I, n° 1.

260 Revista *Huerquen*, CENUP, año I, n° 2. No contamos con más números que puedan ampliarnos sobre la experiencia y continuidad de *Huerquen*.

hasta fines de 1986 y luego, durante gran parte del año siguiente no salen más números. El equipo de redacción está integrado por Carlos Ferri junto con la Secretaría de Prensa y Difusión del CEFA (Edgardo Beltramone y Fabio Roigé), además colaboran Daniel Alí, Guillermo Butler, Héctor Figal, Mirta Lozada y Luis Seraci.

Para *Mangrullo Universitario*, la falta de participación estudiantil es uno de los problemas graves que afronta la universidad, en la que “la inmensa mayoría de la actual población estudiantil ingresó en ella después del 76”, y son jóvenes que “únicamente han conocido la universidad de la dictadura, en la que se enseñaba que la educación superior es un privilegio para unos pocos y que las facultades son lugares en los que se forman profesionales despojados de conciencia social”. En efecto, las forma de revertirlo es promoviendo un estudiante consciente del nuevo tiempo democrático:

Ahora es el momento en que todos debemos participar no solo en el centro de estudiantes o en una agrupación política sino ejerciendo la crítica ante el profesor, preocuparnos por los problemas de interés nacional, de la realidad y cómo modificarlos. La participación tiene un solo fundamental objetivo: CUIDAR LA DEMOCRACIA en que estamos viviendo y ENGRANDECER EL PAIS como todos deseamos (las mayúsculas son del original).²⁶¹

El énfasis en la participación y en el carácter endeble de la democracia tenía explicación en la particular coyuntura del país. Por entonces, el “Plan Austral” flaqueaba y la política gubernamental se advertía cada vez más proclive a las demandas de los sectores concentrados de la economía nacional y de los organismos internacionales de crédito. El ahogamiento financiero del país condicionaba los presupuestos de áreas como Cultura y Educación, Salud o directamente repercutía sobre el financiamiento universitario. Por otra parte, hacia 1986 se estaba produciendo un recambio importante de la población estudiantil que había ingresado en los años 1981, 1982 y 1983, quienes ya comenzaban a perder cotidianidad con la

261 Revista *Mangrullo*, año I, n° 1, 1986, “La participación estudiantil”.

institución. Muchos de esos estudiantes habían sido partícipes del momento de mayor movilización universitaria, con la recuperación y puesta en funcionamiento de órganos gremiales y de gobierno de la institución. Esa dinámica había favorecido el vínculo entre estudiantes de distintas carreras y/o años, lo que acentuó una tendencia a incorporar saberes sobre las prácticas cotidianas y las formas de tramitar la vida universitaria. Sin pretensión de marcar un corte tajante, los estudiantes que ingresaron a la UNLPam desde 1985 carecían, en menor medida, de esas redes internas de sociabilidad, en un contexto marcado por el carácter menguante de la movilización y participación estudiantil. De ahí la insistencia para que los estudiantes se involucren en el quehacer cotidiano del espacio universitario, en un marco de progresiva caída de las expectativas de futuro. Podríamos sugerir que, desde mediados de la década, comenzó a afianzarse un *habitus* universitario, un modo estable y rutinizado de transitar la experiencia corriente de la institución, progresivamente disímil de sus antecesores.

Los números siguientes de *Mangrullo Universitario* no desentonan del tono relativamente común que modulan el resto de las revistas estudiantiles. Son producciones que buscan entablar una cercanía con el estudiante, a mitad de camino entre notas y secciones más “pasatistas” y aquellas de perfil más político. En cierto modo, expresan la ambigüedad de un período que comenzaba a mostrar aquellos signos que la coyuntura bisagra de 1987 dejaría al descubierto: el desencanto, la desmovilización y una crisis de la militancia estudiantil y particularmente partidaria, como parte del proceso de pérdidas de expectativas general sobre el rumbo de la economía, del país y fundamentalmente sobre las expectativas de futuro como “promesas de la democracia”.

Género, sexualidad y militancias

Como una de sus aristas, la dinámica de contestación socio-cultural en las décadas de 1960 y 1970 expuso la emergencia de cuestionamientos a los cánones y prácticas sexuales dominantes, vi-

sibles a partir de la presencia y crecimiento de distintas organizaciones de militancia homosexual en la escena pública.²⁶² Un ejemplo elocuente puede considerarse el Frente de Liberación Homosexual (FLH), un colectivo político que adquirió dimensiones notables a partir de 1973, cuando la coyuntura del retorno del peronismo al poder le permitió integrar a agrupamientos previos, como Alborada, Bandera Negra, católicos homosexuales de la Argentina, Eros, Grupo Nuestro Mundo, Parque, Profesionales, Psicoanálisis, Safo y Triángulo Rosa. Según Patricio Simonetto, el FLH “se configuró en una relación activa con la izquierda (peronista y trotskista), el feminismo, la cultura homosexual y el Estado” (2017: 13), expresando una interpretación radical de la homosexualidad que le permitió cuestionar al patriarcado y al capitalismo de entonces. Organizaciones como el FHL establecieron y mantuvieron vínculos con otras de carácter feminista, por ejemplo, la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina (MLF) (Barrancos, 2014: 25), y cuyos militantes de bases podían compartir espacios en organizaciones más amplias del campo de la izquierda, como Montoneros y el PRT-ERP.

La irrupción de las organizaciones de activismo homosexual dio por tierra con la idea de una homosexualidad confinada al anonimato o a los márgenes de la vida pública. Los nuevos movimientos no solo buscaron reafirmar su identidad sexual y su lugar en el campo de la izquierda, sino que buscaron permear y fisurar los contornos de la moral sexual dominante, a partir de la visibilización de un conjunto de prácticas, discursos y representaciones propias de la cultura gay. El carácter disruptivo de esos comportamientos públicos puede medirse por el grado de “amenaza social” a los valores cristianos y a la “cultura viril” de la sociedad argentina percibidos por una amplia franja de ciudadanos. Aunque el “peligro” no llegase a configurar una ruptura de los cánones morales y sexuales, su importancia se evidenció en las reacciones asumidas por una parte importante de

262 En cierta forma, la emergencia y visibilización de prácticas sexuales no heteronormativas es parte de un fenómeno más amplio de transformación de la cultura occidental, en un movimiento que incluyó tanto el consumo de nuevos bienes culturales como manifestaciones contraculturales.

la sociedad, que reclamaron y apuntalaron el accionar represivo de distintos dispositivos estatales (policíacos, médicos, educativos). La implantación del terrorismo de Estado reforzó la avanzada represiva contra las disidencias sexuales, mientras que las organizaciones fueron desarticuladas y muchos de los homosexuales, lesbianas y activistas de género resultaron un objetivo de las prácticas represivas.

El retorno de la democracia en 1983 funcionó de marco para lo que dio en llamarse un *destape cultural*,²⁶³ que en sus derivas permitió el agenciamiento de distintos actores y colectivos sociales, como hemos referido, que buscaron trasvasar el alcance y uso de los derechos y garantías individuales en el intento de pensar una democracia más amplia.

En 1984 surgió la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y a lo largo de la década se erigió en una de las más importantes organizaciones de la militancia gay. Nacida en Buenos Aires y alrededores, poco a poco extendió su presencia por numerosas ciudades del país. La CHA delineó una política en la que “prevalecieron los principios de visibilidad y reconocimiento dentro de la inscripción mayor de la plena vigencia de los derechos humanos, lo que no puede sorprender en un país que había experimentado dramáticamente su extinción” (Barrancos, 2014: 26). En los años siguientes, la expansión del retrovirus letal VIH/SIDA, “*la peste rosa*”, forjó un “sentido agonal de las relaciones sexuales” y de la homofobia, pero paradójicamente obró para que el propio Estado debiese reconocer la existencia de sujetos de sexualidad no heterosexual, en el mismo trayecto de intervenciones destinadas a impedir o contener la extensión de la epidemia del virus. La coyuntura de “doble hélice –reclamo por los derechos humanos y necesidad de sofocar el HIV/

263 El *destape cultural* fue una forma de nombrar el movimiento y la velocidad con que emergieron y produjeron determinados comportamientos y prácticas sexuales a partir del retorno democrático en 1983. En cierto modo, su rasgo central fue la diversidad de formas que adoptó la rehabilitación y liberalización de imaginarios sexuales reprimidos por el período dictatorial. La libertad para insinuar, mostrar y dotar a los cuerpos de disímiles sentidos se expresó tanto en los circuitos del *underground* porteño y de las grandes ciudades como también en la exposición de desnudos, escenas sexuales y poses que inundaron revistas de consumo masivo, películas de cine, obras de teatro y programas de TV, convertidos en fenómenos de ventas y consumos culturales.

SIDA–” fue estratégicamente empleada por la CHA como una política de visibilización de los sujetos no heterosexuales (idem), pero al mismo tiempo abrió grietas internas que terminaron por corroer el peso de la organización, entre quienes buscaron fortalecer la lucha contra el avance de la enfermedad y quienes, además, consideraban “la búsqueda primordial de la igualdad, la lucha por la inclusión y el estado de ciudadanía” (idem).

La apertura democrática también supuso la aparición de numerosas mujeres que reconstruyeron espacios de sociabilidad, organizaciones y agendas feministas, muchas de ellas con experiencia política de izquierda, forjada en la década previa y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los espacios de confluencia fue la Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer “25 de noviembre” (ATEM), fundada en 1982. Ese mismo año empezaron a editar la revista *Brujas* (se publicó anualmente hasta 2013), en la que se publicaban notas y artículos de feministas locales y traducciones de textos extranjeros. Al año siguiente nació Lugar de la Mujer (agosto de 1983) y luego Alternativa Feminista, cuyas activistas habían pasado por ATEM. El 8 de marzo de 1984, la recién creada Multisectorial de la Mujer –integrada por militantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de mujeres y amas de casa– emitió su primer documento con siete puntos centrales:

- 1- Ratificación del convenio de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
- 2- Igualdad de los hijos ante la ley;
- 3- Modificación del régimen de Patria Potestad;
- 4- Cumplimiento de la ley “igual salario por igual trabajo”;
- 5- Reglamentación de la ley de guarderías infantiles;
- 6- Modificación de la ley de jubilación para el ama de casa;
- 7- Creación de la Secretaría de Estado para la Mujer.²⁶⁴

Algunas de las demandas expresadas en el documento tuvieron una repuesta relativamente favorable, gracias a la lucha del conjun-

264 Volante convocando al 8 de marzo, año 1984. Fondo Elsa Cola Arena, Memoria Abierta. Recuperado de: <https://www.facebook.com/memoriaabiertoak/photos/a.128631123910291/2553756154731097/?type=3&theater>. En el afiche de propaganda se puede observar el listado de convocantes al acto. Fecha de consulta 14/5/2022.

to del movimiento de mujeres. En cierto modo, el alfonsinismo incorporó aspectos de las demandas feministas. En 1984 se creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos y de la Mujer, y los programas “Mujer, Salud y Desarrollo” (bajo la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social) y “Promoción de la Mujer y la Familia” (dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia). En 1985, en el marco de este último programa, se creó un “Consejo Asesor” formado por mujeres provenientes de diversos ámbitos: políticas, sindicalistas, académicas, representantes de organizaciones feministas y comunitarias. Además, en este período se sancionaron leyes que remitían a la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio (1985); la patria potestad a madre y padre (1985) y el divorcio vincular en 1987.

Un queer en las pampas

En 1984, Juan José Sena tenía 40 años. Durante la década de 1970 había estudiado por un tiempo la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y luego se había ido a vivir a la ciudad de La Plata.²⁶⁵ Aficionado a recorrer rincones y recovecos de una Buenos Aires marginal, entabló amistades con personalidades como Juan José Sebreli o su coterránea Olga Orozco. Aunque frecuentó los circuitos y espacios por los que se movían los activistas sexodisidentes, no contamos con precisiones acerca de prácticas estables o militantes en alguna organización.²⁶⁶ Sin embargo, es pro-

265 Nacido en la ciudad de General Pico, Juan José Sena fue antropólogo, profesor de letras y escritor de numerosas obras literarias, como el libro de cuentos *Los condenados de este mundo* (1976); *Letras para la paz y la justicia* (1986), *Tierra escrita* (1988), *Escritpciones* (1991), *Con olor a tinta* (1991) y *Contraseñas* (1993). En noviembre de 2019 se estrenó *Llegará la noche*, un documental dirigido por Marcos Fernández y Rodrigo Will sobre la obra y los últimos años de vida del escritor. Gran parte de su obra ha sido editada, en distintos tramos, por la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa.

266 Según P. M. —una de las amigas más cercanas a Sena—, Juanjo había sido uno de los fundadores de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en la ciudad de General Pico (entrevista a Dora Battiston, con autorización para citar las palabras de P.M.). No contamos con más datos al respecto, pero estimamos que puede ser en los años finales de los años ochenta o inicios de los noventa, cuando regresa a esa ciudad luego de su estadía en Santa Rosa.

bable que el creciente contexto represivo desde 1975 haya influido en la decisión de Juan José Sena de regresar a La Pampa y afincarse, previo paso por General Pico, en la ciudad de Santa Rosa, con el objetivo de finalizar sus estudios de grado en la carrera de Letras.

Podríamos referir a “Juanjo” —así solían llamarlo sus amistades— como un “salido del closet”. El carácter irreverente de su andar y la manifiesta presunción de su homosexualidad resultó en incomodidad para propios y extraños en los pasillos de la facultad de Ciencias Humanas, léase, desde los propios sectores progresistas y de izquierda, desorientados ante la desfachatez *marica* de Sena, hasta los sectores conservadores y defensores de los “buenos valores”.²⁶⁷ Como lo definiese Diana Moro, amiga y compañera de entonces, “Juanjo era un queer”, mientras su testimonio busca subrayar la salvedad anacrónica en el uso de la categoría analítica. Un *queer* “en las pampas”, podríamos sugerir. Casi una extrañeza en el corazón de la sociedad pampeana que, entre los variados discursos sociales y en pugna, sobresalía aquel que se jactaba de la tranquilidad del espacio pampeano y de la no contaminación de las “malas conductas” de las grandes ciudades. Un discurso hegemónico que podía leerse como un correlato del imaginario de la “isla”, cuya retórica sostenía la idea de que el “terrorismo de Estado” no había pasado por allí, salvo para algunos casos muy evidentes de aquellos que andaban metidos en “cosas raras”. Siguiendo con la palabra de Diana Moro, Juanjo era alguien “que mostraba y demostraba su homosexualidad, su actitud gay, él se pintaba, él se teñía el pelo, se ponía camisas rojas”. En efecto, no pasaba desapercibido. Para Dora Battiston, “Juan era esencialmente un gran narcisista y al mismo tiempo un ser tímido, herido, castigado y marginado, tanto en su vida personal como social” (entrevista a Dora Battiston).²⁶⁸

267 Santiago Joaquín Insausti explora la categoría de *marica* como un elemento instituyente de las identidades gay en la década de 1980. Según el autor, “hasta principios de la década del ochenta, muchas de las personas que se reconocían como hombres y que deseaban sexualmente a otros hombres se identificaban a sí mismas como maricas. No solo la experiencia cotidiana de estas maricas frente a los aparatos represivos del Estado y a la homofobia circundante era diferente a las nuestras, también lo eran los modos en los cuales significaban ese deseo, habitaban sus cuerpos y se interpretaban a sí mismas” (2018: 25).

268 Docente de la carrera de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas.

Diana Moro afirma que fue Luis Díaz el mentor de la idea de proponerle a J. J. Sena la candidatura en la lista de “Unidad” que finalmente lo llevó a la Secretaría General del CEFCHu en 1984/1985, postulación que el escritor pampeano aceptó gustosamente, y agrega que “en ese momento, coyunturalmente, pensábamos que estaba bien pensar en alguien que fuese independiente, y que tuviese una mirada, una actitud, un lugar particular”. Aun intuitivamente, la idea de impulsar la figura de Juan José Sena al frente del centro de estudiantes puede comprenderse como una forma de ejercer y proyectar un *hacer* democrático, como lucha efectiva por las libertades individuales, por la diversidad de pensamientos y, aunque no articulado discursivamente, lucha por el derecho a otras relaciones sexo-afectivas y orientaciones sexuales disidentes. En ese sentido, apuntalar una democracia amplia y profunda era corroer los legados dictatoriales, pero también aquellos que venían “desde siempre”, recolocando el lugar del individuo como sujeto de derecho. Diana Moro rememora en los siguientes términos:

Me parece que la mirada política de ese momento fue bastante intuitiva [...] Yo creo que nosotros de una manera indirecta reivindicamos ese derecho a ser distintos. Igual me acuerdo que fue difícil [...] nosotros lo que hicimos fue poner a Juanjo como secretario general en lugar de decir “este puto de mierda mirá lo que está haciendo”.

La frase final resulta interesante, en la medida en que positiviza la injuria y la vuelve productiva. Juanjo Sena resultaba una dislocación en el espacio estudiantil de los ochenta. Una subjetividad forjada al calor de la década previa y despojada de los cánones dominantes de la heteronormatividad sexual, aunque debiese pugnar con ella cotidianamente:

Cuando se reunían los distintos secretarios o presidentes de centros de estudiantes, Juanjo siempre tenía actitudes de ponerlos en situaciones incómodas, se sentaba cerquita de algunos, los otros se retiraban, o ponían dentro del temario organizar un campeonato de fútbol [...] [Juanjo] generaba mucha urticaria

porque no era fácil en esa época ser gay, y mucho menos ser gay así, de esa manera (entrevista a Diana Moro).

La presencia de Sena fue fugaz en el centro de estudiantes, sin embargo, su caso permite explorar algunos aspectos sugestivos de los vínculos entre izquierda, sexualidad y juventud en la década de 1980. En un reportaje realizado por Enrique Symns y Juan González en mayo de 1984, el ministro del interior Antonio Tróccoli afirmaba que la homosexualidad era “una enfermedad” y que “nosotros pensamos tratarla como tal”, de modo que “si la policía ha actuado es porque existieron exhibiciones o actitudes que comprometen públicamente lo que podrían llamarse las reglas de juego de una sociedad que quiere ser preservada de manifestaciones de este tipo”.²⁶⁹ En boca del veterano dirigente –integrante de la Línea Nacional, el ala más conservadora de la UCR– podríamos pensar las palabras como parte de su coherencia ideológica, sin embargo, sus respuestas no resultaban escandalosas para el promedio ciudadano, en la medida en que formaban parte de un imaginario que asociaba homosexualidad y lesbianismo con “enfermedades” o “desviacionismos mentales”. Sin embargo, dichas desde el poder, resultaron sino escandalosas, al menos peligrosas, toda vez que podían interpretarse como un apoyo tácito a las prácticas represivas del aparato policial que, amparado en las tipificaciones del código contravencional –edictos policiales bajo el argumento de “excitación al acto carnal en la vía pública” o “exhibición con ropa del sexo contrario”– asediaban a aquellas personas que desafiaban públicamente los cánones sexuales vigentes.²⁷⁰ Aún más, esa ingeniería normativa había servido, no pocas veces, al accionar bifronte del terrorismo de Estado, cuya apelación jurídica funcionaba como fachada legal para el amedrentamiento, intimación y acciones clandestinas de carácter represivo. De ese modo, los edictos que penaban las prácticas (o presencia de) homosexuales en las calles, plazas o lugares de reunión conformaban

269 Revista *El Porteño*, n° 29, mayo de 1984.

270 El Edicto 2F condenaba con pena de arresto a “los que se exhibieren en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropa del sexo contrario”; idéntica sanción establecía el 2H a “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaran o se ofrecieran al acto carnal”.

un *continuum* con la década previa, cuya trama punitiva funcionaba como método de control del espacio público por parte de agentes del Estado, demarcando márgenes de lo que podía ser tolerado o no.

En enero de 1985, *El Porteño* publicó dos encuestas orientadas a obtener datos sobre prácticas y opiniones de los jóvenes con relación a temas considerados tabúes por la sociedad argentina, como el caso de drogas, relaciones sexuales o masturbación, entre otros ítems.²⁷¹ Según los resultados, los jóvenes se mostraban conformes con las relaciones familiares vigentes (más del 90%), estaban de acuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales (hombres 89%, mujeres 59%) y el uso de preservativos (78%), y consideraban a la masturbación como un acto sexual más (hombres 53%, mujeres 40%). En el caso de la homosexualidad, para el 70% de hombres y mujeres era una enfermedad, para un 14% era una relación sexual más, mientras que un 7% consideraba que era un “vicio”. Se podría argüir sobre la baja edad de los encuestados –jóvenes de 17-18 años– como también desbrozar aspectos acerca del conocimiento y/o educación sexual de los encuestados. Sin embargo, una serie de entrevistas a dirigentes de las juventudes partidarias, publicados en el suplemento *Cerdos&Peces* de la misma revista, mostraba una continuidad de sentido sobre “la cuestión de la sexualidad en Argentina”. De ese modo, Enrique Dratman (36 años), miembro del Secretariado Nacional de la Federación Juvenil Comunista, afirmaba:

En principio estamos en contra de que se los persiga. La homosexualidad es un problema tan antiguo como la existencia de la humanidad, y en cuanto a su origen algunos casos son de origen biológico y otros tienen que ver con lo psíquico y esto está relacionado con su formación sexual. Pero, al fin y al cabo, es

271 La nota “La juventud pacata” brinda la siguiente información: las encuestas fueron realizadas por estudiantes del primer año del Curso de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Mental. La encuesta I buscaba recopilar información sobre prácticas y ocasionalmente contiene opiniones. Se realizó a 67 mujeres y 70 varones de 17-18 años aproximadamente, con un nivel socioeconómico de clase media. La encuesta II trabajaba sobre las opiniones de jóvenes de 17-18 años, de clase media-baja, en un universo de 1.330 encuestados (610 varones y 720 mujeres), abordados a la salida de un concierto de rock y en la calle (mitad y mitad aproximadamente). Aunque no lo enuncia, presumimos que la encuesta pudo ser realizada en la ciudad de Buenos Aires. Revista *El Porteño*, n° 37, enero de 1985.

un problema pura y exclusivamente personal, mientras no perjudique a terceros [...] aunque creo que no está demás resaltar que lo normal es la relación sexual entre el hombre y la mujer.

El dirigente de la Juventud Universitaria del MAS, Eduardo Jacobowicz (28 años), apuntaba que “un individuo tiene derecho a hacer de su vida sexual lo que le plazca en la medida en que no moleste a los demás”, mientras que Eduardo Lazara (21 años), integrante de la Mesa Ejecutiva de la Juventud del PSA argumentaba que el ser homosexual “es una condición humana más y no la consideramos un delito, siempre y cuando no esté hecha en el ánimo de la corrupción”. Solamente Rogelio Demarchi (23 años), miembro del Secretariado Nacional de la Juventud de Humanismo y Liberación del PDC, marcaba cierta distancia con sus pares cuando sostenía que “un pueblo maduro sexualmente está conformado con individuos que tienen su identidad sexual totalmente asumida, entonces nadie va a señalar con el dedo a un homosexual o prostituta”.²⁷²

Los dirigentes de las tendencias políticas entrevistadas reconocían la (necesidad de) integración del homosexual a la sociedad, pero “en la medida en que no molesten a los demás”. En esos términos, ¿de qué manera una persona sexo disidente podría ejercer libremente su sexualidad sin atentar a la “normalidad” de los otros? Esa suerte de garantismo de las libertades individuales dejaba al descubierto el peso de la matriz heteronormativa de la sociedad argentina en la década de 1980. Desde el campo de la izquierda, la cuestión de las disidencias sexuales y las reivindicaciones feministas producían cierto estado de cautela y prudencia a la hora de abordar las problemáticas. En ese sentido, las declaraciones de los dirigentes juveniles no desentonaban del talante general de la época, que evidenciaba los límites del *destape cultural*. En todo caso, los reclamos y demandas de esas comunidades podían ser procesados como “luchas parciales” o “secundarias”, siempre subordinadas a otras contradicciones fundamentales.

Pensar la *politización de lo cotidiano* como una subordinación de las relaciones personales y afectivas a la política general conlleva

272 Suplemento *Cerdos&Peces*, revista *El Porteño*, n° 39, enero de 1985.

reproducir una significación restringida y tradicional de la política, o reproducir la *pólice*, en términos de Jacques Rancière (1996). En efecto, es un modo, también, de pensar lo democrático en la democracia. Colocar lo doméstico al margen de la intervención política entraña un sostenimiento de determinadas matrices de poder, en este caso, sexual. Sin embargo, muchos/as militantes de base con o sin adscripciones partidarias se relacionaron y participaron de iniciativas feministas y sexo-disidentes, mientras que las dirigencias partidarias de la izquierda –mayoritariamente masculinas– exhibieron una actitud esquivada frente a las demandas y problemáticas. Esas diferencias se volvieron cruciales o al menos coadyuvaban a que muchas mujeres, principalmente, se distanciaran de las organizaciones a las que adscribían, sobre todo en el tramo final de la década, cuando comenzó a extenderse y diversificarse la militancia feminista.

En ese marco, resulta interesante explorar los intentos de transformar políticamente la propia subjetividad militante, aun aquellas iniciativas que podríamos referir como tentativas o intuitivas. Atender a las palabras narradas de los protagonistas permite repensar las dimensiones políticas, sus alcances y fortalezas como sus limitaciones, a la luz de los problemas de nuestro tiempo. Alejandra Oberti refiere que el testimonio “es la narración desfasada temporalmente” de la vivencia que se rememora, en la medida en que se inscribe en un régimen distinto al de la percepción, “se inscribe en el régimen de la memoria” y en el de la palabra. De ese modo,

... la autoridad del testimonio –como señala Giorgio Agamben– no consiste en que garantiza la verdad factual del enunciado, sino la imposibilidad de que este sea *archivado*. Su permanente posibilidad de reformulación –su vitalidad– es lo que hace del testimonio, y con él de los testigos, una fuente irrenunciable de relatos en el proceso de comprender los sucesos del pasado (las cursivas son del original) (Oberti, 2009: 6).

Tanto en las fuentes documentales como en los relatos de las militantes entrevistadas no se desprende la cuestión de género como una preocupación de época, “no era un tema urgente, no era un tema de la coyuntura” apunta Diana Moro. Sin embargo, la dimen-

sión re-elaborativa que supone el relato testimonial destaca cuestiones que nos alumbran sobre aspectos no visibilizados de la experiencia política. Los relatos de las mujeres entrevistadas destacan cierta dimensión machista en las prácticas cotidianas de la época:

A nosotras nos llamaban en el PI “las Amazonas”. Éramos un grupo de mujeres que teníamos bastantes responsabilidades políticas dentro del PI [...] y a nosotras nos daba un poco de risa eso, porque era una mirada machista [se refiere al *lugar y hacer* en el PI]. Era reivindicado, pero al mismo tiempo “lo raro” (entrevista a Diana Moro).

Esa impronta machista de las prácticas cotidianas parece ser extensible al grueso de la militancia estudiantil de la UNLPam, aun cuando en todas las agrupaciones estudiantiles del período se destacó una presencia relativamente estable de mujeres, que fueron cabezas de listas electorales e integraron espacios de representación estudiantil. Silvia Siderac, militante de la FM-CNL, expresa que “había aspectos de la organización que solo correspondían a los hombres, hoy en día no los toleraría”. En ese sentido, la escena de interlocución que el activismo feminista –masivo e intergeneracional– fue construyendo a lo largo de los años permitió erigir los marcos de posibilidad para que emergiera *otra* palabra política: *no los toleraría* revela el vínculo entre pasado y presente, entre la reivindicación de una militancia que legó una marca perdurable en las subjetividades, y sus zonas grises, circunscritas al tono general de la época. En sintonía, Diana Moro apunta:

En el PI nosotros lo percibíamos con claridad, tal es así que todo lo que tuviera que ver con las cuestiones domésticas, las que se hacían cargo de los hijos eran las mujeres, los compañeros se “liberaban” de toda responsabilidad, se iban a cumplir tareas políticas al comité nacional, eso era así, era una pauta muy marcada (entrevista a Diana Moro).

Resulta factible asegurar que, pese a la impronta democratizadora que abrió la coyuntura de 1982-1983, la mirada de género se mantuvo dentro de los cánones establecidos de la subjetividad

viril/masculina y de la heteronormatividad binaria hombre/mujer, abarcando al conjunto de la izquierda, tanto en lo que atañe a las identidades y prácticas sexo-disidentes como a las relaciones de género. Efectivamente, las conductas sociales acerca de la moral sexual resultaron pacatas y más bien se mantuvieron dentro de los márgenes establecidos, a pesar de *Virus*, los peinados batidos, las ropas coloridas y un lenguaje modernista que insinuaba cierto desparpajo respecto de las representaciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. La militancia juvenil y estudiantil reprodujo la matriz heteronormativa en las relaciones de género, solidificada socialmente con la ofensiva conservadora impuesta desde 1974, pero también a partir del legado construido por las tradiciones y saberes del propio campo de la izquierda, a tono con la medianía general de una sociedad que, pese a la insinuación del *destape cultural*, le costó trascender esas fronteras.

Capítulo VII. Pensar los años ochenta en la Argentina. Variaciones de la democracia

Como ha mostrado Cecilia Lesgart (2003), el proceso de articulación de las ideas sobre la democracia fue previo a su restablecimiento institucional, asociado a un conjunto de reflexiones y replanteos teóricos que permitieron revisar la experiencia de las décadas previas en la Argentina. En ese sentido, el exilio político de numerosos intelectuales argentinos (y de distintos países latinoamericanos donde también existían dictaduras militares) operó como una suerte de soporte para una revisión profunda tanto del pasado inmediato como de las posibilidades de futuro en la Argentina y en el Cono Sur.²⁷³ Entre 1978 y 1983 se realizaron numerosos congresos, seminarios o emprendimientos editoriales en distintos puntos del continente que pusieron el foco de análisis en la revisión de los regímenes autoritarios del Cono Sur y en las posibilidades de operar “transiciones a la democracia”.²⁷⁴ De esa forma, el ejercicio intelectual modeló,

273 Entre 1979 y 1981, un grupo de intelectuales exiliados en México, de diversas tradiciones políticas, dieron forma a la revista *Controversia para el examen de la realidad argentina* (*Controversia*). Entre ellos destacan Jorge Tula, Carlos Abalo, José Aricó, Sergio Bufano, Sergio Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo Nudelman, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmucler y Oscar Terán. En su corta pero intensa experiencia, la revista publicó 14 números (aunque no existen archivos sobre el número 13) en los que logró condensar un clima intelectual marcado por la revisión crítica de las concepciones teórico-políticas que se habían elaborado en la Argentina durante la década de 1960 y 1970. Esa revisión dio paso a un conjunto de reflexiones en torno a la crisis del marxismo, el exilio y las posibilidades de un tránsito hacia una forma de democracia social, entre otros temas.

274 Para un recorrido de las iniciativas intelectuales, espacios, seminarios, foros, grupos de discusión, entre otros, ver Lesgart (2003), en especial el Capítulo II.

mirado en retrospectiva, una suerte de programa de (auto)reflexión sobre las modalidades de hacer y de concebir a la política durante los años setentas —las ideas y las posibilidades de la revolución como horizonte político, la estrategia del cambio violento, entre otros tópicos— tanto como las posibilidades a futuro. De ese modo, se fueron elaborando un conjunto de ideas sobre la democracia y las transiciones políticas que permitió valorizar sus dimensiones procedimentales e institucionales, a la vez que el cambio político se visualizó como paulatino y gradual.²⁷⁵

Como sugiere Lesgart, los espacios de intercambio, los lazos vinculares y clima de discusión general fueron forjando “una idea límite que permite pensar en contra de lo no querido como proyecto de sociedad: el autoritarismo”. Como coordenada de inteligibilidad, la democracia podía funcionar como un lente para revisar las prácticas políticas del período, al tiempo que construía nuevos sentidos sobre las mismas, desde “la política entendida como un medio para el logro de un fin predeterminado hasta la política democrática forjada como un fin en sí mismo, desde la política concebida como guerra hasta la política admitida como acuerdo, pacto, gradualismo, cooperación”. En ese marco, la democracia se constituyó en “una categoría creadora de expectativas” que podía condensar, frente a los temores provenientes del pasado, “una diversidad de deseos y posibilidades” (2003: 67-68). En efecto, en el tránsito de la “revolución” a la “democracia”, se gestó un (nuevo) léxico que, años más tarde, resultaría vital para el cambio de paradigma en diversos planos, como el ámbito académico de las ciencias sociales, los círculos de intelectuales comprometidos con el apuntalamiento democrático, o en los vínculos con algunos espacios y dirigentes políticos partidarios.

Sin embargo, lejos de erigirse como una salida a los interrogantes abiertos, la democracia —como significante político— fue fraguando un nuevo campo de problemas a resolver, en la medida en

275 Deberíamos considerar que el desplazamiento paulatino de las tradicionales posiciones de izquierda ligadas al imaginario de la revolución excedió el marco latinoamericano, al tener uno de sus principales focos en Europa, donde se verificaba un abandono de las posiciones revolucionarias hacia orientaciones de corte representativo liberal.

que a su alrededor participaban y se resignificaban disputas teóricas entre distintas tradiciones de pensamiento. En los años siguientes, numerosos intelectuales formaron parte de los debates en torno a los significados y orientaciones de la democracia, a través de experiencias de diversa índole, como el caso de las revistas *Unidos*, *La Ciudad Futuro* y *Punto de Vista*.²⁷⁶ Además, no pocos de ellos se vincularon y/o colaboraron con Raúl Alfonsín, con distintas modulaciones, antes y después de la elección de 1983.

Precisamente, el dirigente radical había publicado en 1980 un escrito que resultaría modular como guía de acción a partir de la presidencia asumida en 1983. *La cuestión argentina* (1980) esbozaba los principios ideológicos básicos sobre los que se fue estructurando el discurso alfonsinista, como las ideas de liberalismo político, el rol activo del Estado en la economía, la centralidad de los partidos –pero no los únicos– como representantes de la diversidad de intereses y la pluralidad de las opiniones, la teoría de los tres niveles de responsabilidad, entre otros aspectos. De conjunto, es posible advertir allí el intento de conjugar aristas de la *democracia política* –entendida como un sistema de reglas y normas basales del Estado de derecho y consagradas en la constitución nacional– y la *democracia social* –relacionada a la participación y movilización popular– que funcionaron como sostén del proyecto democrático alfonsinista.

Según Aboy Carles, el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 se gestó a partir de una “doble ruptura”. Por un lado, mediante el establecimiento de una frontera respecto del pasado inmediato, violento, autoritario y encarnado en la figura de la dictadura militar. Por otra parte, postulando la necesidad de un nuevo tiempo que exigía una

276 Desde inicios de la democracia, revistas como *Unidos*, *La Ciudad Futura*, *Punto de Vista* y un conjunto de iniciativas menores, resultaron relevantes como laboratorios de ideas, discursos, redes vinculares y un lenguaje común en la construcción de la nueva escena democrática. Un punto de confluencia de esa izquierda intelectual fue el Club de Cultura Socialista, a mediados de 1984. No participaron del Club aquellos identificados con el peronismo, como veremos más adelante, en parte debido a la frustrada experiencia de *Controversia* en la búsqueda de una síntesis entre marxismo y peronismo. En términos de investigaciones académicas, el análisis de las revistas resulta un aporte valioso para explorar las transformaciones de la cultura política argentina de los años ochenta. Para una reconstrucción de los debates políticos sobre la democracia durante la década de 1980, ver Reano (2010). Para el caso de la revista *Unidos*, ver Garategaray (2018).

ruptura en los modos establecidos de concebir la política, asociada a los faccionalismos, los enfrentamientos partidarios y las interrupciones recurrentes del poder institucional (2004: 38-39). Uno de los mojones notables en ese proceso fue la denuncia de un supuesto pacto sindical-militar, en abril de 1983, en el marco de la campaña presidencial. La denuncia vinculaba a los sectores sindicales peronistas con los altos mandos militares, acusándolos de tramar un pacto corporativo para sostener una futura gobernabilidad, sin que se avance en aspectos sensibles que ya formaban parte de la agenda pública en ese momento. Nos referimos a la cuestión de los desaparecidos, a la violación a los derechos humanos durante el Gobierno de facto y al sostenimiento legal del acuerdo (aun en borrador) por la autoamnistía, promulgada algunos meses después por el General Bignone. Específicamente, la denuncia apuntaba a dirigentes como Lorenzo Miguel, líder de “las 62 organizaciones”, y los generales Cristino Nicolaides, Jorge Suárez Nelson y Juan Carlos Trimarco. Aunque el supuesto acuerdo nunca fue demostrado, su impacto en la prensa fue decisivo y asumido como cierto por gran parte de la ciudadanía. De ese modo, el dirigente radical ubicó al peronismo junto con la dictadura militar, como responsables de un pasado violento, autoritario e inadmisibles para el futuro democrático, y cuyos efectos en la opinión pública resultaron determinantes en la construcción de su caudal electoral.

Por otra parte, la campaña presidencial de Alfonsín se fue edificando sobre un reverso de la figuración peronista, sintetizado en aquel eslogan que anunciaba “somos la vida”, una consigna surgida desde las entrañas de la Junta Coordinadora Nacional. Según refiere Mónica Beltrán, la frase se le ocurrió a un militante de la Juventud Radical, cuando un día la ciudad de Buenos Aires apareció con pintadas que decían “Somos la rabia de Juan Perón” (2013: 195). A partir de allí, por oposición, “somos la vida, somos la paz” se integró a la estrategia de comunicación del equipo de Alfonsín.²⁷⁷

277 La campaña presidencial de la UCR en 1983 incorporó, por primera vez en la historia argentina, la utilización de técnicas de propagandas y difusión diseñadas por equipos de publicistas.

En efecto, el candidato radical construyó un discurso rupturista y proyectivo que asociaba la democracia con las posibilidades de bienestar y prosperidad, condiciones indispensables e imprescindibles para forjar una nueva cultura social y democrática. Su idea de democracia impostaba la legitimidad última de la voluntad de las mayorías en el ejercicio del poder, el respeto por las diferencias, los procedimientos institucionales y el imperio de la ley. Los fundamentos de la democracia se condensaban en el preámbulo de la Constitución Nacional, repetido hasta el cansancio durante la campaña electoral. De ese modo, Alfonsín pudo situarse como el reverso de lo autoritario, en buena medida coadyuvado por su capacidad de oratoria, su calma para transmitir conceptos y su aspecto de hombre común. La actitud propositiva de Alfonsín se diferenciaba del discurso asumido por los candidatos peronistas Ítalo Luder y Deolindo Bittel, que apelaron a la tradicional liturgia, símbolos y rituales partidarios, asumiendo *per se* el carácter mayoritariamente peronista de la Argentina. En este punto, vale agregar otros elementos que intervinieron en la construcción discursiva del alfonsinismo. En septiembre de 1981 había fallecido Ricardo Balbín, hasta entonces el mayor referente del radicalismo y de aceptados vínculos con sus pares peronistas. El lugar del viejo dirigente de la *Línea Nacional* fue acaparado por Alfonsín, como parte de la renovación dirigencial del partido. Aún más, durante la campaña presidencial, esa situación fue aprovechada para diluir la imagen de cercanía de la UCR al PJ y a las cúpulas militares que había prevalecido en la década anterior, en la medida en que las intenciones renovadoras alcanzaban a los propios fundamentos y tradiciones del partido. Para Alfonsín, las dirigencias de la UCR y el PJ –depositarios de la voluntad de las mayorías– habían fracasado en la empresa de conducir al país por una senda de desarrollo, crecimiento y bienestar, enfrascados en el fragor de la lucha y la violencia política espiralada en las últimas décadas, y cuya manifestación expresa era el tiempo decadente que les tocaba vivir por entonces. En efecto, la crítica a los responsables dirigentes del peronismo y, en menor medida, de la propia UCR, no negaba a esos partidos sus capacidades como movimientos de masas. Por el contrario, de lo que se trataba era de recuperar los

fundamentos originarios que habían sido extraviados, de ahí que Alfonsín apareciese hablándole al conjunto de la sociedad argentina con citas y referencias al propio Perón y Evita, a Lisandro de la Torre, a Juan B. Justo, entre otros.

En ese sentido, diversos autores coinciden en señalar que el principal éxito político de la UCR sobre el PJ radicó en instalar y adjudicarse para su propio beneficio el clivaje *democracia* versus *autoritarismo* (Pucciarelli, 2006; Gargarella *et al.*, 2010). Según Ariana Reano, el alfonsinismo emergió como “el reverso del régimen autoritario y como símbolo de la recuperación de la democracia”, al mismo tiempo que abrió el camino para “la construcción de una concepción democrática plagada de elementos ambiguos que recuperaban viejos sentidos y nuevas interpretaciones de las tradiciones políticas” (2010: 63-64). Esa dimensión integradora y componedora de la política se rebeló, en los comicios de 1983, como de central relevancia en el acto eleccionario por parte de las mayorías populares.

En otro plano, la victoria alfonsinista de 1983 profundizó la crisis del partido justicialista, que exponía al menos tres elementos visibles: un estado de marcada dispersión ante la ausencia de su líder natural, fallecido casi diez años antes; la asociación directa del peronismo como fuerza política a la violencia social de la década previa, en la que el Gobierno de Isabel Martínez de Perón habría funcionado como una suerte de prolegómeno de la dictadura militar; y, por último, la derrota en la representación de las mayorías populares en elecciones libres y democráticas, un hecho inédito en la historia del movimiento que lo conminó al lugar de oposición política al alfonsinismo. En ese marco, sus principales dirigentes, vinculados a líderes territoriales y a la vieja guardia sindical que habían comandado los procesos de depuración y reorganización partidaria desde 1974, fueron acusados de “mariscales de la derrota”, por parte de referentes de numerosas fracciones que, consumada la derrota, salieron a reclamar instancias de “democratización interna”.

En ese contexto, a mediados de 1983, se dio el nacimiento de un proyecto cultural que ejerció un lugar preponderante en los esfuerzos por repensar la crisis interna del peronismo. Nos referimos a

la revista *Unidos*, una iniciativa política intelectual que buscó reponer algunos de los debates de esa crisis, pero también como parte de la nueva escena democrática que se abría paso en el país.

La revista *Unidos* –referencia explícita a la frase de Juan Domingo Perón “El 2000 nos encontrará unidos o dominados”– congregó a un conjunto de personalidades que, reunidas en torno a la figura de Carlos “Chacho” Álvarez, dio cuerpo a una tirada regular de más de una veintena de números repartidos entre 1983 y 1991.²⁷⁸ Según Martina Garategaray, el momento de mayor auge de la revista se dio a mitad de la década, entre 1985 y 1988, cuando coincidió con el ascenso y expansión de la corriente “Renovación Peronista” (RP). Por entonces, la publicación “pasó de ser cuatrimestral a bimestral y mucho más abultada en cantidad de páginas”. En aquel entonces, las tiradas “llegaron a los 3000 ejemplares con un porcentaje muy bajo de devoluciones”, considerando que una parte importante de las ventas se daba por circuitos y canales militantes, que “las compraban y luego repartían o revendían” (2010: 2). En ese sentido, la revista circulaba en las unidades básicas, entre los contactos de la militancia del peronismo renovador y de izquierda, en los grupos de activistas de las juventudes, en los núcleos universitarios y en los círculos de intelectuales, no necesariamente peronistas.

El primer número, de mayo de 1983, expresaba una declaración de principios que manifestaba que, ante todo, la publicación

... es el resultado del encuentro de un conjunto de militantes peronistas que, desde diferentes opciones coyunturales, acordamos contribuir al proceso de institucionalizar la lucha por las ideas [...] la revista no es la expresión de una línea, sector

278 Como hilo común, todos los integrantes del *staff* reconocían militancias en diversos proyectos de la década de 1970, algunos de los cuales habían debido partir al exilio a partir de 1976. Entre quienes integraron el Consejo Asesor de la revista, en distintos momentos, podemos mencionar a Arturo Armada, Pablo Bergel, Hugo Chumbita, Cecilia Delpéch, Salvador Ferla, Horacio González, Norberto Ivancich, Oscar Landi, Roberto Marafioti, Mona Moncalvillo, Diana Dukelsky, Enrique Martínez, Claudio Lozano, Ernesto López, Vicente Palermo, Víctor Pesce, Felipe Solá y Mario Wainfeld. Colaboraban asiduamente José Pablo Feinmann, Álvaro Abós, Nicolás Casullo, Artemio López, Julio Godio, Daniel García Delgado y Alcira Argumedo.

o agrupamiento sino vehículo de la diversidad de matices que conforman un mismo sistema de pensamiento.²⁷⁹

La propia definición como “militantes” en la búsqueda de institucionalizar “la lucha por las ideas” remite a una forma específica de comprender el compromiso político e intelectual al interior del peronismo, sin desconocer las heterogeneidades propias de integrantes que habían compartido diversos espacios (previos) de sociabilidad y militancias. Lo diverso en la unidad, como un “mismo sistema de pensamiento”, buscaba reponer ciertos debates de la cultura de izquierda y democrática en una clave nacional y popular, mientras también discutía ciertas “verdades peronistas” desde los nuevos valores democráticos.²⁸⁰ *Grosso modo*, los años iniciales de la revista avanzaron en una reflexión y autocrítica de la experiencia política del pasado reciente, diferenciándose de la experiencia de Montoneros y a distancia de la opción por la lucha armada.²⁸¹ Por otra parte, las condiciones emergentes de la derrota electoral –la ausencia de un líder natural y la falta de instancias de deliberación interna– vectorizó la demanda de una actualización dirigencial y doctrinaria que se *aggiornara* a la nueva escena democrática. En ambos casos, resultaba un objetivo primordial la necesidad de recuperar al peronismo de su ostracismo político, anquilosado en la burocratización de su estructura partidaria.

En ese marco, puede decirse que la iniciativa de la revista siempre estuvo enraizada con la emergencia de la Renovación Peronista, constituida como corriente interna entre 1985 y 1987, cuando la victoria en las elecciones legislativas y de gobernadores de ese año les permitió lograr la hegemonía dentro del Partido Justicialista. Para los integrantes de *Unidos*, la RP constituía una apuesta política en la

279 Editorial, “Quiénes somos”: 3, *Unidos*, año 1, n° 1, mayo de 1983. Citado en Garategaray (2015: 5).

280 En ese sentido, la revista mantuvo discusiones e intercambios abiertos con un abanico de publicaciones del propio espacio peronista (revistas como *Crear*, *Línea*, *El despertador*, *Cuadernos de la Comuna*, *JotaPe*) y de otros espacios de izquierda o socialdemócratas (*Plural*, *La Ciudad Futura*, *Punto de Vista*, *Crisis*).

281 Existen numerosos trabajos académicos sobre la revista *Unidos*, que exceden las posibilidades de referencia aquí. No obstante, pueden verse los trabajos de Martina Garategaray (2015 y 2018).

empresa de oxigenación interna del peronismo, pero también como interlocutores válidos en los debates sobre cómo avanzar y orientar la democracia en curso.

Los inicios del movimiento renovador tienen un punto de partida en los momentos posteriores a la derrota electoral de 1983, a partir de la crítica a “los mariscales de la derrota”, asociados al ala ortodoxa del peronismo. Precisamente, en abril de 1984, el dirigente bonaerense Antonio Cafiero –quien había fundado tiempo antes el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO)– hizo público el malestar extendido y reclamó la renovación de las cúpulas partidarias. Meses más tarde, en diciembre de 1984, un conjunto de dirigentes políticos y sindicales, que tenían en común su enfrentamiento a los jefes de las “62 Organizaciones” y a los llamados “Mariscales de la derrota”, confluyeron en la conformación del Frente de Renovación Peronista.²⁸² Entre diciembre de 1984 y julio de 1985 se sucedieron tres congresos partidarios del PJ que expusieron el duro enfrentamiento interno entre renovadores y ortodoxos y la imposibilidad de sostener acuerdos mínimos.²⁸³ Un mes después, en agosto de 1985, un grupo de intelectuales peronistas se

282 El frente estaba integrado por el MUSO, Convocatoria Peronista y el Frente de la Unidad Peronista, liderados por Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Eduardo Vaca, respectivamente. A ellos se unió la llamada Liga de Gobernadores, liderada por Carlos Juárez, Vicente Saadi y Carlos Menem, gobernadores de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, respectivamente. También se sumaron dirigentes como Raúl Bercovich Rodríguez, candidato a gobernador de Córdoba; José Manuel de la Sota, referente de la Renovación de Córdoba; Eduardo Duhalde, intendente del popular partido de Lomas de Zamora, la Comisión de los 25 y los ex CGT Azopardo, en la que confluían diversos líderes sindicales en disidencia con la conducción de Iglesias y Miguel, solo por mencionar a los más destacados. Si bien este conglomerado mostraba gran heterogeneidad en la procedencia, trayectoria e ideología, todos coincidían en la necesidad de desplazar a la conducción e institucionalizar mecanismos democráticos para la promoción de nuevos liderazgos y candidaturas (Ponza, 2015).

283 El primer congreso fue en Teatro Odeón (Buenos Aires), donde los renovadores reclamaron voto directo para la elección de autoridades y candidatos en general, la renuncia del Consejo Nacional del PJ, y el llamado a una convocatoria a elecciones para la designación de autoridades internas. Todos pedidos rechazados. La siguiente reunión partidaria fue en la ciudad de Río Hondo (Santiago del Estero), el 2 de febrero de 1985. Allí los renovadores conformaron una dirección partidaria paralela a la nombrada en el congreso anterior y se determinó el voto directo para los afiliados. La correlación de fuerzas logradas llevó a un tercer congreso, realizado en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) en julio de 1985. En medio de irregularidades, la reunión fracasó y limitó las posibilidades de entendimiento.

desvinculó del PJ, aduciendo que el único modo de pensar un nuevo peronismo, acorde a los tiempos, era renunciar a las estructuras orgánicas del partido, pero “ratificando nuestra identidad peronista” (citado de Garategaray, 2015: 8).²⁸⁴

A partir de allí, los renovadores liderados por Antonio Cafero conformaron el Frente de Renovación para la Justicia, la Democracia y la Participación (FREJUDEPA) por fuera del PJ –en alianza con el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Conservador Popular y otras fuerzas minoritarias– y se presentaron a las elecciones parlamentarias de 1985 (Ferrari, 2018). Aunque la coalición no triunfó sobre la UCR, su caudal de votos triplicó a la lista del PJ, encabezada por Herminio Iglesia. El apoyo electoral y las bancas parlamentarias logradas produjo, en la práctica, una redefinición de las relaciones de fuerzas al interior del PJ. Por otra parte, con el paulatino desplazamiento de los sectores ortodoxos, el FREJUDEPA abrió un abanico de alianzas posibles que ponía en el radar al Partido Intransigente, al Partido Socialista Popular y a diversos actores que podía ubicarse en la centroizquierda del mapa político.²⁸⁵

En otro plano, el vínculo recíproco entre *Unidos* y la RP permitió modular un conjunto de discusiones en torno a los límites y posibilidades de la democracia, sus orientaciones y el lugar de los intelectuales en la política, entre otros tópicos. A modo de ejemplo, en agosto de 1985, *Unidos* organizó una mesa redonda titulada “Democracia y Cambio Social”, en la que participaron intelectuales como Carlos Altamirano, José Aricó, Juan Carlos Portantiero (in-

284 El manifiesto titulado “Por qué nos vamos” fue firmado por 26 intelectuales peronistas, muchos de ellos participantes de la revista *Unidos*: Álvaro Abós, Ana María Amado, Alcira Argumedo, Dora Barrancos, Jorge Luis Bernetti, Cristina Bertolucci, Jorge Carpio, Nicolás Casullo, Susana Checa, Bibiana Del Bruto, José Pablo Feinmann, Liliana Furlong, Mempo Giardinelli, Horacio González, Pedro Krotsch, Roberto Marafioti, Eduardo Moon, Vicente Palermo, Víctor Pesce, Adriana Puiggrós, Jorge Ramos, Patricia Terrero, Carlos Trillo, Aída Quintar, Héctor Verde y Mario Wainfeld. Por otra parte, Carlos Álvarez participó activamente en la redacción, pero finalmente, no firmó el documento.

285 En diciembre de 1985, se firmó el “Documento Fundacional de la Renovación Peronista”, firmado por tres mayores representantes –Carlos Grosso, Carlos Menem y Antonio Cafero– y redactado por Carlos “Chacho” Álvarez. La constitución nacional de la RP resultó determinante para que el PJ triunfara en las elecciones de gobernador de 1987 en 16 provincias del país, cinco a expensas de la UCR.

tegrantes de *Punto de Vista*) y Alcira Argumedo, Nicolás Casullo, Julio Bárbaro, Carlos “Chacho” Álvarez y Vicente Palermo (peronistas). En diciembre de ese mismo año, otra mesa integrada Ariel Bignami (columnista director de *Cuadernos de Cultura*), Sergio Bufano (narrador y periodista miembro del *Club de Cultura Socialista*), Luis Gregorich (radical, crítico literario y presidente de EUDEBA), Aníbal Ford (peronista, narrador y ensayista) y Nicolás Casullo y Horacio González (*Unidos*) discutieron acerca de “El intelectual y la política en el pasaje de la década del 60 a la del 80” (Garategaray, 2015: 8).

Como sugiere el ejemplo, desde los inicios de la recuperación democrática venía gestándose un flujo de vínculos, relaciones e intercambios que, de conjunto, permite inferir los esfuerzos intelectuales por abordar problemas de la democracia en curso, sus reglas de convivencia, las posibilidades y marcos del disenso, las formas de participación ciudadana.

Sin embargo, muchos de los discursos políticos y académicos de la transición tomaron como modelos de referencia un puñado de “democracias liberales” o “liberalismos democráticos”, principalmente de la región noroeste europea, “más liberales que democráticos” (Nun, 2001). De acuerdo con Rinesi y Vommaro,

... la tradición *liberal* enfatiza la centralidad del valor de la *representación política*, y –de ahí– del establecimiento de lazos verticales entre los ciudadanos y las instituciones del estado (los ciudadanos son representados por el estado, el cual, en contrapartida, les garantiza un mínimo de derechos), la tradición *democrática* destaca la importancia del valor de la *participación popular, deliberativa y activa* en los asuntos públicos, y en consecuencia, auspicia el establecimientos de lazos horizontales entre los ciudadanos (las cursivas son del original) (2007: 421).

En este punto, resultan significativas un conjunto de derivas que se expresaron, en buena manera, a partir de 1985. En ese itinerario, resulta importante destacar la propuesta que Raúl Alfonsín expuso en su “Convocatoria para una convergencia democrática” ante los delegados del Comité Nacional de la UCR, reunidos en

plenario el 1° de diciembre de ese año. La iniciativa, más conocida como el “discurso de Parque Norte”, buscaba cimentar un conjunto de puntos considerados necesarios para anclar la consolidación del horizonte democrático. En el inicio de la elocución, el presidente afirmaba que la “Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de decadencia y de frustraciones. Como sociedad, se encuentra en una de las más serias encrucijadas de su historia en las vísperas del siglo XXI”. En ese sentido, la democracia no debía ser restaurada, sino construida. En el centro de la argumentación, Alfonsín exponía:

Cuando hablamos de construcción de la democracia no nos estamos refiriendo a una simple abstracción; nos estamos refiriendo a la fundación de un sistema político que será estable en la medida en que se traduzca en la adopción de rutinas democráticas asumidas y practicadas por el conjunto de la ciudadanía. Las normas constitutivas de la democracia presuponen y promueven el pluralismo y, por lo tanto, la pacífica controversia de propuestas y proyectos acerca del país que anhelamos.²⁸⁶

Para Emilio de Ípola, unos de los intelectuales que participó en la redacción del discurso, se trataba de hacer avanzar la democracia hacia su consolidación, mediante un sistema de pactos que reconociera un mínimo consenso sobre las reglas del juego democrático—el pacto de garantías—, de modo que se posibilite el disenso dentro del marco institucional.²⁸⁷ Esa suerte de establecimiento de reglas claras debía funcionar como soporte de otro pacto, el de transformación, que establezca los marcos y acuerdos básicos para avanzar en la reso-

286 Discurso de Raúl Alfonsín en el Plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Buenos Aires, Parque Norte 1° de diciembre de 1985. Recuperado de www.alfonsin.org. Consultado el 25/5/2022.

287 Desde el inicio de su gestión, Alfonsín mantuvo contactos más o menos estrechos con círculos de intelectuales, pero a partir de 1985 se fue consolidando el denominado “grupo Esmeralda”, integrado por Meyer Goodbar, Eduardo Issaharoff, Margarita Graziano, Daniel Lutsky, Gabriel Kessler y Claudia Hilb. A su vez, el grupo se relacionó con otros colaboradores para actividades específicas, como a Pablo Giussani, Sergio Bufano, Hugo Rapoport, Marcelo Cosin, Damían Tabarosky, entre otros. Sin embargo, las figuras más relevantes en esos intercambios eran Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola. En el caso del discurso de Parque Norte, colaboraron Juan Carlos Torre y Carlos Nino.

lución de los problemas del desarrollo económico-social (De Ípola, 2004). De ese modo, la argumentación discursiva proponía una suerte de trípode conceptual sintetizado en la fórmula de una sociedad moderna, participativa y éticamente solidaria. La modernización de la sociedad era proyectada de manera integral, que buscaba trascender una mirada anclada en sus facetas económicas, es decir, de mejora en los términos de racionalidad y competitividad. Esa dimensión integral buscaba apuntalar el desarrollo técnico, científico y tecnológico, con el objetivo de construir cimientos para un crecimiento equitativo. Precisamente, el concepto de equidad relacionaba la ética de la solidaridad con una democracia participativa, mediante reglas claras de convivencia e instancias de participación directa por parte de la ciudadanía.

En una mirada general, la convocatoria a la convergencia democrática promovía una ruptura con los recurrentes problemas de la inestabilidad argentina, al cuestionar la voluntad hegemónica de los grupos facciosos, origen del autoritarismo, la violencia y la intolerancia, propias de la cultura política argentina. En la revisión de ese pasado, el alfonsinismo articulaba la propuesta del *Tercer Movimiento Histórico*, como continuador del legado social del yrigoyenismo y del peronismo.

A pesar de los esfuerzos argumentales de Raúl Alfonsín por dotar de contenido los debates sobre el futuro democrático, la recepción no fue la esperada al interior del partido centenario, que se mantuvo relativamente expectante a la espera de otras voces del espectro político.

En el caso de la RP, la convocatoria para la convergencia democrática no fue bien recibida, en la medida en que fue leída como un ataque a la tradición peronista. Si en las elecciones de 1983, el alfonsinismo había logrado construir a su favor el clivaje *dictadura vs democracia*, tanto la RP como *Unidos* realizaron un importante esfuerzo para desmarcar al peronismo de ese mote, diferenciándose de los ortodoxos y recuperando dimensiones pluralistas de convivencia democrática. En ese itinerario, retomaron un conjunto de debates centrados en la dicotomía *democracia formal/democracia sustantiva*, que buscaba reivindicar la importancia de las instituciones sin renunciar al fortalecimiento de una democracia participativa.

Para *Unidos* y los renovadores, especialmente su ala caferista, se trataba de apuntalar formas democráticas de participación popular que diesen volumen y contenido al carácter social de la democracia. En ese sentido, su revalorización –denostada en otros momentos históricos por formal, vacía, burguesa y liberal– era el principal reconocimiento que se hacía al alfonsinismo como garante de un sistema de reglas que hacía posible la convivencia y la participación. Sin embargo, como se interroga Ariana Reano “¿No era este el mismo argumento que utilizaba Alfonsín [...] cuando apostaba por una democracia dinámica, plena de participación y movilización popular “pero” en el marco bien definido de nuestra Constitución?” (2010: 77). En ese sentido, *Unidos* y renovadores se hallaban inscriptos en la necesidad de un delicado equilibrio entre la necesidad de defensa y consolidación de la democracia –coincidencia que los acercaba al alfonsinismo– y su crítica al excesivo normativismo procedimental que ocluía las posibilidades de realización de la justicia social.

Para *Unidos*, la democracia debía asegurar, además de las libertades individuales, una política de derechos que implicase, a través de la esfera política, una transformación concreta de las condiciones sociales y materiales de vida de las mayorías populares. Por el lado de los renovadores caferistas, la crítica se expresaba en el cuestionamiento a la orientación económica del Gobierno nacional, en su vínculo con los poderes internacionales y los grupos económicos concentrados –extranjeros y nacionales–, con el consiguiente impacto en las posibilidades de sostener un capitalismo de orientación nacional. En ambos casos, se dejaba entrever el argumento de la tercera posición peronista como instancia mediadora para la realización de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En esos términos, al subrayar la importancia social de ciudadanía en el mejoramiento de las condiciones de vida, se enfatizaba la idea de que la única democracia posible era, justamente, una democracia con justicia social. Según Pablo Ponza, dicha perspectiva “relativizó las demandas políticas del liberalismo republicano y desafió de forma explícita la validez de un concepto de democracia limitado al goce de los derechos políticos formales” (2015: 206).

En efecto, el clima de ideas sobre la democracia se nutrió tanto de los aportes realizados por diversos espacios intelectuales y políticos, de las tradiciones plebeyas y populares inscriptas en la sociedad argentina desde sus orígenes como del específico derrotero que adquirió la contienda electoral en el terreno de la política representacional.

Sin embargo, también otros actores sociales tensionaron los significados y alcances de la democracia a partir de la propia conflictividad del período. En ese sentido, ya hemos referido al lugar gravitante del movimiento de DD. HH. durante la década de 1980, a partir de la centralidad que adquirieron en las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. En ese sentido, los activismos de DD. HH. se expandieron bajo distintas modalidades a lo largo y ancho del país: organizaciones de alcance nacional, con filiales, movimientos provinciales, comisiones municipales, pero también mediante la creación de comisiones legislativas y ejecutivas de investigaciones sobre los delitos cometidos, o espacios específicos dentro de sindicatos, partidos u organizaciones estudiantiles. Dentro del repertorio de acciones, los activismos de DD. HH. forjaron como característica una apropiación del espacio público como ámbito de ejercicio de poder soberano, cuyas consignas –“Memoria, Verdad, Justicia”, “Aparición con vida”, “Castigo a los culpables”– establecían coordenadas respecto de los caminos posibles para construir una democracia efectiva. En ese sentido, coincidimos con Elizabeth Jelin en que “el movimiento intervino creando nuevas oportunidades, para sí mismo y para otras demandas reprimidas por parte de la sociedad” (2015: 220).

No obstante, el peso gravitante del movimiento de DD. HH. en el espacio público tuvo su contraparte en una sostenida presencia de sectores pro militares y organizaciones afines que, durante todo nuestro período de estudio, buscaron reforzar cierto sentido de legitimidad sobre lo actuado en “la lucha contra la subversión”.²⁸⁸

288 Vale decir que, en los inicios de la recuperación democrática, términos como “guerra sucia”, “subversión” o “lucha antisubversiva” eran utilizados por un amplio espectro de actores sociales, desde los propios militares como también dirigentes partidarios y del propio Gobierno nacional, periodistas o funcionarios judiciales (Salvi, 2015: 170).

Por una parte, los discursos militares apoyados en la noción de “guerra antissubversiva” se diferenciaban de los argumentos alfonsistas de las “dos violencias”. En la lógica militar, en la guerra había habido dos bandos claramente diferenciados y no cabía una igualdad de términos, en la medida en que ellos –las FF. AA.– habían actuado en forma reactiva a una violencia externa y en la legalidad, amparados en los decretos presidenciales de febrero de 1975. Bajo esa óptica, la guerra se había realizado en defensa de la patria, de las instituciones, de la república y, finalmente, de la democracia, como símbolo de los valores occidentales. De ese modo, Luciano Benjamín Menéndez podía afirmar, que “si aquí ganaba la subversión, ni usted estaba hablando por radio, ni el doctor Alfonsín sería presidente, ni la democracia que hoy gozamos existiría”.²⁸⁹ En consecuencia, el discurso militar unía pasado y presente a partir de la catalogación de los activistas de DD. HH. –y también del conjunto de abogados, miembros de la CONADEP, del poder judicial o de aquellos/as que, de alguna forma u otra, adjudicara las responsabilidades criminales de las FF. AA.– como parte de la misma lógica subversiva que, en el nuevo escenario de posdictadura, podían ser señalados como “enemigos de la democracia” (Monasterolo, 2018b)

Por otra parte, junto con los sectores militares (pasivos y activos), se fueron desarrollando otras organizaciones afines que intervenían en la arena de la disputa pública sobre la consideración del pasado inmediato y sobre los alcances de la democracia en curso. Un ejemplo es la formación de “Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión” (FAMUS), cuya presencia comenzó a tener visibilidad en la segunda mitad de 1984, a partir de la participación en misas y oficios religiosos brindados por párrocos afines ideológicamente.²⁹⁰ Además de Buenos Aires, extendieron su presencia a ciudades de envergadura, como Córdoba, Rosario, Tucumán o Bahía Blanca. El grueso de sus actividades públicas se relacionó con

289 *Clarín*, 31/12/1983, citado en Salvi (2015: 159).

290 Gayol y Kessler sostienen que, según sus fundadores, la entidad “se comienza a gestar a partir de los encuentros de familiares en las misas de recordación de sus caídos durante 1983, se organiza en 1984 y se disuelve en 1991 luego de que se sancionaran las leyes de impunidad (2012:158).

la presencia y asistencia a eventos misas católicas, actos institucionales de las FF. AA. o conmemoraciones de fechas relevantes para los sectores castrenses. A modo de ejemplo, en una misa realizada en la iglesia Nuestra Capilla del Señor (ciudad de Buenos Aires), el sacerdote Julio Triviño se permitió pronunciar un sermón en el que aludía a la “democracia pornográfica y corrupta” y a la necesidad de “empuñar las armas espirituales –y materiales, los que tienen esa misión– para defender el Reino de Dios y no ser indignos de Él”.²⁹¹ Entre los 1500 asistentes se encontraban generales retirados y oficiales y cadetes activos del Colegio Militar, como el expresidente Roberto Marcelo Levingston, el exvicepresidente Isaac Rojas, el exministro del interior Llamil Reston, la esposa del expresidente Jorge Videla, Raquel Hartidge, el exrector de la Universidad de Buenos Aires Alberto Ottalagano, y el exgobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez.²⁹²

Como organización, FAMUS formaba parte de un entramado más amplio de sectores afines y pro militares ligados a las redes del catolicismo tradicional argentino, fuertemente anticomunista y antiperonista, y que tuvieron una destacada labor en la reivindicación y militancia en la defensa de la “lucha antisubversiva” antes, durante y después de la dictadura militar.²⁹³

A modo de ejemplo, un comunicado emitido en la ciudad de Córdoba el 2 de enero de 1985, la filial de FAMUS expresaba que “vivimos en paz porque otros lucharon y murieron para que la tuviéramos y gozáramos”, mientras le pedía a la ciudadanía argentina “cuidar la democracia para que esto *nunca más* vuelva a suceder”.²⁹⁴ A propósito de la expresión “nunca más”, que se volvió emblemática a partir de la publicación del informe de la CONADEP en 1984, algunos de los artículos correspondientes a los números iniciales de *Tributo* –órgano de difusión de la entidad– solían estar encabezados con esa denominación, artículos que, en general, describían los

291 *El Periodista de Buenos Aires*, 27 de octubre de 1984.

292 AHP. *La Arena*, 12/12/1984.

293 En las reuniones de la entidad solían preferirse insultos contra Raúl Alfonsín, al tiempo que se realizaban vivas a *Falange de Fe* o *Cristo Rey*, se reivindicaba al General Franco y a la España franquista.

294 *Córdoba*, 2/1/1985, el subrayado es nuestro.

“hechos terroristas” a los que las fuerzas se habían enfrentado.²⁹⁵ Además, solían publicar solicitudes en diarios de alcance nacional o regional, como el caso de *Clarín*, *La Nación*, *La Voz del Interior* (Córdoba), y en aquellos que los filiaba ideológicamente, como *La Nueva Provincia* (Bahía Blanca) o *La Prensa*, lo que da cuenta de cierta capacidad de recursos y de los objetivos de intervenir en la circulación de sentidos sobre el pasado y el propio presente.

En la trama argumentativa de las publicaciones y de los discursos enunciados por la organización es posible advertir la disputa y apropiación significativa de palabras como “democracia”, “memoria” o “*Nunca más*”, en un juego discursivo que, al ponerlos en circulación, buscaban neutralizar, minimizar o disputar otros discursos opuestos, por ejemplo, el de las organizaciones de DD. HH. Por otra parte, las estrategias de intervención pública podían complementarse con cierta apelación a la posibilidad siempre latente de “rebotes subversivos”, no solo como instancia justificatoria de su pasado sino como una herramienta para la construcción de escenarios más favorables en las investigaciones judiciales en curso.²⁹⁶

Visto en perspectiva, los años iniciales de la democracia se fueron configurando en el marco de una escena volátil, ambigua, y con la latencia permanente de nuevas asonadas militares como factor de desestabilización. Como sostienen Claudia Feld y Marina Franco, muchos actores del período se movían “en escenarios de prueba y error con respecto a sus posiciones, acciones, concepciones y decisiones”, en que los límites de “lo enunciable y lo escuchable eran más porosos, inciertos y heterogéneos” de lo que solemos recordar

295 Los inicios de la publicación datan de septiembre de 1985, con una salida más o menos regular hasta 1990, que podía variar entre mensual y bimestral. A través de sus páginas, la revista se focalizó en el rescate de la gesta patriótica de quienes “lucharon por la patria y cayeron en defensa de la libertad”. Su hilo argumentativo general se inscribió en los marcos de la DSN, cuya hipótesis postulaba la existencia de una conspiración subversiva mundial y, en el caso de la Argentina, una guerra “no convencional” iniciada por la subversión que se desarrolló entre 1969 y 1979, momento en que la guerrilla fue derrotada por las Fuerzas Armadas del país. Al respecto, ver Gayol y Kessler (2012).

296 No obstante, las amenazas castrenses lejos estuvieron de mantenerse como tales, si consideramos la negación y el rechazo ante las inspecciones de la CONADEP (en 1984), la constante insubordinación al poder civil luego del Juicio a las Juntas y los levantamientos militares de 1987, 1988, 1989 y 1990.

(2015: 306). En ese sentido, la democracia se constituyó en una suerte de significativo vacío cuya polisemia pudo ser disputada por los distintos actores.

Aunque las discusiones en los círculos intelectuales y usinas de producción de ideas continuaron por medio de la circulación de revistas, prensa, entre otros medios, la gestión cotidiana del Gobierno nacional comenzó a toparse con inconvenientes que marcaron a fuego el derrotero de los años siguientes. En términos de política económica, el recambio de Bernardo Grinspun por Juan Vital Sourrouille al frente del Ministerio de Economía (febrero de 1985) supuso el viraje hacia posiciones más ortodoxas, de corte monetaristas. Desde mediados de la década, los principales acreedores externos –bancos extranjeros, FMI, Banco Mundial– comenzaron a requerir, como requisito cuasi excluyente para el financiamiento o reestructuración de deudas, la implementación de políticas de ajuste macroeconómico y reformas estructurales. Entre las medidas se reclamaba la privatización de empresas públicas, la desregularización de mercados y la apertura comercial y financiera, con el propósito de avanzar en la disminución del gasto público y lograr equilibrio fiscal. En el plano político y social del país, Alfonsín comenzó lo que puede considerarse un viraje en las prioridades de la agenda gubernamental: lentamente la cuestión económica fue ganando primacía en las urgencias de la gestión.

Claudio Belini y Juan Carlos Korol identifican algunos factores que ayudan a explicar la pérdida de efectividad de la política económica. Uno de ellos se relaciona con la inflación, que hacia fin de 1986 se había disparado por arriba de las previsiones oficiales, probablemente por la presión alcista de los productos que escapaban a los controles gubernamentales, como los agrícolas. Por otra parte, tanto la Argentina como el resto de Latinoamérica no lograron renegociar condiciones favorables de financiamiento de las deudas externas, por lo que compatibilizar superávit comercial y de las cuentas públicas con crecimiento económico sostenido se volvió una aporía en el corto plazo y mediano plazo. Otro factor de envergadura fue la relación entre el compromiso para no emitir moneda y la posibilidad de realizar ajustes del presupuesto y gastos en general.

Así, el Gobierno nacional no lograba imponer una disciplina sobre las empresas del Estado o sobre las economías provinciales (2012: 246-248). En ese aspecto, lo que mediaba la relación era el juego político en el ámbito parlamentario, con los gobernadores y con un sindicalismo que se renovaba detrás de la figura de Ubaldini, en todos los casos con mucha presencia del peronismo.

Sin embargo, algunos autores han enfatizado el rol de un conjunto de actores económicos ligados a grandes empresas nacionales y/o en asociación con capitales extranjeros que, desde los años setenta, crecieron y se diversificaron a partir del vínculo estrecho con el Estado, en carácter de contratistas o proveedores.²⁹⁷ Estos agentes económicos –denominados “capitanes de la industria”– se constituyeron en interlocutores relevantes en el diseño e implementación de las políticas públicas, a partir de la relación simbiótica establecida con el Estado. El enorme peso político que fueron fraguando en la década previa les permitía especular con la política económica y ejercer un conjunto de presiones destinadas a asegurar sus beneficios, lo cual podía posicionarlos, según la coyuntura y/o objetivos, en alianza o en enfrentamiento con el Gobierno. De modo que, durante todo el período alfonsinista, se convirtieron en actores centrales de la puja redistributiva y de la orientación general de la economía.

Junto con la desconcertante situación económica, los términos de resolución del Juicio a las Juntas habían acrecentado el malestar al interior de los sectores militares y afines, que pronto intensificaron su ofensiva contra lo que consideraron un destrato hacia quienes habían dado la vida en “la lucha contra la subversión”. En la búsqueda

297 Los denominados “capitanes de la industria” se vieron muy beneficiados por el esquema de valoración financiera implementado por Martínez de Hoz a partir de 1976, como destinatarios de la enorme transferencia de recursos desde los sectores populares y medios que la política económica dictatorial supuso. A través de la articulación del complejo económico estatal-privado, entendido como el entramado de actividades económicas desplegadas por el Estado (vía reparticiones y de sus propias empresas), un número reducido pero concentrado de empresas se relacionó como proveedoras, clientas, contratistas o en asociación con empresas estatales para la producción de insumos del aparato. Esa fuerte filiación económica les permitió acceder a una *cuasi renta de privilegio* a partir de las políticas de transferencias de subsidios, el control cuasi monopólico de mercados, exenciones impositivas, además de estatizaciones de sus deudas en 1982 (Castellani, 2006).

de contener ese frente de conflictividad –bajo la amenaza siempre latente de nuevas asonadas militares–, el presidente Alfonsín buscó fortalecer el objetivo de justicia ejemplar apoyada en la teoría de los tres niveles de responsabilidad. En ese marco comenzaron a circular los borradores de la Ley de Punto Final, sancionada a fines de 1986. A partir de allí, como hemos referido, se fue reconfigurando el mapa de actores y posicionamientos en la disputa política y social. Con una economía que se agravó aún más, el partido gobernante fue perdiendo capacidad de acción, entre las internas propias y el crecimiento de la RP, que poco a poco fue ganando para sí el discurso de la defensa de la democracia y la necesidad de reorientarla hacia la justicia social. Los términos de resolución de las elecciones de 1987 tienen en esa conflictividad parte de su explicación, al mismo tiempo que el desenlace de la asonada militar carapintada puede sugerirse como un pacto tácito de gobernabilidad y apaciguamiento de las disputas entre el alfonsinismo y el grueso de las jerarquías militares, marcando un punto de quiebre específico en las disputas por la orientación de la democracia.

Pensar las militancias estudiantiles en la década de 1980

Los estudiantes que ingresaron a las universidades nacionales a partir de 1980 participaron, en mayor o menor medida, de la gestación y ampliación del clima de ideas sobre la democracia. En el caso de la UNLPam, romper el cerco del temor a la participación pública y a la apropiación de problemas para su resolución por parte de jóvenes veinteañeros casi sin experiencias organizativas ni tradiciones políticas relativamente estables fue uno de los mayores desafíos de los activistas políticos y de todas las agrupaciones que fueron definiéndose como progresistas, populares y de izquierda. Como hemos referido, esa orientación no fue una decantación natural de la militancia estudiantil, sino que se cimentó sobre una construcción política que percibió la necesidad y relevancia de apostar al trabajo común, por sobre las diferencias específicas de orientación política.

En la UNLPam, la militancia universitaria de la década de 1980 mostró una enorme capacidad de reconstrucción e intervención en los asuntos públicos, tanto de la institución universitaria como en la más amplia arena social, desplegando múltiples esfuerzos organizativos para recuperar ámbitos de participación política, apuntalar reclamos por la ampliación de derechos y proyectar futuros posibles. Ello implicó —necesariamente— el desenvolvimiento de una praxis que pretendió estar en sintonía con la fuerte tradición de lucha que precedía al movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo, careciendo de los vínculos generacionales que pudieran sostenerla.

En el tránsito de un imaginario de la revolución a la construcción de un horizonte democrático en los años ochenta, se fue gestando un lenguaje común con centro en la defensa del Estado de derecho, las garantías individuales y la demarcación de ciertas reglas claras de convivencia. Esa afectación significativa transmutó las palabras, algunas de ellas se volvieron innombrables en la década de 1980: revolución, lucha de clases, burgueses, socialismo. Solo podían nombrarse como sinécdoque de la violencia política de la década previa. No fueron prescriptas, pero la magnitud de la derrota llevó a su inutilización pública, funcionando como una limitación del discurso. Sin embargo, muchas de ellas mantuvieron un reservorio de sentidos contestatarios, arropados bajo nuevos registros, que permitió disputar sentidos y significados sobre las posibilidades de pensar el derecho a diversas formas de vida en común.

Coincidimos, en términos generales, con Rafael Blanco y Pablo Vommaro cuando afirman que los años iniciales de la democracia marcaron la emergencia de un *ethos* militante, a partir de la “reelaboración de experiencias previas, lenguajes y formas de apropiación del pasado reciente” que se conjugaron con “la valorización la democracia como causa movilizadora de las prácticas cotidianas”, al tiempo que se nutría del clima de época con “nuevos materiales, revisiones y un renovado espectro cultural con el que el activismo juvenil tomaba contacto” (2018: 844-845). Según los autores, ese *ethos* consideraba a la democracia como un “valor en sí” que estructuró “las prácticas y los repertorios de acción” de los militantes (2018: 850), en muchos casos canalizados a través de la participa-

ción en las organizaciones partidarias o en espacios institucionales, como los ámbitos de cogobierno universitario.

Sin embargo, en el caso pampeano, cabría destacar que ese *ethos*, además, estuvo atravesado por una experiencia política marcada por *la toma de la palabra*, cuyo efecto inmediato es el trastocamiento de la percepción respecto de los lugares, los espacios, los saberes y los roles prefijados –estudiantes, militantes partidarios– mediante un funcionamiento conjunto y colectivo que resultaba, aun intempestivamente y de manera no regular, en una praxis *democrática* y singular. La toma de la palabra construye una subjetivación militante que establece tensiones respecto de los lugares esperables. El hecho de pensarse estudiantes, pero simultáneamente sujetos políticos/ciudadanos con *derecho a los derechos* abría una instancia interlocutiva que reclamaba un esfuerzo argumental por dotar de sentido y coherencia a la praxis, no siempre semantizable en términos discursivos, de ahí la apelación a un lenguaje muchas veces heredado de impronta “setentista”.

Como emergencia subjetiva que exploraba formas alternativas de significar lo democrático, la praxis militante se erigía en una *política* novedosa, una *instancia litigiosa* que ponía en entredicho los lugares comunes asignados. Su comprensión exige leerla y analizarla como sintomática, en la medida en que el sujeto de posdictadura/democracia es un sujeto impactado –*terrorizado* y *desguarnecido*– por los alcances y efectos de la intervención dictatorial (Scavino, 1999). A pesar de ello, es factible advertir el intento de producir formas alternativas de comunidad, distintas de aquellas que les fueron (o pretendieron ser) legadas. En esos pliegues de la subjetividad, la democracia –como idea o concepto pero también como sistema de organización política– podía ser tensionada y disputada respecto de sus significaciones dominantes, *más allá* de las lógicas de la representación y de las dinámicas vinculares entre representantes y representados.

En ese marco, es posible sugerir que la militancia estudiantil de los ochenta es una hibridación de prácticas políticas y restos discursivos de la cultura de izquierda en la Argentina, con fuerte anclaje en las décadas de 1960 y 1970 –pero no exclusivamente– que

incorpora, al mismo tiempo, la valorización del Estado de derecho como marco de construcción de las expectativas. Ese proceso se vio alimentado por el conjunto de debates, discursos y representaciones sobre la democracia que atravesaron gran parte de la década. También es, al mismo tiempo, su propia aparición como sujetos políticos, con narraciones que, aun con un lenguaje de referencias “setentista” —el ideario del tercer mundo y la liberación nacional, la contradicción Pueblo/Antipueblo, etcétera— dieron contenidos a sus propios sentidos y figuraciones.

Sin embargo, huelga matizar un aspecto: no es la experiencia “setentista” —demonizada, cercenada e *innombrable*— la que es evocada sino aquellos retazos de experiencias que son retenidos como significantes democráticos. Además del ideario liberacionista, ¿qué es acaso la presencia de Yrigoyen, la plaza peronista de 1945, el Cordobazo, la Reforma de 1918, en los estratos memoriales de la militancia política? Es la evocación de una práctica puesta en acto a través del ejercicio de reunión y de toma de la palabra, plausible de ser apropiada a partir del reservorio de percepciones, tradiciones y prácticas subversivas reunidas en los diferentes estratos de tiempos. De ese modo, la conjugación de distintas temporalidades fue forjando un espacio de experiencia que permitió madurar y habilitar nuevos horizontes de expectativas, *más allá* de lo que el juego político partidario y representacional podía ofrecer. Ese rasgo particular, de difícil observación, brumoso y siempre tamizado por la impronta normativista del período, se verificaba en la práctica cotidiana de la militancia estudiantil: la apuesta a resolver los problemas y conflictos “entre todos”, el desafío de sostener decisiones tomadas y emanadas de las instancias asamblearias, la elección de construir vínculos y sociabilidades que tensionaran la apatía dominante y quietista del legado dictatorial, la pulsión antiimperialista y rebelde de la patria grande latinoamericana, la decisión visceral de sostener militancias en el movimiento de derechos humanos.

Sin embargo, el derrotero de la dimensión económica y sus derivas en el plano político y social resultaron, desde mediados de la década, un condicionante decisivo respecto del lugar político de

Raúl Alfonsín y del propio alfonsinismo.²⁹⁸ No solo a partir de lo que pasaba en las urnas —la pérdida de apoyos electorales evidenciados en las elecciones de 1987—, sino también de la intervención del espacio público y de un conjunto de demandas cuyas tramitaciones excedían los canales formales de participación, pero que, sin lugar a dudas, tenían su peso propio en la agenda pública.

El eslabonamiento de eventos que median entre la sanción de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida muestran una serie de transformaciones en el plano de las acciones políticas que resultaron determinantes para muchos sectores de la militancia de base. Si en los tempranos años ochenta la movilización popular y la apropiación del espacio público resultaban elementos centrales del ejercicio democrático, la sanción de las leyes de impunidad —en el marco de una vasta oposición social— y los términos de resolución del levantamiento carapintada mostraron el progresivo rol prescindente de la participación ciudadana.²⁹⁹ Como sugieren Rinesi y Vommaro, en la Semana Santa de 1987 se canceló el valor y la credibilidad de la palabra política como instancia vincular entre representantes y representados:

298 En una mirada global, las condiciones de crisis y decadencia de la URSS y la atomización del bloque no capitalista le permitieron a Estados Unidos ensayar la posibilidad de cierre de las intervenciones militares iniciadas en el marco del Plan Cóndor. Abonar la reconstrucción de procesos democráticos relativamente controlados en el Cono Sur —Brasil en 1985, Uruguay en 1986— podía dar lugar a una renovación estratégica de las relaciones internacionales y de la imagen de Estados Unidos en la región, al tiempo que permitía redireccionar la ofensiva militar sobre otros focos insurgentes de peligro en Centroamérica. Aun con Gobiernos de amplio apoyo popular, como el que tuvo Raúl Alfonsín, los países centrales (especialmente Estados Unidos, pero también Inglaterra, Francia, Alemania, Japón) mantuvieron estratégicamente a su favor cierto control sobre el rumbo general de las economías —no solo argentina sino latinoamericanas—. El problema de la deuda resultó una carga demasiado pesada cuya imposibilidad de alivianar estrechó los márgenes de maniobras del alfonsinismo que permitiesen apuntalar una democracia política de mayor textura.

299 Entre las transformaciones que modulan el retorno de la democracia, se produce un desplazamiento en los modos de nominalizar la representación de los sujetos. Si en las décadas previas el sujeto por excelencia de la representación política era la clase trabajadora —a la cual se dirigían los partidos y fuerzas contendientes—, en democracia, la centralidad del juego eleccionario y representacional deriva en la constitución de un ciudadano susceptible de persuasión, un público votante con especificidades diferenciadas en virtud del cual se ponía en funcionamiento las estructuras partidarias con fines electorales. Aunque esa transformación no es brusca, a lo largo de la década se acentúa, variando los modos de vinculación entre representantes y representados.

El deterioro de la credibilidad de la palabra política de Alfonsín hizo algo más –y algo más grave– que causar el comienzo del fin de la legitimidad del propio Alfonsín: cuestionó el valor de la palabra política en general, de la palabra política, diríamos, como tal [...] e infringió un golpe decisivo a la posibilidad misma de consolidar un liberalismo político creíble, estable y duradero en Argentina (2007: 434).

Desde entonces, el discurso político como articulador de ejes y agendas públicas fue paulatinamente desplazado por una visión tecnocrática de la gestión gubernamental. De ese modo, la consideración de la sociedad como el resultado de una agregación de partes –cuyas demandas podían gestionarse aislada y particularmente– fue restringiendo las posibilidades de un horizonte emancipatorio, en la medida en que conminaba al sujeto ciudadano al carácter de máquina sufragante. En el caso de la militancia estudiantil de los ochenta, el año 1987 muestra la desarticulación veloz y progresiva de los anhelos de liberación nacional, contruidos desde la década de 1960 y que, dictadura mediante, habían sido parcialmente restituidos. En el plano más amplio de lo social, se asiste a una clausura paulatina de las posibilidades de edificar una democracia de corte más social, en cualquiera de sus versiones, en la medida en que la crisis económica y la preocupación por la gobernabilidad refuerzan la mirada tecnicista de la gestión gubernamental.

En ese marco, la declinación de la dinámica movilizadora y la caída de las expectativas en el rumbo del Gobierno nacional junto con la institucionalización efectiva de los espacios de representación política –centros de estudiantes, consejos directivos, consejo superior, departamentos, FUP, normalizados a partir de 1986– favoreció una mayor heteronomía de la militancia respecto de los partidos políticos. Poco a poco, muchos activistas fueron desperdigándose, algunos en nuevos proyectos e iniciativas políticas de menor envergadura, o integrándose a espacios gremiales, otros replegándose a sus espacios privados. Quienes siguieron militando debieron ajustarse a una mayor organicidad y disciplina partidaria, sin el dinamismo y capacidad creativa de antaño.

Vale destacar que, en ese derrotero, los partidos políticos se habían nutrido del carácter movilizador de la militancia universitaria, en la medida en que los jóvenes dieron visibilidad, legitimidad (en muchos casos) y volumen a partidos tradicionales y a dirigencias, muchas veces, desgastadas ante la opinión pública. Sin embargo, los partidos se mostraron prudentes a la hora de asumir prácticas y críticas provenientes de los jóvenes. En ese sentido, resulta oportuno señalar otro aspecto relevante del período. A pesar de los aires renovadores que la recuperación democrática confirió a los partidos políticos como canales preeminentes de participación política, las dirigencias partidarias no asimilaron orgánicamente la presencia juvenil, de hecho, al promediar la década, se constata la vigencia del grueso de dirigentes que lideraban los partidos en 1983, y que, en no pocos casos, permanecían allí desde los años previos al golpe de Estado de 1976. En efecto, los jóvenes fogueados en la militancia universitaria no pudieron acceder a las estructuras partidarias, por distintos motivos, de modo que esa situación repercutía en la posibilidad de sostener en el tiempo organizaciones estudiantiles más estables y consistentes.

Ahora bien, ¿fue solo el factor de la dinámica partidaria y la gubernamentalidad democrática el determinante en el declive de las expectativas de la militancia estudiantil? Hemos referido las dificultades para sostener una militancia articulada a partir del impacto de la tendencia general a la desmovilización desde 1986. La paulatina propensión de los partidos políticos mayoritarios a construir agenda pública en el “marco de posibilidades” factibles y el progresivo ordenamiento orgánico de las militancias universitarias fue restando espacio de maniobra a los esfuerzos por pensar renovadamente la democracia y lo democrático. En ese sentido, resulta paradigmático el agotamiento de la política partidaria juvenil y el estrechamiento de las intervenciones reducidas a la gestión académica y la proliferación de nuevas lógicas internas, como la primacía de las funciones de “servicios” por parte de los centros de estudiantes. El caso de la UBA resulta paradigmático.³⁰⁰ Entre 1987 y 1989, se consolidaron

300 Aunque el ejemplo no exprese con precisión el caso pampeano, el ejemplo funciona como indicio de una tendencia que irá consolidándose en los años siguientes, tanto en la

como primera y segunda fuerza estudiantil, la Franja Morada y los liberales de la UPAU, junto con un abanico de agrupaciones independientes de derecha que funcionaban como aliadas menores.³⁰¹ En ambos casos, se fue afincando una preocupación por la gestión de lo cotidiano como elemento central de su praxis política. La resolución de problemas académicos, mesa de exámenes, provisión de apuntes, limpieza de las facultades, pasaron a constituirse en las preocupaciones centrales de los centros. En el caso de la UBA, la FM controlaba los locales de fotocopiado de libros y apuntes, lo que constituía un verdadero negocio que permitía financiar el aparato político franjista (Beltrán, 2013: 279). En declaraciones al diario *Página/12*, Carlos Maslatón, acaso el mayor referente de la UPAU, sostenía que

... el centro de estudiantes tiene que ofrecer servicios directos al estudiante y defender sus posiciones ante las autoridades que gobiernan. Eso se diferencia bastante del PI o de la Franja, que sostienen que el centro debe ser un organismo de liberación nacional.³⁰²

En el ideario de la UPAU, no correspondía hacer política en la universidad, sino que las funciones del centro de estudiantes debían restringirse a lo estrictamente gremial, académico y de servicios al estudiante.³⁰³

De una u otra forma, las militancias universitarias fueron replegándose al lugar de apéndice partidario cuya plataforma podía ofrecer, en alguna medida, la posibilidad de “saltar” a otro espacio de relevancia o cargos políticos que cimentara una carrera política. En ese sentido, no resulta ajeno mencionar que, a nivel institucional, pareció asentarse cierto acuerdo de gobernabilidad universitaria, so-

presencia del perfil de activistas estudiantiles como también en las discusiones más generales sobre el acceso a la universidad como derecho público.

301 Según Mónica Beltrán, en 1987, la UPAU obtuvo en la UBA el 32% de los votos, y la conducción de algunos centros de estudiantes estratégicos, como Derecho, Ingeniería y Arquitectura (2013: 254-258).

302 *Página/12*, 13 de octubre de 1987, citado en Beltrán (2013: 258).

303 Lo que resulta una verdad a medias, en la medida en que la UPAU fue un bastión de acumulación de la Unión del Centro Democrático.

bre la base de un reparto de poder entre la UCR y el PJ, prácticamente en todas las UU. NN. del país.³⁰⁴

En un contexto de desfinanciamiento educativo, caída de los salarios reales, problemas de infraestructura y funcionamiento regular, los años finales de la década mostraron la retracción de las militancias estudiantiles universitarias, que progresivamente perdieron volumen y capacidad de intervenir en los asuntos públicos, tanto de la institución universitaria como en la más amplia arena social, en sintonía con la transformación de una época que modelaba nuevas formas de concebir la política y, fundamentalmente, la democracia.

304 En el caso de la UNLPam, en mayo de 1990, la Asamblea Universitaria eligió como nuevo rector al contador Oscar Mario Jorge, quien había cumplido funciones como ministro de Economía provincial. Jorge provenía de las filas del justicialismo, y su candidatura fue apoyada por los sectores estudiantiles de la JUP y la JUI.

Conclusiones

Cualquier historia de la militancia estudiantil de posdictadura no puede prescindir de los efectos que la implantación del terrorismo de Estado produjo en los jóvenes que ingresaron a las instituciones universitarias a partir del cambio de década. Como apuntamos en los capítulos iniciales, la dictadura militar buscó transformar capilarmente la sociedad mediante la implantación de un *pathos* de orden y autoridad que desterrase las subjetivaciones contestatarias construidas en las décadas previas. De ese modo, fue afectada profundamente la transmisión experiencial de las tradiciones y saberes del movimiento estudiantil.

A pesar de las transformaciones en las instituciones universitarias, los cambios de los programas de estudios, los cupos de ingresos y arancelamientos, los modos aceptables de transitar el espacio universitario, el intento del poder dictatorial de forjar una nueva generación de jóvenes estudiantes ajenos a las ideas y prácticas consideradas “subversivas” no llegó a fundar una ruptura definitiva. Por el contrario, los estudiantes sostuvieron mínimas formas de instancias organizativas, en mayor o menor medida según los espacios y circunstancias, que poco tiempo después funcionaron como reservorio de saberes y tradiciones sobre los que se asentaron nuevas prácticas, discursos y modalidades de politización.

En una mirada más amplia, tanto el exilio político de numerosos intelectuales de diversas tradiciones políticas como en el propio espacio interno del país, comenzó a gestarse una revisión profunda del pasado reciente, que dio como resultado un conjunto de deba-

tes e interrogantes sobre las posibilidades del tránsito hacia formas de democracias representativas. El clima de ideas emergentes fue marcando el tono de la pérdida de apoyos del Gobierno militar, velozmente disgregado a partir de la derrota bélica en Malvinas.

En efecto, la coyuntura de 1982 funcionó como un catalizador de demandas públicas por la restitución del Estado de derecho y de garantías de las libertades individuales, mientras se asistía a un amplio proceso de politización social. En ese marco, los sectores juveniles se configuraron como un actor relevante, a partir de su capacidad de movilización y de integrarse a colectivos más amplios que atravesaban diversas demandas públicas. En el caso específico de las universidades, entre 1982 y 1983 se reorganizaron las agrupaciones estudiantiles –la mayoría de ellas en línea con partidos políticos, pero no exclusivamente–, se recuperaron espacios de intervención gremial, como los centros de estudiantes, y se convirtieron en parte relevante de los procesos de reconstrucción institucional.

En la UNLPam, la militancia universitaria de la década de 1980 mostró una enorme capacidad de reconstrucción e intervención en los asuntos públicos, tanto de la institución universitaria como en la más amplia arena social, desplegando múltiples esfuerzos organizativos para recuperar ámbitos de participación política, apuntalar reclamos por la ampliación de derechos y proyectar futuros posibles. Ello implicó, necesariamente, el desenvolvimiento de una praxis que pretendió estar en sintonía con las tradiciones de luchas que precedía al movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo, careciendo de los vínculos generacionales que pudieran sostenerla.

A lo largo de la investigación, hemos buscado desbrozar diversos cortes y continuidades que la militancia estudiantil de la UNLPam construyó respecto de las décadas previas, así como los rasgos específicos –prácticas, discursos, sociabilidades– que dotaron de sentido los modos de *hacer/decir*, las expectativas, anhelos y limitaciones de los activistas universitarios. De ese modo, en el capítulo I buscamos aportar una mirada amplia a los procesos de transformación sociocultural que desde los años sesenta constituyeron a la juventud y específicamente a la militancia estudiantil universitaria en un actor significativo de los procesos de movilización

y radicalización política hasta mediados de la década de 1970. En ese derrotero, una parte considerable de la juventud participó en la configuración del universo de la nueva izquierda, a su vez inscrita en un movimiento más vasto de transformaciones en el mundo occidental. En el plano universitario, los años finales de la década de 1960 mostraron la progresiva partidización de las agrupaciones estudiantiles, tanto del universo de la izquierda como de aquellas de orientación reformistas o socialista. Sin embargo, un caso específico resultó la peronización de amplios contingentes estudiantiles que, hacia 1973, se integraron a la Tendencia Revolucionaria del peronismo y resultaron decisivos en el triunfo del FreJuli en 1973.

En ese contexto, es posible afirmar que los cambios operados en la cultura juvenil fueron parte de una subjetivación contestataria más amplia que estimó posible la transformación radical de la sociedad argentina. En ese tránsito, el ideario tercermundista y los anhelos emancipatorios de la liberación nacional y social tiñeron las prácticas y los discursos de buena parte de la militancia estudiantil, mientras participaban de experiencias inéditas en las instituciones universitarias, comandadas por direcciones políticas que buscaban poner las casas de estudios “al servicio de la liberación nacional”.

Al mismo tiempo, la radicalización de amplias capas de la sociedad –no solamente “juvenil”– y el aumento de la conflictividad social fueron amalgamando una alianza estratégica de sectores que consideraban inaceptable el rumbo de la sociedad. De ese modo, los sectores conservadores/liberales del país efectivizaron una ofensiva contra los sectores juveniles radicalizados, obreros y demás “enemigos internos” con el objetivo de restaurar una hegemonía amenazada por las dinámicas de cambio y transformación social. En ese sentido, a lo largo del capítulo buscamos poner de relieve los alcances que, con el golpe de Estado de 1976, expuso el profundo intento de transformar capilarmente la sociedad argentina, tanto en la particularidad del espacio de la UNLPam como en el plano más general de la dinámica universitaria nacional.

En ese proceso, la UNLPam no fue una excepción. Desde fines de 1975 fue el marco de una avanzada represiva que, con precisión, atacó un conjunto de actores e iniciativas consideradas subversivas

y desestabilizadoras para la sociedad pampeana. De ese modo, el golpe de Estado sucedió más como una continuidad de las políticas represivas –sin dudas, con rasgos más acentuados– que como un corte diferenciador del pasado. En la universidad, la dinámica represiva se complementó con extensa trama política/burocrática destinada al control y disciplinamiento social, cuya dimensión simbólica atravesó los imaginarios y repercutió en los modos de *hacer/decir* de los jóvenes universitarios.

En el segundo capítulo abordamos las dinámicas de politización abierta a partir de la descomposición del régimen dictatorial y el tránsito a la recuperación democrática. La apelación a la variabilidad del juego de escalas nos permitió mostrar de qué manera los actores políticos modularon, condicionaron y se alimentaron de una dinámica procesual que colocó el horizonte de expectativas en la recuperación y posterior consolidación de la democracia y el Estado de derecho. En ese sentido, la temprana percepción del carácter fragmentado del campo popular y social apuntaló una genuina disposición política y militante al trabajo común, que se manifestó en las dinámicas asamblearias y colectivas de tomas de decisiones y en las luchas por la recuperación de los espacios de intervención estudiantil. En sintonía con otros pares del país, las militancias estudiantiles pudieron restituir diversas prácticas políticas en continuidad con los pasados predictoriales, pero resignificadas en el nuevo contexto de tránsito a la democracia. La capacidad de reunión y de elaboración de acciones conjuntas les otorgó peso político como actores de la comunidad universitaria, que en el caso de la UNLPam resultó clave en los años siguientes.

Precisamente, en el capítulo tercero abordamos la dinámica interna de la UNLPam durante los procesos de normalización interna, reconstruyendo los espacios políticos de representación estudiantil y/o intervención gremial. En una mirada de largo plazo, mostramos algunos de los modos en que el activismo de la UNLPam se integró y participó de las dinámicas nacionales del movimiento estudiantil. Seguidamente, en el cuarto capítulo, abordamos las trayectorias específicas de las agrupaciones estudiantiles como espacios relevantes de participación política que brindaron marcos para la acción del

activismo estudiantil, como el caso de la FM, la JUI, la JUP, el MR-15 y, en menor medida, el MOR y el MNR. Sin dudas, uno de los mayores fenómenos estudiantiles fue la hegemonía de la Franja Morada como expresión estudiantil del alfonsinismo. Sin embargo, detrás de la aparente imagen monolítica proyectada a nivel nacional, la agrupación mostró un conjunto de divergencias que, al promediar la década, dieron como resultado el desprendimiento de importantes contingentes de activistas que se reagruparon a escala nacional como la Corriente Nacional de Liberación. La FM de la UNLPam se alineó en su totalidad al nuevo espacio, al igual que otras regionales como Córdoba, San Juan, San Luis, Chaco y numerosas agrupaciones del resto del país. La fractura dentro de la FM mostró su relevancia en la disputa por el liderazgo de la FUA en el congreso de 1987, en el que la CNL encabezó el Frente Amplio Santiago Pampillón, junto con numerosos sectores de la JUI, el peronismo de base, comunistas e independientes, sostenidos por un amplio trabajo a nivel de bases estudiantiles.

Además de la FM, la militancia de la JUI fue otra de las fuerzas estudiantiles que emergió con fuerza tras la descomposición de la dictadura militar. A partir de una militancia constante que trascendió los espacios universitarios, sus activistas maduraron una experiencia política con peso propio, a partir de una presencia sostenida en todas las facultades. La alianza con la JUP y en menor medida el MOR y el MR-15, les permitió acceder a conducciones de centros de estudiantes, como el caso de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas y Naturales.

Por otra parte, la JUP fue una de las formaciones políticas más golpeadas por la dictadura militar. Sin embargo, lentamente pudo reconstruirse, especialmente bajo el influjo de la corriente renovadora. En la UNLPam, el peronismo universitario fue más el resultado del esfuerzo voluntarioso de sus activistas que de una decisión apuntalada por el partido. Con sus modulaciones y vaivenes, fueron partícipes activos de las discusiones y coyunturas que atravesaron el período. En menor medida y con núcleos de militancia más acotados, también revisitamos las agrupaciones vinculadas al socialismo (MR-15/PSA y MNR/PSP) y al partido comunista (MOR).

En todos los casos, las agrupaciones estudiantiles modularon una orientación que osciló del centro hacia la izquierda, que los diferenció de otras experiencias estudiadas en otros puntos del país, donde proliferaron espacios estudiantiles que buscaron apuntalar formas despolitizadas de participación estudiantil.

El quinto y sexto capítulo admiten una lectura en tándem. Allí abordamos un conjunto de prácticas, comportamientos, discursos y sociabilidades que marcaron rasgos de la praxis militante hasta finales de la década. En ese sentido, los jóvenes expusieron una *performance* y una *discursividad* específica que trazó continuidades con el ideario tercermundista y liberacionista de los años sesenta y setenta, pero al mismo tiempo dotó de significación y especificidad propia las transformaciones en los modos de *hacer/decir* de la militancia estudiantil en la década de 1980. Un ejemplo fue la imbricación de la militancia estudiantil en el movimiento de derechos humanos, cuya praxis puso en juego una significación de la democracia que desbordó y tensionó las tradiciones republicanas y liberales inscriptas en el proceso abierto desde 1983, al sostener la demanda por una *política de derechos* que volviese efectiva una democracia más *amplia, profunda y sustantiva*. En ese sentido, buscamos destacar los múltiples planos de politización que atravesó la experiencia cotidiana de los estudiantes, desde las propias intervenciones en el espacio institucional de la UNLPam hasta la circulación y participación en flujos culturales y espacios de sociabilidad más amplios del espacio pampeano. Sin embargo, dicha praxis tuvo sus claroscuros: la particular presencia de Juan José Sena como secretario del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas nos permitió aproximarnos a los ambiguos vínculos que la cultura de izquierda estableció con el feminismo, las sexualidades disidentes y relaciones de género.

En el último capítulo, buscamos recapitular algunos mojonos que funcionaron de marco en los debates e interrogantes acerca de la consolidación y orientación de la democracia, mostrando de qué manera se configuró una escena democrática volátil y ambigua, marcada por la presencia de diversos actores que modularon sus intervenciones a modo de juegos de espejos y, muchas veces, sujetas a prueba y error.

En ese itinerario, los estudiantes fueron reconstruyendo sus marcos interpretativos y de acción, mediante un ejercicio de *toma de la palabra* que marcó distancia con los modos esperables que la dictadura pretendió legar. El proceso no fue lineal y menos aún diáfano, por el contrario, se vio tamizado por la carga normativista del período, que cercenó la experiencia setentista. Aun así, y pese a un lenguaje que lo filiaba a ese período –anclado en el imaginario tercermundista y de la liberación nacional–, las militancias estudiantiles pudieron convocar memorias de diversos pasados que dieron profundidad a sus espacios de experiencia. De ese modo, la democracia se constituyó en un significante que pudo ser disputado a partir de dotarlo de significaciones que se inscribieron en las tradiciones plebeyas de la cultura (de izquierda) en la Argentina.

Fuentes documentales

Colección de revistas estudiantiles

Huerquén, centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1986-1987.

Humos, centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, 1986-1987.

Mangrullo Universitario, centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía, 1986-1987.

RU, Revista Universitaria, 1982-1987.

Prensa gráfica

Diario *La Arena*, 1974-1988. Santa Rosa, La Pampa.

Diario *Clarín*, varios números.

Diario *La Nación*, varios números.

Semanario *El Periodista de Buenos Aires*, 1984-1988.

Revista *El Porteño*, varios números.

Fotografías

La imagen 1 corresponde a un teniente particular.

Las imágenes 2 a 6 corresponden a fotografías digitalizadas en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Imágenes del pasado reciente. La última dictadura militar y el renacer democrático en fotografías. Rescate para la conservación del

patrimonio cultural pampeano”, dirigido por el Dr. Roberto Pittaluga y radicado en el IESH-FCH-UNLPam, Resol. C. S. n° 847/12, y del cual formé parte como integrante.

Fuentes testimoniales

- Battiston, Dora. Entrevistada por Elvio Monasterolo, mediante intercambio escrito, en enero de 2020.
- Díaz, Luis. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en mayo de 2015.
- Faraci, Mariano. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en marzo de 2016.
- Kasic, Esteban. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en marzo de 2016.
- Maluendres, Sergio. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en marzo de 2017.
- Mateu, Carlos. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en agosto de 2019.
- Moro, Diana. Entrevistada por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en septiembre de 2019.
- Pumilla, Juan Carlos. Entrevista realizada por Mónica Morales y cedida para su uso con autorización de las partes.
- Redondo, Nilda. Entrevistada por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en agosto de 2019.
- Romero, Gustavo. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en agosto de 2019.
- Serra, José. Entrevistado por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en marzo de 2016.
- Siderac, Silvia. Entrevistada por Elvio Monasterolo y Anahí Huarte, formato audiovisual, en agosto de 2015.
- Steffanazzi Raúl. Entrevistado por Elvio Monasterolo y Anahí Huarte, formato audiovisual, en julio de 2015.
- Zink, Mirta. Entrevistada por Elvio Monasterolo, formato audiovisual, en marzo de 2016.

Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Buenos Aires: Homo Sapiens.
- (2004). “Parque Norte o la doble ruptura alfonsinista”. En Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (comps.), *La historia reciente. Argentina en democracia*. Buenos Aires: Edhasa.
- Águila, Gabriela (2008). “La dictadura militar argentina: interpretaciones, problemas, debates”. *Páginas*, revista digital de la Escuela de Historia, 1/1 Rosario, pp. 1-19.
- Águila, Gabriela; Luciani, Laura; Seminara, Luciana y Viano, Cristina (2018). *La historia reciente en Argentina. Balance de una historiografía pionera en América Latina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Alonso, Luciano (2007). “Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina”. *Prohistoria*, año XI, nº 11. Rosario.
- (2018). “Problemas de enfoque en torno a la movilización social en la transición a la democracia en Argentina, 1979-1983”. *Revista Contemporánea*, vol. VII, nº 14, ISSN 2014-5748.
- (2022). “Que digan dónde están”. *Una historia de los derechos humanos en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- Asquini, Norberto (2005). *Crónicas del fuego. Luchas populares, peronismo y militancia revolucionaria en La Pampa de los 70*. Santa Rosa: Amerindia.
- (2008). “Voces rebeldes: el movimiento estudiantil entre 1959 y 1984”. En Crochetti, Silvia (ed.), *La Universidad de La Pampa. 50 años de historia*. Santa Rosa: EdUNLPam.

- Asquini, Norberto y Pumilla, Juan Carlos (2008). *El informe 14. La represión ilegal en La Pampa, 1975-1983*. Santa Rosa: Ediciones CPE.
- Asquini, Norberto y Dal Bianco, Luis (2008). “La universidad nacional: entre el peronismo y la dictadura (1973-1983)”. En Crochetti, Silvia (ed.), *La Universidad de La Pampa. 50 años de historia*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Bandieri, Susana (2018). “La perspectiva regional y local. Un camino posible para una historia argentina renovada”. *Quinto Sol*, septiembre-diciembre de 2018, vol. 22, n° 3, pp. 2-12, ISSN 1851-2879.
- Barletta, Ana (2001). “Universidad y política. La ‘peronización’ de los universitarios (1966-1973). Elementos para rastrear la constitución de una política universitaria peronista”. *Pensamiento Universitario*, n° 9, UNQUI.
- (2002). “Una izquierda universitaria peronista. Entre la demanda académica y la demanda política (1968-1973)”. *Prismas*, n° 6, pp. 275-286.
- Barletta, Ana y Tortti, María Cristina (2002). “Desperonización y peronización en la universidad en los comienzos de la partidización de la vida universitaria”. En Krotsch, Pedro (org.), *La universidad cautiva. Legados, marcas y horizontes*. La Plata: Al Margen.
- Barrancos, Dora (2014). “Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina: de la agencia por derechos a la legislación positiva”. *Cuadernos Inter-c-a-mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, vol. 11, n° 2, julio-diciembre, pp. 17-46.
- Bassa, Daniela (2009). “La Asociación Pampeana de Escritores y la identidad provincial”. *Espéculo*, revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero41/aspamper.html>.
- (2017). *La “pampeanidad” en debate. Discursos y prácticas sobre la identidad provincial*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). *Historia económica de la Argentina en el siglo XX*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Beltrán, Mónica (2013). *La Franja. De la experiencia universitaria al desafío del poder*. Buenos Aires: Aguilar.

- Besoky, Juan Luis (2016). *La derecha peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)*. Tesis de posgrado presentada en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1280/te.1280.pdf>.
- (2017). “La gestión del ministro Ivanissevich y la derecha peronista: los 100 días de Ottalagano”. *Folia Histórica del Nordeste*, n° 29, mayo-agosto, IIGHI-IH-CONICET/UNNE, pp. 145-174.
- Biagini, Hugo (comp.) (1999). *La Universidad de La Plata y el movimiento estudiantil. Desde sus orígenes hasta 1930*. La Plata: UNLP.
- Blanco, Rafael y Vommaro, Pablo (2018). “Activismo juvenil en los años ochenta en Argentina. Dos generaciones políticas entre el partido y la universidad”. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16 (2), pp. 839-852. Disponible en: <https://doi.org/10.11600/1692715x.16213>.
- Blaustein, Eduardo y Zubietta, Martín (1998). *Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el proceso*. Buenos Aires: Colihue.
- Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, Germán (2010). *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina: de 1880 hasta la actualidad*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bonavena, Pablo (2008). “El movimiento estudiantil universitario frente a la Misión Ivanissevich: el caso de la Universidad de Buenos Aires”. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente. Rosario, Santa Fe.
- Bonavena, Pablo; Califa, Juan y Millán, Mariano (comps.) (2007). *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Brennan, James (1996). *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba (1955-1976)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Buchbinder, Pablo (2005). *Historia de las universidades argentinas*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Buchbinder, Pablo y Marquina, Mónica (2008). *Masividad, heterogeneidad y fragmentación: el sistema universitario argentino 1983-2007*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

- Burkart, Mara (2016). *De Satiricón a Humor. Risa, cultura y política en los años setenta*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Butler, Judith (2014). “Nosotros, el pueblo. Apuntes sobre la libertad de reunión”. En AA. VV., *¿Qué es un pueblo?* Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Califa, Juan (2014). *Reforma y revolución. La radicalización política del movimiento estudiantil de la UBA 1943-1966*. Buenos Aires: Eudeba.
- (2017). “El Frente Estudiantil Nacional. Izquierda, reformismo y peronismo en debate, 1966-1973”. *Folia Histórica del Nordeste*, n° 29, mayo-agosto, IIGHI-IH-CONICET/UNNE, pp. 61-80.
- Calveiro, Pilar ([1998] 2008). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- Camino Vela, Francisco y Rafart Gabriel (eds.) (2012). *La política democrática en la Patagonia: predominios partidarios en las provincias de Neuquén y Río Negro*. General Roca: Publifadecs.
- Camino Vela, Francisco; Carrizo, Gabriel y Moroni, Marisa (coords.) (2019). *Las transiciones a la democracia en sus actores. Reflexiones desde la Patagonia*. Rosario: Prohistoria.
- Canelo, Paula (2008). *El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- Carnovale, Vera; Lorenz, Federico y Pittaluga, Roberto (Comps.) (2006). *Historia, Memoria y Fuentes Orales*. Buenos Aires: Cedinci Editores y Memoria Abierta Ediciones.
- Castellani, Ana (2006). “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”. En A. Pucciarelli (coord.). *Los años de Alfonsín*, pp. 335-366. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Cataruzza, Alejandro (1997). “El mundo por hacer. Una propuesta para el análisis de la cultura juvenil en la Argentina de los años setenta”, en *Entrepasados*, año VI, n°. 13, pp. 103-114. Rosario
- Chabrando, Victoria (2012). “Entre la dictadura y la transición democrática. Participación estudiantil en la UNC”, en *UNC 400 años. Historia y Futuro*. Fascículo 9. Universidad Nacional de Córdoba.
- Celentano, Adrián (2014). “Universidad y lucha de clases: la formación de las agrupaciones estudiantiles maoístas entre el Cordo-

- bazo y el retorno del peronismo al poder”. Ponencia presentada en las *V Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano*. Universidad Nacional de Mar del Plata. 5 al 7 de noviembre.
- Crenzel, Emilio (2008). *La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Cristal, Yann (2017). “El movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires en el final de la última dictadura (1982-83)”, en *Sociohistorica*, 40, e031. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/18521606e031>.
- (2023). “UPAU: un caso único de derecha estudiantil en democracia”, en *Estudios Digital*, (50), 145–163. <https://doi.org/10.31050/re.vi50.42182>
- Cristal, Yann y Seia, Agustina (2018). “La izquierda estudiantil de la Universidad de Buenos Aires en la transición democrática (1982-1985)”, en *Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, año VI, n° 12, pp. 97-118.
- Corradi, Juan (1996). “El método de destrucción. El terror en la Argentina”, en Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.). *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*. Rosario: Homo Sapiens.
- Cosse, Isabella; Felitti, Karina y Manzano, Valeria. (eds.) (2010). *Los 60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Crochetti, Silvia (Ed.) (2008). *La Universidad de La Pampa. 50 años de historia*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- De Ípola, Emilio (2004). “Veinte años después (Parque Norte: razones del fracaso de un intento inédito de enfrentar la crisis argentina)”, en Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2004). *La historia reciente. Argentina en democracia*. Buenos Aires: Edhasa.
- De la Mano Cuadrelli, Julián y Lucero, Bárbara (2019). “Candidatos y resultados electorales en las internas de la UCR y el MoFePa en La Pampa (1982-1983)”, en Moroni, Marisa (Comp.). *Actores políticos y reorganización partidaria en la Patagonia (1980-1983)*. Santa Rosa: EdUNLPam.

- Dip, N. (2016). *Libros y alpargatas. Las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la Universidad de Buenos Aires. 1966-1974*. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1386/te.1386.pdf>.
- (2017). “La peronización de universitarios en los años sesenta y setenta”, en *Folia Histórica del Nordeste* N° 29, IIGHI-IH-CONICET/UNNE, pp. 55-60.
- Ermosi, Débora (2015). “Arte y militancia: el proyecto cultural desarrollado por la juventud comunista en Argentina durante la post-dictadura”, en Flier, Patricia, (coord.) (2015). *Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*. Actas. En Memoria Académica. UNLP-FaHCE. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.391/pm.391.pdf>.
- Favaro, Orietta y Iuorno, Graciela (Eds.). (2010). *El “arcón” de la historia reciente en la Norpatagonia argentina. Articulaciones de poder, actores y espacios de conflicto, 1983-2003*. Buenos Aires: Biblos.
- Feld, Claudia y Franco, Marina (2015). “Democracia y derechos humanos en 1984, ¿hora cero?”, en Feld y Franco (eds.). *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*, pp. 359-400. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Fernández, Sandra (2018). “La historia regional y local, y las escalas de investigación. Un contrapunto para pensar sobre desafíos historiográficos”, en Revista *Quinto Sol*, septiembre-diciembre 2018, vol. 22, n° 3, ISSN 1851-2879, pp. 13-20.
- Ferrari, Marcela y Gordillo, Mónica (Comps). (2015) *La reconstrucción democrática en clave provincial*. Rosario: Prohistoria.
- Ferrari, Marcela (2017). “La política frentista del peronismo renovador durante los años ochenta. Las coaliciones con la centroizquierda”, en *Cuadernos del CLAEH*, Segunda serie, año 36, n° 105, ISSN 2393-5979, pp. 9-34.
- (2018). “Democracia Cristiana, Partido Justicialista y política de frentes. El FREJUDEPA en perspectiva histórica”,

- en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, Tercera serie, n° 48, pp. 121-153 ISSN 1850-2563 (en línea) / ISSN 0524-9767 (impreso).
- Folco, María Ester (2008). "La reconstrucción de la vida institucional: el proceso de normalización", en Crochetti, Silvia (edit.). *La Universidad de La Pampa. 50 años de historia*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Franco, Marina (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- (2015). "La 'teoría de los dos demonios' en la primera etapa de la posdictadura". En Feld y Franco (eds.). *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*, pp. 23-80. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- (2018). *El final del silencio: dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Franco, Marina y Levín, Florencia (Comps.) (2007). *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- Franco, Marina y Lvovich, Daniel (2017). "Historia Reciente: apuntes sobre un campo de investigación en expansión", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, Tercera serie, n° 47, pp. 190-217. ISSN 1850-2563 (en línea) / ISSN 0524-9767 (impreso).
- Friedemann, Sergio (2017). "La peronización de los universitarios como categoría nativa (1966-1973)", en *Folia Histórica del Nordeste*, n° 29, Mayo-Agosto, IIGHI-IH-CONICET/ UNNE, pp. 113-144.
- Garategaray, Martina (2010). "Peronistas en transición. El proyecto político ideológico en la revista *Unidos* (1983-1991)". *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/60126>.
- (2015). "Intelectuales en democracia: Los casos de *Unidos y Punto de Vista*". En Di Pasquale, Mariano y Summo, Marcelo (Comp.), *Traectorias singulares, voces plurales. Intelectuales y*

- política en la Argentina, siglos XIX-XX*, pp. 229-255. Tres de Febrero: UNTREF.
- (2018). *Unidos. La revista peronista de los ochenta*. Bernal: Universidad de Quilmes.
- Gargarella, Roberto; Murillo, María Victoria y Pecheny, Mario (comps.) (2010). *Discutir Alfonsín*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (2012). “Tributo en la Argentina post-dictadura: los ‘muertos por la subversión’”. *Sociohistórica*. Cuadernos del CISH, n° 29. Primer semestre. ISSN: 1853-6344.
- Germani, Gino y Sautu, Ruth (1965). *Regularidad y origen social de los estudiantes universitarios*. Buenos Aires: Instituto de Sociología. UBA..
- Gilbert, Isidoro (2009). *La Fede. Alistándose para la revolución. La Federación Juvenil Comunista 1921-2005*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Gillespie, Richard (1987). *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Buenos Aires: Grijaldo.
- González Bombal, Inés (1988). *Los vecinazos. Las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-83*. Buenos Aires: IDES.
- Gordillo, Mónica (2019). *1969. A cincuenta años: repensando el ciclo de protestas*. Buenos Aires: CLACSO. ISBN 978-987-722-551-8.
- (2001). *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa: una aproximación a la cultura política de los 70*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- Huarte, Anahí y Pittaluga, Roberto (2018). “En torno a la experiencia del Instituto de Estudios Regionales de la UNLPam (1974-75)”. En Monasterolo, Elvio y Pittaluga, Roberto (eds.) (2018). *Formas de la política. Experiencias del activismo en el pasado reciente. Argentina, 1969-2013*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Insausti, Santiago Joaquín (2018). “Un pasado a imagen y semejanza: recuperación y negación de los testimonios maricas en la constitución de la memoria gay”. En *Prácticas de Oficio*, jun 2018 - dic 2018, vol. 1, n° 21. Disponible en: ides.org.ar

- Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith (2002). *Un golpe a los libros: represión a la cultura durante la última dictadura militar*. Buenos Aires: Eudeba.
- James, Daniel (2010). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Jelin, Elizabeth (Comp.) (1987). *Los nuevos movimientos sociales*. Tomo I y II. Buenos Aires: CEAL.
- (2015). “Certezas, incertidumbres y búsquedas: el movimiento de derechos humanos en la transición”. En Feld y Franco (eds.). *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*, pp.195-223. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Koselleck, Reinhart (1993). *Futuro pasado. Para una semántica del cambio histórico*. Barcelona: Paidós.
- Larrondo, Marina (2014). *Después de la Noche. Participación en la escuela y movimiento estudiantil secundario. Provincia de Buenos Aires, 1983-2013*. Tesis de Doctorado. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento-IDES.
- Lenci, María Laura (1999). “Cámpora al gobierno, Perón al poder. La Tendencia Revolucionaria del Peronismo antes de las elecciones del 11 de marzo de 1973”. En Pucciarelli, Alfredo (edit). *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, pp.167-201. Buenos Aires: Eudeba.
- Lesgart, Cecilia (2003). *Usos de la transición a la Democracia. Ensayo, Ciencia y Política en la década del 80*. Rosario: Homo Sapiens.
- Levenberg, Rubén y Merolla Daniel (1988). *Un solo grito. Crónica del movimiento estudiantil universitario de 1918 a 1988*. Buenos Aires: FUBA.
- Levín, Florencia (2013). *Humor político en tiempos de represión. Clarín 1973-1983*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Luciani, Laura (2017). *Juventud en dictadura: Representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario (1976-1983)*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Manzano, Valeria (2017). *La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Merele, Hernán (2017). *La depuración ideológica del peronismo en General Sarmiento, 1973-1974: una aproximación al proceso represivo durante los años setenta constitucionales a partir del caso de Antonio Tito Deleoni*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Millán, Mariano (2006). “El movimiento estudiantil argentino en la actualidad. Notas para una investigación”. Ponencia presentada en *Primeras Jornadas de estudio y reflexión sobre el movimiento estudiantil*. Buenos Aires: UBA.
- Monasterolo, Elvio (2013). “Prácticas y discursos del movimiento estudiantil en la UNLPam. La experiencia de La Revista Universitaria.1982-1987”. Ponencia presentada en *XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
- (2018a) “El activismo estudiantil de posdictadura. Franja Morada y la formación de la Corriente Nacional de Liberación. 1983-1987”. En Monasterolo, Elvio y Pittaluga, Roberto (eds.). *Formas de la política. Experiencias de activismo en el pasado reciente. Argentina, 1969-2013*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- (2018b). “La democracia en tensión. El discurso de la lucha antisubversiva en la inmediata posdictadura”. En *Genocidio y sobrevivencia. Literatura de la revolución y resistencia a la barbarie. Argentina 1970-1980*. Santa Rosa: Amerindia
- (2021). “La militancia estudiantil en la Universidad Nacional de La Pampa y el vínculo con el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, 1982-1987”. En *Cuadernos de Historia*. Serie economía y sociedad. ISSN: 2422-754428, pp. 287-316.
- Monasterolo, Elvio y Pittaluga, Roberto (2018). “De las historias y memorias de la rebeldía. En torno a un audiovisual por los 40 años de la nacionalización de la UNLPam”. En Monaste-

- rolo, Elvio y Pittaluga, Roberto (eds.). *Formas de la política. Experiencias del activismo en el pasado reciente. Argentina, 1969-2013*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Moroni, Marisa (2019). “Dinámica política y actores partidarios en los últimos años de la dictadura en La Pampa (1980-1983)”. En Moroni, Marisa (Comp.). *Actores políticos y reorganización partidaria en la Patagonia (1980-1983)*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Muñoz, Oscar (2011). *Los días de la Coordinadora: política, ideas, medios y sociedad (1968–1983)*. Buenos Aires: Corregidor.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2004). *La historia reciente. Argentina en democracia*. Buenos Aires: Edhasa.
- Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (1987). *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.
- Nun, José (2001). *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Oberti, Alejandra (2009). “Lo que queda de la violencia política. A propósito de archivos y testimonios”. *Revista Temáticas, Revista de los Pos-Graduandos en Ciências Sociais*, IFCH-Unicamp, año 17, n° 34.
- Oberti, Alejandra y Pittaluga, Roberto (2006). *Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia*. Buenos Aires: El cielo por asalto.
- O'Donnell, Guillermo (1984). “Democracia en la Argentina: micro y macro”. En Oszlak, Oscar. “*Proceso*”, *crisis y transición democrática/1*. Buenos Aires: CEAL.
- Palti, Elías (2005). “De la historia de las «ideas» a la historia de los «lenguajes políticos». Las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano”. *Anales*, N.E. 7/8, Department of Romance Languages, Institute of Iberoamerican Studies, Faculty of Arts, Göteborg University, pp. 63-81.
- Pérez Lindo, Augusto (1985). *Universidad, política y sociedad*. Buenos Aires. Eudeba.
- Pinedo, Jeronimo (2022). *Zona sur. Urdimbres de la acción colectiva popular en el Gran Buenos Aires (1974-1989)*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Universidad Na-

- cional de Misiones; Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Pis Diez, Nayla (2022). *El movimiento estudiantil de La Plata en los tempranos sesenta, 1955-1966: O la historia de una guerra fría también propia*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Pittaluga, Roberto (2007). “Miradas sobre el pasado reciente: las escrituras de la militancia setentista (1983-2003)”. En Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- (2010a). “Notas sobre la historia del pasado reciente”. En Cernadas, Jorge y Lvovich, Daniel (eds.), *Historia, ¿para qué? Revisitando una vieja pregunta*. Buenos Aires: UNGS/Prometeo Libros.
- (2010b). “El pasado reciente argentino: interrogaciones en torno a dos problemáticas”. En Bohoslavsky, Ernesto; Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel, *Problemas de historia reciente del Cono sur*. Buenos Aires. UNGS/Prometeo Libros.
- (2014). “Imágenes (d)e historia. Una mirada sobre los fragmentos visuales de la última dictadura en la Argentina”. *Contenciosa*, año II, n° 3, ISSN 2347-0011.
- (2017). “Ideas (preliminares) sobre la «historia reciente»”. *Ayer. Revista de Historia Contemporánea*, n° 107, pp. 21-45.
- Polak, Laura y Gorbier, Juan Carlos (1994). *El movimiento estudiantil argentino (Franja Morada 1976-1986)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Ponza, Pablo (2015). “Intelectuales «Unidos»: La «Renovación Peronista» y las razones de un fracaso político, doctrinario y cultural (1983-1989)”. *Boletín Americanista*, año I, vol. 1, n.º 70, pp.191-211. Barcelona. ISSN: 0520-4100
- Portantiero, Juan Carlos (1978). *Estudiantes y Política en América Latina 1918-1938. El proceso de la reforma universitaria*. México: Siglo XXI.

- (1987). “La transición, entre la confrontación y el acuerdo”. En Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.
- Pozzi, Pablo (2001). *Por las sendas argentinas. El PRT-ERP. La guerrilla marxista*. Buenos Aires: Eudeba.
- Pucciarelli, Alfredo (coord.) (2006). *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pujol, Sergio (2002). *La década rebelde. Los años 60 en la Argentina*. Buenos Aires: Emecé.
- Quiroga, Hugo (2004). *El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens.
- Rancière, Jacques (1996). *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Reano, Ariana (2010). *Los lenguajes políticos de la democracia. El legado de los años ochenta: Alfonsín, Controversia, Unidos y La Ciudad Futuro*. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.
- Redondo, Nilda (2018). “La Doctrina de la Seguridad Nacional: Constitución del sujeto deleznable del siglo XX”. En Redondo, Nilda (edit.), *De la Conquista del Desierto a la Doctrina de la Seguridad Nacional*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- (2008). “Revistas estudiantiles de la UNLPam. Del Terrorismo de Estado al Estado malhechor (1990-1998)”. En Crocchetti, Silvia (edit.), *La Universidad de La Pampa. 50 años de historia*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Reta, Alejandra (2010). *El proceso de peronización dentro del movimiento universitario en los años sesenta. El caso del FEN*. Tesis de Maestría, FSOC. UBA.
- Rinesi, Eduardo y Gabriel Vommaro (2007). “Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos”. En Rinesi, Eduardo; Nardacchione, Gabriel y Gabriel Vommaro (coords.), *Los lentes de Víctor Hugo: transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*, pp. 419-469. Buenos Aires: Prometeo.

- Rodríguez, Laura (2015). *Universidad, peronismo y dictadura, 1973-1983*. Buenos Aires: Prometeo.
- Romaniuk, Ana (2018). *La música popular de referencias rurales en la provincia de La Pampa: huellas, zambas y milongas en la construcción de identidades no-centrales en Argentina*. Tesis doctoral. Disponibles en: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/10775>.
- Salomón Tarquini, Claudia (2015). “Constructores de pampeanidad: grupos de escritores de La Pampa (1957-1983)”. En Salomón Tarquini, Claudia y Lanzillota, María de los Ángeles (eds.), *Redes intelectuales, itinerarios e identidades regionales en Argentina (siglo XX)*. Rosario: Prohistoria.
- Salvi, Valentina (2015). “Guerra, subversivos y muertos. Un estudio sobre las declaraciones de militares en el primer año de democracia”. En Feld, Claudia y Franco, Marina (eds.), *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*, pp. 153-193. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Scavino, Dardo (1999). *La era de la desolación. Ética y moral en la Argentina de fin de siglo*. Buenos Aires: Manantial.
- Schmucler Héctor (2004). “La memoria y los usos políticos del medio”. *Oficios Terrestres*, n° 15/16, pp. 22-28. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. ISSN: 1668-5431.
- Scocco, Marianela (2021). “La juventud y el Movimiento de Derechos Humanos. Transformaciones y conflictos en la incorporación de una nueva generación militante pos Malvinas”. *Cuadernos de Historia*, pp. 229-249. Serie economía y sociedad. ISSN: 2422-754428.
- Seia, Guadalupe (2016). “Militancia, oposición y resistencia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires durante la etapa final de la última dictadura (1981-1983)”. *Historia, Voces y Memoria*, año 2016, n° 10, pp. 21-34. Disponible en: <https://doi.org/10.34096/hvm.n10.3379>.
- (2020a). “Las agrupaciones independientes en la Universidad de Buenos Aires durante la etapa final de la dictadura en Argentina (1981-1983)”. *PolHis. Revista Bibliográfica Del Pro-*

- grama Interuniversitario De Historia Política*, n° 25, pp. 242-268. Recuperado de: <https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/41>.
- (2020b). “La lucha estudiantil por el ingreso a la Universidad de Buenos Aires durante la última dictadura en Argentina 1976-1983”. *Revista Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 11, vol. 12, pp. 103-123.
- Seia Guadalupe y Cristal Yann (2022). “El movimiento estudiantil de la UBA entre dictadura y democracia (1981-1985)”. En Carli, Sandra (Coord.). *Historia de la UBA 1945-1938*. Buenos Aires: Eudeba.
- Servetto, Alicia y Chabrando, Victoria (2012). “Participación estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba durante la transición democrática: Legados y desafíos”. *Cuestiones de Sociología*, n° 8, pp. 121-130. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5760/pr.5760.pdf.
- Sigal, Silvia (1991). *Intelectuales y poder en la década del sesenta*. Buenos Aires: Puntosur.
- Simonetto, Patricio (2017). *Entre la injuria y la revolución. El Frente de Liberación Homosexual. Argentina, 1967-1976*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en: <http://unidaddepublicaciones.web.unq.edu.ar/wpcontent/uploads/sites/46/2018/04/e-book-EntrelaInjuriaylaRevolucion-Simonetto.pdf>.
- Solís, Ana Carol (2011). “Los derechos humanos en la inmediata posdictadura. (Córdoba, 1983-1987)”. *Revista Estudios*, n° 25. Ciudad de Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- (2023). *La cuestión de los Derechos Humanos: De la posdictadura a la democracia excluyente en Córdoba*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Suárez, Fernando (2018). *El Partido Socialista Popular: orígenes, organización y tradiciones políticas (1972-1982)*. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FaHCE, UNLP. Disponible en:

- http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1788/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf.
- Suasnábar, Claudio (2004). *Universidad e intelectuales. Educación y política en la Argentina (1955-1976)*. Buenos Aires: Manantial.
- Suriano, Juan y Álvarez, Eliseo (2013). *505 días. La primera transición a la democracia*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Tarrow, Sydney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- Toer, Mario (1988) *El movimiento estudiantil de Perón a Alfonsín I y II*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina
- Tortti, María Cristina (2007). *El viejo partido socialista y los orígenes de la nueva izquierda*. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/>.
- Tortti, María Cristina y González Canosa, Mora (Dirs.) y Bozza, Juan Alberto (coord.) (2021). *La Nueva Izquierda en la historia reciente argentina. Debates conceptuales y análisis de experiencias*. Rosario: Prohistoria.
- Touza, Rodrigo (2007). “El movimiento estudiantil universitario de Mendoza entre 1983 y 2000. UNCuyo”. En Bonavena, Pablo; Califa, Juan y Millán, Mariano (comps.), *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Valdez, Fernando (S/F). “Estudiantes y política en la UNT (1983 -1986). La recuperación democrática”. Recuperado de: www.archivo.unt.edu.ar/attachments/054_valdez.pdf.
- Vázquez, Melina; Vommario, Pablo; Núñez, Pedro y Blanco, Rafael (2017). *Militancias juveniles en la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Velásquez, Adrián (2015). “Regeneración y tiempo: el lenguaje político del alfonsinismo en la transición a la democracia en Argentina”. *Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas*, n° 4, pp. 147-170. Disponible en: <http://www.ehu.es/ojs/index.php/Ariadna/index>.

- (2019). *La democracia como mandato. Radicalismo y Peronismo en la transición argentina (1980-1987)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Verón, Eliseo (1996). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Buenos Aires: Gedisa.
- Vicente, Carlos (1987). *No bajamos las banderas*. Ciudad de Córdoba: Ediciones Pueblo Nuevo
- (2018). *La Universidad en la primavera democrática. La elección de Luis Rébora y la influencia de los 80 en la política argentina*. Córdoba: Enredación Libros.
- Vommaro, Pablo (2009). “Las organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria y el protagonismo juvenil: dos experiencias en Quilmes 1981-2004”. *Periferias*, año 12, n° 17, pp. 173-190.
- Zink, Mirta (2019). “Las urnas están bien guardadas. La lucha por el retorno democrático (1982-1983)”. En Moroni, Marisa (Comp.), *Actores políticos y reorganización partidaria en la Patagonia (1980-1983)*. Santa Rosa: EdUNLPam.
- Zubillaga, Paula (2019). *Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata: Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989)*. Tesis de posgrado en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1713/te.1713.pdf>.

Colección
Entre los libros de
la buena **MEMORIA**

¿Qué se iniciaba y qué terminaba en aquel simbólico y memorable 10 de diciembre de 1983? Acaso el traspaso institucional del poder político, y una retórica de la democracia cimentada en la ética de la justicia y el pluralismo pregonados por Alfonsín no sean suficientes para comprender esa coyuntura, lo que tuvo como posibilidades, aunque tenues.

En una mirada más amplia, cabría preguntarse por la espesura del período histórico que se abriera al menos desde mediados de 1982 con la guerra de Malvinas y que encontrara un principio de cierre en los levantamientos carapintados de 1987. En esa particular coyuntura, el vocablo *democracia* fue paulatinamente equiparado con *Estado de derecho*. Como binomio medular, ambos términos se constituyeron en un punto de partida desde donde se articuló presente y futuro, condición y posibilidad. La política, por su parte, fue restringiéndose a sus versiones consensuales y representativas. Sin embargo, diversos actores -entre ellos la militancia estudiantil universitaria- pusieron en juego un conjunto de prácticas, discursos, sentidos y representaciones que intervinieron y redefinieron las fronteras de lo enunciable, y de los modos de producir política, en una escena dialógica atravesada por la carga traumática del pasado reciente.

En ese marco, el libro que aquí presentamos explora algunos de los debates, disputas e interrogantes que atravesaron la década de 1980, a partir del derrotero de un actor específico, el activismo estudiantil de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). En tanto actor social, su experiencia y performance resulta de la articulación de dinámicas sociopolíticas nacionales y regionales, constituyendo un punto de acceso privilegiado para examinar los empalmes y conflictos, tanto de la especificidad universitaria como de la más amplia arena social y política del país durante la década de 1980.



Libro
Universitario
Argentino

ISBN 978-967-630-767-3



9 789676 307673

FaHCE
FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento